GUSTAVO MONTOYA | HOMERO QUIROZ
EDITORES

ESTALLIDO POPULAR

PROTESTA Y MASACRE EN PERÚ, 2022-2023

Estallido
EDITORIAL



Estallido popular

Protesta y masacre en Perú, 2022 - 2023

Gustavo Montoya y Homero Quiroz, editores

Gustavo Montoya | Homero Quiroz
EDITORES

ESTALLIDO POPULAR

PROTESTA Y MASACRE EN PERÚ, 2022-2023





Estallido popular. Protesta y masacre en Perú, 2022 - 2023 / Gustavo Montoya y
Homero Quiroz, editores

Primera edición: julio 2023

De esta edición:
© **Editorial Estallido SAC**
Calle Las Viñas, MZ. KK-2, Lote 09. Ex-hacienda de Pro. Los Olivos, Lima-Perú
Teléf: 051 949 773 775
www.estallidodelibros.com

© **Editorial Horizonte** de Juan Humberto Damonte Valencia
Jr. Sucre 470, San Miguel, Lima, Perú.
Teléf: 051-1 605-6912 / cel: 051 955 637 859
E-mail: *editorialhorizontesac@gmail.com*

Ilustración de la carátula: "Mujeres de Andahuaylas en pie de lucha". Acuarela de Joshua, artista lampeño.

ISBN: 978-612-5059-20-8

Hecho el Depósito Legal, en la Biblioteca Nacional del Perú, N°: 2023-05510

Impreso por Ediciones Horizonte SAC
Jr. Sucre 470, San Miguel, Lima, Perú.
Tiraje. 1,000 ejemplares
Julio 2023

Contenido

Prólogo

Gustavo Montoya
Homero Quiroz

"Ver la historia desde diferentes ángulos. Orquestar en una obra las imágenes múltiples de sus personajes. Reconstruir desde dentro el ritmo psicológico de los acontecimientos"

Alberto Flores Galindo

"Gabriel Omar López Amanqui tenía 35 años, dos hijos de 16 y 4 años, y trabajaba como chofer de carga. Su lengua materna era el quechua. Según el testimonio de su familia, la mañana del lunes 9 de enero decidió ir a las inmediaciones del aeropuerto para observar las movilizaciones".

"A las 13: 46 horas, Gabriel Omar fue fotografiado por un periodista, a una cuadra del extremo noroeste de la pista de aterrizaje del aeropuerto, lanzándole piedras a una fila de agentes de la policía, tal como se advierte en una imagen publicada por el *New York Times* e *IDL-Reporteros*. Veinte minutos después, Gabriel Omar fue nuevamente captado, ahora gravemente herido, mientras era subido a una motocicleta. Su esposa supo, a través de un familiar, que Gabriel Omar había fallecido y había sido llevado en moto a la Posta de Salud Revolución. Su esposo fue la primera persona que perdió la vida en esa jornada en la ciudad de Juliaca".

"La fiscal a cargo de la investigación les informó a los familiares que Gabriel Omar había fallecido por el impacto de 72 perdigones en el tórax, cantidad que posteriormente se registró en el Informe Pericial de Necropsia 009-2023 del 10 de enero, en donde se asentaba que ingresaron "a la cavidad torácica, por espacios intercostales de ambos lados, penetrando al parénquima de ambos pulmones y corazón, produciendo hemotórax masivo".

"El Informe Pericial de Balística Forense 09-2023 de la Carpeta Fiscal 23-2023, con fecha del 19 de enero de 2023, concluye que en el caso de Gabriel "la muestra examinada son cinco perdigones de plomo componente de una escopeta (carga múltiple) que pueden ser disparados por una escopeta o arma de fabricación artesanal" y que pertenecen a un "cartucho calibre 12 GAUGE (que) puede contener 200 perdigones aproximadamente".

"El dictamen pericial de absorción atómica 2023002003187-186 del 13 de enero estableció 'no compatible por disparo', lo que confirma que Gabriel Omar no usó ningún tipo de arma de fuego minutos antes de ser asesinado".

Hasta aquí, la descripción de la muerte de Gabriel Omar López Amanqui en Juliaca-Puno, presentada por Amnistía Internacional. Cinco meses después del suceso, y a pesar de las evidencias y los informes de los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado peruano no ha dado con el responsable directo de la muerte de Gabriel, tampoco con los responsables de los más de sesenta fallecidos durante las manifestaciones contra el régimen de Dina Boluarte; y, lo que resulta alarmante, los medios de comunicación poco o nada han informado y/o denunciado sobre la pretensión de impunidad de Boluarte y compañía.

Salvo algunos reflejos tenues después del informe de la CIDH, los que han dado batalla por buscar la verdad han sido los familiares de las víctimas y los medios alternativos; mientras tanto, la prensa monopólica (escrita y televisiva) mantiene un silencio cómplice. Tan cómplice como cuando contribuyeron al *terruqueo* y a la feroz persecución durante los momentos más álgidos de las protestas, para lograr la imposición de un gobierno autoritario que pacifique el país con sangre y fuego, para luego gobernar con la agenda de quienes perdieron las elecciones del 2021 y, así, ahogar cualquier posibilidad de cambio del modelo económico y de la Constitución de 1993.

En el momento que redactamos este prólogo, una arremetida ultraconservadora avanza sobre todos los poderes del Estado, no solo para

coparlos, sino para someterlos a sus intereses de grupo. El Perú vive una dictadura congresal que, después de destituir a Castillo, tras su fallido intento por cerrar temporalmente el Parlamento, ha logrado blindar a los responsables de los crímenes que incluyen ejecuciones extrajudiciales. Amparado en ese apoyo del Congreso, y con los medios concentrados a su favor, Dina Boluarte pudo apelar a la lucha contra el terrorismo, en un país en donde no existe ningún grupo subversivo a la vista, para justificar el accionar de la Policía y el Ejército. "Recibimos un país polarizado, un país enfrentado, un país donde existen sectores extremistas que buscan generar el desorden y el caos, con claros intereses subalternos, destruir la institucionalidad y la democracia" dijo, faltando a la verdad, en su mensaje a la nación el 13 de enero de 2023. Y concluyó con la siguiente pregunta: "¿Estamos acaso volviendo a los años de la violencia terrorista, donde se colgaban perros en los postes de luz?" (sic).

La vuelta de tuerca que ha dado la política peruana en los últimos meses, y el revés de un intento de cambio que, en el 2021, puso, por primera vez en 200 años, a un hombre del campo en palacio, demuestra que las raíces del estallido se anclan más en largo tiempo, en la larga duración, que en el contexto social reciente. Sin embargo, el estallido por sí mismo, representa un momento de cambio; y, ningún momento de cambio iniciado desde abajo pasa inadvertido en el campo popular. Por el contrario, tiene dos características que lo hacen reconocible: se configura en medio de una crisis generalizada y apuesta por una lucha política para cambiar las reglas de juego. Para decirlo de otro modo, cuando la población apela a una lucha política como la que acabamos de vivir, estamos frente a un cambio cualitativo en las protestas sociales y a un peldaño de avance en la lucha popular.

¿Cómo explicar este proceso? ¿Desde qué aristas podemos intentar, por lo menos, hacernos las preguntas correctas que nos permitan comprender lo vivido? Los artículos reunidos en el presente libro intentan dar cuenta, desde diferentes perspectivas disciplinarias y teóricas, sobre los eventos políticos, militares, sociales e ideológicos que estremecieron gran parte del país, especialmente el sur peruano entre diciembre de 2022 y enero de 2023. En efecto, la complejidad de tales acontecimientos

exigía ser abordada de la manera más amplia posible, cuidando, además, que no se restrinja a una sola perspectiva política o ideológica de interpretación y análisis. Con ese fin, los editores hicimos un llamado a un grupo interdisciplinario de agudos intérpretes de la realidad sociopolítica del país, para que den luces sobre lo que nos viene ocurriendo como nación.

Las muertes ocurridas en Puno, Ayacucho, Apurímac y Cusco, principalmente, por efecto de la brutal represión de las fuerzas armadas y policiales, y cuya responsabilidad política concierne al gobierno de Dina Boluarte, pese a que intenta lavarse las manos, hace parte de una extensa y prolongada historia de enfrentamientos entre la sociedad civil, las regiones y el Estado peruano. Nada de esto es nuevo en nuestra azarosa existencia republicana. Y, justamente, debido a la reiteración de este tipo de enfrentamientos entre Estado y sociedad, urge ensayar miradas y balances de todo orden, que permitan avizorar posibles derroteros emancipatorios.

Precisamente, un hilo común a todos los ensayos que conforman el libro es la reflexión y análisis sobre la prolongada experiencia de las mayorías sociales más excluidas del presente y pasado, para democratizar la sociedad y el Estado. Por lo menos, desde los inicios de la república, un breve balance sobre la historia de los movimientos sociales en el país da cuenta de esta vocación recurrente de los actores históricos oprimidos y explotados. Las regiones, ciudades y pueblos que recientemente se movilizaron bajo un horizonte de expectativas de carácter eminentemente político, y en contra del *establishment*, hace parte de tal tradición rebelde.

Si bien la coyuntura en la que se produjo el estallido social estuvo marcadamente definida por la crisis del gobierno de Pedro Castillo, por el cuestionamiento permanente desde diferentes frentes por parte de la extrema derecha con respecto a la legitimidad del régimen, no obstante, las movilizaciones populares y, sobre todo, la agenda de los movilizados tuvo un carácter estructural, en lo que se refiere a la exigencia de una nueva Constitución Política. Desde tal punto de vista, lo que se

exigía en las calles —apelando a diferentes repertorios de lucha, desde las marchas, cierta estética plebeya con representaciones del teatro popular, danzas y bailes, música e iconografía rebelde— es el cambio y la cancelación del pacto político que la Constitución impuso en 1993, vía el régimen corrupto y autoritario del fujimorismo.

Los artículos de esta compilación también intentan explicar cierta identificación entre la rebelión popular y el gobierno de Castillo, pese a las innegables pruebas de corrupción, nepotismo e improvisación de su gobierno. Y, es que el detonante para el estallido fue la caída de su gobierno que fue interpretado desde los márgenes regionales, desde la sensibilidad política de los excluidos y de los colectivos subalternos, como un ataque más, de los múltiples que posee esa memoria social, contra sus representaciones políticas. Obviamente, este horizonte narrativo, está abigarrado de fantasías, aporías y expectativas que tal subjetividad posee. A ello hay que sumar el poderoso hecho fáctico de que Castillo, y su gobierno, hacía parte de sus demandas. Lo veían como uno de los suyos, en una compleja identificación con elementos étnicos, de reivindicación histórica y de afinidades culturales. Todo ello hace parte de cierto extravío ideológico que aún aguarda explicaciones más convincentes.

Más de un ensayo de este libro hace énfasis en esa suerte de Napoleón III invertido en que devino Castillo. Una especie de caricatura histórica a la que Marx toma como recurso para analizar el desarrollo de la lucha de clases en Francia de inicios del siglo XIX. Si Castillo hubiera terminado su gobierno, sin la obsesión de la derecha que había jurado ponerlo tras las rejas o bajo tierra —más de uno llamó abiertamente en plazas y calles a sus huestes para que dieran muerte al presidente—, antes de que termine su primer año de gobierno, no sería más que un traidor; uno más de los que, tras el final del fujimorismo, ha prometido hacer los cambios que este país reclama, pero que, en el camino, terminaron gobernando con los perdedores. Sin embargo, la trayectoria de la lucha de clases y el azar han convertido a Castillo en una especie de héroe popular. Un héroe de talla mediana y con limitaciones propias de un poblador de a pie.

Lo que sí estaba claro es que la elección de Castillo estuvo rodeada de una feroz y estridente pugna entre las fuerzas democráticas de diversas tendencias ideológicas de un lado, y, de otro, grupos sociales y de interés económico que en conjunto se alinearon con cierto sentido común que asocia, las exigencias por democracia social de las mayorías, con el terrorismo. Una identificación perversa. Este sentido común reaccionario y totalitario, es la consecuencia y efecto de las sucesivas derrotas del movimiento popular organizado, tanto en las elecciones como en diferentes frentes de lucha política, sindical y de reivindicaciones por la defensa de las tierras, el medio ambiente, el agua y la deforestación en el norte, centro, sur y la Amazonía. La intensidad de la lucha de clases alcanzó inusitados niveles de beligerancia, sobre todo, por el despliegue de racismo y desprecio de las élites sociales y económicas citadinas contra los desposeídos.

El uso de la violencia estatal, con evidentes muestras de racismo, puesto que la gran mayoría de los movilizados tiene una identidad mestiza e indígena, confirma la tradición autoritaria incólume que subyace en el aparato estatal republicano. Una tradición autoritaria y de violencia sistemática contra quienes se consideran "ciudadanos de segunda categoría", para usar la infeliz frase de un expresidente que optó por el suicidio.

Durante el estallido reciente, fue justamente esa represión exacerbada la que gatilló la radicalidad de los reclamos y el salto cualitativo de un reclamo puntual a otro que apuntaba al ejercicio de la ciudadanía política y social plena, que los textos constitucionales anuncian pomposamente. En tales circunstancias se organizó, desde diferentes frentes de lucha regionales, la *toma de Lima*. No fue la primera vez, en la historia republicana, que Lima se convirtió en el punto de convergencia de reclamos, protestas y rebeliones. Las hubo, como ya fue indicado, durante el violento siglo XIX, y no menos durante la siguiente centuria. El simbolismo que despliega esta reiterativa estrategia de lucha y de reinvención del pacto social, también ha merecido la reflexión de los autores de la presente compilación.

Un elemento por destacar fue la puesta en movimiento de antiguos y nuevos lazos de solidaridad y reciprocidad entre los rebeldes que marcharon hacia la capital, y que fueron apoyados y alentados por sus aliados que se quedaron en sus lugares de origen. Los preparativos con recursos, víveres y las despedidas que han quedado registradas en las redes sociales, dan cuenta de la dimensión colectiva y planificada del estallido.

No menos importante, y probablemente el elemento más decisivo y que le otorga una identidad singular a los acontecimientos que se desataron es que, en la organización de estos, en la dirección de las medidas de lucha, en la propia gestación del estallido, no hayan sido agrupaciones políticas las que hayan estado detrás de las mismas. Se trata, por el contrario, de un movimiento político gestado en las mismas bases locales de cada ciudad, provincia, distrito y localidad de las regiones convulsionadas. Desde el seno de la misma sociedad civil indignada se fue gestando al compás de los acontecimientos acaecidos en Lima, posteriores a la caída de Castillo, para detener el ascenso del autoritarismo de la vicepresidenta Dina Boluarte, quien devino en la negación de la victoria conseguida en las urnas el 2021 y el regreso de las oligarquías al Ejecutivo. Esto desencadenó una ira popular que fue creciendo al ritmo de la represión más cruenta de la que se tenga noticia en las últimas décadas.

Al desatarse la represión indiscriminada en las regiones, y desde los márgenes de la sociedad civil de todo el país, empezó a emerger un sordo y antiguo rumor de ira social entremezclada con sangre, indignación y hastío. Las diversas, creativas y audaces tácticas de lucha que emergieron al calor de la toma de Lima, donde la agenda de los indignados se fue haciendo más compacta y uniforme, marcan el punto más alto del estallido. Fueron varios días en los que se contempló en vivo cómo la rebeldía social y la represión estatal, orquestada y dirigida por los sectores más conservadores y reaccionarios, combinó estilos y estrategias de lucha que la propia dinámica del estallido pusieron a punto. Se trata de una ruptura y de un nuevo punto de partida en relación con las anteriores formas de movilización popular.

Otro elemento decisivo que funcionó como detonante de las protestas y movilizaciones, fue la acumulación sucesiva y metódica de la suma de frustraciones colectivas con respecto al agotamiento del modelo económico impuesto hace tres décadas, y sus correlatos en la vida social y la intersubjetividad resultante. La configuración de tal estado de ánimo tiene signos concretos: individualismo exasperado, cierto cinismo social colectivo, el imperio de la inmoralidad que recorre lo público y lo privado; la banalización de la ética en todos los ámbitos de la vida social, y, con ello, la lumpenización del servicio público y burocrático. Todas las formas de violación del orden social y las normas que le son inherentes están a la orden del día.

Los niveles de fascismo a los que se ha llegado, obviamente, no es obra del espíritu santo ni nada que se le parezca. Hay que recordar que, junto con la reforma liberal y la instalación de la Constitución de 1993, se impuso una severa y calculada reforma en la educación pública, de signo conservador y con una clara consigna: desmantelar toda seña, situación, medio o agente educativo que induzca a la reflexión crítica, la ética pública y al bien común. Importantes asignaturas que tenían la delicada función de fomentar una ciudadanía activa de cuño republicano desaparecieron. Cursos como Filosofía, Ética y Lógica, Psicología, Economía Política, entre los más importantes, fueron groseramente reunidos en una asignatura general que buscaba, en el fondo, instalar mecanismos cognitivos envolventes para disolver, vigilar, castigar y condenar los elementos más progresistas de la reforma educativa del régimen velasquista.

Paralelamente, se tomó por asalto, vía la corrupción más vil y sistemática, el control de los medios de prensa. En algunos casos, mediante el chantaje; en otros, simple y llanamente por la fuerza. La línea editorial de la prensa escrita, la televisión y todo importante medio de comunicación masivo fue sometido a una cuidadosa operación ideológica para instalar como paradigmas sociales la frivolidad, el chisme, el espectáculo pueril. La pornografía desembozada, la falsedad y la injuria. Nada ni nadie estaba libre de caer en manos de un Poder Judicial ya tomado

por las mafias enquistadas. Ellas deciden, hacen y deshacen, enjuician, encarcelan o liberan.

Destinos semejantes al judicial corrieron las principales instituciones públicas y la estructura estatal, salvo algunos espacios funcionales al modelo económico y social impuesto, que fueron dejados casi a la deriva, sin programas de largo alcance y duraderos en las sucesivas administraciones. Por el contrario, cual Buendías imaginaban habitar Macondo, para reiniciar todo de nuevo. Con ello, se fortalecía ese vicio y círculo infernal de volver a empezar todo desde cero.

La gravedad de toda esta acumulación de frustración y tierra baldía en que se ha convertido el Estado y la sociedad, son las que pueden alimentar proyectos autoritarios entre los extremos sociales, y resucitar una vez más la guerra civil, el terrorismo de Estado y la tierra arrasada. Todo este panorama desolador y sombrío, salpicado por pequeñas islas de resistencia y de arrebatos democráticos fue la tendencia dominante, por lo menos, durante las últimas tres décadas. Y es en contra de tal estado de cosas que el estallido social, los movilizados y sus vanguardias más lúcidas y comprometidas, se han levantado. Mientras cerramos este prólogo se prepara la tercera *toma de Lima*. El actual régimen y compañía no pueden cantar victoria todavía.

Lima, julio de 2023

Primera parte

Crisis estructural y lucha de clases

Lecciones de enero 2023

Héctor Béjar

Muñecos de paja y poderes fácticos

Una presidenta espuria es el muñeco de paja detrás del cual se esconde el estado profundo del Perú, el verdadero gobierno, que está formado por un Congreso dominado por un pequeño grupo de militares y marinos retirados vinculados con el Opus Dei, unos tres o cuatro jefes de bandas criminales dueños de partidos y cadenas de universidades privadas que usan la política como coartada, unos cuantos jueces y fiscales corruptos, banqueros y poderosos comerciantes y constructores, la que podríamos llamar una lumpen burguesía. Las fuerzas armadas y policiales obedecen las directivas de reprimir, perseguir, apresar o incluso están dispuestas a matar a quienes se interpongan en el altamente probable propósito de este grupo: eternizarse en el poder.

Une a quienes están detrás de la presidenta de paja, la defensa a morir por la Constitución de 1993 que prohíbe al Estado intervenir en sus negocios y acepta que paguen solo los impuestos que quieren, es decir, casi nada o nada; la creencia de que cualquier posición disidente equivale a comunismo o terrorismo; el racismo hispanista o pronorteamericano; su oposición a la igualdad entre mujeres y varones a la que llaman ideología de género; y su antiguo desprecio por los derechos humanos.

Recordemos que allá por los ochenta del siglo pasado un presidente apellidado Belaúnde declaró que tiraba al canasto los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que el cardenal primado Juan Luis Cipriani, también hombre del Opus Dei, sostenía en los noventa que los derechos humanos "son una cojudez". Siguiendo esa

línea, un ministro de educación del gobierno actual se permitió decir que "los derechos humanos son un adefesio".

Este grupo ha decidido implantar una dictadura de larga duración y para ello ha empezado asesinando a más de sesenta manifestantes que protestaban contra la destitución del presidente Pedro Castillo por el Congreso. No se trata de un hecho accidental ni de excesos cometidos por militares y policías inexpertos y abusivos. Ya hemos visto esa política en los doce años (1980-1992), cuando el terrorismo subversivo fue respondido con el terrorismo de Estado. Resultado: Sendero Luminoso fue aniquilado, pero los Andes peruanos y algunos cuarteles como el llamado Cabitos en Ayacucho, están sembrados de fosas comunes. En cambio, en Lima, el descubrimiento casual de un dedo carbonizado permitió establecer que, en los hornos del ministerio de Defensa, popularmente llamado el "Pentagonito", se quemaban cadáveres de verdaderos y presuntos subversivos.

¿Qué tipo de país es el que produce el cinismo y la desvergüenza de los personajes que hoy gobiernan el Perú? Personajes como: a) Dionisio Romero, un banquero que entregó en secreto más de tres millones de dólares en efectivo a Keiko Fujimori, mujer cuya acusación por la Fiscalía de lavado de activos tiene 4600 páginas, es el dueño de un Banco que captaba masivamente los dólares del narcotráfico ubicado en los ochenta en el Valle del Huallaga para lavarlos impunemente en Lima; b) Joaquín Ramírez, el segundo hombre del partido de la señora Fujimori, no ha podido explicar la propiedad de 200 inmuebles, 7 aeronaves, la más extensa Universidad privada del país por sus innumerables filiales, y una fortuna que asciende a más de mil quinientos millones de dólares cuyos orígenes no puede explicar; c) una presidenta como la actual, que declara ser de izquierda, cambia súbitamente de posición política, y ordena matar, o permite y justifica la matanza de más de sesenta manifestantes; y d) congresistas que cobran cupos mensuales a sus empleados después de haberlos contratado. Sin duda, una ola de lodo cubre el Perú.

Empecemos por un golpe de vista. ¿Qué vemos cuando recorremos cualquier ciudad del Perú de hoy? No me refiero a las montañas

andinas, ese mundo ignorado por el Estado que expulsa a sus migrantes hacia Lima. Ni al también lejano y en gran parte oculto mundo de la minería informal, el cultivo y pisado de la coca, la depredación de las maderas preciosas, que destruye el medio rural. Me refiero al Perú que surge de todo ello, esa sociedad que desarregla todo lo que encuentra. De él no nos hablan los estudios oficiales, que solo tratan sus síntomas. Tenemos que salir de las estadísticas, de la vanidosa teoría pagada por los organismos internacionales que crea sus propios parámetros y olvida la realidad. Sondear a la vez el Estado y el Perú profundos.

El desprecio por la vida, la propia y la ajena, forma parte del Perú de hoy. Total, tenemos que morir algún día, es el comentario de los miles que instalan sus casuchas en las pendientes de los cerros, al borde de los ríos, en el cauce de los aluviones que pueden barrerlos con las crecientes de verano. O, durante la cuarentena del coronavirus, cuando tenían que elegir entre contagiarse saliendo a vender cualquier cosa o no comer ese día. Uno y otro verano lluvioso, las casuchas se vienen abajo con todo lo ahorrado y construido durante meses o años. Y sus habitantes vuelven a empezar en el mismo lugar porque ya no hay otro disponible. Porque las familias ricas ocuparon las mejores áreas de la ciudad. Allí donde había agua y bosques en el pasado, las empresas inmobiliarias monopolizaron el resto del terreno, a los demás les quedó solo el desierto y los cerros. Allí fueron arrojados por los dueños del país y allí se quedarán generación tras generación.

Resignación ante una sociedad cerrada, oligárquica e irresponsable, que los puso allí, y ahora los expulsa o discrimina todos los días. Un acomodarse a cualquier situación, un acostumbrarse a lo inevitable. Total, qué más da, estamos condenados a morir. Pero, además, ellos están condenados a vivir, antes de ese acontecimiento inevitable, en un mundo subhumano. Por eso, vivir o morir les da lo mismo. Igual, a una tercera parte de la población peruana no le interesa quién gobierne porque todos los gobiernos son lo mismo.

El paisaje de los desfiles escolares en las fiestas patrias es revelador. Flacura y talla baja de los chicos de los colegios públicos. Lozanía, alta

estatura en los colegios particulares, especialmente en los barrios ricos. Uniformes nuevos y brillantes *versus* trajes desteñidos, opacos, lavados muchas veces con agua cara y escasa. Un *apartheid* social divide a las ciudades. Barrios extraricos rodeados de arboledas o edificios lujosos en malecones con jardines floreados, con vistas al inmenso mar de Lima; o allá lejos en el barrio rico La Planicie, repartos o condominios con vallas infranqueables, cuidados día y noche por ejércitos de guardias particulares, bien lejos del ambiente citadino, alejándose cada vez más de los pobres que los ricos ignoran o detestan, porque quieren vivir en su mundo exclusivo. Cerros polvorientos, sucios, mercadillos atiborrados de moscas y basuras por otro lado.

Ya no hay calles en la punta de los cerros, hay que escalar entre desperdicios malolientes, perros callejeros, latas y plásticos. Cientos de miles viven sin agua ni desagüe, defecando alrededor de su casa. Millones de moscas y seguramente millones de ratas. Las aguas de los ríos están contaminadas por las montañas de escoria que han ubicado allá arriba, en los Andes, las empresas mineras que operan sin control ni restricción, adueñándose de la tierra y el agua. El aire de las ciudades está impregnado de plomo en suspensión, emanaciones de las combis, pequeños y destartalados buses que el ingenio popular llama asesinas. Los niños tienen plomo en la sangre además de carencia de alimentos en el estómago. Seguramente, los adultos tienen depósitos de monóxido en los pulmones. El mar es un gran basural. Todo el Perú es un estercolero, incluida la política y la conciencia de los poderosos.

Si uno mira con ojos atentos a la gente en el jirón de la Unión, o en cualquier lugar céntrico de Lima adonde llegan familias de los barrios del norte y del sur para pasar el domingo, los puede observar. Cuerpos deformados por la malnutrición, talla mediana o baja, ropa barata y sucia, comprada probablemente en las grandes tiendas que venden el desecho de los países industriales. El amor por caminar, trotar, hacer deporte, recién empieza a abrirse paso entre los jóvenes, cuando se puede. La gente acostumbra a orinar y escupir en las calles. La desnutrición y la malnutrición que los acompañó desde la niñez han dejado su huella indeleble en este fenotipo peruano, que se hace notar en la falta de edu-

cación cívica, en las maneras incultas y agresivas de muchos, el temor al peligro del exterior, el miedo no siempre confesado a ser robado, abusado o asesinado, la falta de confianza en la urbe poblada de peligros, donde hay que viajar horas de tortura para llegar al trabajo. Todo esto es un reflejo de algo que es mucho más que pobreza o miseria: un complejo fenómeno social y psicológico, un destilado de siglos de discriminación, abandono y explotación.

El paisaje humano de algunos barrios es lacerante y se equipara con el aspecto dantesco de los arenales que rodean Lima, donde las casuchas se amontonan unas sobre otras, albergando a los olvidados por el sistema, los que sobran, aquellos a quienes llegan solo predicadores que piden entrega total a Dios y amenazan con el demonio a los infieles. Decenas de miles de personas ingenuas e incautas caen bajo la dominación hipnótica de charlatanes y predicadores que dicen que hacen milagros o amenazan con el diablo a quienes no están con ellos. Y cuando esas casuchas van creciendo y se van convirtiendo en casas y hasta edificios de ladrillo en las partes accesibles de los cerros, como consecuencia del esfuerzo sobrehumano de las familias extensas que insisten porfiadamente en salir de la miseria, toman todas las formas de la fealdad en una estética caótica que refleja lo que hay en la conciencia, mentalidad y sentimientos de sus constructores: mundos superpuestos, porfiadas esperanzas, esfuerzos personales o familiares, una sociedad abigarrada. No hay una concepción global, un diseño unificador de la ciudad, solo parches, remiendos.

La macroeconomía no es el Perú

La macroeconomía del Perú ha tenido un sostenido crecimiento económico en los últimos años: 4.5 % anual en diez años (2010-2019). Algunos tendenciosos comentaristas de *The Economist*, *Financial Times* o similares, llegaron a hablar del "milagro peruano". Eso no es, ciertamente, el Perú. Se trata del PBI, es decir del movimiento económico anual, alimentado por el crecimiento de las ventas de las corporaciones. Efectivamente, mucho dinero circula en el país. Entran insumos para las

mineras y pesqueras, todo se importa, poco se produce, mucho se comercia, no hay industrias importantes, salvo las extractivas, solo talleres de confecciones, de reparación de vehículos, mucho contrabando, mucha autoexplotación de los precarios a quienes el lenguaje oficial llama "emprendedores".

El PBI formal oculta el otro PBI construido por cientos de cultivadores de coca, pisadores de hoja, laboratoristas, paqueteros que transportan la cocaína hasta los no menos de doscientos aeropuertos clandestinos y los puertos legales, de donde será exportada en cientos de avionetas, barcos o submarinos artesanales, a los centros de consumo de Europa, Asia y los Estados Unidos. Un mecanismo de relojería que permite al Perú exportar, según cifras oficiales, 600 mil kilos de cocaína de alta pureza, anualmente. El Ejército, la Policía, la DEA, coexisten con esta factoría desde hace no menos de cuarenta años. La primera potencia del mundo es derrotada, aparentemente, por estas incansables hormigas; y los residuos del dinero sucio penetran todos los poros del poder.

No es mucho o es nada si se compara este turbio crecimiento económico con la situación crítica de los hogares. Pero la impresión a primera vista es contradictoria y engañosa: mucho consumo de las clases medias, mucho dinero en los restaurantes, las distracciones y las tiendas. Siempre hay alimentos en los mercados, incluso los hubo en la pandemia, siempre hay dólares a un precio accesible. Se puede ir con la familia a comer a un restaurante criollo, a tomar unas cervezas, o a comprar en algún *mall* donde, como dice la propaganda, uno va a ser feliz. Claro, siempre que se tenga el dinero suficiente.

Pero el Informe Ambiental del Banco Mundial, dice que ese crecimiento anual promedio significa una pérdida del 4 % del PBI cada año medido en aire contaminado, aguas sucias, lagunas que ya no se recuperarán y otros daños irreversibles. Aunque el dato es antiguo, la realidad sigue siendo la misma o peor. Perdemos, no ganamos. Y los dólares de la calle tienen el origen de una economía paralela ligada a misteriosas actividades de todo tipo que todo el mundo supone y acepta mirando para otro lado.

- Un niño o niña se suicida por día.
- 1300 puntos de venta comercializan drogas en Lima.
- 600 mil kilos de cocaína pura son exportados por año.
- 6000 teléfonos celulares son robados por día y vendidos en las "cachinas" y en otros centros de comercio ilegal.
- 40% de los establecimientos escolares son inhabitables.
- Un millón cuatrocientos mil son ninis o *neet*, jóvenes que, en un 78% no pertenecen a familias pobres, pero no estudian ni trabajan, ni realizan entrenamiento laboral.

Cada año son practicados 371 mil abortos clandestinos en las peores condiciones de higiene, la mayor parte a adolescentes pobres. Los carteles que anuncian la solución del "atraso menstrual" están pegados en postes, pisos y paredes de toda Lima, mientras las iglesias y grupos de fanáticos se oponen al aborto administrado profesionalmente y hacen campañas contra la que han dado en llamar "ideología de género".

Constantemente, las evaluaciones del ministerio de Educación establecen que más del 40 % de niños que estudian primaria, no comprenden lo que leen. ¡Qué van a comprender si tienen escuelas en ruinas, libros viejos y son obligados a una educación cerrada, vertical, que no reconoce su procedencia provinciana y su castellano de origen quechua! También son constantes las altas cifras de niños de 6 a 35 meses que padecen anemia, como promedio nacional, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). La anemia, parasitosis, la desnutrición crónica los marcan para toda la vida, señalan una preclasificación social.

Entre enero y setiembre de 2021, los sicarios asesinaron a 288 personas en el Perú, una muerte por día. En su mayoría, estos asesinos por encargo son jóvenes entre los 14 y 25 años que matan por un pago promedio de 300 soles (menos de 100 dólares). En los últimos años han empezado los homicidios contra los líderes sociales que se oponen al narcotráfico y a la minería ilegal.

Miles de taxistas, mototaxistas, dueños de bodegas y pequeñas tiendas pagan cupos para no ser robados en Trujillo, Chiclayo, Piura y otras ciudades del norte. El próspero negocio de los cupos se ha extendido a Lima y abarca a los vendedores callejeros que deben pagar diariamente a los matones de cada barrio, plaza o mercado, para que les permitan negociar en un pedazo de vereda, los bodegueros para que no les roben la tienda y los constructores de casas y edificios, que son obligados a contratar asalariados que también pagan una parte de su jornal a los jefes de banda.

Muchos empleados del Congreso deben abonar una parte de su sueldo a los congresistas que los contratan. Hay un Estado mafioso "informal" que surge dentro, y entrelazado con, el viejo Estado "formal". El primero es el verdadero, el que funciona de manera rápida y eficiente. El segundo es un paquidermo que demora las decisiones, ignora los problemas de la gente, está ausente en las provincias y en el campo, y abusa de los débiles hasta matarlos si se sublevan. Habría que estar loco para pedir justicia al Poder Judicial de ese Estado.

Por lo menos un millón y medio de personas padecen alguna enfermedad mental, pero solo hay 750 psiquiatras para atender a más de 33 millones de peruanos, esto es, solo uno por cada cuarenta mil habitantes. ¡Y no hay psicólogos en los colegios públicos!, salvo en las grandes unidades escolares o colegios emblemáticos. Las personas que se suicidan cada día, víctimas de la depresión, no encuentran salida a los abusos o el abandono que sufren, son ignorados por una sociedad indiferente. Las violaciones de niños, los descuartizamientos, los crímenes de horror, se han extendido. Padres o familiares violan a niños, la familia, en estos casos, ha dejado de ser refugio seguro para convertirse en un lugar más peligroso que la calle.

Nada es nuestro, todo ha sido vendido: empresas del Estado, tierras, puertos, minas, bosques, suelo y subsuelo, autopistas. Las concesiones, que en realidad son ventas por décadas de bienes nacionales, cubren todo el territorio nacional, incluidas muchas áreas pobladas. Como en la Edad Media, hay que pagar peaje para viajar de una ciudad a otra, de un poblado

a otro, hasta de un distrito a otro. Los señores feudales contemporáneos que cobran esos peajes son las empresas que han sobornado a los gobernantes para disfrutar de esa renta. Los siervos somos todos. Sobramos en nuestro país. Todo está enrejado. Los barrios, las calles, las casas, la Plaza Mayor de Lima, el Palacio de Gobierno, el Congreso, las aulas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, todos se encierran, se cuidan.

El Perú ha sido reducido a un país minusválido. El trabajo de los gobiernos peruanos consiste en permitir que se extraiga minerales en bruto de su territorio y que se use, hasta la depredación, la inversión física estatal de las décadas pasadas en plantas productoras de energía, para que empresas privadas vendan a precios de asalto la electricidad producida con la inversión anterior. Todo el trabajo de los agroindustriales peruanos es producir *delicatessen* (paltas, mangos, tomates, espárragos, uvas) para los mercados europeos y norteamericanos sin pagar por el agua que extraen del subsuelo y sin preocuparse por las misérrimas condiciones en que trabajan sus cultivadores y cosechadores, amontonados en villas míseras en medio del desierto. Todo el trabajo de los pequeños comerciantes consiste en comprar y vender productos chinos. Nos alimentamos con trigo importado, de pollos ensamblados en nuestro país, pero comprados en Estados Unidos. Nos vestimos con fibras sintéticas fabricadas en Norteamérica y Asia y hemos abandonado el algodón peruano. Somos incapaces de tejer industrialmente las fibras de ovinos y camélidos peruanos. Hemos regresado a la etapa anterior a la revolución industrial y eso se nos presenta como si fuera modernización.

Y, a pesar de todo, aún existimos. Aún tenemos bienes sociales, esperanzas, aún luchamos. Nuestros grandes bienes sociales son muchos y están entrecruzados con nuestros males. Entre los bienes podemos mencionar nuestra multi e interculturalidad: somos todos distintos, todas distintas, de colores diversos, formas de hablar diferentes en las que el quechua y el acento de cada región persisten a través de generaciones; la valentía de hombres, mujeres, niños que sobreviven a la desocupación y a las inhumanas condiciones de trabajo; la creatividad se manifiesta mediante el *recurseo*, nueva palabra del lenguaje peruano en una lucha maleva por la vida, que significa picardía o robo astuto; las redes fami-

liares de supervivencia y migración interna y externa se expanden al tiempo que muchas familias se deshacen porque los padres abandonan a las madres y a sus hijos; la capacidad para migrar y retornar pequeños capitales al país a través de las remesas que obtenemos de los países ricos, o de Lima hacia las provincias, persiste aún en medio del estancamiento europeo.

Redes de solidaridad familiar o provinciana se extienden por todo el país. Hay liderazgo de las mujeres en los hogares y la economía popular. Miles de mujeres convierten a sus hijos en profesionales a través de años de esfuerzo, en medio de la pobreza. La cocina, antes esclava y pobre, ahora ha sido convertida en producto internacional; el pisco ha sido reivindicado como bebida nacional; una miscelánea de personajes peruanos ahora son famosos en el mundo global. Las rondas campesinas del norte son una forma de autogobierno, las comunidades amazónicas mantienen orgullosamente su identidad; las comunidades huancas, quechuas y aimaras se han transformado en asociaciones que mantienen tradiciones de cooperación y solidaridad.

En el culto a esta entidad abigarrada y multiforme que es, a la vez, identidad, se encuentran el orgullo del pueblo y la pedantería de las clases altas. Esta especie de vanagloria nacional ha reemplazado al pesimismo de los ochenta: Gana Perú, Marca Perú, Arriba Perú, es el entusiasmo de los tontos o el consuelo de los desalentados, porque ignora los males nacionales o subestima las tareas imprescindibles que deben ser emprendidas ahora mismo en alimentación, educación, democratización y civismo, de las que se habla a veces sin adoptar ninguna tarea nacional concreta. Un país existente, dinámico pero ignorado, hierve debajo de la realidad que aparece ante nuestros ojos. La sociedad peruana tolera o mira a otro lado cuando sabe que los problemas no tienen solución.

Los grupos y personalidades que navegan en este hervidero social forman un lumpen empresariado, una lumpen burguesía, una lumpen política y un lumpen periodismo, que participan de un sistema intrínseco e históricamente corrupto, y cada vez más penetrado por el narcotráfico. La prensa concentrada de los ricos es socavada desde internet por

redes audaces e irreverentes. Porque lo que estamos viendo en la gran función teatral representada por los generales, presidentes, políticos y altos funcionarios presos o fugitivos, por ser criminales o ladrones, no es sino el síntoma, la úlcera que revela la pudrición interior. Ellos son el espejo de nosotros. La búsqueda desesperada por la subsistencia en los sectores populares, o por el mantenimiento de un alto estándar de consumo en los sectores altos, coexiste con el tráfico de armas, de drogas, de personas, especialmente niños, mujeres, trabajadores y migrantes.

Todo es objeto de compra y venta; casi todo ha sido cosificado para convertirse en objeto de transacción, incluyendo la inteligencia, el talento, las habilidades de todo tipo, los cuerpos de niños y mujeres víctimas de pedofilia y violaciones; la vida privada, la intimidad, la conciencia, todo es producto de mercado. La televisión chorrea sangre en los noticiarios cotidianos. Mientras ocultan el manejo del poder, los medios exhiben la alcoba, lo íntimo de los famosos, hacen escándalo para engañar y vender. Una corte de periodistas rentados y un elenco estable de opinantes denuncian, juzgan y condenan a los críticos del sistema, trasmiten en distintos tonos el mismo mensaje, repiten machaconamente a la gente lo que debe y no debe creer y pensar. Múltiples cabezas de una misma hidra que oculta información o la tuerce, calumnia y difama.

En la política hay oposiciones mentirosas, denuncias de unos corruptos contra otros corruptos; exhibición cínica y matonesca de la propia corrupción. Es una censura a la inversa. Lo que debiera ser público y transparente, como por ejemplo las decisiones del poder, se hace privado y oculto; lo que debiera ser privado como la vida íntima, se exhibe al morbo de todos. El morbo popular, ávido de escándalo, es satisfecho en los programas políticos de los domingos en la noche que exhiben los pecados, pero ocultan sus causas.

Como el Perú es un país de padres desertores e hijos abandonados, un país sin padres, cada cinco años, millones de electores buscan un padre que los proteja desde la presidencia y les resuelva los problemas que ellos no se atreven a enfrentar. Un kilo de comida por un voto o cuánto me das

para votar por ti: esa es la relación de al menos un tercio del electorado con los candidatos.

Los cuatro millones de personas que tienen más de sesenta años no tienen ingresos económicos ni lugar en la sociedad, pero no tenemos política pública destinada a los adultos mayores porque ellos son nadie a partir de los sesenta. No pueden obtener empleo, ni tener seguros médicos o pólizas. En el mejor de los casos, tienen míseras pensiones de jubilación. Comparten las esquinas con los desocupados, los migrantes y los niños, pidiendo cualquier cosa o haciendo cualquier tarea para subsistir. En 2060 seremos 51 millones, pero no tenemos políticas de distribución de la población ni acondicionamiento territorial para instalar poblados planificados. ¿Dónde se ubicará toda esa gente?

Solo hay 12 médicos por cada 10,000 habitantes y están concentrados en las ciudades, y en los sectores ricos, especialmente en Lima, mientras en los países de la OCDE hay 33 médicos por cada 10,000 habitantes. Esta situación hizo crisis cuando se produjo la pandemia del 2020 y el país se encontró sin médicos suficientes para atender a los 300 mil enfermos que fallecieron víctimas del virus. Sin aviones de largo alcance para transportar vacunas, sin unidades de cuidados intensivos, sin oxígeno para los que morían asfixiados, sin hospitales suficientes, sin valentía de parte del gobierno de turno (Vizcarra, Merino y Sagasti) para obligar a las farmacias y clínicas privadas para, cuando menos bajar sus precios escandalosamente especulativos.

No solo fue el COVID-19 el que mató a la gente en el Perú. No fue solo la ausencia de atención médica. Fue la falta de valentía, moral y de principios por parte de quienes gobernaban en esos momentos; fue el sistema. Esas carencias quedaron al descubierto y sembraron un profundo enojo, un latente malestar en millones de personas, que estallaría un par de años después, cuando apoyaron la destitución de tres presidentes, salieron a las calles a manifestar y aplicaron un voto de castigo a las mafias en el 2021.

Un país de sobrevivientes a quienes se les llama "informales", que viven el día a día; un PBI que crece impulsado por los precios externos

y no por la producción nacional; una destrucción sistemática del medio ambiente que alcanza al 4 % del PBI, según cifras del Banco Mundial; una "plebe" en formación… (a no sabemos qué); una anomia generalizada y estructural que atraviesa verticalmente el sistema social, unos cuantos grupos económicos emergentes ligados en su mayoría a líneas de actividades sospechosas; un clima de malestar y protesta en la Amazonía y el sur andino que se expresa de vez en cuando en manifestaciones y huelgas estigmatizadas desde el sistema oficial, perseguidas y reprimidas de diversas formas, incluyendo los asesinatos masivos; una Iglesia Católica dividida por un neofundamentalismo cavernario, mientras las sectas fanáticas de todo tipo avanzan entre los más pobres, lideradas por predicadores milagreros; un sistema de salud y una educación segmentados según las clases sociales (educación y salud precaria para pobres y excelente para ricos); una izquierda personalista y dispersa. Todo eso junto es el Perú hoy.

Éxito de algunos, emergencia de otros, sacrificio cotidiano de los más, segmentación social, fragmentación, exclusión, indiferencia generalizada, falta de conciencia o conciencia falsa de los fenómenos. Malestar latente siempre presente en todos los sectores; protesta eventual, indiferencia hostil de las mayorías ante la gran política que está contaminada por la corrupción; alienación generalizada. ¿Qué puede salir de todo esto? A veces el estallido social, normalmente la protesta subterránea, una indignación profunda, permanente; o la abstención de quienes saben que ya nada se puede arreglar.

En estas circunstancias, un maestro rural llamado Pedro Castillo ganó por pocos puntos las elecciones presidenciales de 2021. Hizo unos meses de gobierno vacilante; finalmente, decidió suicidarse políticamente al leer en cadena nacional un documento en el que ordenaba la reorganización del Poder Judicial y el cierre del Congreso (por lo demás, demandas populares).

El acto fue de una inocencia insólita. ¡Nadie le obedeció! Fue destituido esa misma tarde por la mayoría cavernaria del Congreso, sin antejuicio político, ni convocatoria especial, ni la cantidad de votos exigidos

por la Constitución como requisito indispensable para tal medida. Los verdaderos golpistas del Congreso rompieron todas las normas legales. Los de siempre lo hicieron secuestrar de inmediato, lo mantienen prisionero, y retornaron al poder total. Los golpistas le acusan de golpista.

Nuevamente la conocida alianza de los bancos, los medios, los jueces y fiscales corruptos, y el pestilente Congreso, tomaron el timón. Asaltaron el gobierno que perdieron en las elecciones, entraron por la ventana ya que no pudieron hacerlo por la puerta en elecciones limpias. El resto de la historia es conocida.

El sur estalló. El resto del país acompañó de diversas formas. Parte del norte movilizó sus rondas campesinas. Lima esperó y al final también se decidió a protestar. Como en los treinta del siglo pasado, cuando los primeros intelectuales migrantes reclamaban una democracia de verdad, como en los cincuenta cuando las comunidades quisieron recuperar sus tierras, como siempre, el obediente Ejército, la corrupta Policía, fueron enviados para matar esta vez con bombas, pistolas y fusiles israelíes, disparando al cuerpo desde helicópteros, lanzando bombas lacrimógenas a poca distancia de los manifestantes, practicando el terrorismo de Estado que tantas veces hemos visto en nuestra historia. Las mafias decidieron aferrarse al poder de siempre sabiendo que tenían el tiempo a su favor, aunque corriera sangre. Y hoy en día, el Perú parece haber retornado a su vida normal.

¿Hasta cuándo? El levantamiento del sur dejó al descubierto al Perú profundo de hoy. Las comunidades quechuas y aimaras enviaron delegaciones a tomar Lima, las mujeres de los mercados cerraron sus puestos, los transportistas dejaron de circular llevando alimentos, los maestros cerraron las escuelas, las poblaciones rurales hicieron cientos de cortes de carretera. Cuando el Ejército y la Policía asesinaron a jóvenes mujeres y niños, la Virgen de la Candelaria, en la famosa procesión puneña de febrero, fue vestida de luto. En los carnavales, los políticos fueron ridiculizados en las danzas de Huancayo y Jauja. Las alfombras de flores de las tradicionales procesiones religiosas en el centro del país

inscribieron lemas de protesta. Ya no era el poder popular de siempre, indefenso ante las fieras de Lima.

La reforma agraria de los setenta liberó a los campesinos de los señores feudales, devolviéndoles tierras y dignidad; y ahora, esos indígenas podían alimentarse, retornar a sus chacras cuando eran perseguidos, para volver una y otra vez con las protestas a las ciudades. Las comunidades podían financiar buses que lleven a sus delegados a Lima, ya no necesitaban de los indigenistas de clase media para que los defiendan. Sus propios dirigentes, muchos de ellos ahora profesionales con formación universitaria, podían elaborar sus discursos y refundar el viejo sueño de una República verdaderamente inclusiva de los indios; una democracia de todos los colores, construida desde abajo.

El corrupto poder del dinero puede seguir matando a muchos, puede seguir amenazando, encarcelando y reprimiendo, enjuiciando e investigando. Difícil que sus fiscales, sus generales, sus jueces, sus congresistas, sus ministros puedan matar a cientos de miles, a millones. El Perú ha perdido con la recuperación del poder mafioso, pero, probablemente, eso sea momentáneo. No se puede calcular cuánto durará esta situación. El poder del pueblo sigue intacto esperando, enfrentado al poder del dinero. El poder del dinero sigue creyendo que puede dominar eternamente. Y aunque no se manifieste por el momento, aunque una presidenta espuria siga gritando desde su jaula de Palacio, ahí está el Perú de abajo, dispuesto a un nuevo enfrentamiento que quizá sea el definitivo.

Eso depende de la habilidad de los sectores radicales de la elite intelectual y popular, de la fragmentada izquierda política y la izquierda social, para lograr una coalición orientada a otra manera de hacer país y a otra forma de hacer política. Miles de personas honradas y creativas actuando en todas las clases sociales necesitan liderazgo, decisión, un discurso claro que les diga la verdad.

Contra la sociedad egoísta y anómica, debemos oponer la sociedad del trabajo digno, de los servicios sociales para todos sin discriminaciones. La sociedad en la cual cada trabajador vea respetados sus derechos y reciba una compensación adecuada por su esfuerzo. La sociedad que

hace realidad una democracia de verdad. Pero eso significa reivindicar el rol de la conciencia individual y colectiva. Cualquier alternativa teórica, cualquier modelo económico y político, se echará a perder si pasa por el filtro de conciencias no preparadas o individualidades corruptas. La excelencia de la conducta individual, la actitud de responsabilidad ciudadana es la única garantía de mejora o transformación social. Y eso toma tiempo, largo tiempo... ¿Podremos lograrlo?

Herencia colonial, capitalismo racista y estallido social

Tatiana Béjar

"¡Cortemos de una vez el mal gobierno de tanto ladrón zángano que nos roba la miel de nuestros panales!"

Túpac Amaru II, 1781

"Las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo"

Audre Lorde, 1979

La cuestión colonial y la "democracia"

El Perú como nación justa y libre lleva siglos en gestación sin poder nacer. Somos un país que está conformado por poderosas élites que manejan el Estado a su antojo que aún nos unen umbilicalmente con una mentalidad y prácticas coloniales. Los invasores crearon una capital, Lima, centralista y colonial con prácticas blanco-supremacistas frente a las provincias y periferias populares. El colonialismo implementó en nuestro país, un capitalismo racial que, en las últimas décadas, lo sufrimos en su forma neoliberal. "El capitalismo necesita de desigualdad, y el racismo se lo otorga", dice la profesora afroamericana Ruth Wilson Gilmore[1]. Nos encontramos bajo una compleja relación entre Estado, capitalismo y racismo donde una oligarquía racista y clasista limeña necesita de prácticas raciales y jerárquicas para la producción y reproducción capitalista. Para repensar en la construcción de un nuevo país donde el Estado sea conquistado por el pueblo, es importante compren-

1 Ruth G. 2021. "Geographies of Racial Capitalism with, Mapping Capital": https://antipodeonline.org/geographies-of-racial-capitalism/.

der las complejidades de estas relaciones de poder. Este país neocolonial tiene que ser abolido para poder nacer.

"Esta democracia ya no es democracia" cantan miles en las calles contra la usurpadora Dina Boluarte. Irónicamente, esa democracia que se defiende en las calles es la democracia liberal capitalista y racista, la cual está reservada para beneficio de los grupos que ejercen poder y privilegio por sobre otros. Aunque el fascismo como concepto nace en Europa para describir la violencia de blancos de extrema derecha contra otros blancos, los pueblos colonizados conocen el fascismo hace siglos. El fascismo en Perú no lo inicia Sánchez Cerro, ni Fujimori o Dina Boluarte. El eurocentrismo de la academia local y de gran parte de la izquierda nos hacen olvidar que, por casi 500 años, los pueblos indígenas y la clase trabajadora racializada han vivido bajo políticas fascistas impuestas por esta democracia excluyente que los considera ciudadanos de segunda clase.

"No puede haber justicia sin paz, y no puede haber paz sin justicia" fue uno de los principales lemas del Reverendo Dr. Martin Luther King Jr., durante su heroica lucha contra la segregación racial y la violencia brutal blanco supremacista contra la comunidad negra en los Estados Unidos hace más de sesenta años. En Perú tampoco podemos tener paz porque jamás hemos tenido justicia. Por eso, nuestra historia, la no oficial, la invisibilizada, está llena de héroes olvidados y luchas de liberación intencionalmente ignoradas por el sistema colonial existente. Walter Rodney, historiador y político guyanese, en su libro *Cómo Europa subdesarrolló África,* dice: "ser colonizado es ser removido por la historia, excepto en el sentido más pasivo"[2].

La política criminal capitalista de las élites en contra de las poblaciones indígenas no cesó con la independencia. Los territorios campesinos e indígenas seguían invadidos para el saqueo de nuestros recursos naturales por una élite limeña parasitaria vendida al capital extranjero.

Teodomiro Gutiérrez, militar peruano que se rebeló contra el Estado racista en 1915 usando el nombre quechua Rumi Maki Ccori Zoncco (Mano de Piedra, Corazón de Oro), cuenta en su informe para el entonces

2 Rodney, W. 1982. *De como Europa subdesarrollo a África*. Buenos Aires: Siglo XXI.

presidente Guillermo E. Billinghurst sobre los horrorosos crímenes que cometían los terratenientes en Puno contra la población indígena. Este es un segmento de su carta:

> Los indígenas de Samán pusieron a mi vista los cadáveres carbonizados de sus parientes y amigos, que habían sido quemados vivos. Entre los cadáveres el de una muchacha, hija del indio Andrés Apaza, que antes de ser quemada viva había sido violada por esos monstruos; se me presentaron para ser examinados por mí, personalmente, varios indígenas, a quienes los gamonales los habían castrado; vi algunas casas en las estancias que esos bárbaros, de ese nuevo Putumayo, al no poderse llevar todos los víveres en su riguroso saqueo, los habían mezclado con tierra y con ceniza, para que los indios fueran sumidos en el hambre y la miseria.[3]

Rumi Maki compara los crímenes en Samán con la violencia de los empresarios caucheros, como los de la compañía británica Peruvian Amazon Rubber Company, que propiciaron el "holocausto del caucho" contra los indígenas en el Putumayo entre Colombia y Perú (Loreto). El capitalismo se imponía con violencia contra pueblos originarios y racializados alrededor del mundo. Ese es el fascismo con el que los pueblos colonizados han sido sometidos por siglos. Mientras en Perú los gamonales imponían la muerte y explotación, el imperio belga imponía una política genocida contra la población negra en el Congo que causó más de 10 millones de muertos. Edwin Teteye, indígena bora, cuenta en el artículo de la BBC del 26 de agosto del 2022[4]: "Cuando los indígenas no llegaban a cumplir la cantidad requerida del caucho, entonces los azotaban. A otros los flagelaban, los colgaban, los jueteaban[5] para generar escarmiento en la población". En el mismo artículo, se leen fragmentos del libro *El paraíso del diablo* escrito por el ingeniero estadounidense Walter Hardenburg, quien fue testigo de esos crímenes:

---

3 Gonzales A. 2020. "Del subprefecto Teodomiro Gutiérrez al revolucionario Rumi Maqui Ccori Zoncco (mano de piedra corazón de oro). Cartas a Andrés A. Cáceres". *Investigaciones Sociales*, 23(43), 151–177.

4 Díaz A. 2022. "El Paraíso del diablo: las atrocidades del 'holocausto del caucho' en la Amazonía de Colombia": https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-60922508.

5 De fuete, juete en el habla popular.

> Los indígenas pacíficos del Putumayo son obligados a trabajar día y noche en la extracción del caucho, sin la menor remuneración, salvo los alimentos necesarios para mantenerse con vida. Se les despoja de sus cosechas, de sus esposas e hijos para satisfacer la voracidad, lujuria y avaricia de esta empresa y sus empleados, que viven de su comida y violan a sus mujeres. Son azotados inhumanamente hasta que sus huesos quedan expuestos y grandes llagas en carne viva los cubren. No se les da tratamiento médico, sino que se les deja morir, comidos por gusanos, o cuando sirven de alimento a los perros de los caciques. Son castrados y mutilados, y les cortan las orejas, los dedos, los brazos y las piernas. Son torturados con fuego y agua, y atados, crucificados cabeza abajo.

¿Alguna vez estos esclavistas, empresarios y terratenientes violadores y genocidas, han afrontado a la justicia? ¿Qué tipo de democracia defendemos cuando esos criminales y sus herederos siguen en el poder? Peor todavía, cuando vemos que las principales calles de Iquitos llevan los nombres de los empresarios caucheros. Esa es la "civilización" y "democracia" que ha engendrado esta república criolla racista.

El gobierno revolucionario del general Juan Velasco Alvarado representa, en ese sentido, un quiebre, un hito en esa trayectoria republicana. En 1968, Velasco, tras un golpe de Estado, inicia una reforma agraria y otras reformas socioculturales, además de la nacionalización de nuestros recursos naturales y un intento de industrialización. Es un momento de recuperación de la dignidad nacional y de humanización de los pueblos originarios y de la clase trabajadora. Se iba construyendo un Estado junto con el pueblo; sin embargo, el proceso fue truncado por el golpe del general Francisco Morales Bermúdez, con apoyo de cierta progresía, seguido de un acuerdo entre partidos políticos para escribir la Constitución de 1979. Allí se sella el regreso de la vieja oligarquía al poder.

A finales de los ochenta, luego de décadas de acumulación de fuerzas del movimiento popular, varios sindicatos se lograron unificar y formaron la federación minera, campesina, pesquera, textil, entre otros, con bases en todos los departamentos e incluso en provincias. La Policía Nacional también llegó a tener dos sindicatos. En ese contexto, se constituyó la *Asamblea Nacional Popular* como un primer intento por

conformar una plataforma de lucha nacional de la sociedad organizada y movilizada; pero el eterno divisionismo y la claudicación de un sector dejó el terreno allanado, para que, junto con la caída de la Unión Soviética, se abra paso el fujimorismo.

A inicios de los noventa, con la ayuda de Hernando de Soto y el *Chicago boy* Carlos Boloña, se instaló la primera etapa neoliberal en el país. El gobierno fujimorista asumió las políticas del Consenso de Washington con la finalidad de desaparecer el más mínimo atisbo de control, participación y regulación de la actividad económica por parte del Estado. Con esta medida, se buscaba que los grupos económicos y corporaciones internacionales puedan saquear a sus anchas nuestros recursos. Desde entonces, el neoliberalismo ha controlado el país y con la Constitución golpista de 1993 se agravaron las condiciones económicas, culturales y sociales de la clase trabajadora y pueblos originarios; además, iniciaron la invasión de los territorios donde están la mayoría de nuestros recursos naturales.

Con la caída de Fujimori en el 2001, y el inicio de la llamada "transición democrática", no significó el final del neoliberalismo, sino el inicio de su segunda etapa. Entonces se desarrollan reformas institucionales liberales en gran parte con dinero de la USAID; bajo la dirección de Estados Unidos. Por ejemplo, se establece la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) para crear un relato que refuerce el sistema neoliberal con rostro "democrático y liberal". Esos pequeños avances en derechos no fueron soluciones a las profundas demandas postergadas. Desde el 2002, alrededor de 350 luchadores anticoloniales, en su mayoría asháninca, aimaras y quechuas han sido asesinados por el Estado o agentes de seguridad privados por defender sus territorios y recursos naturales como el agua[6]. No olvidamos los alzamientos como el Baguazo (2009), Tía María en Arequipa (desde el 2003), así como el caso Majaz, donde 28 campesinos fueron secuestrados y torturados en un campamento minero, por la empresa Río Blanco Copper S.A en Piura (2005) y el Aymarazo (2011). Más recientemente, la Policía asesinó a tres indí-

6 Defensoría del Pueblo. 2020. *Reporte de conflictos sociales N° 198*. Lima: Defensoría del Pueblo.

genas cocama que protestaban por la falta de acceso a atención sanitaria durante la pandemia en la comunidad de Bretaña, Loreto (2020). Todos ellos, se suman a los miles de casos de muertos por la esclavitud moderna, como la de obreros que murieron quemados en las Malvinas, a dos cuadras de la Plaza Dos de Mayo, enfermedades y despidos masivos del capitalismo racista.

Estos no son conflictos sociales como los que definen las ONG, sino parte de las resistencias contra la colonización que empezaron con la conquista desde Vilcabamba, Túpac Amaru I, Tupac Amaru II, Micael Bastidas, y muchos otros. En esa trayectoria, las rebeliones de Rumi Maki y de Huancho Lima en Puno, Atusparia en Ancash, Eduardo Sumire en Cusco, las guerrillas de los 60, etc., son respuestas a la guerra que la oligarquía declaró contra pueblo desde la fundación de la república. Una guerra sin fin que, a partir del 7 diciembre del 2022, dejó más de 70 muertos que salieron a las calles exigiendo justicia y la validez de sus votos.

Debido a su eurocentrismo y su compromiso con la socialdemocracia internacional, la izquierda y su academia han sido incapaces de definir el capitalismo racista y proponer soluciones a las complejas relaciones sociales de explotación. Por el contrario, han estado más interesados en coquetear con fundaciones y universidades extranjeras usando rimbombantes discursos en defensa de los derechos humanos y agendas superficiales a favor de minorías. Al mismo tiempo, han creado puertas giratorias desde la academia, las ONG, el Estado y la empresa privada. Los mismos funcionarios que trabajan para las ONG, suelen ocupar altos cargos en el Estado y en empresas privadas; sin embargo, muy pocas veces se les ha denunciado por conflicto de intereses. Salvo cuando se trata de una pelea política de grupos de poder.

En este neoliberalismo, de segunda etapa, empieza la coexistencia de los intereses de grupos económicos y ONG limeñas que ofertan la posibilidad de un "capitalismo con rostro humano". Al mismo tiempo, nutren de especialistas a los ministerios y oficinas públicas, así como dotan de cuadros a una supuesta nueva izquierda. En los últimos años, esta izquierda ha logrado que sus propuestas estén presentes en la agenda del

Estado y de los medios. No busca la igualdad ni la justicia, sino cambios cosméticos a un sistema capitalista en decadencia. Esa es la izquierda a la que peyorativamente el pueblo reconoce hoy como los "caviares" o "tibios", porque asumen un discurso en supuesto favor de los más necesitados, pero terminan defendiendo sus propios privilegios y las demandas de una clase media acomodada. Para esta izquierda, la defensa cerrada de la "institucionalidad" es más importante que abolir los sistemas de dominación que permiten el saqueo de nuestros recursos. Esta forma de capitalismo neoliberal funciona gracias al pacto de las élites (la oligarquía) y el progresismo limeño (académico y oenegero), como una copia del pacto entre republicanos y demócratas en Estados Unidos: un consenso entre colonos. De esta unión nace la idea de democracia liberal y valores culturales hegemónicos donde el opresor está en control y el oprimido en subordinación; así, se configura un Estado cerrado para el pueblo.

Mientras el Estado sigue siendo un botín para estas élites, la clase trabajadora peruana es forzada a ser parte de una actividad económica donde todo gasto efectuado se convierte en un circuito para que todo el capital retorne siempre a las empresas multiplicando sus ganancias. Tenemos los servicios financieros más caros de la región. Lo mismo sucede con los combustibles y, por ende, el transporte. La Amazonía peruana, donde discurre el río más caudaloso del mundo, carece de energía eléctrica, convirtiéndose en un mercado cautivo del negocio de las empresas de combustibles como Repsol. Los servicios también están manejados por monopolios u oligopolios, como las comunicaciones, el transporte aéreo, los servicios médicos y de seguros, las cadenas de tiendas retail, para concentrar casi todo el ámbito del consumo nacional en beneficio de unas pocas empresas y grupos económicos.

No sorprende que varios de estos grupos diversifiquen sus actividades y controlen el país desde sus variados intereses, como el grupo Continental que no solo es dueño de uno de los bancos más reconocidos sino también controla el negocio de la pesca, minería y construcción. Lo mismo Interbank, dueño absoluto de las cadenas de farmacias, de tiendas retail y una de las empresas de construcción más grandes. Ni qué decir

del Banco de Crédito y su control sobre la distribución de combustible, alimentos y otros negocios. El grupo El Comercio, que también es uno de los dueños de América Televisión, de Graña y Montero, la mayor empresa constructora del país que participa de las grandes obras y proyectos de construcción aún después del escándalo de Odebrecht y el Club de la Construcción, donde se repartían obras a su antojo. La llegada de Castillo rompió con ese círculo y monopolio de corrupción.

Un antes y después de Pedro Castillo

A pesar de ser ninguneado por su origen andino durante la primera vuelta, incluso por un gran sector de la izquierda limeña académica y política, expuesto a las burlas racistas y clasistas de la derecha, terruqueo por los medios de comunicación, perseguido políticamente junto con el partido Perú Libre por el corrupto Poder Judicial, el profesor Pedro Castillo logró lo imposible: ganar las elecciones utilizando "las armas del amo". Ese fue un duro golpe al poder hegemónico. Los oligarcas mafiosos del Perú nunca se lo perdonaron.

Arremetieron con sus alfiles y peones desde el Congreso, la prensa, el Poder Judicial, etc. Errores propios de un gobierno indeciso, que se había rodeado de oportunistas, hicieron alejar a Castillo de la agenda popular. Castillo quiso retomar el rumbo el 7 de diciembre de 2022, pero estaba solo en el Ejecutivo, y menos apoyo encontró en el Congreso. El golpe se concretó contra Castillo. Y una parte de la izquierda fue cómplice, como se lo recuerdan a sus representantes la gente en las calles. Pero, ese golpe contra el presidente legítimo fue el detonante, la mecha que encendió la ira acumulada por siglos de abusos, insultos y menosprecios contra los grupos oprimidos por el capitalismo racial. Se revitalizó una movilización que nunca había cesado en esos sectores, que han estado en constante lucha contra los grupos económicos; una guerra permanente, racial y de clase contra la oligarquía. El costo es trágico: decenas de muertos y miles de heridos.

Si bien Castillo no lidera este movimiento social emergente, es uno de los símbolos de la lucha de los olvidados, de la resistencia contra el

abuso y la exclusión. En medio de estas protestas se vio cómo los sectores populares, indígenas, andinos, obreros, los ninguneados por este sistema, están reforzando y evidenciando al país su forma de organización, de gobierno comunal, y están trabajando su propuesta de nuevo estado plurinacional, popular y en defensa de los territorios, de nuestros recursos naturales y el medioambiente; es decir, del buen vivir. Es verdad que no todo el país está en rebelión, pero se siente una nueva energía que va cubriendo el territorio nacional. No es casualidad que Puno sea el centro de esta insurgencia.

En ese escenario, es importante destacar la gran diversidad de organización política y popular a nivel regional, así como el protagonismo de intelectuales regionales y locales que habían sido ignorados por la prensa y academia hegemónica; también a miembros de iglesias evangélicas y curas de capilla provincial alineados con su pueblo que se contraponen con la complicidad de la elitista iglesia católica. Rumi Maki era miembro de la iglesia metodista, por ejemplo. Así mismo, se ha roto la argolla de los defensores de los derechos humanos concentrados en Lima y han ganado protagonismo los abogados regionales que defienden la libertad de Pedro Castillo y están en lucha por justicia para las víctimas de las masacres en Puno y Ayacucho. Otro factor para rescatar es la aparición de nuevas voces en la política y críticos de la realidad nacional que aparecen rompiendo el monopolio de los tibios politólogos de Lima. Esto muestra una gran diversidad nacional que no se podrá reunir en un solo partido o en una ONG, porque es el pueblo en defensa de "lo popular" quien rompió la tolerancia y ahora arremete contra las élites de Lima. Es una ruptura con la república criolla.

Paradójicamente, el 7 de diciembre también nos recordó que se cumplían doscientos años de la doctrina Monroe, mientras el golpe contra Castillo era alentado por Estados Unidos. Hay que ser muy ingenuo para creer lo contrario. Las intervenciones imperialistas de Estados Unidos se han dado en distintas modalidades, y, últimamente, a través de golpes parlamentarios y "primaveras democráticas" con apoyos de militares y con la complicidad de progresismos locales que no logran

entender la complejidad de la relación del imperialismo, capitalismo y racismo.

¿Qué hacer o cómo deshacer?

En una de sus intervenciones, Rubén Darío Apaza, representante de la región Puno ante el Consejo de Asamblea del Tawantinsuyo, sostuvo:

> Nos interesa saber cómo es el Estado del Perú desde nuestra perspectiva. El sujeto social es el actor social de transformación permanente. Los pueblos originarios hemos estado en permanente movilización. El Estado peruano, como república, es un país en crisis total. [Es] capitalista, neoliberal extractivista, república discriminadora, racista y excluyente. [Es un Estado que] implementa campañas de etnocidio con policías y militares, con élites corruptas y saqueadoras.

Descrito el panorama, la pregunta que más escuchamos entre quienes están en pie de la lucha es: ¿cuál es la salida? ¿Qué hacer o cómo deshacer para avanzar? La respuesta es: la abolición. Este "es un proceso continuo de evaluación y reemplazo de cualquier sistema que no sirva para todos; es un compromiso para erradicar y reemplazar sistemas dañinos en lugar de reformarlos gradualmente", dice la activista afroamericana Brea Baker[7]. Debemos abolir esas instituciones que sostienen esta república criolla neocolonial para ir construyendo un proceso donde el pueblo tome el control del Estado. El pueblo puso un representante en palacio mediante las urnas, pero ha sido expulsado del Estado. Entonces, nos toca usar la vía constituyente para restituirle al pueblo su poder y cambiar las reglas desde adentro con toda la fuerza social que está en las calles. Si la población toma el control de sus propios recursos, cambiará definitivamente su realidad. Esto lo tiene claro el pueblo organizado, y es el primer gran paso para desarrollar una plataforma de lucha nacional.

La abolición representa, desde esta perspectiva, emancipación. En ese sentido, debemos abolir el Congreso, el Poder Judicial, controlado

7 Brea B. 2020. "Why I became an abolitionist": https://www.harpersbazaar.com/culture/politics/a34473938/why-i-became-an-abolitionist/.

por las élites mafiosas, el Poder Ejecutivo, limeñizado y elitista, y desfinanciar a las fuerzas militares y policiales para transformarlas. Mantener estas instituciones con sus moldes actuales, solo aseguran la perpetuidad y el control de los grupos de poder sobre las decisiones más importantes del país. Debemos acabar con el centralismo, pues, una de las trampas del modelo es el limitado poder de los gobiernos regionales para ejecutar presupuestos. Por eso, resulta fundamental tener el control del Ministerio de Economía y Finanzas, actualmente subordinado a políticas internacionales con el fin de prevenir gastos en beneficio de los más necesitados. Por eso, colocan trabas y regulan la ejecución del presupuesto con la finalidad de que se revierta para asegurar los pagos de los servicios de la deuda. Es un sistema organizado para desfinanciar a las naciones.

La salud universal y educación de calidad para todos solo es posible con un presupuesto centrado en las necesidades de los pueblos. La brecha actual solo en infraestructura educativa, de los tres niveles de educación, supera los 152 mil millones de soles, según el ministro de Educación de este gobierno usurpador. Eso solo puede cambiar si se prioriza un presupuesto para los pueblos y no para beneficiar los negocios de las élites económicas y el reforzamiento de la política de pueblo colonizado. Esto significaría dejar de invertir en compra de armamento y otras tecnologías al complejo militar industrial de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN.

La idea central de una asamblea constituyente debe girar en torno a la construcción del poder popular. No se la debe limitar a una coyuntura electoral o a un acuerdo de partidos políticos que no tienen representación real, sino a la sociedad organizada. Lo electoral toma importancia mientras sea instrumental para la formalización de una asamblea constituyente integrada desde el espacio local, barrial, municipal, provincial, departamental, regional, y, finalmente, nacional. Esto significa considerar las limitaciones y circunstancias de cada realidad.

El sistema electoral no puede ser el camino donde se domestica la crisis para la restitución del pacto de las élites. La experiencia de Chile

nos enseña que no debemos confiarle a una élite sin proyecto político popular la gran responsabilidad del cambio social. Más bien, sigamos las experiencias de Ecuador y Bolivia, donde su dirigencia nunca perdió su dirección popular, y tomó en serio el poder del Estado, la conducción del gobierno y la mayoría parlamentaria.

En conclusión, la disputa es sobre el nuevo orden social y sobre qué tipo de nación vamos a construir desde el Estado. Esto no es lo mismo que decir "que se vayan todos", una propuesta reformista para que "otros", o sea los mismos, usen las mismas instituciones que garantizan el poder capitalista racial. No podemos esperar que el sistema actual nos entregue algún tipo de justicia, tenemos que abolir las instituciones y sistemas que mantienen el racismo, y, para eliminar el racismo, debemos eliminar las políticas económicas capitalistas.

De Castillo a Boluarte: un gobierno, dos momentos

Juan Pablo Rojas Misari

Vivimos una época de confusión alarmante. Conceptos, caracterizaciones, interpretaciones, discursos de todo tipo se reproducen en masa en la izquierda tradicional peruana y todas ellas no hacen más que reafirmar dicha confusión. Como es de esperarse, el resultado es lamentable: fracasan sus proyectos electorales o terminan expectorados de manera vergonzosa por aquellas fuerzas a las que decide respaldar, aquellas fuerzas en las que deposita su confianza para hacer frente a la "ultraderecha". Sucede que los planes de dicha izquierda resultan en lo opuesto de lo que se propone. Por ejemplo, pretenden luchar contra el neoliberalismo, pero cada candidato al que apoyan termina reafirmándolo. No estamos frente a un error casual, se trata en realidad de una consecuencia necesaria de su perspectiva, tanto ideológica, como metodológica y política.

La izquierda tradicional[1] está hundida en la confusión, pues determina su quehacer político sobre lo que encuentra de manera inmediata en su experiencia, toma lo fenoménico como la realidad en sí misma, olvidando aquella sentencia marxiana según la cual la forma en la que aparece el mundo ante nosotros es, en la sociedad capitalista, una realidad invertida. De ahí que todo lo conciben de manera invertida y todos sus planes terminan de cabeza. Simplifica cuando debe diferenciar, diferencia cuando debe simplificar, toma a enemigos por amigos, políticas antipopulares por populares, amigos por enemigos, oportunistas por héroes, medidas antidemocráticas por democráticas, intereses de la gran burguesía por intereses del pueblo, etc.

1 Por "izquierda tradicional" o "izquierda confundida" entiendo aquella izquierda que, en todo proceso electoral llama a la "más amplia unidad", desde la más moderada, pasando por la bolivariana, hasta la que se autoproclama marxista-leninista. Al final, todas proceden igual y terminan igual.

La respuesta a todo se encuentra en que la izquierda tradicional, aun cuando en sus pequeños grupos se llamen "marxistas-leninistas", han abandonado por completo el marxismo y el análisis de clase. En su lugar, han puesto o un estrecho empirismo o un posmodernismo incapaz de reconocer lo determinante o fundante en la política para, finalmente, ofrecer análisis apoyados en lo superficial, en la vulgar e indefinida dicotomía izquierda–derecha. De esta manera, totalmente desorientados, presa de las apariencias, sus promesas terminan en estrepitosos fracasos. Esto se pone de relieve una vez más cuando tratan de interpretar el carácter y el lugar que le corresponde en la crisis política tanto al gobierno de Castillo como al de Boluarte. En donde esta izquierda tradicional ve una contraposición y ruptura, en realidad no tenemos más que una sola dirección, un solo interés de clase y un solo proceso, con sus respectivos momentos, claro está.

Lo que trato de demostrar en las siguientes líneas es que el gobierno de Boluarte no es más que la continuación del gobierno de Castillo. Para comprenderlo, hay que hacer un esfuerzo por trascender lo aparente y fijar la atención en el carácter de clase de las fuerzas políticas y el momento de la lucha de clases que vivimos.

Ascenso de Pedro Castillo

Cuando pensamos en la personalidad y el papel que jugó Pedro Castillo en todo este tiempo, es inevitable rememorar aquel Napoleón III que Marx describe en sus textos sobre la Francia de 1848 a 1851. ¿Cómo fue posible que "el hombre más simple de Francia" lograra adquirir una "significación" tan "compleja", al punto de aparecer a la interpretación de Víctor Hugo como "un rayo que cae en el cielo sereno" y su obra como el "acto de fuerza de un solo individuo?". La figura y acción de Luis Bonaparte cobraban tintes místicos, en apariencia, inesperados o producto de un genio sin parangón en la época. Marx se encargará de desmitificar todas esas interpretaciones demostrando que fue la lucha de clases en Francia la que generó "las circunstancias y las condiciones que permitieron a un personaje mediocre y grotesco representar el papel de

héroe".[2] Pero a estas condiciones generales y externas, Marx agrega algo más: si Napoleón III pudo elevarse al lugar en donde "podía significarlo todo", fue precisamente "porque no era nada", por eso "podía significarlo todo, menos a sí mismo".[3] El caso de Castillo es bastante similar, por no decir idéntico en esta consideración formal: se trata de un personaje que llega a ocupar un lugar central, no debido a su ingenio y resolución, sino gracias a las condiciones azarosas que impuso la lucha de clases en el Perú y, además, carente de una identidad de clase definida, lo cual será determinante en su desarrollo ulterior.

Dichas condiciones azarosas inician desde el momento en que aparece como figura pública en el espectro político nacional: la gran huelga magisterial del 2017. Para entonces, Pedro Castillo se puso en el ojo de la reacción al aparecer como dirigente de una lucha que tuvo un amplio respaldo popular. Pero Castillo no había llegado a ese lugar gracias a sus dotes de dirigente gremial, sino porque las bases magisteriales opuestas a la dirigencia ("Patria Roja") del SUTEP no encontraron mejor forma de resolver sus contradicciones que mediante la elección de un dirigente que no tenía una posición definida, que, por tanto, no representaba la imposición de un sector político sobre otros, sino que, por el contrario, permitía una convivencia e influencia "equitativa" de los sectores bien definidos sobre la dirección del movimiento. Fue, entonces, una disputa interna la que lo erigió en dirigente y lo que determinó su aparición en la escena política nacional, mas no una disputa donde liderase a un sector que lograra imponerse a los demás, sino una en donde él aparecía como un agente sin definición y carente de contenido particular. Como veremos, esta será siempre su característica esencial: la indefinición.

Pero hablar del Castillo candidato nos obliga a contextualizar dicha empresa. El antecedente inmediato de las elecciones del 2021 fue un periodo de pugna entre Ejecutivo y el Legislativo que veló la verdadera contienda: la pugna entre los dos sectores de la gran burguesía por hacerse con el control sobre los poderes del Estado, la gran burguesía

---

2 Marx, K. 1974. *El dieciocho brumario de Luis Bonaparte*. Moscú: Progreso, p. 6.

3 Marx, K. 1975. *Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850*. Moscú: Progreso, p. 68. .

financiera (GBF) y la gran burguesía burocrática (GBB)[4]. Esta contradicción llegó a su momento más agudo durante las protestas contra el gobierno de Manuel Merino[5].

El golpe de Merino fue una acción concertada entre la GBB, la burguesía intermedia y la pequeña burguesía contra un Ejecutivo controlado por la GBF que venía golpeando judicialmente a la GBB; además, bajo la apuesta por la reactivación económica para salir de la crisis dejada por la pandemia, había garantizado sus intereses en desmedro de las capas bajas de la burguesía y del proletariado. Con la caída de Vizcarra, ascendió al Ejecutivo una coalición, comandada por la GBB y que aglutinaba una correlación adversa a la GBF. Se hacía posible lo inesperado: la GBB podría gobernar sin ceder ante la GBF. En respuesta, la GBF pone en marcha toda su maquinaria mediática e ideológica para motivar las movilizaciones y recuperar el poder que le había sido arrebatado. La contraofensiva de la GBF tuvo éxito, las personas se involucraron con el problema y salieron a manifestarse en contra del golpe, repudiando a los partidos y al Parlamento. Esta ofensiva culmina con la renuncia de Manuel Merino y el Ejecutivo en manos de Francisco Sagasti, miembro del Partido Morado, representante de la GBF.

Todo lo mencionado es importante para entender, no solo las condiciones de la lucha de clases sobre las que aparece la candidatura de

---

4 ¿Qué son la GBF y la GBB? Por GBF nos referimos al sector de la gran burguesía peruana que tiene el control sobre las finanzas y la gran industria en el Perú. Aquí encontramos a los principales conglomerados tales como Credicorp, Intercorp, Grupo Benavides, entre otros. Se trata del sector que se desarrolló en constante comunicación y dependencia hacia el capital financiero norteamericano. Por GBB comprendemos al sector nacional empresarial enriquecido en las últimas décadas, principalmente desde los 80 o 90 y que crecieron en un mercado interno ya casi dominado por compañías extranjeras y las empresas de la GBF. La lucha entre ambos sectores de la gran burguesía se desarrolla con mayor detalle y profundidad en: Ballhorn, J. y Torres, A. 2022. *La lucha de clases en el Perú 2016 – 2021: pugnas interburguesas ad portas del Bicentenario*. Lima: Comuna.

5 Para entonces, noviembre del 2020, el parlamento tenía la siguiente composición: representando a la GBF estaban el Partido Morado (PM), el ala derecha del Frente Amplio (FA), un sector de Somos Perú (SP) y un sector de Acción Popular (AP); como representantes de la GBB estaban Fuerza Popular (FP), Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú (PP), un sector de AP y un sector de SP; como representantes de la burguesía intermedia estaban Unión por el Perú (UPP) y el ala izquierda del FA; y como representantes de la pequeña burguesía se hacía presente el Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP).

Castillo, sino para reafirmar por qué no existen diferencias esenciales entre el gobierno de Castillo y el de Boluarte.

La candidatura de Pedro Castillo aparece en un momento de enorme desprestigio de todas las fuerzas políticas con alcance nacional. Los últimos cuadros que podrían haber significado una alternativa para la GBF caen por completo en la opinión pública. Es así como, ante la ausencia de una izquierda que apunte a los sectores populares y con una derecha totalmente desprestigiada, la candidatura de Castillo comienza a ganar notoriedad, más aún cuando, bajo una retórica oportunista (como veremos) levantaba las banderas de la Nueva Constitución (NC) y del indulto a Antauro Humala.

Para la derecha, Castillo aparecía como aquel candidato sin posibilidades de ganar, pero que restaría votos a la "izquierda caviar". La GBB centra sus golpes contra JP, representante de la GBF; los sectores de izquierda popular no se identifican con JP, prefieren apoyar a Pedro Castillo; la GBB, principalmente el ala fujimorista, se encuentra desprestigiada. Así, las condiciones estaban dadas para que la candidatura de Castillo despegara. No por mérito propio, sino por la apatía total de la población hacia los partidos políticos protagonistas de las últimas riñas. Aun así, Castillo no logra obtener una significativa mayoría, pero sí la suficiente para pasar a una segunda vuelta contra Keiko Fujimori, candidata de FP. Las condiciones previas de la lucha de clases determinaron que un personaje con el perfil de Pedro Castillo llegara a disputar el lugar de máximo jefe y resentante de la nación: ante la nulidad de opciones en el espectro político electoral. Sin embargo, la disputa del balotaje contra el fujimorismo fue uno de esos hechos fortuitos que genera la lucha de clases y que, nuevamente, jugaron a favor de Castillo.

Para la mayoría de los trabajadores y campesinos, Castillo aparecía como alguien que defendería sus intereses o, mínimamente, como alguien que los defendería de las fuerzas políticas reaccionarias. Para la izquierda caviar, Castillo aparecía como la oposición al fujimorismo. Para otros sectores de la GBF, la candidatura de Castillo podía ser reorientada para evitar un mayor fortalecimiento de la GBB. Para la izquierda

"popular", Castillo aparece como el garante de la anhelada Asamblea Constituyente.

Todos veían en Castillo la realización de algunos de sus intereses, sobre todo los cuadros técnicos de la GBF, quienes se iban sumando de a pocos, pues las concesiones del candidato perulibrista hacia este sector eran cada vez más onerosas. Un conjunto de tecnócratas neoliberales de pasadas gestiones presidenciales se acercaron y se acomodaron en el equipo técnico de Pedro Castillo, quien, para garantizar su victoria y hacerse más aceptable a las clases dominantes y los medios, iba tomando distancia de su partido de origen Perú Libre (PL). En esos meses se libró también una lucha de clases al interior de la candidatura perulibrista para definir qué clase comandaría el posible gobierno de Pedro Castillo. Finalmente, Castillo gana la segunda vuelta electoral y, como suelen decir sus apologistas, de campesino, maestro rural y sindicalista, pasa a ser presidente de la República del Perú.

Aquí debemos detenernos un momento. Si de alguna manera justificó la izquierda tradicional su apoyo a Castillo, fue bajo la idea de que Castillo concretaría la lucha por una Nueva Constitución (NC) y porque, con este gobierno, el Perú viviría su propio "progresismo" al estilo de otros países latinoamericanos. Contra este pronóstico, muchos afirmamos que en realidad la situación no sería muy distinta con Castillo en el poder: no habría Asamblea Constituyente (AC) y tampoco cambio significativo en el modelo neoliberal; cuando mucho, Castillo no sería un opositor a la demanda por la AC. Señalamos, además, que lo determinante para arrancar la AC era la lucha decidida de las masas. A todo esto, había que agregar que durante los últimos años los sectores de la gran burguesía habían estado pugnando por el control de las instituciones del Estado, algo que dificultaba en gran medida la realización de acciones mayores a nivel del Ejecutivo.

Ojo, la izquierda tradicional no negaba en el discurso la necesidad de la lucha de las masas, incluso decían que "no se hacían de ilusiones" con Castillo; pero, en la práctica la izquierda tradicional hizo todo lo contrario: depositó toda su confianza en Castillo y negó por completo

la necesidad de la lucha de las masas. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Castillo nos acercó más a la AC?

A unos días de concluida la segunda vuelta electoral, y con Pedro Castillo como virtual ganador de la primera, su asesor en materia económica, Pedro Francke (2021), publicó un comunicado en donde se ponía en conocimiento que el plan de un "eventual gobierno del profesor Pedro Castillo Terrones" no contemplaba "estatizaciones, expropiaciones, confiscaciones de ahorros, controles de precios o prohibición de importaciones"[6]. Con este comunicado, quedaba claro que el equipo técnico que asesoraba a Castillo en segunda vuelta había descartado por completo las intenciones originales de la candidatura perulibrista. El silencio de Pedro Castillo no hizo más que otorgar credibilidad a las palabras de Francke. Esto representaba, obviamente, un cambio de rumbo con respecto a las propuestas de la primera vuelta.

Pedro Francke Ballvé, quien había salido de las filas de Juntos por el Perú (JP), es decir, de un partido alineado con los intereses de la GBF, logró tener gran influencia y, poco a poco, logró incorporar a un buen número de funcionarios afines. A ojos de algunos, eso auguraba un gobierno, al mismo estilo de Ollanta Humala. Pero la izquierda tradicional, siempre "víctima" de las apariencias, definía su colaboracionismo a partir de los discursos y del sombrero del flamante presidente de la República: ¡Provinciano, profesor rural y sindicalista! En realidad, la influencia de Francke y otras personalidades cercanas a JP y Nuevo Perú demostraba que el sector intelectual de la GBF había comprendido que podía dirigir el gobierno de Castillo, tanto como el imperialismo norteamericano, que se manifestó siempre por el respeto a los resultados electorales e ignoró los informes de los partidos de la GBB que denunciaban fraude. En cuanto a su sector empresarial, el más pragmático, en un primer momento se alineó inmediatamente con Keiko Fujimori, pero luego fue comprendiendo que el gobierno de Castillo no sería lesivo a sus intereses.

6 Franke, P. [@pedrofranke]. Pronunciamiento (7 de junio del 2021): https://twitter.com/pedrofrancke/status/1402094321025814533?s=20.

Estas fueron las condiciones que pusieron a Castillo en el poder y las condiciones en las que asumió el mandato: gran desprestigio de las fuerzas políticas de alcance nacional, una institucionalidad civil y militar copada por los sectores de la gran burguesía y un conjunto de técnicos que lo guiaron por los intereses de la GBF. En definitiva, una vez más, la izquierda tradicional había sembrado falsas ilusiones en el pueblo.

Vacilaciones y caída de Pedro Castillo

Desde que inició su gobierno, Castillo no tuvo un interés genuino por concretar su propuesta de NC; por el contrario, se ocupó de depurar todo lo que tenía de izquierda en su gabinete, aceptando sin la menor resistencia la presión de la gran burguesía y los medios de comunicación. Castillo como presidente nunca empleó políticamente la Cuestión de Confianza, algo que lo ponía en una posición ventajosa frente al Parlamento. Nunca pensó en anticiparse y enfrentar al Congreso (claramente en su contra) antes que este hiciera sus antojadizas modificaciones. Castillo prefería guiarse por sus asesores de la gran burguesía financiera (GBF), quienes consideraban que "no era momento" para un proceso constituyente. Desde entonces, cada que retomó en el discurso la cuestión de la NC lo hizo únicamente con fines demagógicos. Cada día que pasaba, el pueblo era testigo de su renuencia a defender a las personalidades de izquierda en los ministerios. Se daban cuenta de que no había medidas muy distintas a las de gobiernos anteriores. Todo pintaba a un continuismo neoliberal; pero Castillo, cada que estaba en provincia, anunciaba que "no había hoja de ruta"[7] y que estaba por una "Nueva Constitución". Puro discurso demagógico que muchos ya no tomaban en serio.

---

7 Por ejemplo, al anunciar la "Segunda Reforma Agraria", Castillo declaraba en un mitin en el Cusco: "No podemos traicionar al pueblo. Acá no hay una hoja de ruta, acá no hay un egocentrismo, acá no hay nada de voltéate a la derecha, acá manda el pueblo…". "Por eso, yo me ratifico en que, así como en 28 de julio juramos por esa nueva constitución, hoy a nosotros es a quien le corresponde hacerla entonces" (https://www.gob.pe/institucion/presidencia/informes-publicaciones/2195357-discurso-del-presidente-pedro-castillo-en-el-lanzamiento-de-la-segunda-reforma-agraria).

Entre marzo y abril del 2022, estallaron protestas contra el continuismo de Castillo y se realizaron paros en algunas regiones del país. El más fuerte se presentó en Junín, sobre el cual el mismo Castillo tuvo desafortunadas declaraciones. Entonces, la izquierda tradicional, haciendo gala de su total oportunismo, se atrevió a tachar, en muchos casos, la legítima protesta como una protesta "fujimorista". Fue así como, al ver un pueblo que se le venía encima, se apresuró en presentar ante el Congreso un proyecto de ley para consultar el cambio de Constitución. Este fue un artificio de mago que, bajo esas condiciones, no significaba más que farsa. Era obvio que el Congreso rechazaría dicho proyecto. Pero, como siempre, la izquierda confundida hizo toda una fiesta de esto, proclamando que Castillo "retomaba sus banderas de campaña". Finalmente, el proyecto fue rechazado y todo regresó a la normalidad. Una vez más, la izquierda tradicional, vio expuesta su falta de comprensión y de criterio en torno a la lucha de clases en el Perú.

La izquierda tradicional peruana, en su confusión y falta de profundidad, creía que defendiendo al gobierno de Castillo (contra la "ultraderecha golpista") estaba más cerca de la AC, cuando sucedía todo lo contrario: mientras más defendía al gobierno, más lejos se encontraba de esta. Eso se debe a que el gobierno de Castillo no estaba sirviendo más que como muro de contención contra la movilización y explosividad de las masas, elementos sin los cuales no es posible conseguir la AC. La experiencia de Junín y Apurímac demostró que bastaron tan solo dos levantamientos en el interior del país dirigidos contra el gobierno de Castillo para que el Ejecutivo presentara una iniciativa legislativa sobre la AC.

Contra el entusiasmo de quienes decían que Castillo "se acercaba nuevamente al pueblo" o que "comenzaba a rectificar", la iniciativa para el referéndum por la AC no cumplía otra función que la de apaciguar el descontento popular e ilusionar a esa izquierda incapaz de trascender lo aparente; su objetivo era recuperar la estabilidad del gobierno y seguir con el "piloto automático". Aun así, dejó entrever que la presión popular podía lograr avances significativos en ese sentido. Pero, la izquierda tradicional estaba haciendo todo lo contrario de lo que había pregonado y, como era de esperarse, sus resultados también eran todo lo contrario de lo que bus-

caba. La práctica demostró que, en realidad, depositaban todas sus confianzas en el papel de Castillo como presidente y negaban por completo el papel de la lucha de las masas para conseguir la AC. En consecuencia, la posibilidad de una AC era más lejana que nunca, puesto que dicha izquierda con presencia en las organizaciones populares, al sostener una posición colaboracionista con el gobierno, anulaba toda posibilidad del levantamiento popular que debía (y debe) ser la premisa real de lo que se llama "momento constituyente". Creían estar salvaguardando las posibilidades para lograr una AC al defender a Castillo de la "ultraderecha", pero conseguían todo lo contrario. No sabían lo que hacían, pero lo hacían.

Luego vino más de lo mismo: un claro continuismo. Vacío de contenido, la izquierda tradicional apelaba a la idea de que "peor sería un gobierno de la ultraderecha". Pero, en medio de esa vacilación, los sectores de la GBF fueron tomando distancia y comenzaban a abandonar a Castillo hasta ponerse totalmente en su contra. Hacia la segunda mitad del 2022, ya ningún sector sostenía su gobierno, la GBB lo quiso vacar desde el inicio, luego la GBF pidió nuevas elecciones; en cambio, el pueblo solo le brindaba un apoyo negativo al gobierno (por oposición a la "ultraderecha"). Fue así como, para conseguir respaldo, Castillo emprende otra medida populista: presenta, mediante el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, una Cuestión de Confianza para revertir las modificaciones que hizo el Congreso respecto del cambio constitucional[8]. Como era de esperarse, el Parlamento ni siquiera admitió a discusión dicha propuesta. Así concluyó tal intento.

Sin respaldo político de ninguna parte, y ante una tercera moción de vacancia, Castillo busca recuperar lo único que le quedaba y que había ignorado todo el tiempo: el apoyo del pueblo. El 7 de diciembre de 2022 ofrece un mensaje a la nación en donde decreta el cierre del

8 Para entonces, el Congreso de la República había aprobado la Ley 31355 mediante la cual regulaba el ejercicio de la Cuestión de Confianza y limitaba su aplicación "a materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de Gobierno, no encontrándose, entre ellos, las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionalmente autónomos". De esta manera, el parlamento garantizaba que la Cuestión de Confianza no fuera empleada como instrumento de presión política por el Ejecutivo.

Congreso y convoca a elecciones para conformar un nuevo Congreso con facultades constituyentes. Con esta medida desesperada buscaba, demagógicamente, atender al "clamor popular". No contaba con que se encontraba solo, sin respaldo de los sectores de las clases dominantes.

¿Qué demuestra el derrotero expuesto hasta aquí? Que esa "valentía" de la que hablan muchos, o ese "inmolarse" por el clamor popular, fue nada más y nada menos que una medida demagógica, sin un verdadero interés por la lucha para una AC; más bien, Castillo utilizó esta justa demanda popular con el único fin de ganar respaldo para sostener su tambaleante gestión. Ese papel que cumplió Castillo, visto desde la lucha de clases en el Perú, demuestra que este personaje "mediocre y grotesco" no fue nunca un héroe, todo lo contrario, su última acción, donde convoca al pueblo tras haber sido expectorado por las clases dominantes, lo pinta como un oportunista. Pero la izquierda tradicional, aquella de la percepción invertida, hoy toma a Castillo por héroe y, a gusto de este Napoleón III fallido, sigue abogando por su restitución. Es decir, ahí donde el descalabro ha develado todos los errores de la izquierda tradicional, y donde correspondería una rectificación, esta izquierda se empecina en una reafirmación. En definitiva, una acción y un pensamiento invertidos.

La caída encontró a Castillo aislado políticamente. Quiso ser el Napoleón III peruano y "aparecer como el bienhechor patriarcal de todas las clases", pero olvidó que "no puede dar a una sin quitárselo a otra".[9] Mientras Luis Bonaparte logró canalizar esos intereses parciales y, tras identificarse con una clase, logró aprovecharlos para hacerse con todo el poder, Castillo en su vacilación y falta de definición, no pudo sacar provecho de la posición privilegiada que una vez le dio la lucha de clases y, así, terminó perdiendo todo el poder. Castillo es el Napoleón III invertido.

Ascenso de Dina Boluarte

Con la caída de Castillo, la GBF logra un paso importante para recuperar la hegemonía total sobre el Ejecutivo. En su lugar, entra Dina

9 Marx, C. 1974. *El dieciocho brumario de Luis Bonaparte*. Moscú: Progreso, p. 107.

Boluarte con el respaldo del Parlamento, las FFAA[10] y la embajada norteamericana. Con ella, la GBF inicia su segundo momento, ahora con un control total sobre las instituciones del Ejecutivo y dispuesta a ejecutar sus planes sin obstáculos. En realidad, la GBF había agitado desde antes la necesidad de nuevas elecciones, pero el empeño de la GBB por vacar a Pedro Castillo la hizo prepararse para este momento. En efecto, el Parlamento decreta inconstitucionalmente la vacancia de Pedro Castillo y la GBF ya tenía un cuadro listo para entrar en escena.

La condición de Dina Boluarte, como representante de la GBF, inicia, al igual que el cambio de rumbo de Pedro Castillo, desde la segunda vuelta electoral. Ya era difundido por muchos medios independientes (como *elgrancomboclub* de Silvio Rendón) que Boluarte estaba siendo asesorada por personalidades vinculadas a la embajada norteamericana[11]; de este modo, pese a ser militante de Perú Libre (partido "marxista-leninista y mariateguista") desde el 2020, acompañó acríticamente a Castillo en todos sus vaivenes, manteniéndose siempre en una cartera ministerial. A diferencia de las bancadas de la GBB, se opuso siempre a la vacancia presidencial y luego, como presidenta, ha impulsado más de una propuesta de adelanto de elecciones incluida una consulta para reformar la Constitución de 1993. Con su llegada al poder, la GBF unificó a todos sus sectores, tanto el empresarial, propagandístico e intelectual, aunque, posteriormente, la brutal represión haría vacilar a cierto sector de sus "literatos" (como diría Marx), por lo que terminaría apoyándose principalmente en su sector militarista.

---

10 Las FFAA ya habían manifestado su inclinación a favor de la GBF cuando en setiembre de 2020, en el marco de un proceso de vacancia contra Martín Vizcarra, Manuel Merino, el entonces presidente del Congreso, realiza una llamada a altos mandos de las FFAA, quienes comunicaron inmediatamente lo sucedido al ministro del Interior y al día siguiente salieron junto con Vizcarra en un mensaje a la nación. A esto agreguemos que, previamente a su renuncia, Merino convocó al alto mando de las FFAA y la policía a una reunión de urgencia, a la que no acudieron, demostrando su desacuerdo con dicho gobierno y su afinidad con los intereses de la GBF.

11 Es el caso, por ejemplo, de Julio Schiappa, quien es sindicado como el responsable de la designación de Alberto Otárola como presidente del Consejo de Ministros. Entre otros de sus asesores, se encontraban Gonzalo Alegría, quien fuera candidato a la alcaldía de Lima con el partido Juntos por el Perú, como sabemos, alineado con la GBF.

La izquierda confundida interpreta este golpe y el ascenso de Boluarte como la imposición de aquel sector al que todo este tiempo ha llamado "ultraderecha", planteando que este gobierno es un títere del fujimorismo; desde esta óptica, muchos consideran que el gobierno de Boluarte es un gobierno "restaurador": Boluarte habría restaurado un orden que, según ellos, Castillo habría subvertido o, al menos, modificado. Lo cierto es que, más allá de pequeños retoques, el gobierno de Castillo, en donde los bancos más grandes del país vieron elevadas sus ganancias, no modificó en nada el modelo económico y político. ¿De qué restauración se puede hablar?

Sin embargo, considerar que entre el gobierno de Castillo y el de Boluarte existe una ruptura, es la interpretación más en boga en la izquierda tradicional y la que mejor le sirve para no asumir todas las consecuencias de su fracaso; pero, si dejamos de lado las diferencias secundarias y anecdóticas, nos damos cuenta de que el rumbo del país sigue siendo el mismo y la principal clase beneficiada sigue siendo la misma. Lo que tenemos es más bien una continuidad: un solo proceso con dos momentos. Un primer momento en que la GBF logra copar, mediante "cuadros técnicos", los puestos de influencia en el gobierno de Castillo para mantener el rumbo económico y salvaguardar sus intereses materiales, mientras, externamente, su sector empresarial y mediático lo golpean políticamente, preparando el asalto final; y, un segundo momento, en donde, habiendo garantizado su interés de clase, la GBF pasa a hacerse cargo directamente del Ejecutivo con el golpe parlamentario del 7 de diciembre. Con Castillo, la GBF y el imperialismo norteamericano influenciaron "desde afuera", guiaron el curso del gobierno, pero no fueron ellos mismos quienes tenían el gobierno. Castillo siempre se mostró como un cuadro vacilante y poco habilidoso; por ello, el respaldo momentáneo de la GBF se transformó poco a poco en una preparación para asaltar el Ejecutivo y poner en su lugar a un cuadro que gobernara con mayor firmeza y fidelidad.

Entonces, ¿en qué reside la supuesta diferencia radical de la que habla la izquierda tradicional? Si vamos a hablar de las medidas económicas, el rumbo no es distinto. Castillo no renegoció nada. No tocó nada. Respetó

el modelo económico. Boluarte hace lo mismo, pero ya sin un discurso izquierdizante. El gobierno de Castillo significó, en los hechos, el predominio de la GBF sobre las demás clases del país. Con el gobierno de Boluarte se mantiene dicho predominio. El gobierno de Castillo no hizo nada serio para conseguir una Nueva Constitución. El gobierno de Boluarte tampoco lo hará. Por tanto, diferencia significativa en estos aspectos no existe; pero, ciertamente, parece evidente que sí existe una diferencia importante: el gobierno de Boluarte tiene prácticas cuasi dictatoriales y ha dejado decenas de muertos producto de una represión brutal.

Dicho esto, volvemos a la pregunta: ¿podemos hablar de diferencias sustanciales entre los gobiernos de Castillo y Boluarte? No. Ambos siguen la misma línea y representan momentos distintos del poder de la GBF sobre el Ejecutivo. La diferencia que se expresa es la diferencia natural entre los momentos de un mismo proceso. Pongamos un ejemplo para reafirmar lo dicho hasta aquí: el gobierno de Pedro Castillo declaró, en su momento, el Estado de Emergencia para contrarrestar las protestas en el interior del país (con su respectivo saldo de detenciones, heridos y fallecidos); si no fue más represivo fue porque en frente tenía un pueblo desmovilizado, poco beligerante, cuestión que ya hemos abordado líneas arriba. Esto demuestra que el gobierno de Castillo, cuando la situación lo ameritaba, fue también represor.

Ahora bien, ¿por qué el gobierno de Boluarte se muestra mucho más represor que el gobierno de Castillo? ¿Es porque gobiernan sectores distintos de la burguesía? ¿Es porque la "ultraderecha" derrocó a un gobierno popular? Que el gobierno de Castillo haya sido "popular", lo descartamos por todo lo dicho anteriormente; sobre por qué no fue más represivo, también lo hemos considerado líneas arriba. Lo que corresponde preguntarnos es, ¿por qué siendo ambos periodos el gobierno de un mismo sector de la gran burguesía (GBF), ahora se lleva a cabo una represión brutal? Porque ahora el pueblo se ha levantado ferozmente contra del gobierno de Dina Boluarte y del Parlamento, y es un levantamiento que va más allá de lo meramente reivindicativo; esta vez la lucha popular levanta la bandera de la Nueva Constitución. Las clases que conforman el pueblo se han dado cuenta de que la problemática puede encontrarse quizás en las

estructuras de la sociedad, en este caso, la estructura política del Estado peruano y el modelo implementado desde 1993. Esto ha hecho que ambos sectores de la gran burguesía se hayan unificado y sus diferencias no se hagan notar como durante el golpe de Merino.

Esta relativa unidad le hace creer a la izquierda tradicional que Boluarte y el Parlamento representan las mismas fuerzas. Como lo dijimos, esta izquierda se queda únicamente en las apariencias. Por esta misma razón la izquierda tradicional no puede explicar por qué el impacto mediático de las protestas contra Merino tuvo más alcance y resultados que las luchas contra Boluarte, a pesar de que la cifra de asesinados es abismalmente mayor con esta última, al punto de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) habla de posible masacre. La izquierda tradicional explica esto alegando "racismo" y "centralismo" limeño. Para variar, vuelve a invertir los aspectos: toma lo principal como secundario y lo secundario como principal. La respuesta a esto, sin tener que sacar un as bajo la manga o hacer malabares con categorías del progresismo, se encuentra en el análisis de clase.

En las protestas contra Merino el alcance fue mayor porque sectores mediáticos y empresariales de la GBF se opusieron resueltamente y tuvieron las condiciones para arremeter contra el sector que había asaltado el Ejecutivo. En ese momento, el pueblo no identificaba a la GBF y sus fuerzas políticas como sus enemigos (incluso, el mismo Vizcarra, gozaba de mucha popularidad); además, el pueblo identificaba al Parlamento como su enemigo, algo de lo que la GBF se había encargado desde la instalación del nuevo Congreso en el 2020, mediante permanentes campañas mediáticas. Así, pudo hacer eco de sus demandas y canalizar el descontento popular contra los representantes de la GBB, logrando generar una presión extraordinaria tras la muerte de dos jóvenes en la capital. Esa fue la razón por la cual resonó tanto el caso en los medios de comunicación, entre políticos y empresarios, porque la GBF empleó toda su maquinaria y la protesta respondió a sus intereses. No fue porque haya sido una lucha "limeña", sino porque respondió a los intereses de la GBF.

Diferente es lo que sucede contra Boluarte. Ahora, el pueblo ha levantado una bandera propia; una consigna que responde realmente a sus intereses, y se opone de manera resuelta a toda la gran burguesía sin distinción. En respuesta, la gran burguesía actúa también en bloque. De ahí que sus medios callan, sus políticos acusan y su empresariado respalda. No es porque la protesta venga desde las provincias, sino porque la protesta, esta vez, es legítima y parte desde el pueblo. Esta vez, se levanta una bandera popular y atenta contra los intereses de la gran burguesía en su conjunto.

La aparente unidad del Ejecutivo y Legislativo, que ha borrado las diferencias para la izquierda confundida, se debe a que la GBB tiene mucho que perder y no tiene otra opción más que conciliar y jugar en pared con la GBF para defender el gobierno de Boluarte, aunque pidiéndole más participación en la administración estatal. Debido a que la conciencia del pueblo esta vez refleja una elevación, en tanto apuesta por una lucha plenamente política, la GBB tiene que aceptar a regañadientes la dirección de la GBF y actuar en bloque junto con ella.

Entonces, lo determinante frente al gobierno de Boluarte es el carácter de clase y la correlación de fuerzas entre las clases sociales, no un problema de "racismo" o "centralismo". De que hay racismo, por supuesto, pero no es el elemento central o principal. Es más, quedarse en lo aparente les hace creer que hay ruptura ahí donde solo hay continuidad. Hoy la GBF gobierna con una mujer ¡provinciana y quechuahablante! Pero la izquierda tradicional mantiene el mismo relato desde el gobierno de Castillo, en donde fueron incapaces de identificar al enemigo, y, por el contrario, terminaron ventilando su desconfianza contra la lucha de las masas y evidenciando su servilismo a las clases dominantes.

Por todo lo expuesto, resulta evidente que la izquierda tradicional percibe las cosas de manera invertida, piensa de modo invertido, formula las cosas de manera invertida y sus planes traen resultados invertidos. Es una izquierda invertida: una izquierda que quiere ser izquierda, pero termina sirviendo a la derecha.

Estallido: crisis, golpe de Estado y lucha de clases en el Perú[1]

Juan Diego Motta Villegas

El 7 de diciembre de 2022, la burguesía peruana representada por el Congreso de la República y las cúpulas de las Fuerzas Armadas propiciaron un golpe de Estado contra el presidente electo legal y legítimamente, Pedro Castillo. En su lugar pusieron a un títere: Dina Boluarte. El fujimorismo y los sectores perdedores en las elecciones pasadas se hacían del poder, recurriendo para ello a la masacre más violenta de las últimas décadas. Con ello, se constataba que en el Perú el estándar histórico está marcado por la violencia, que lo habitual es lo inédito; lo permanente es la crisis: seis presidentes en los últimos cinco años, más de cincuenta asesinatos extrajudiciales en menos de tres meses no es algo normal.

Sin embargo, para entender esta crisis no basta hacer un recuento histórico de la insania de las fuerzas represivas o de la promiscuidad reproductiva de los últimos inquilinos en Palacio de Gobierno (con excepción del presidente Castillo, ninguno llegó por elección popular). Es necesario impulsar el estudio del proceso político desde las propias masas, la dinámica de la lucha de clases en que estas se desarrollan y las condiciones históricas que las hacen posibles. Las siguientes líneas pretenden animar esa auscultación de la realidad con el fin de transformarla.

El calado y la naturaleza de la crisis

En los últimos años, el Perú viene atravesando un proceso de crisis permanente. No es una crisis cualquiera. Es la pugna entre la degradación política y moral de un viejo país clasista, racista, machista y cen-

1 Agradezco los aportes invaluables de Martín Guerra, Gabriel Cabrera, Ana María Lozada y César Burga para la elaboración de este ensayo.

tralista *versus* las ebulliciones de una nueva forma de entender y hacer patria, un Perú de todas las sangres que lucha por nacer.

Sucesiones traumáticas de presidentes; tres congresos devaluados y poco representativos, cada cual peor que el anterior, con apenas el 6 % de aprobación; el narcotráfico infiltrado en el más alto nivel del Ministerio Público y el Poder Judicial; empresarios financistas de los partidos políticos golpistas, también vinculados al narcotráfico y la corrupción[2]. Mientras tanto, el pueblo ha venido soportando una penosa situación, producto de un sistema económico donde las necesidades humanas no son la prioridad. En el 2020, alrededor del 37 % de peruanos vivía bajo la línea de la pobreza multidimensional, mientras que, para el 2021, la cifra habría llegado a cerca del 40 %[3]. Más del 40 % de menores de tres años sufren de anemia[4]. Tenemos un sistema de salud quebrado. Somos el país con la tasa de mortalidad más alta en el mundo y el sexto con más muertos producidos por la pandemia, solo superado por países con el doble o con cincuenta veces más población[5]. Por último, resultado de la ausencia de una política de vivienda popular y por falta de prevención, tenemos más de sesenta muertos, más de 12 mil damnificados y alrededor de 50 mil afectados por las recientes inundaciones[6].

Los datos aterradores señalados han convivido con el mejor de los escenarios a nivel de crecimiento de cifras macroeconómicas. Luego de haber seguido a pie juntillas todas las directivas neoliberales, se empe-

2 Cárdenas, A. (2023, abril 11). "Millonaria incautación de bienes vinculados al exsecretario de Fuerza Popular Joaquín Ramírez". *Ojo Público*: https://ojo-publico.com/4379/millonaria-incautacion-bienes-vinculados-joaquin-ramirez; *El Peruano* (2022, octubre 27). "Club de la Construcción: incluyen a ocho empresas más como terceros civilmente responsables": https://elperuano.pe/noticia/132088-club-de-la-construccion-incluyen-a-ocho-empresas-mas-como-terceros-civilmente-responsables

3 COMEX. 2023. "La pobreza multidimensional afectó al 39.8 % de peruanos en 2021": https://www.comexperu.org.pe/articulo/la-pobreza-multidimensional-afecto-al-398-de-peruanos-en-2021

4 Orihuela, R. (2022, noviembre 21). "La anemia repunta en el Perú mientras el gobierno reduce el presupuesto para combatirla": https://convoca.pe/agenda-propia/la-anemia-repunta-en-el-peru-mientras-el-gobierno-reduce-el-presupuesto-para

5 Datos M. (2023, abril 10). "COVID-19. Crisis del coronavirus": https://datosmacro.expansion.com/otros/coronavirus

6 Escobar, R. (2023, marzo 18). "Perú, el ciclón Yaku y el desastre interminable": https://elpais.com/america-futura/2023-03-18/peru-el-ciclon-yaku-y-el-desasatre-interminable.html

zó a difundir la idea del "milagro peruano"[7]. En realidad, se trataba de "reformas de primera generación" con Fujimori: beneficios tributarios a las empresas transnacionales, reducción del Estado y privatización de lo público, flexibilización de normas laborales, etc. Es decir, la aplicación de la receta del Consenso de Washington. A ello se añaden las "reformas de segunda generación o institucionales" implementadas por Ollanta Humala y luego por Pedro Pablo Kuczynski. Así tenemos: la Ley Universitaria y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), la Ley de Reforma Magisterial, la Reforma de la Administración Pública y del Servicio Civil (SERVIR), etc. Entonces, es válido cuestionarse por qué acabamos tan mal si se siguió la receta y, supuestamente, estábamos tan bien.

Una respuesta superficial nos llevará al lugar común de la necesidad de la lucha contra la corrupción y la falta de institucionalidad y gobernabilidad democrática. Propuestas concebidas por los teóricos de los organismos multilaterales[8] del FMI, el BM, etc., para justificar sus yerros y mantener incólumes las mismas políticas económicas neoliberales. Todos estamos en contra de la corrupción, pero ¿acaso no es la lógica de la reproducción capitalista la que dinamiza la reproducción de la corrupción para apropiarse individualmente de recursos que son públicos? ¿Gobernabilidad sin desmontar el modelo económico y las instituciones que garantizan el sistema de explotación? Lo curioso es que el discurso de la gobernabilidad y la institucionalidad ha venido siendo difundido por un sector de la izquierda sin ninguna reflexión crítica. Ejemplo de ello fue el Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad, creado a mediados del 2021, intentando brindar cierto soporte al gobierno de Pedro Castillo.

Decirle al pueblo que esta crisis se soluciona con campañas contra la corrupción e impulsando la gobernabilidad democrática es muy pueril. Corear desde un sector de la izquierda limeña que la contradicción

7 Mendoza, W. (2013). "Milagro peruano: ¿buena suerte o buenas políticas?". *Economía* Vol. XXXVI, n° 72, semestre julio-diciembre 2013, pp. 35-90.

8 Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobatón. 2000. "La gobernabilidad es fundamental. Del análisis a la acción": https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2000/06/pdf/kauf.pdf.

principal se maneja en la dicotomía dictadura-democracia, es muy básico; es repetir la receta de los teóricos del FMI y el BM y sus reformas de segunda generación. Ello implica aceptar la receta del Consenso de Washington, la cual, según algunos tecnócratas de esta izquierda, no estaría mal, sino que habría sido aplicada incorrectamente, de manera sesgada e inflexible, en el Perú y en América Latina[9]. Por el contrario, es necesario hacer un esfuerzo ético e intelectual mayor y buscar otras respuestas a la crisis. Es necesario la participación directa de las masas.

Crisis y lucha de clases

A inicios de siglo, se produce un ciclo de expansión capitalista en el mundo. China ingresa a la economía mundial convirtiéndose en la gran fábrica, y requiriendo ingentes cantidades de *commodities*. Los precios de los minerales se disparan en el Perú, entre 2003 y 2011, en más del 100 %[10]. Con ello, se benefician principalmente las grandes empresas mineras manejadas por el capital transnacional en alianza con la burguesía financiera limeña.

Este ciclo de expansión capitalista profundiza el modelo neoliberal en el Perú, elevando las ganancias de la burguesía, impulsando el consumo en la clase media y condenando a la precariedad a los sectores populares que, aunque parezca paradójico, ven disminuidos sus ingresos en las épocas de bonanza. La distancia entre el "excedente de explotación" (principalmente utilidades de las grandes empresas) *versus* "las remuneraciones" se mantuvo más o menos pareja entre 1994 y 2002 que entre 2003 y 2012.

La puesta en marcha de proyectos extractivistas que buscaban satisfacer la demanda internacional choca con las formas de producción y de vida de las organizaciones campesinas y los pueblos originarios. Estos sufren la contaminación ambiental y el despojo de sus recursos, pero no son los únicos perdedores. El proletariado es sometido a condiciones de

9 Guerra-García, G. 1999. *La reforma del Estado en el Perú. Pautas para reestructurar el Poder Ejecutivo*. Lima: Agenda Perú.

10 Quispe, J (S.f.). "Los precios de los metales en las últimas dos décadas": https://www.rumbominero.com/revista/enfoques/los-precios-de-los-metales-en-las-ultimas-dos-decadas/.

trabajo cada vez más precarias, mientras los sectores informales son estigmatizados y orillados hacia actividades económicas ilegalizadas (minería y tala ilegal, etc.). Los levantamientos populares que se producen en esos años son expresión de estas contradicciones: Arequipa (2002), Moquegua (2008), Bagua (2009), Puno (2011), Arequipa-Tía María (2011) y Cajamarca-Conga (2012).

Por su parte, la burguesía regional emergente que ha mejorado sus ingresos, gracias al crecimiento económico, quiere un pedazo más grande de la torta y, junto a los sectores populares regionales, pelea contra el Estado centralista por el aumento del canon. No obstante, su aspiración es reemplazar a la burguesía limeña que funge de intermediadora con el capital internacional y maneja el Estado.

Estas contradicciones se agudizan a partir del fin del ciclo expansivo capitalista, tanto a nivel de la lucha interclasista (burguesía *versus* sectores populares), como intraclasista (específicamente entre sectores burgueses), así como se refuerzan las de índole racista (blanco-occidental *versus* pueblos originarios) y centralista (Lima *versus* regiones). Con la baja de precios de los minerales, la economía se ralentiza; hay menos pedazos de torta por repartir y más pugnas intraburguesas. El débil gobierno de Kuczynski es el escenario de disputa entre tres sectores de la burguesía: la burguesía limeña con complejo aristócrata, la burguesía regional emergente y la burguesía fascistoide vinculada a los negocios ilícitos.

La burguesía aristócrata (los Romero, Graña y Montero, Rodríguez Pastor, Brescia, Benavides, Ferreyros, etc.), ligada al gran capital extranjero, se maneja sobre todo en los negocios financieros y extractivos, cotizan en bolsa y controlan los grandes medios de comunicación. Se representa políticamente a través de la derecha liberal limeña, aunque no tenga problemas en apostar por más de un candidato en elecciones.

La burguesía regional emergente (los Rodríguez Banda, Añaños, Flores, Acuña, Dyer, Huancaruna, etc.), expresión de un capitalismo familiar, y algunas veces de origen popular, no suelen cotizar en bolsa y

no comparten sus acciones con grupos extranjeros[11]. Pueden ser racializados por el grupo anterior y su representación política suele ser menos homogénea, producto de su propio proceso de consolidación como sector de clase. Son representados por los diferentes partidos regionales que han manifestado su poder en la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, o mediante Acción Popular, Podemos Perú y Alianza para el Progreso en el Legislativo. Suelen tener un comportamiento oportunista y pragmático, apoyando a la derecha liberal (durante el gobierno de Martín Vizcarra) o la ultraderecha (durante el gobierno de Manuel Merino).

En cambio, la burguesía mafiosa, investigada por organización criminal y por capitales ilícitos amasados durante el fujimorato de los 90, está representada por la ultraderecha conservadora y principalmente limeña, aunque también con presencia en algunas grandes ciudades del norte del país. La burguesía aristócrata ha necesitado de este sector cuando ha buscado aplicar mano dura contra levantamientos populares, saltándose todas las vías de la propia democracia burguesa.

Del antifujimorismo a la asamblea popular constituyente

Los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo en ese periodo (continuas vacancias, censuras y cuestiones de confianza) son la expresión política de las pugnas económicas irresueltas entre los sectores burgueses. Por parte de la izquierda se esbozan diversos planteamientos. Por un lado, la izquierda liberal, como manifestación de la pequeña burguesía limeña y jaloneada por los intereses de sus bancadas congresales, no apuesta por derrocar el modelo neoliberal, ni siquiera por el llamado a una asamblea constituyente. Apuesta por el mal menor en cada uno de los conflictos entre las derechas, centrando su discurso en el antifujimorismo: apoyaron a Kuczynski en segunda vuelta el 2016 y en el Congreso en 2017; apoyaron a Vizcarra el 2018 en el Congreso, en carteras ministeriales y en el

---

11 Durand, F. 2017. *Los doce apóstoles de la economía peruana: una mirada social a los grupos de poder limeños y provincianos.* Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

referéndum por más reformas de segunda generación (Sí, Sí, Sí, No), etc. Ninguna de estas apuestas tocaron un ápice el modelo neoliberal.

De otro lado, sectores de una izquierda popular que plantean derrotar el modelo neoliberal, no simplemente reformarlo, empiezan a organizar en las calles (no en el discurso) la propuesta por una asamblea popular constituyente, en sus muchos matices. Constituyen comités barriales por la nueva constitución, y salen a las calles, realizan foros, materiales de difusión o recolectan firmas. Este sector participó en la lucha contra Merino, pero levantando la consigna de la asamblea constituyente, y no como furgón de cola de la derecha liberal, la cual aliada a la izquierda liberal, se hizo del poder con la dupla Sagasti-Vásquez.

La movilización contra Merino el 2020, aunque expresó varios justos reclamos, estuvo hegemonizada por la clase media radicalizada. Su epicentro fue en Lima, pero su objetivo se redujo a cambiar a un sector de la derecha por otro. Por ello, tuvo el auspicio generoso de la derecha liberal y los grandes medios de comunicación.

Este movimiento que se agota en la consigna antifujimorista, si bien parte de una lucha justa no plantea una alternativa concreta; solo se queda en el rechazo a un grupo político y reivindica una democracia en abstracto. Como consecuencia, termina funcionando como mecanismo de seguridad del modelo neoliberal, como válvula de presión; ofrece una salida institucional al malestar popular, pero termina como medio de realización inocuo de la clase media radicalizada. De esta manera, se convierte en una condición que sirve para garantizar el orden neoliberal.

En la contienda electoral el 2021, y como alternativa frente a la crisis, el pueblo eligió al presidente Pedro Castillo, quien derrotó por primera vez en la historia a la derecha en un proceso electoral nacional[12]. Su triunfo fue un logro de los explotados, los excluidos de los beneficios del crecimiento económico y de los marginados secularmente que se identificaron con el programa y la figura del presidente. El gran error de Castillo apenas

12 Motta, D. (2021, junio 15). "Perú: el largo camino hacia la dignidad": https://jacobinlat.com/2021/06/15/peru-el-largo-camino-hacia-la-dignidad/.

inició su mandato, fue apartarse de las organizaciones populares que le dieron el triunfo. Pero eso no fue gratuito, hay una grave responsabilidad de la izquierda peruana.

La precaria unidad de Perú Libre y las izquierdas regionales con la coalición de la izquierda liberal limeña se dinamitó antes de tiempo, más por peleas de cupos que por un debate programático. De esa manera, los llamados para darle sostén a un personaje sin partido, y con poca formación política, arrojaron a un Castillo, necesitado de soporte frente a los ataques de la derecha, a los brazos de los siempre solícitos paisanos y elementos de la burguesía y pequeña burguesía regional, que no estaban interesados en implementar el programa popular.

En las regiones del sur, cerca del 80 % votó por Pedro Castillo (89 % en Puno). La provincia de Lima Metropolitana mostró una reacción contraria: 65 % votó por Keiko Fujimori. Este porcentaje aumenta en los distritos mesocráticos hasta llegar al 75 %. En cambio, en los distritos más periféricos y alejados como Carabayllo, Puente Piedra, Chosica, Ate y Pachacámac hubo un voto más considerable a favor de Castillo, que bordeó el 45 %. Cabe señalar que, de las nueve provincias restantes de Lima, cuatro, ubicadas en la sierra, votaron mayoritariamente por Castillo[13]. Esto debería ser un indicador para que la izquierda de Lima Metropolitana tome en cuenta la apuesta de las provincias por reconstruir un movimiento popular dispuesto a superar el modelo neoliberal y no a convivir con él. Con ello, queda demostrado, también, que la contradicción principal no es fujimorismo/antifujimorismo, dictadura/democracia (en abstracto y generalizado); la contradicción se expresa entre quienes buscan mantener el modelo neoliberal como expresión del capitalismo profundamente elitista, racista, centralista y machista, y quienes luchan por derrotar este modelo.

El golpe de Estado y las izquierdas

Minutos después de que el presidente Pedro Castillo pronunciara su proclama del 7 de diciembre de 2022, la derecha montó el libreto del

13 ONPE. 2021. "Presentación de resultados segunda elección presidencial 2021": https://resultadoshistorico.onpe.gob.pe/SEP2021/EleccionesPresidenciales/RePres/P

autogolpe de Estado, forzando la comparación con Alberto Fujimori. Con este andamiaje ilegal e ilegítimo justificaron la masacre. El relato fue santificado por el gobierno de los Estados Unidos en un pronunciamiento de rechazo al acto "extraconstitucional" del presidente Castillo y luego "celebrando" la designación de Boluarte[14]. Acto seguido, en una cruzada de santa alianza, las "instituciones democráticas" se pronunciaron contra el "autogolpe": Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP). La cúpula eclesial no se quedó atrás. Pero no fueron los únicos, el discurso del "autogolpe" fue —y es— repetido erróneamente por un sector de la izquierda que intenta justificar sus yerros. Estos, actúan con revancha y con un "sentido de la oportunidad" muy desarrollado. No se debe olvidar que el golpe congresal es conseguido con los votos o abstención de la mayoría de la izquierda parlamentaria, salvo seis honrosas excepciones.

Inmediatamente después de la vacancia, diversas organizaciones vinculadas con la izquierda parlamentaria se pronunciaban. En vez de denunciar el golpe de Estado contra el presidente Castillo y el mandato popular, enfilaban contra el mandatario legítimo y proponían rápidamente el adelanto de elecciones. Es decir, el planteamiento esbozado por Sagasti y la derecha liberal meses antes, que apenas tuvo apoyo mediático de algunos sectores de la clase media limeña. El mismo 7 de diciembre, se difundió en las redes sociales de la Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP) el pronunciamiento de una organización denunciando "la ruptura de la institucionalidad democrática por parte del presidente Pedro Castillo" y reconociendo a "Boluarte como nueva presidenta"[15]; mientras tanto, Verónika Mendoza, una de las lideresas de este sector político, señalaba en su cuenta oficial de Twitter que el mandatario "perpetró un golpe emulando a Fujimori" y arengaba "¡que se largue

14 *La República* (2022b, diciembre 7). "Embajada de EE. UU. en Perú rechaza el golpe de Estado tras intento de disolución del Congreso" https://larepublica.pe/mundo/2022/12/07/golpe-de-estado-en-peru-hoy-embajada-de-ee-uu-en-peru-rechaza-el-golpe-de-estado-tras-intento-de-disolucion-del-congreso-pedro-castillo-estados-unidos

15 Hoy no se puede encontrar en sus redes oficiales el pronunciamiento. Todo indica que fue retirado después de los sucesos posteriores al 07 de diciembre de 2022.

Castillo!" ; asimismo, el 10 de diciembre se repartió en una asamblea de la ANP un pronunciamiento que reconocía al "gobierno entrante", equiparaba política y moralmente al gobierno del presidente Castillo con el Congreso, siguiendo siempre el discurso del autogolpe. Es más, pronosticaban que el gobierno de Boluarte sería "débil" y, por tanto, se debía arrancarle el ¡adelanto de elecciones con asamblea constituyente!, como puntualizaba el pronunciamiento de Patria Roja[16].

A pesar de que la prensa mercenaria y los poderes fácticos se han encargado de repetir la consigna del "autogolpe", empaquetándola en el papel de regalo de la gobernabilidad democrática y ofreciéndonos como verdad revelada, son más los peruanos conscientes que rechazan ese discurso. Si consideramos las encuestas como un indicador relativo, el sur del país y los niveles socioeconómicos más proletarizados consideran que fue el Congreso quien dio un golpe de Estado: 74 % y 63 %, respectivamente. Mientras que las clases altas (88 %) y medias (66 %) de Lima, principalmente, son las que asumen el discurso derechista del "autogolpe"[17]. Estos resultados coinciden en cifras y territorio con los resultados electorales del 2021 y son una fotografía de la lucha de clases, del racismo, el centralismo y las diversas contradicciones exacerbadas por la crisis que hemos expuesto.

Levantamiento popular

La respuesta de las masas no se hizo esperar. Con especial fuerza en el sur, se inició un estallido sin parangón en lo que va del siglo XXI. En el sur, incluso, la población llegó a tener el control de sus territorios, por encima o en paralelo al poder oficial. En diversas provincias y zonas de Apurímac, Ayacucho, Puno, Madre de Dios, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Junín, Ica, La Libertad, Moquegua, Tacna, etc., la paralización fue total. En esas doce regiones (y luego en todo el país) se declaró el

---

16 Patria Roja. 2022. "Elecciones adelantadas y nueva constitución: https://patriaroja.pe/pronunciamiento/elecciones-adelantadas-y-nueva-constitucion/?fbclid=IwAR0MgxYBl7_5SBehvDil_pg-ıoDE5i5DDtmijG0znHwg3b1JLFi9j_63_hQk.

17 IPSOS. (s/f). "Estudio de opinión. Encuesta América TV/Ipsos-abril 2023": https://www.ipsos.com/es-pe/encuesta-america-tv-ipsos-abril-2023.

estado de emergencia. En la práctica, se dio inicio al control de las FFAA y la PNP que se comportaron como ejércitos de ocupación. Pero la represión no detuvo el desborde popular: en cada plaza del país, miles de autoconvocados, comités de lucha y frentes de defensa, comunidades campesinas y pueblos originarios, y, en menor medida, organizaciones sindicales, realizaban asambleas y ágoras para acordar sus medidas y objetivos.

Ahora bien, cabe preguntarnos sobre el detonante del levantamiento popular. Está claro que fue el golpe de Estado contra el presidente Castillo, que fue percibido en el campo popular como un mensaje clasista, racista y centralista propinado por la derecha limeña contra el pueblo, lo que movilizó a las masas. Pero hay quienes sostienen la tesis del pedido de adelanto de elecciones como la causa del estallido. Es verdad que la mayoría de los peruanos no está conforme con las actuales autoridades, y que el pedido de adelanto de elecciones está presente en la medida en que, de buena fe (y otros solo por aspiraciones electoreras), hay quienes tienen la esperanza de que alguien nuevo venga a solucionar mágicamente los problemas del país; sin embargo, el levantamiento no se produjo antes del 7 diciembre de 2022.

Así como afirmamos el detonante, también debemos ser enfáticos en señalar que no fue un trabajo de masas de los sectores de la derecha y la izquierda liberal el que sacó a la gente a la calle bajo su orientación y consignas. Fueron las masas quienes, luego de las lecciones aprendidas desde el Arequipazo hasta el Aymarazo, desde el Baguazo hasta el *Conga no va* e incluyendo las luchas electorales, salieron a las calles para reclamar lo que consideraban el robo de su voto. Pero no solo eso, a diferencia de las consignas de la lucha contra Merino del 2020, que hegemónicamente fueron antifujimoristas y planteaban como contradicción principal: democracia *versus* autoritarismo/dictadura, tecnócratas preparados *versus* corruptos/improvisados, ahora se planteaban el cambio de las reglas de juego neoliberales expresadas en la Constitución de 1993 y la lucha por el poder político.

Este levantamiento popular ha sido inédito en las últimas décadas por tres motivos: la envergadura de sus acciones, la extensión territorial-temporal y la profundidad de sus objetivos. No solo han sido las acostumbradas "jornadas de lucha" de antaño, que se resumían en pasacalles y en mítines donde hablaban los mismos y se decía lo mismo de siempre. Han sido paros secos y bloqueos —hasta 145 bloqueos de vías principales en un solo día[18]— con control de territorios, lugares e instituciones estratégicas. Han sido movilizaciones en todo el país: paros en todo el sur y otras regiones, durante meses. Los objetivos no han sido reivindicaciones por servicios básicos o contra industrias extractivas o normas impopulares. La lucha ha sido por el poder. Así lo expresan los principales puntos consensuados de la plataforma del Comité Unificado de Lucha del Perú (CONULP) que se sintetizan en la salida de Dina Boluarte, cierre del Congreso, asamblea popular constituyente, y libertad para todos los compañeros detenidos, incluyendo la del presidente Pedro Castillo. Otras consignas, como las restituciones de Pedro Castillo o el regreso a la Constitución de 1979, no han sido consensuadas y se siguen debatiendo a nivel de bases.

El CONULP surge el 5 de febrero de 2023 como un espacio de articulación de las regiones y organizaciones en lucha, y ante el vacío de dirección tanto en Lima como a nivel nacional. En los hechos se constataba que no había una dirección centralizada que diera norte a las luchas; en términos castrenses, había ejército, había voluntad de lucha, pero no había un comando mayor. Las direcciones de la ANP y la CGTP planteaban el adelanto de elecciones como salida, y en los hechos fueron desbordados por las bases movilizadas. Los contingentes de regiones que llegaron por miles a Lima no se sentían representados por los aparatos burocráticos que pretendían dirigir sus luchas, por lo que deslindaban de sus métodos y objetivos. Las cúpulas hegemónicas de la ANP y la CGTP, lejos de reconocer esta realidad y dar la posta a las organizaciones del sur que eran la vanguardia del movimiento, mostraron

18 Defensoría del Pueblo. 2023. "Crisis política y protesta social: Balance defensorial tras tres meses de iniciado el conflicto": https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2023/03/Informe-Defensorial-n.%C2%B0-190-Crisis-poli%CC%81tica-y-protesta-social.pdf

desprecio, y devinieron en reaccionarias. Nunca trabajaron ni realizaron un paro nacional desde las organizaciones sindicales, se reunieron y reconocieron a Boluarte el 13 diciembre de 2022[19]. Cuando ya había seis compañeros de Apurímac fallecidos, se negaron a poner disposición sus locales y albergues sindicales para los miles de provincianos que dormían en las plazas y calles de Lima. Cuando ya había 47 compañeros asesinados, se volvieron a reunir con Boluarte y Otárola el 6 de febrero de 2023[20].

En el marco de esas luchas, surgen otras organizaciones, incluso antes que el CONULP, como el Consejo Plurinacional del Tawantinsuyu, y el Comité por la Libertad y Restitución de Pedro Castillo. Ninguna de ellas se sentían representadas por las organizaciones sociales y políticas de Lima. Estas organizaciones populares han dado un paso más en sus reivindicaciones políticas y plantean la libertad y restitución del presidente Pedro Castillo, pues, más allá del personaje, exigen que se "respete el voto del pueblo", y piden que el "presidente secuestrado (...) cumpla con sus promesas de campaña".

Los pedidos de restitución de Pedro Castillo toman especial relevancia si tomamos en cuenta que una publicación del semanario *Hildebrandt en sus trece* (2023) reveló que, según una encuesta de abril de 2023, elaborada por Ipsos y no difundida por la prensa golpista, señala que el presidente Pedro Castillo sigue siendo el líder popular más votado. En un simulacro volvería a ganar contra Keiko Fujimori, López Aliaga, Verónika Mendoza, etc., a pesar de estar preso y recibir diariamente ataques de la derecha y de un sector de la izquierda.

Desde mi particular punto de vista, y como participante en diversas actividades dentro de los sectores opositores a la dictadura, considero que el debate al interior ha tenido la siguiente dinámica: a) mientras menos participaban las bases y más hablaban los representantes de par-

---

19 Infobae. (2022, diciembre 14). "CGTP respalda a Dina Boluarte: 'Hay disposición de diálogo y de escucha'": https://www.infobae.com/america/peru/2022/12/14/cgtp-respalda-a-dina-boluarte-hay-disposicion-de-dialogo-y-de-escucha/

20 *El Peruano* (2023, febrero 7). "Presidenta Boluarte se reunió con la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales": https://elperuano.pe/noticia/203992-presidenta-se-reunio-con-la-confederacion-nacional-de-trabajadores-estatales

tidos y organizaciones políticas, más peso tenían los planteamientos de "no estamos en un momento constituyente", "adelanto de elecciones", "adelanto de elecciones y referéndum constituyente" o "adelanto de elecciones, pero no por ahora pues ganaría la derecha". Todos negaban, expresa o calculadamente la libertad y restitución del presidente Castillo; b) mientras más participación de bases movilizadas, las consignas eran "asamblea popular constituyente", "libertad y restitución del presidente Castillo", "renegociación de los contratos ley", etc.

Consideramos que la asamblea popular constituyente y la restitución del presidente Pedro Castillo, como expresión del respeto del mandato popular, expresan una salida por fuera de las instituciones hoy usurpadoras, y nos plantean el esfuerzo creativo de alumbrar nuevas instituciones realmente democráticas: parir una sociedad nueva. Una vez restituido el presidente Castillo, debe haber un pacto entre las fuerzas populares con suficiente poder ejecutivo para asegurar el cumplimiento del programa político votado por la mayoría en el 2021.

Si el presidente se alejó del programa original, es el pueblo quien debe sancionarlo y no la derecha golpista. Se dice que no se tiene confianza en que el presidente Castillo cumpla con su proclama (por el cual está preso). Asumiendo que sea así: ¿se tiene más confianza en el Congreso y en los organismos electorales copados por la dictadura? ¿Por qué se insiste en una salida institucional al pedir a estos poderes usurpadores convoquen a elecciones? La apuesta de un sector de la izquierda liberal que pide adelanto de elecciones pasa, necesariamente, por reconocer la dictadura de Boluarte y plantear. no el cierre del Congreso, sino el simple cambio de su mesa directiva. Eso, en la práctica, significa darle el poder a la burguesía liberal y pretender cogobernar con ella (como se hizo con Sagasti el 2020-2021).

Existen sectores de la izquierda liberal limeña que, en el fondo, miran con desprecio a los pueblos del sur; pretenden dar lecciones de política, de organización, de ética desde una Lima que sirvió de freno a la lucha popular, tildándolos con soberbia como masas "anárquicas" o "emotivas". Se ha pretendido dejar morir por inanición a los compañeros

del sur, aislándolos e inmovilizando al movimiento sindical. Todo ello para, una vez replegados, intentar captar a algunos de sus elementos, apoderarse de las organizaciones populares, subirse a la ola y negociar con la derecha en nombre del pueblo.

Por ello, algunos sectores, entre los cuales nos incluimos, insistimos en las siguientes medidas: a) la salida de Dina Boluarte y el cierre del Congreso, mediante la participación masiva de todos los sectores dispuestos a derrocar la dictadura y el modelo neoliberal, así como la preparación de un paro nacional, en donde se ejerza el derecho a la huelga y se paralicen los sectores neurálgicos del país; b) la libertad del presidente Pedro Castillo, y de todos los detenidos, quienes se encuentran secuestrados por las fuerzas represivas de la dictadura y bajo el silencio cómplice del progresismo liberal; c) cese de la persecución política, sanción a los responsables de los crímenes de lesa humanidad y revisión de la legislación antiterrorista con el fin de derogarla, conforme a lo señalado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU[21]; d) respeto al mandato popular, lo que implica la inmediata restitución de Pedro Castillo a la presidencia; e) organizar la asamblea popular constituyente, lanzando una campaña para activar el poder popular constituyente, recorriendo todos los pueblos del Perú, conformando en cada barrio, comunidad, distrito, provincia y región, los comités de la Asamblea Popular Constituyente o los nombres más adecuados según cada realidad.

Para concluir, es necesario recalcar que el presidente Castillo no dio un golpe de Estado. Solo pronunció un discurso político en defensa del mandato y contra los constantes intentos de golpe de Estado del Congreso. De ahí que, el proceso de vacancia y el proceso penal que permitieron su derrocamiento, que santificaron la dictadura y la masacre, no son legales ni legítimos. Por ello, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha exigido al Perú que se garantice el debido proceso en ambos casos. Las masas y la justicia están de nuestro lado.

---

21 ONU. 2023. "Observaciones finales sobre el sexto informe periódico del Perú": https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/PER/CO/6&Lang=en.

Finalmente, el pueblo, entre sus distintos caminos, tiene derecho a exigir la convocatoria a una asamblea constituyente con la mayor participación posible, mediante un referéndum, conforme a lo señalado por el artículo 32.1 de la Constitución Política del Perú.

El estallido en los Andes en perspectiva internacional

José Manuel Mejía

El presente ensayo busca un acercamiento al estallido social en Perú desde mi posición en favor del campo popular y desde mi condición de radicado en el extranjero hace varios años. Desde esa posición, busco comparar el proceso peruano con otros de la región. Especial interés doy, en ese sentido, a mi experiencia en las protestas en Ecuador en octubre del 2019.

La refundación de la patria por el verdadero Perú

El 7 de diciembre de 2022, el Congreso controlado por el fujimorismo empleó una declaración pública de Pedro Castillo en la que intentaba, sin éxito, disolver el Congreso, para justificar su apresamiento por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, acusándolo de traición a la patria, sin juicio político ni ordinario, ni sentencia judicial. Solo se mostró a los medios un supuesto comunicado, suscrito cobardemente por una oficina de prensa, comunicación e imagen institucional bajo una nomenclatura y numeración ilusoria, ni siquiera firmado. Así, Dina Boluarte asumió la fachada del actual gobierno golpista de la mafia fujimontesinista que, para sostenerse en el poder, ha asesinado con disparos de bala a más de medio centenar de personas.

Algunos de los miembros más inescrupulosos de la organización criminal que coordinó el golpe de Estado parlamentario contra la frágil democracia y el estado de derecho en el Perú, ya han sido sentenciados en el pasado por crímenes de megacorrupción y violaciones contra los

derechos humanos[1]. La dictadura actual que coordina el fujimontesinismo, a través de la ilegal e ilegítima presidencia de Dina Boluarte, se sostiene con base en la violencia estatal que le facilitan los mandos militares y policiales formados y ascendidos durante el fujimorato, así como sobre el racismo que difunde el monopolio de los medios de comunicación que avalaron y defendieron al régimen autoritario de Fujimori desde 1990 hasta el 2000 y lo continúan haciendo. Estos medios, desinformaron a la opinión pública internacional y acusaron injustamente a quienes están siendo asesinados en las calles como "terroristas", cuando, en realidad, la valiente respuesta de las bases del Perú profundo es una clara muestra de su fe en la promesa democrática.

La respuesta masiva y creciente de las organizaciones sociales del Perú, rural, campesino, trabajador, indígena, cholo, pobre, frente a los asesinatos sistemáticos que ejecuta el aparato represivo del fujimontesinismo, tiene una explicación completamente humana, instintiva. No podemos mantenernos indiferentes al asesinato de un hermano, de un vecino, de una amiga, de un compañero. No podemos solo dejar que maten a los hijos de nuestro pueblo, que golpeen en el suelo a nuestras madres, que disparen al cráneo de nuestros padres y hermanos.

Mucho tiempo hemos soportado el abuso de autoridad. Hemos estado callando absurdamente nuestro grito de protesta. Hemos estado reprimiendo nuestra propia lucha. Pero, llegó el momento en que no pudimos callar más. Es este el momento en el que la maldad con que se aprovechan de nosotros dejó de tener un efecto desmovilizador, fragmentador, despolitizante. La respuesta ha sido brutal; sin embargo, toda esa violencia estatal que sistemáticamente han ejercido las oligarquías limeñas desde su control total del sistema político, del Estado, del derecho y la ley, ha dejado en evidencia su fascismo corporativo.

---

1 Algunos de ellos, incluso por el derecho internacional, como Alberto Fujimori y el exagente de la CIA y asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Otros, como los excongresistas Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori están siendo procesados por lavado de activos de 183 millones de dólares. El legado institucional de diez años de dictadura les ha permitido mover desde la cárcel los hilos que cruzan todo el aparato estatal, desde el Tribunal Constitucional, el Congreso de la República, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, y, después del 7 de diciembre del 2022, todo el gobierno central.

Pedro Castillo es un prisionero político entre otros cientos que, en el Perú, no tienen ninguna garantía constitucional, ninguna defensa más que la que ejercen las familias del pueblo peruano en las calles. Quienes salen a la calle, a su vez, salen dispuestos a dejar la vida en defensa de la patria. Salen sin más que sus cuerpos, palos, piedras y escudos improvisados. Se enfrentan a los disparos de bala de un gobierno de facto dirigido por la mafia criminal del fujimontesinismo. De ahí que, este estallido va más allá de la caída de Castillo. Esto es, no tiene como fin devolver a Pedro Castillo a la presidencia, sino recuperar el Perú y la esperanza de un futuro verdaderamente democrático para el pueblo peruano.

Hoy, el pueblo peruano, no es más una categoría abstracta de interpretación, ni una ficción jurídica, sino un cuerpo vivo de carne y hueso, con rasgos marcados por una historia de abuso racista y explotación, que parece haber despertado y ha decidido cambiar su futuro. Esta lucha heroica es el evento fundacional de la patria; es un momento histórico sin precedentes, incomparable; y, ante los ojos de la república oligárquica, de las élites limeñas, simplemente incomprensible.

Los pueblos de todo el mundo observan consternados el admirable sacrificio y supremo valor de la lucha, aquella que da la vida por la vida, una ética que no puede sino ser aprendida por medio de la experiencia. Una nueva consciencia se manifiesta y avanza sin esperar un líder, partido o ideología, abriéndose paso por medio de la única forma de vida que conoce: la lucha por vivir. Lejana del egoísmo de este sistema de muerte, florece una nueva ética de vida, de humanidad, que ya no nos permite dejar atrás a los demás y avanzar por encima. Esa nueva consciencia ha despertado una solidaridad inmensa que avanza a la refundación de la patria, al reconocimiento histórico, y no solo al cambio de constitución, gobierno o autoridades. Otro pueblo ha despertado, es el *verdadero Perú*.

La cantidad oficial de víctimas fatales producto de la represión estatal durante las manifestaciones de protesta superan las 76 personas al 1 de marzo de 2023, más de mil heridos. Asimismo, se manejan cifras de 1800 procesados irregularmente y una cantidad todavía indetermina-

da de presos políticos con "prisión preventiva". Los listados e información de las víctimas recabadas por las diferentes misiones de solidaridad internacional y derechos humanos se encuentran a disposición de los organismos internacionales, y son de conocimiento de todo el aparato de justicia transnacional. Sin embargo, la crisis de hegemonía a escala global es de tal agudeza que los dispositivos de dominación, usualmente empleados para lograr el consentimiento de las masas por mecanismos democráticos, han perdido absoluta eficacia para garantizar la vida frente al abuso del poder político estatal. No podemos apelar al Estado de derecho, ni al derecho internacional público, ni a la comunidad internacional para resolver la situación del pueblo peruano en su lucha contra la imposición de una nueva dictadura narcoextractiva.

El estallido en los Andes y su significancia internacional para el desarrollo de la lucha de clases

Podía verse cómo las esquinas que, como escalones, desde el Puente Guambra hasta la Avenida Chile, en Quito-Ecuador, iban vaciándose. En la Plaza San Blas habían quedado rezagados algunos grupos de manifestantes. Cuando regresé al frente por la Montufar, solo quedaba uno con una bandera del Mejía en la espalda; de repente, la caballería salió a todo galope en dirección nuestra. A él no lo vi intentarlo, yo corrí hacia la Plaza San Blas alertando a la masa que seguía consternada por los eventos de esa tarde tras la promulgación del Decreto N° 883 que aplicaba un shock económico que, entre otras medidas, eliminaba el subsidio a los combustibles.

La masa reunida no ejercía ningún acto de protesta propiamente, sino más bien de libre reunión. Sin embargo, la represión de la policía montada, motorizada y antimotín consistió en un ataque, no en una acción defensiva del Estado frente a una potencial amenaza representada por la masa reunida en la Plaza San Blas. Algunos de nosotros nos refugiamos en un edificio antiguo cercano, a través de cuya reja pudimos aguantar a punta de piedra a la columna policial que iba persiguiendo a la masa que salía disparada subiendo por la calle Francisco de Caldas.

Uno de los policías sacó su pistola apuntándonos mientras se acercaba a la reja con una herramienta para cortar el candado. Lo logró, gracias a la ayuda del guardia del edificio. Un grupo de policías entró a perseguirnos al conjunto habitacional, mientras el resto de ellos siguió subiendo por la calle tras los manifestantes. La mayoría logramos entrar a las viviendas segundos antes de ser capturados, pero cogieron a uno para darle palo en el suelo tratándolo de "perro".

La magnitud de la represión estatal ese 03 de octubre de 2019 estaba predispuesta. Esa tarde, la policía se comportó como un ejército en ofensiva contra la masa reunida pacíficamente en la plaza San Blas. Al menos una hora antes de que la policía realice el ataque, los enfrentamientos ya se habían disuelto. La operación de represión militarizada estaba programada para desincentivar cualquier respuesta popular al paquetazo neoliberal que daba Moreno. La orden era clara: se debía desatar una violencia con una magnitud extraordinaria. Y así fue.

Aunque en ese momento no pudimos comprender de inmediato la magnitud de la violencia estatal, así como la significancia internacional de avanzar[2] a través de las luchas que, sabemos, involucran infiltraciones de agentes provocadores de la represión militarizada y movilización de grupos organizados o movilizados con menor consciencia y mayor propensión a aceptar prebendas para infiltrarse en las masivas protestas populares que estallan justa e irremediablemente. En esa encrucijada, se pone a prueba nuestra capacidad de desarrollar nuestro instinto revolucionario con aprendizajes y cambios rápidos de formas de lucha que van de la marcha al bloqueo de vías, de los bloqueos al levantamiento de barricadas y primeras líneas de defensa, usando cascos y escudos improvisados; pero también la organización de brigadas médicas autónomas de socorro que crean lugares seguros de acogida humanitaria a las masas movilizadas del campo y la ciudad, y redes de solidaridad popular que permiten la preparación de los alimentos que sostienen la movilización de masas en las calles por semanas.

---

2 Ver: Lenin, V. I. "Revolutionary Days". En *V. I. Lenin Collected Works. January 1905 - July 1905*, 8:101–23. Moscow: Progress Publishers, 1962, p. 106. También disponible en: https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1905/rd/2.htm.

En medio del estallido, hoy lo podemos ver con más claridad, se reviven los mecanismos de reproducción social del proceso de lucha de clases, inventados y aprendidos históricamente por las clases dominadas y explotadas, de formaciones sociales campesinas, artesanas, proletarias, para resistir la voracidad de la acumulación militarizada que acompaña las fases de expansión material del circuito de reproducción capitalista.

Durante el estallido iniciado en el Perú, tras el golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo, la infiltración de agentes y grupos provocadores de la represión militarizada fue uno de esos mecanismos que operaron explícitamente. Esto, claro está, no es un asunto novedoso. Ya Lenin lo identificó y analizó hace más de un siglo, tal como lo evidencia en sus escritos sobre los primeros días del proceso revolucionario y la masacre de San Petersburgo en enero de 1905. Aquella masacre fue coordinada por los generales del zar y el duque Vladimir con los agentes provocadores infiltrados en la marcha pacífica de trabajadores desarmados. Sobre ella, Lenin escribió en los siguientes términos:

> Las operaciones militares, por supuesto, se hicieron mucho más fáciles por el hecho de que todo el mundo sabía perfectamente bien adónde iban los trabajadores, que no había más que un punto de reunión y objetivo. Los "valientes" generales atacaron "con éxito" a un enemigo que había venido desarmado y había dado a conocer de antemano su destino y propósito...: Fue una masacre cobarde y a sangre fría de un pueblo indefenso y pacífico. Durante mucho tiempo por venir, las masas reflexionarán y revivirán en la memoria y en la historia todo lo que sucedió. La única e inevitable conclusión que se extraiga de estas reflexiones, de la asimilación de la "lección de Vladimir" en la mente de las masas, será *à la guerre comme à la guerre*. Las masas de la clase trabajadora y, siguiendo su ejemplo, las masas de los pobres rurales, se darán cuenta de que son combatientes en una guerra, y entonces... entonces las próximas batallas de nuestra guerra civil se librarán según el plan, pero ya no según el "plan" de los grandes duques y los zares[3].

---

3 Lenin, V. I. "Revolutionary Days". En *V. I. Lenin Collected Works. January 1905 - July 1905*, 8:101–23. Moscow: Progress Publishers, 1962, p. 107. [traducción propia del inglés al español].

En el estallido iniciado en Quito-Ecuador, en octubre de 2019, el mecanismo de lucha de clases que permitió revertir el Decreto N° 883 y el repliegue efectivo que finalmente fortaleció al movimiento popular, campesino y proletario, fue el avance disciplinado y heroico de sus vanguardias que pudo contrarrestar y coordinar la movilización, superando la predisposición a la represión militarizada provocada, sin dejar de avanzar ni descuidar la movilización de las masas que salían a entregarse en las calles, en revuelta contra el Estado, la burguesía doméstica y la dominación imperialista. El atentado contra la vida de campesinos, estudiantes, trabajadores, padres y madres de familia, hijos del pueblo, y el reconocimiento de los responsables de tantos asesinatos se torna irrefutable ante la propia experiencia. Las masas aprenden todo esto en los estallidos iniciales de los procesos revolucionarios.

Desde entonces a la actualidad, el desarrollo de la lucha política en los Andes comprende una cadena de estallidos que supera la escala de los episodios de movilización precedentes. La masividad de las luchas más recientes, la magnitud de la violencia estatal y la solidaridad que generan como respuesta desde el campo popular, evidencian no solo el desarrollo de un proceso de cambio de escala de la lucha política, sino el desarrollo de la lucha de clases. Usualmente, el proceso de escalada se encuentra asociado con el desarrollo de campañas masivas y durables de lucha, y es indicado por un cambio cuantitativo en el número, duración, alcance e intensidad de las acciones de lucha política coordinada por diferentes desafiadores, bajo las banderas de una agenda reivindicativa común y antagónica a los intereses representados por el Estado.

Sin embargo, los resultados de la escalada de la lucha política no se restringen a los episodios de luchas masivas y durables catalogados genéricamente como revoluciones, guerras civiles, insurrecciones, paros, rebeliones, levantamientos, huelgas, etc. La escalada de la lucha política no solo produce la transformación de protestas atomizadas en desafíos coordinados de movilización masiva y sostenida, sino que, por medio de la experiencia de lucha, fortalece la solidaridad y polarización. Estos elementos despiertan la consciencia, abren a las masas al reconocimiento de clase y de su propio instinto en el enfrentamiento directo contra el Estado.

En esa trayectoria lo desnudan como ejecutor de la violencia política a disposición de la dominación de la burguesía doméstica y la clase capitalista transnacional de rostro extractivo en los Andes. En ese momento, la lucha de clases se está desarrollando como proceso que crea la misma experiencia del evento de lucha contra el mismo enemigo por parte de diferentes sectores de una misma clase.

El desarrollo de la lucha de clases no solo implica el cambio de escala de la lucha política, sino que las vanguardias actúen definitiva y estratégicamente contra la clase capitalista. Solo cuando las luchas fragmentadas se tornan en episodios de la lucha de clases, la masividad y el sacrificio de las movilizaciones configura con claridad un antagonismo de clases que se agudiza con la bochornosa actuación del Estado como guardián de las ganancias de la clase capitalista transnacional y las burguesías domésticas (financiera, minera, petrolera, agroexportadora y burocrática, principalmente) que configuran la dominación imperialista en los Andes. Llegado ese momento, como apuntaba Lenin, "todos estamos de acuerdo en que nuestra tarea es organizar la lucha de clases del proletariado". Pero, de inmediato, nos asalta la pregunta: ¿qué es la lucha de clases? "Cuando los obreros de una determinada fábrica, de un gremio determinado, inician una lucha contra su patrono, o sus patronos, ¿es eso lucha de clases?". No, dice Lenin:

> Eso es tan solo un débil comienzo. La lucha de los obreros se convierte en lucha de clases, solo cuando los representantes de vanguardia de toda la clase obrera de un país tienen consciencia de la unidad de la clase obrera y emprenden la lucha, no contra un patrono aislado, sino contra *toda la clase* capitalista y contra el gobierno que apoya a esa clase. Solo cuando cada obrero tiene consciencia de ser parte de toda la clase obrera, cuando en su pequeña lucha cotidiana contra un patrono o un funcionario ve la lucha contra toda la burguesía y contra el gobierno en pleno, solo entonces su lucha se transforma en lucha de clases.[4]

La lucha de clases en los Andes se expresa no tanto por la consciencia del proletariado organizado, sino del campesinado. Asimismo,

4 Lenin, V. I. 1972. "Nuestra tarea inmediata". En *Obras completas, Tomo IV*, 213–18. Buenos Aires: Editorial Cartago: https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1899/0002.htm.

en el retorno del indio no solo se encuentra la reivindicación del indio y la tierra, sino que evoca al indio revolucionario. Seremos millones, advierte, y efectivamente son millones los que en los Andes sienten contundentemente la expresión de las condiciones de dominación y explotación capitalista. De ahí que la represión militarizada ejercida contra las masas movilizadas puso en evidencia al Estado en todo su esplendor como garante de la dominación imperialista. La violencia estatal se ejerce brutalmente sobre campesinos, estudiantes, obreros y contra todo el que se le opone.

La lucha de clases es también un proceso social que opera en un subconjunto de la lucha política en donde la solidaridad de clase entre vanguardias se difunde entre las masas movilizadas. Esa solidaridad expresa una identificación con las víctimas de la represión militarizada. El reconocimiento de los rasgos y de las formas de lucha política del pueblo, en medio de la experiencia de la represión militarizada, derriban cualquier falsa interpretación que afirme la autonomía relativa del Estado.

Más allá de las luchas políticas que cada desafiador realiza por demandas y reivindicaciones específicas, la lucha de clases se desarrolla con la experiencia masiva del antagonismo de clase durante el enfrentamiento directo contra el Estado guardián de la burguesía. El Estado deviene en mercenario para la acumulación capitalista y masacra al pueblo movilizado ante la ausencia de cualquier mecanismo institucional nacional o internacional que ponga límite a la impunidad.

La experiencia simultánea de lucha en Chile, así como posteriormente en Bolivia, Colombia y finalmente en Perú, evidenció que la magnitud de la represión militarizada no era un atributo singular de la situación en que nos encontrábamos inmersos en Quito aquel octubre de 2019. La significancia internacional de estos episodios de insurgencia para el desarrollo de la lucha de clases no solo radica en la urgencia de su contexto histórico, sino también en la emulación efectiva de formas de lucha que permiten un avance en la transformación de la lucha política en lucha de

clases. Esto es, en la formación de la clase trabajadora y de la lucha común de sus vanguardias contra la clase capitalista en pleno.

No se trata de una repetición, sino más bien de la operación de los mecanismos de reproducción social del pueblo como vida social en subsunción formal, de los mecanismos del proceso de lucha de clases. Al respecto, aclaraba Lenin:

> Por significancia internacional me refiero a la significancia internacional o a la inevitabilidad histórica de la repetición a una escala internacional de lo que ha tenido lugar aquí, [...] debe admitirse que algunos de los rasgos fundamentales de nuestra revolución poseen tal significancia internacional. [...] Las vanguardias en todo lugar han comprendido esto hace tiempo, aunque en muchos casos no lo han entendido tanto como captado, sentido, por su instinto revolucionario de clase.[5]

La significancia internacional en el sentido de la operación de estos mecanismos presentes en la lucha política en diferentes contextos históricos es indicativa del desarrollo de la lucha de clases en su fase inicial como estallido revolucionario, pero también de su acontecimiento durante un momento crítico para la reconstitución del capitalismo global; como indicador de la crisis de hegemonía estadounidense cuando a escala global la clase capitalista transnacional acelera una nueva fase de expansión material (vía la expansión de la frontera financiera y extractiva) en medio de la escalada del conflicto armado interestatal entre China, Rusia, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN.

La clase capitalista transnacional[6], entre cuyas principales fracciones se encuentra la burguesía minera imperialista (no solo de origen estadounidense sino también chino, canadiense y japonés, por ejem-

---

5 Lenin, V. I. "In What Sense Can We Speak of the International Significance of the Russian Revolution?" En *"Left-Wing" Communism, an Infantile Disorder. An Attempt at a Popular Discussion on Marxist Strategy and Tactics*, de V. I. Lenin, 7–9. New York: International Publishers, 1920, p. 7.

6 Se trata de "una clase capitalista transnacional con su propia consciencia de clase estratégica" (Arrighi, Giovanni, y Beverly J. Silver, eds. *Chaos and governance in the modern world system*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999, p. 13). "Es la fracción hegemónica del capital a escala mundial. Está formado por los dueños y gerentes de las corporaciones transnacionales gigantes, o corporaciones transnacionales, y las instituciones financieras que impulsan la economía global" (Robinson, William I. *The Global Police State*. London: Pluto Press, 2020, p. 11) [traducción propia].

plo), no puede ser sino jerárquica con las burguesías domésticas. En ese sentido, las burguesías domésticas andinas dependen de la magnitud del capital circulante en sus correspondientes industrias. Dicha magnitud es ofrecida por la clase capitalista transnacional a través de la inversión extranjera directa. El establecimiento de las inversiones de grandes capitalistas en industrias de la región andina está directamente asociado a la abundancia de sus recursos, principalmente minerales, desde el siglo XVI a la actualidad. Las burguesías mineras imperialistas fueron las primeras en establecerse en nuestra Abya Yala. Así, durante el cuarto ciclo de acumulación sistémica con hegemonía estadounidense iniciado en el siglo XX, la minería fue uno de los sectores donde la inversión de capital productivo minero estadounidense se concentró en la región andina.

Si bien la crisis de hegemonía es global y se expresa con la escalada del conflicto social e interestatal, pareciera que la crisis de hegemonía burguesa al interior de cada uno de estos países se estuviera desarrollando en paralelo con la profundización de la crisis de hegemonía global y la puja de la clase capitalista transnacional por iniciar una nueva fase de expansión material del circuito de reproducción del capitalismo global. Una muestra de que las crisis políticas internas son causadas por crisis globales es la magnitud de la violencia estatal empleada para reprimir las luchas recientes en nuestros países. Esto demuestra que las burguesías domésticas, en un contexto de crisis de hegemonía global, no son capaces de controlar los poderes fácticos de sus regímenes políticos; en consecuencia, tienden a militarizar el régimen cuando no pueden seguir gobernando por los medios que lo hacían antes.[7]

En ese sentido, el carácter defensivo de la resistencia del campesinado indígena y cholo, frente a la expansión de la frontera extractiva minera y petrolera desde inicios del siglo XXI, se mantiene como rasgo de la lucha de clases. El estallido es un episodio en donde se vislumbra con claridad la lucha contra la reversión de las condiciones políticas, económicas y culturales de reproducción social del campesinado y del

7 Robinson, William I., y Salvador Rangel. "The Global Revolt and Its Discontents". *New Politics* XIX, n° 1 (11 de agosto de 2022): 57–67. https://newpol.org/issue_post/the-global-revolt-and-its-discontents/.

proletariado urbano y rural. Tanto las formas de lucha como las demandas, reivindicaciones, formaciones sociales, organizaciones populares e identidades que se configuran con el estallido en los Andes, corresponden a una lucha de clases defensiva, rasgo compartido también con el desarrollo simultáneo de las luchas en Estados Unidos y Francia en la actualidad. En ese sentido, cabe citar al sociólogo marxista Kevin B. Anderson, cuando sugiere optimistamente: "incluso una lucha defensiva puede transformarse en una ofensiva revolucionaria"[8].

En Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia, Francia o Nicaragua, en donde sea que los pueblos amanecen en primavera, se oye, se siente el estallido tronando en lo alto, como rocas gigantescas que terminarán por derrumbar a la clase capitalista en el mundo entero, abriendo los surcos de donde brota nuestro mundo nuevo.

¿Escucharon?
Es el sonido de su mundo derrumbándose,
es el nuestro resurgiendo.

8 Anderson, Kevin. "French Strikes and Popular Mobilizations Continue, Contesting Not Only Retirement Rollback, But Also Police Brutality and Authoritarian Politics - IMHO Journal". *The International Marxist-Humanist.*

Golpe parlamentario y estallido social

Jorge Sánchez Gonzáles

La farsa democrática

La democracia, la libertad, la libertad de opinión, la libertad de prensa, el debido proceso, el derecho a protesta, el libre mercado, etc., son los principios que, desde buen tiempo, defiende el imperialismo norteamericano y la oligarquía peruana. Los principios que enarbolan se nos presentan endulzados; pero, ante el impacto de la realidad material, están seguidos de insultos desesperados, calumnias e incluso de llamados a la muerte contra los dirigentes del empobrecido pueblo peruano. Solo tomando en cuenta este aspecto, podremos entender la consumación del baño de sangre que nos ha heredado este régimen con más de medio centenar de peruanos asesinados, miles de heridos y cientos de encarcelamientos arbitrarios.

Estamos presenciando una gran contradicción entre los hechos materiales recientes y los principios enarbolados tan fervorosamente por el imperialismo norteamericano, la oligarquía peruana y sus esbirros. Esta contradicción ya se vio cuando se olvidaron de su discurso neoliberal que fustigaba todo tipo de intervención del Estado en la economía, pero, ante la pandemia del COVID-19, las grandes empresas y el sistema financiero peruano fueron los primeros en ser rescatados por una intervención del Estado en la economía a la que llamaron *Reactiva Perú*, el más grande rescate financiero de la historia peruana. Con ese trasvase de liquidez del fisco, salvaron a sus empresas; además, con el pretexto de la crisis, propiciaron una inflación, trasladando los costos al pueblo peruano mediante la subida de los precios. Todo ello con apoyo de los poderes del Estado, incluido el Tribunal Constitucional que falló,

en más de una oportunidad, a favor de las grandes empresas para que no paguen impuestos en litigio.

Ningún representante de la derecha o del libre mercado se escandalizó por ello; al contrario, saludaron las decisiones para reducir la presión tributaria a las grandes empresas y el recrudecimiento de la presión contra el pueblo. En eso consiste su retorcido concepto de democracia con una esencia moral de sometimiento ya casi de mendigos. Eso es lo que tan rabiosamente defienden aquellos que se dicen "demócratas", pero que, en la práctica, solo son modernos y nefastos lacayos.

El pueblo peruano, como el resto de las naciones, no solo está siendo golpeado por la crisis del neoliberalismo, sino fundamentalmente por la crisis del imperialismo, lo cual se refleja en la guerra de Ucrania y tensión de EE. UU. contra China que ha desatado mayor inflación en el mundo. En esta relación con la crisis global del neoliberalismo, inserto mi análisis sobre el estallido social reciente en Perú; no como un caso aislado, sino como una de las tantas formas y episodios de luchas de los pueblos del mundo contra el imperialismo y el neoliberalismo en descomposición.

Otra vez los métodos coloniales e inquisitoriales: el *terruqueo*

La historia de la civilización nos muestra condiciones particulares para el desarrollo ideológico, político y económico a lo largo de las diferentes culturas. Estos son tres aspectos necesarios, indesligables y propios de cada etapa. Siglos atrás, durante periodos de sometimiento, casi nadie se atrevía a rechazar, cuestionar o combatir las condiciones de esclavitud y sus rituales de sacrificios humanos, ni la servidumbre y sus leyes inquisitoriales. Sin embargo, cruentos estallidos o momentos de explosión social han removido precisamente a estos tres aspectos (económico, político e ideológico) dando lugar a un nuevo proceso en el desarrollo de la historia.

En el caso peruano, como lo diría nuestro gran amauta José Carlos Mariátegui: la llegada de la corona española al Tawantinsuyo, significó

la llegada de la servidumbre/la esclavitud, el colonialismo y la inquisición. La dominación política y económica que logró imponer la corona española al Tawantinsuyo se hizo mediante acciones militares y luego de la tenaz y persistente resistencia de los invadidos. Pero dicha dominación política, militar y económica no hubiera sido sostenible sin su correspondiente aspecto ideológico, para lo cual, mediante el sincretismo, tuvieron que adaptar el cristianismo a la situación concreta del Tawantinsuyo.

El sometimiento se hizo en todos los campos y se usó diversos dispositivos para ello. El gran antropólogo y lingüista Alfredo Torero aseguraba que los clérigos que la corona española nos enviaba tenían como prioritaria misión aprender el quechua, para luego usarlo principalmente como vehículo ideológico contra los pueblos invadidos. Este no era un elemento menor, pues, la dominación política, militar y económica, necesitaba ser consagrada también por una dominación ideológica.

Conviene tener claro esta situación de colonización ideológica porque, hace poco, vimos a la perversión personificada en Dina Boluarte, dirigiéndose al pueblo peruano hablando dulcemente en quechua, usando el idioma como vehículo para vendernos su mensaje de contrabando. Clamó por paz, luego de haberse dado un baño de sangre, precisamente contra ese pueblo que viene siendo sometido y brutalmente masacrado desde hace siglos.

En el reciente golpe perpetrado por el Parlamento, los clérigos de las distintas vertientes no podían actuar de un modo distinto. No solo los vimos consintiendo las atrocidades del gobierno usurpador contra el pueblo, sino que pusieron sus edificios eclesiásticos a disposición de las fuerzas represivas desde donde francotiradores le disparaban a un pueblo desarmado. Con ello, pusieron en evidencia su gran hipocresía, pero también la monumental cobardía de las clases que ostentan el poder, de esas que ejercen una dominación cada vez más intolerable contra una gran mayoría cada vez más empobrecida.

La práctica inquisitorial contra el pueblo demostró que no se acabó con el final de la colonia. Sigue implacable. Actualmente tenemos al

terruqueo, como un infalible método inquisitorial contra el pueblo. No es muy complicado encontrar allí un hilo ideológico que conecta a esta praxis con la sucesión del medieval delito de herejía. El *terruqueo* es un método que se despliega en gran comparsa entre la prensa monopólica peruana, los parlamentarios, el Ministerio Público, la DIRCOTE, etc. El despliegue simultáneo y coordinado de una gran campaña de *terruqueo* casi siempre es el preludio de encarcelamientos masivos y/o un baño de sangre; esta vez tampoco fue la excepción.

Vivimos un terrorismo de Estado que ocurre silenciosamente, protegido y revestido con un lenguaje jurídico que glorifica su podredumbre; es un terrorismo que se expresa de dos maneras: a) *incruenta*, cuando mata silenciosamente a millones de personas en medio del hambre y miseria, destruyendo su agricultura, saqueando sus recursos, abandonando su educación y acceso a la salud pública, mientras rebosan de extrema corrupción; b) *cruenta*, cuando, ante tan insostenible situación, el pueblo peruano que lucha y protesta en las calles es asesinado con formas brutales y cobardes; incluso torturados física y psicológicamente; encarcelados, criminalizados y estigmatizados. Así, el infame *terruqueo* cumple fines políticos de carácter altamente represivos: romper o impedir la unidad del campo popular, extender dicha criminalización al resto del pueblo para justificar nuevas masacres, escarmentar y descabezar al movimiento popular.

La destitución retorcida y el papel de EE. UU.

El profesor Pedro Castillo llegó al sillón presidencial muy a pesar de que fue proscrito con gran ferocidad durante su proceso electoral; la ultraderecha había emprendido un brutal *terruqueo*, pocas veces visto en la historia republicana. Así, las oligarquías fascistoides pusieron en evidencia que estaban dispuestos a pisotear sus propias leyes, reglas, Constitución y principios. Este clima de estigmatización contra Castillo y contra el pueblo nunca cesó; por el contrario, después del 7 de diciembre de 2022 se potenció en extremo, al punto de trazar el tablero en bandos de amigos/enemigos, muy al estilo de los teóricos del fascis-

mo. Por ello, fue fácil presentar un golpe de Estado desde el Parlamento como algo legal. Pedro Castillo fue detenido y privado de su libertad 10 minutos antes de que el Parlamento termine de votar una desesperada y forzada "vacancia" que, finalmente, devino en una destitución retorcida que no alcanzó los 104 votos legalmente necesarios para una vacancia exprés.

Diferentes expertos juristas nacionales e internacionales, como el argentino Eugenio Zaffaroni, demostraron que lo pretendido por Pedro Castillo en su mensaje del 7 de diciembre no configura la consumación de delito, es más bien un problema de carácter estrictamente político, cuya vacancia tendría que haber cumplido con los procedimientos establecidos en el artículo 89-A del Reglamento del Congreso de la República (2022). Dicho reglamento exige las cuatro quintas partes del número legal de congresistas, es decir, 104 votos para vacar a un presidente en esas circunstancias; sin embargo, eso nunca ocurrió, pues solo lograron 101 votos. Además, tiene un agravante: la votación se realizó omitiendo el previo derecho a defensa del presidente Pedro Castillo ante los parlamentarios; al haberse adelantado la sesión y privarlo de su libertad, hicieron materialmente imposible ejercer su constitucional derecho a la defensa.

Ante estos hechos, el despliegue de la prensa oligárquica buscó, nuevamente, desviar la atención y manipular a la opinión pública. Todos sus periodistas vociferaron al unísono y en comparsa con la ultraderecha parlamentaria, altos mandos de las FFAA, la PNP, el Ministerio Público, etc. una supuesta "defensa del orden constitucional, legalidad e institucionalidad". Sin embargo, el pueblo fue testigo de cómo la ultraderecha volvió a pisotear sus propias leyes y su Constitución.

La oligarquía peruana, en los medios concentrados, defiende apasionadamente sus ideales de *democracia, libertad, paz*, etc.; pero, en cuanto los pone en práctica, los traiciona inmediatamente. Supuestamente defienden estos ideales, pero su concepto de democracia se reduce al simple y vulgarizado acto electoral quinquenal para que nada fundamental cambie. Su concepto de libertad se reduce únicamente a sus propias libertades como clase social dominante y a sus privilegios

en el mercado; mientras ejercen un feroz *terruqueo* para luego justificar masacres, asesinatos, encarcelamientos y persecución política contra el pueblo, contra opiniones políticas contrarias y contra los que protestan o ejercen algo de solidaridad.

Su concepto de *paz* se reduce únicamente a sus negros deseos de pacificación, que no es otra cosa que una práctica abierta de muerte contra aquellos que critican, cuestionan y protestan. Les desean la muerte a sus adversarios en plazas y medios de prensa, muy abierta e impunemente; agitan y alientan de impunidad a sus fuerzas represivas, lo que finalmente se ha concretado con más de 70 asesinatos contra el pueblo peruano en los primeros tres meses del golpe parlamentario. A pesar de todo ello, no dudan en autocalificarse como muy "pacíficos"; esto no solo es una gran contradicción, sino una macabra hipocresía y cinismo que desenmascara sus entrañas fascistas. En realidad, solo son portadores de la voluntad del imperialismo norteamericano, esa misma voluntad imperial que fomenta el fascismo en Ucrania y donde su dominio geopolítico lo requiera.

¿Hasta cuándo tendremos a candidatos presidenciales dando explicaciones a la embajada norteamericana sobre sus acciones y buscando apoyo? ¿Hasta cuándo la prensa monopólica pondrá en pantalla a exministros del Interior que fungen de opinólogos como Fernando Rospigliosi y Rubén Vargas, quienes pidieron la intervención de la embajada norteamericana en las elecciones peruanas? ¿Cuál fue el verdadero motivo, del entonces ministro de defensa Gustavo Bobbio, para reunirse con la embajadora norteamericana dos días antes del golpe parlamentario?[1] Ese mismo día, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso decidió archivar las denuncias contra la vicepresidenta Dina Boluarte por supuesta infracción a la Constitución, dejándola lista para el 7 de diciembre.

¿Fue casualidad que la titular del Poder Judicial, Elvia Barrios, haya viajado a EE. UU. dos meses antes del golpe Parlamentario para "intercambiar experiencias de alto nivel" sobre temas de combate contra la

1 Ver: http://www.elperuano.pe/noticia/198471-ministro-de-defensa-se-reunio-con-embajadora-de-los-estados-unidos.

corrupción y promoción de la integridad, por invitación de la Embajada norteamericana?[2]; ¿es una simple casualidad que Lisa Kenna, actual embajadora norteamericana asignada al Perú haya sido una agente veterana de la CIA? ¿Acaso debemos omitir la nefasta fama de la CIA con alta especialidad en maniobrar innumerables golpes de Estado en diferentes países? ¿Cuál es el reporte, informe o balance de la supuesta necesidad que justifica la presencia de militares norteamericanos en territorio peruano utilizando nuestras bases policiales y militares?

Nuevos tiempos, viejos problemas

José Carlos Mariátegui sentenció en sus *7 ensayos de interpretación de la realidad peruana*: "el problema del indígena es el problema de la tierra". Precisamente de este problema principal se derivan las históricas luchas del pueblo peruano que reiteradamente son sofocadas con gran crueldad y sonadas masacres que, casi siempre, quedan en la impunidad, verbigracia del poder de la gran oligarquía peruana y su inocultable racismo. Por más que se esfuercen para ocultarlo con sus palabras dulces, vistiéndose como andinos e incluso hablando en quechua.

Sobre este gran problema histórico, Pedro Castillo no hizo absolutamente nada. Decidió encaminarse inmediatamente en una serie de concesiones, tras lo cual terminó cada vez más arrinconado, debilitado y aislado, incluso de su propia base social. Si algún ingenuo cree que fue "para ganar tiempo", a estas alturas ya debería tener claro que la ultraderecha fue quien sacó el mayor provecho, no porque tuvieran algo de credibilidad o mucho menos respaldo de la población, sino por su gran capacidad de manipular desde la prensa oligárquica, altos funcionarios de las instituciones del Estado y porque las FFAA y la PNP están a su servicio.

El exjefe del Comando Conjunto de las FFAA y actual presidente del Parlamento, José Williams Zapata, es un ejemplo de lo que decimos. No solo fue denunciado por los crímenes en la masacre de Accomarca (1985), donde fueron asesinados 60 campesinos, incluidos niños, sino

2 Ver: https://elperuano.pe/noticia/194033-elvia-barrios-viaja-a-eeuu-para-intercambiar-experiencias-en-lucha-contra-la-corrupcion.

que, entre 2004-2005, fue vinculado con cárteles mexicanos de droga[3]. Además, en el 2006, fue investigado por el delito de enriquecimiento ilícito. Hasta el momento, se ha librado de estas graves denuncias. Un golpe parlamentario, presidido por un presidente con ese prontuario, pone en evidencia la podredumbre de la Fiscalía, Poder Judicial, Tribunal Constitucional y demás instituciones.

En toda la vida republicana, especialmente en los últimos 30 años, los gobiernos que llegaron al sillón presidencial en realidad lo hicieron para defender los grandes privilegios de una poderosa, pero minoritaria clase social. El Estado peruano está diseñado y estructurado, con todas sus instituciones, para actuar como una maquinaria de aplastamiento contra el pueblo. Por lo que no es extraño que algún sindicalista como Pedro Castillo, que llegó a ese sillón presidencial, en realidad haya estado castrado políticamente por más que haya complacido casi en todo a esa minúscula, pero feroz jauría reaccionaria. Pareciera ser que los únicos requisitos que se requiere para llegar al sillón presidencial son: el sometimiento ante la más corrupta oligarquía y recibir el patrocinio del imperialismo norteamericano.

La oligarquía peruana actualmente se encuentra envuelta en los peores actos de corrupción de nuestra historia junto con sus operadores políticos y altos funcionarios. Pero, gracias al reciente golpe parlamentario, muchos peces gordos creen que pueden dormir tranquilos mientras nos martillan con el cuento de que "Porky", Keiko, Acuña, Williams Zapata, Dina Boluarte, Maricarmen Alva, Montoya, José Cueto, Patricia Chirinos, etc., tienen superior capacidad moral que Pedro Castillo.

Entre los principales intereses que mueven a las clases dominantes tenemos que considerar sus privilegios sobre la concentración de la propiedad privada, en especial de la tierra que, cada vez, se profundiza en el Perú y en el resto del mundo, empeorando el hambre y la miseria en todo lugar. Incrementar la frontera agrícola es el pretexto que ha usado la oligarquía peruana para concentrar casi la totalidad de las mejores tierras.

3 Ver: https://wayka.pe/el-cartel-de-tijuana-operaba-en-las-narices-de-jose-williams-zapata/.

Otro creciente problema es el acceso al agua. La gran propiedad sobre la tierra va acompañada de la alta concentración sobre el control del recurso hídrico, al extremo que numerosas poblaciones también están siendo privadas de su acceso al agua. Actualmente, se privilegia a la minería que consume cantidades inmensas de agua y a la agroindustria basada en el monocultivo. Esto pone en serio peligro la seguridad alimentaria para el pueblo. Todo esto, además de los problemas de pauperización en las condiciones laborales, fondos de pensiones esquilmados por las recientes tasas de inflación, el limitado acceso a la educación, salud, etc.

Los lazos de lo nacional con el mundo

La historia reciente nos ha mostrado a EE. UU. en medio de una gran contradicción: el paladín del libre mercado interviniendo en la economía para rescatar a sus bancos tras la burbuja hipotecaria del 2008. Cosa semejante ocurrió con el rescate de mayor magnitud el 2020, tras la pandemia por COVID-19 y más reciente, tras las crecientes tensiones geopolíticas entre EE. UU., Rusia y China, expresadas en la guerra de Ucrania y las fricciones sobre Taiwán. Por cierto, esta escalada bélica, en medio de la cual quiebran dos grandes bancos norteamericanos y un banco suizo, obligó, nuevamente, a intervenir en la economía para rescatarla e inyectarle más dinero. Al mismo tiempo, exportan mayor inflación al resto del mundo, debido a la fortaleza relativa de sus monedas frente a la nuestra.

Una de las leyes del capitalismo que Carlos Marx descubre es la ley de la tasa decreciente de las ganancias, lo cual fundamenta el carácter finito del capitalismo. Este agotamiento se manifiesta en sucesivas e inevitables crisis cada vez más profundas, tras lo cual solo es posible relanzar al capitalismo mediante grandes innovaciones tecnológicas y guerras, principalmente.

Actualmente, estamos experimentando profundos cambios. Estamos afrontando la cuarta revolución industrial, signada por la inteligencia artificial, digitalización, biotecnología, *blokchain*, etc. En ese es-

cenario, queda claro que se acabaron los tiempos de amistad y colusión entre grandes potencias imperialistas contra los pueblos del mundo. Evidentemente, los pueblos luchan contra estas formas de intervencionismo; y, como ello se vuelve un obstáculo, el imperio sugiere resolver los problemas mediante la guerra.

Esa es la implicancia de la guerra de Ucrania, donde la contienda en realidad es entre EE. UU. y Europa contra Rusia; la gran víctima es el pueblo ucraniano, mientras su oligarquía sigue enriqueciéndose con esta guerra. Por su parte, EE. UU. es el principal atizador de la guerra de Ucrania y de las tensiones geopolíticas contra China por el destino de Taiwán. Con ello, EE. UU. logra un doble propósito: por un lado, vender su arsenal (el complejo militar industrial de EE. UU. es uno de los principales pilares del desarrollo imperialista); por otro lado, frena el acelerado fortalecimiento económico de China y su creciente influencia geopolítica que amenaza la hegemonía norteamericana. Por ello, EE. UU. es el principal promotor de la guerra sin importar que, con ello, pone al mundo al borde de la III Guerra Mundial. Esta situación exige definiciones en el resto de los países; Perú no está al margen de ello.

Considerando los recursos minerales y energéticos de nuestro país, además de su importancia estratégica en cuanto a seguridad, queda claro el interés de EE. UU. para aferrarse a su posición dominante sobre Perú, lo cual quedó manifestado en su apoyo y patrocinio al criminal gobierno de Dina Boluarte. Por su ubicación, Perú es la puerta al flujo comercial de China hacia Latinoamérica. Por eso, el puerto de Chancay, cuya construcción está a cargo de *Cosco Shipping Ports*, como parte de la *nueva ruta de la seda*, será el más grande de Latinoamérica. En un contexto en el que la actual influencia geopolítica norteamericana y europea sobre Latinoamérica se encuentra debilitada, precisamente por la influencia China, no entender estas conexiones con el mundo, dificultaría comprender el golpe parlamentario en Perú, y el respaldo implacable de EE. UU. al gobierno de Dina Boluarte, a pesar del baño de sangre que ha desatado contra el pueblo.

Segunda parte

Crisis institucional, vacancia y protesta

Cómo enterrar a nuestros muertos con circunspección

Arturo Delgado Galimberti

¿Hay alguna posibilidad de que la calma actual dure hasta las próximas elecciones? No es imposible, siempre que los grupos y grupúsculos de extrema izquierda se calmen, entierren a sus muertos con circunspección, y tengan como principal reivindicación la paz y la convivencia.

Mario Vargas Llosa

Da espanto leer el recuento de víctimas de las protestas entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023, que figura en el informe de la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicado en mayo de este año. Y a medida que se repasa la lista, es duro imaginar cada una de las escenas, las terribles circunstancias de las muertes, su arbitrariedad, su injusticia. Como la del adolescente de quince años que regresaba de su trabajo en el cementerio y fue alcanzado por una bala en el tórax. O el caso del hombre quincuagenario que salió de su casa para darle refugio a un herido y fue fulminado sin piedad. O aquella imagen del médico brigadista asesinado por la espalda con varios impactos de bala cuando intentó socorrer a otra víctima. Fuese en Ayacucho, en Juliaca, en Arequipa, en Andahuaylas, o en otra de las zonas donde se manifestó la mano negra de la masacre, el común denominador fue la acción indiscriminada, no proporcional, de la fuerza (letal) de los destacamentos policiales y militares contra una población que se encontraba en el entorno de las manifestaciones contra el régimen de Boluarte.

La mayoría de esos muertos no eran militantes de izquierda, menos de extrema izquierda. Eran pobladores cuyo delito fue vivir en las regiones convulsionadas del sur, y en el más extremo de los casos, salir a protestar. Cuando Mario Vargas Llosa escribió la frase que uso como

epígrafe ("El caso del Perú", *El País*), no solo cometió un desatino, una manifestación más de su ojeriza contra sus enemigos políticos, sino dejó en claro cuál fue, es y será el parámetro de la defensa de la democracia y la legalidad para un amplio espectro de la derecha peruana, para quienes la preservación del *statu quo* supone la justificación, sin pestañeos ni rubores, de todo tipo de masacres contra la población civil. Vargas Llosa ha asumido el deshonroso pasivo del régimen cívico militar del tándem Dina Boluarte-Alberto Otárola, junto con la derecha congresal y las Fuerzas Armadas. No hace falta acudir a ninguna sofisticada hermenéutica para interpretar que en el subtexto está la idea de la imposición del orden con impunidad, y no la búsqueda de "la paz y la convivencia", según el discurso oficial y vargasllosiano. En otras palabras, es la doctrina de la paz de los cementerios en la pluma de nuestro premio nobel.

Se puede rastrear esta involución del supuesto escritor liberal hacia posturas de la extrema derecha defensora de la impunidad, desde mucho antes del punto de inflexión que significó la segunda vuelta electoral disputada entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Desde el Informe Uchuraccay de la comisión que él presidió (ver Flores Galindo, "Buscando un Inca") hasta sus simpatías por Margaret Thatcher, el afamado escribidor lleva décadas demostrando que sus marcos de referencia sobre conceptos universales como democracia y libertad solo operan en la medida en que no se contraponen a los intereses del mercado o de los grandes conglomerados capitalistas y eurocéntricos del poder global.

En ese sentido, su batalla quijotesca contra el fujimorato solo fue un hipo, un impasse resuelto con abrazos para la foto en la última crisis republicana que supuso el "peligro" de la asunción al poder de la izquierda castillista.

Entonces llegó el pánico y la necesidad de la *realpolitik*. En honor a la verdad, el temor no solo aglutinó a la derecha multicolor –de liberales doctrinarios a conservadores religiosos y fascistas desembozados–, sino también a muchos de los llamados "progres" o "caviares". Terminado el conteo de votos por la ONPE y aún antes del inicio del vía crucis derechista que concluyó con la declaración de Pedro Castillo como virtual

Presidente de la República por el Jurado Nacional de Elecciones, innumerables políticos, intelectuales, tribunos, funcionarios, periodistas, y hasta personajes de la farándula y el deporte, otrora respetables o por lo menos aparentemente mesurados y dialogantes, perdieron de inmediato la compostura, el discernimiento y la capacidad de tolerancia, y se enrolaron como *boyscouts* de última hora a la cruzada contra el "comunismo".

El anticristo y el falso profeta del Armagedón habían llegado y era hora de enfrentarlos. Los comunistas del Foro de Sao Paulo, sus agentes cubano-venezolanos-bolivianos, en alianza con Sendero Luminoso reciclado en Movadef y el Fenatep, sin olvidar a los remanentes narcoterroristas del ala militarizada del Vraem, y con la anuencia de la agenda globalista de Soros y de la secta caviar, en una mezcolanza diabólica en la que también estaban involucrados movimientos musulmanes y comunidades étnico regionales de la sierra sur, así como grupos de la minería ilegal junto con antimineros, y otro tanto etcétera de indeseables en el imaginario de la derecha, casi como pericote, perro y gato del mal, habían decidido complotar contra el Perú (léase, contra el Perú como lo piensa y quiere la derecha y sus intereses privados).

Tamaña teoría de la conspiración, o para escribirlo sin eufemismos, ese disparate sirvió como base argumental para diseñar desde el día cero una estrategia que se inició con el desconocimiento del triunfo electoral de Pedro Castillo y la construcción de la narrativa del "fraude", a la que de inmediato el clan Vargas Llosa (padre e hijo) y su subordinado el ex-tribuno Óscar Urviola, imperturbables, respaldaron.

Lo que continuó fue una serie de puestas en escena, elaboradas desde el servicio de inteligencia tras bambalinas, en coordinación con varios estamentos del Estado. El Congreso, como protagonista estelar, se encargó de censurar ministros y presentar mociones de vacancia, así como bloquear toda gestión o iniciativa gubernamental (incluyendo los viajes al exterior del presidente). Por su parte, la Fiscalía de la Nación, desde que asumió la posta la histriónica Patricia Benavides, creó el rimbombante Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder,

suerte de inquisidores que fueron cooptando "colaboradores eficaces" (sobre la base de dichos) a cambio de retirarles la carcelería, cínica manera de encubrir el trato diferenciado y discriminador contra un alto mandatario y sus derechos constitucionales, trato que por supuesto solo se aplicó (y aplica) con Castillo y su entorno, y, en cambio, en relación con la actual y más que presunta corrupción (y crímenes) del régimen de Boluarte, la espectacular diligencia de los fiscales ejecutores ha sufrido un repentino letargo.

Por si no fuese suficiente, y como era de esperarse, el periodismo como cuarto poder hizo lo suyo. Casi sin excepción, la prensa fue el eco de la fiscalía, que jugó en pared con los servicios de inteligencia policial y militar aliados del fujimorismo y la derecha congresal en la fabricación, no de evidencias, sino de "elementos de convicción". No importaba la calidad y contundencia de los descargos de cualquiera de los imputados, porque en la (des)información primaba la presunción de culpabilidad. Por supuesto, ya en los fueros judiciales, la pesadilla kafkiana se hacía realidad para todo sospechoso del gobierno, y la convalidación del juez a las hipótesis fiscales se convirtió en parte del montaje.

¿Intento afirmar que no hubo indicios de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo? En absoluto. Lo que sí me atrevería a lanzar como hipótesis es que en el medio año de gobierno de Boluarte, indiciariamente, ha habido mucho más posibilidades de que operen redes de corrupción que en el de Castillo; que si hubo delitos durante los 16 meses de la presidencia del "profesor rural", estos han sido mucho menores de los que se presumen o afirman; y que aun si no hubiese habido ni por asomo ningún elemento de convicción real de corrupción en el Estado (lo que la historia de nuestra república niega; basta leer a Alfonso W. Quiroz, "Historia de la corrupción en el Perú"), los promotores de la narrativa del "fraude" se hubieran encargado de fabricar las "evidencias", los testigos y los escenarios para la teatralización, como ha sucedido con otras experiencias del "lawfare" en Latinoamérica.

Lo que también ha quedado claro desde el triunfo electoral de Pedro Castillo y, más aún, desde el golpe de Estado cívico-militar de la

presidenta guiñol Boluarte, es la pérdida de legitimidad de la república criolla en su bicentenario y la necesidad de un nuevo pacto social, vía asamblea constituyente y nueva constitución. Pero no solo es una crisis del modelo neoliberal impuesto desde hace 30 años por el fujimorato, a lo que se ha denominado la "república empresarial". Es una crisis sistémica que se remonta a la fundación de la república, e incluso con rezagos coloniales, con conflictos no resueltos, en donde el clasismo y el racismo han sido las rémoras que se debe superar en un horizonte genuinamente democrático.

Ante esta exigencia popular, la opción de MVLl no es democrática. Tampoco lo es la de la derecha alineada con el régimen impuesto *manu militari* desde el 7 de diciembre de 2022. La "democracia" que se esmeran en defender no solo carece de legitimidad, sino de credibilidad. Es el último acto de un montaje cruento, una ficción inverosímil, que solo se sostiene con el poder de las armas, pero que ya no es eficaz en su propósito de manipulación de las masas. Sus propias encuestas son reveladoras al respecto, más allá de los discursos predominantes.

Ni los "fakenews" (no hay verdad en las mentiras, Varguitas), ni el terruqueo, podrán espantar los cucos de la derecha; más bien, con el tiempo los convocarán, como una profecía autocumplida. Y entonces, la verdad, que hoy en el régimen de Boluarte ha sido asesinada a mansalva, en donde los muertos de las masacres son culpables de su indignación, y donde ser de izquierda es un delito tan oprobioso en la mirada vargasllosiana que solo resta levantar sus supuestos cadáveres con circunspección; entonces y solo entonces, repito, la verdad será el principio y el fin de los hombres solidarios y libres en una auténtica democracia, y habrá espacios legítimos y creíbles para reivindicar la paz y la convivencia.

"Entre mutualistas y oportunistas": vacancia presidencial y crisis política en Perú

Steven Palacios Amorín

La vacancia como instrumento político de oposición

El 26 de enero de 2023 se presentó ante el Congreso una iniciativa de moción de vacancia presidencial contra Dina Boluarte. La propuesta fue impulsada por las bancadas de izquierda, aduciendo su responsabilidad sobre las muertes durante las protestas sociales iniciadas contra su gobierno en diciembre de 2022.

Las protestas se iniciaron tras el intento fallido de autogolpe y posterior captura del expresidente Pedro Castillo. Según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[1], el uso de la fuerza estatal ocasionó que "56 personas perdieran la vida, entre ellas 8 adolescentes y un agente policial; y al menos 912 personas resultaron heridas". Tras estos sucesos, la moción contra Dina Boluarte apelaba a "la permanente incapacidad moral de la presidenta de la República". Tras dos meses, la moción no alcanzó los votos mínimos necesarios para ser debatida en el Congreso (40 % de los congresistas hábiles). Fue desestimada con un resultado de 37 votos a favor, 64 en contra y 10 abstenciones.

Durante los últimos siete años se propusieron ocho mociones de vacancia presidencial aduciendo "permanente incapacidad moral", de las cuales seis obtuvieron la votación necesaria para ser debatidas en el Congreso[2]. Las seis mociones de vacancia fueron contra Pedro Pablo Kuczynski (2), Martín Vizcarra (2) y Pedro Castillo (2). De los seis casos, solo uno logró la vacancia por votación del Congreso (Moción N°

1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2023. "Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales": https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2023/Informe-SituacionDDHH-Peru.pdf

2 A la moción de vacancia no admitida a debate de Dina Boluarte se suma una contra Pedro Castillo que tampoco prosperó.

12684 en contra de Martín Vizcarra). Pedro Pablo Kuczynski presentó su renuncia un día antes de efectuarse la moción. Finalmente, Pedro Castillo fue destituido por el Congreso (Resolución del Congreso N° 001-2022-2023-CR) como consecuencia de un intento de autogolpe fallido en horas previas a la moción. En los otros tres casos restantes, los presidentes salieron airosos de la votación. En resumen, los datos muestran que el promedio de intentos de vacancia presidencial supera el valor de uno por año.

¿Por qué la institución de la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral y física se convirtió en un instrumento recurrente en los últimos años en la política peruana? ¿Qué reglas, actores, o contextos políticos confluyen para recrear el ambiente idóneo para su uso? El presente ensayo tiene como objetivo analizar el uso de la vacancia presidencial como instrumento político de oposición al gobierno. Para ello, se usará la teoría del cambio institucional gradual[3]. Del mismo modo, se revisará la literatura concerniente a las relaciones Ejecutivo-Legislativo y de crisis presidenciales. La hipótesis planteada sostiene que la institución de la vacancia presidencial experimenta un cambio institucional gradual, producto del contexto de conflicto Ejecutivo-Legislativo que atraviesa el Perú desde el 2016.

Permanencia y cambio en la teoría neoinstitucional

Uno de los puntos clave en la teoría neoinstitucional es el estudio de la permanencia de las instituciones, la cual se asocia con el mismo concepto de institución[4]. Por ende, la idea de permanencia se encuentra presente en las diferentes corrientes neoinstitucionalistas. Un claro ejemplo de lo mencionado es el neoinstitucionalismo histórico. Su preocupación principal gira en torno a cómo las coyunturas críticas influyen sobre las instituciones. Según Peters, en el neoinstitucionalismo históri-

3 Mahoney, J., & Thelen, K. 2010. A Theory of Gradual Institutional Change. En Mahoney, James y Kathleen Thelen (eds.), *Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency, and Power*. Cambridge: University Press, pp. 13-37.

4 Mahoney, J., & Thelen, K. 2010. Ob. Cit., p. 4

co "las decisiones institucionales y políticas que se toman, al iniciarse la estructura, tienen efectos duraderos" [5].

El neoinstitucionalismo es una corriente que explica mejor la permanencia, en lugar de los cambios que sufren las instituciones, pero ¿qué se sabe sobre el cambio institucional? En primer lugar, hay que señalar que las instituciones no son "eternas ni inmutables" [6]. En segundo lugar, se reconoce que existe mucha teoría que ayuda a explicar los cambios institucionales[7]. Esto implica que, a pesar de la existencia de una vasta literatura, la información para entender el sentido del cambio institucional es limitada[8]. Douglas North, plantea el cambio institucional desde una perspectiva económica y social. Sostiene que el cambio institucional es un proceso complejo, resultado de "cambios en cuanto a normas, limitaciones informales y diversas clases de efectividad y observancia coercitiva" [9].

Otra propuesta de cambio es desarrollada por Robert Goodin, según la cual existen tres formas de cambio institucional. La primera es resultado de un proceso de contingencia, es decir, la ocurrencia o no ocurrencia responde a la presencia de determinados contextos. La segunda, plantea la idea del cambio como resultado de un proceso de evolución. Por lo tanto, los cambios siguen criterios de selección que permiten que las instituciones más aptas se mantengan en el tiempo. Finalmente, los cambios son producto de intervenciones intencionadas. En otras palabras, los cambios surgen por medio de acciones de agentes con fines deliberados. Robert Goodin, señala que los cambios institucionales se dan como resultado de la mezcla de los tres factores mencionados[10].

Los textos mencionados establecen la existencia del cambio institucional; no obstante, surgen las siguientes interrogantes ¿de qué forma

5 Peters, G. (2003). *El nuevo institucionalismo: Teoría institucional en ciencia política.* Gedisa

6 Goodin, R. E. 1998. Institutions and Their Design. En Goodin, Robert E. (ed.), The Theory of Institutional Design. Cambridge University Press

7 Davis, L. E., & North, D. C. 2008. *Institutional change and American economic growth.* Cambridge: University Press.

8 Mahoney, J., & Thelen, K. 2010. Ob. Cit.

9 North, D. C. (1995). *Instituciones, cambio institucional y desempeño económico.* México: Fondo de Cultura Económica. pp. 17.

10 Goodin, R. E. 1998. Ob. Cit., p. 25.

se origina dicho cambio institucional? ¿Es un proceso exógeno o endógeno?[11] señalan que la literatura sobre cambios institucionales privilegia las explicaciones de tipo exógeno. Frente a ello, los autores plantean un modelo de cambio institucional que no solo capte las modificaciones surgidas por factores exógenos, sino también por factores endógenos que se desarrollan de manera incremental[12]. De esa manera, se rigen bajo una teoría de cambio donde las instituciones son concebidas como "instrumentos distributivos cargados de implicaciones de poder"[13].

Un punto importante de la propuesta de Mahoney y Thelen es la identificación de tipos de cambio institucional. Estos son: desplazamiento, capas, deriva, y conversión. El cambio institucional por desplazamiento hace referencia a la suplantación de normas existentes por normas nuevas. El tipo de cambio institucional por capas se refiere a la superposición de normas nuevas frente a las ya existentes. El cambio institucional por deriva señala las modificaciones que sufren las normas por impacto de cambios del entorno. Por último, el cambio institucional por conversión hace referencia a una reinterpretación de las normas, sin la necesidad de cambios formales de las reglas. Como se podrá apreciar, la vacancia presidencial en Perú afronta un cambio institucional por conversión. Ello se debe a la ambigüedad de la norma, y a la forma cómo se distribuye el poder en un contexto de conflicto entre poderes del Estado. Antes de analizar el proceso de conversión es necesario describir el diseño institucional de la vacancia presidencial en Perú.

La vacancia presidencial en Perú: diseño institucional[14]

Dentro de las funciones del Congreso de la República se encuentra la de control político, el cual se inscribe dentro de un diseño institucio-

11 Mahoney, J., & Thelen, K. 2010. Ob. Cit., Ob. Cit, p. 2.

12 La idea del cambio institucional como un cambio continuo ya había sido propuesto por North (1995).

13 Mahoney, J., & Thelen, K. 2010. Ob. Cit., p. 7.

14 Una institución bien diseñada es aquella que posee coherencia interna, y es "externamente armoniosa con su entorno social más amplio" (Goodin, 1998, p. 39). La importancia de un buen diseño institucional consiste en promover el intercambio político y la toma de decisiones colectivas. Además, el diseño institucional determina la interrelación de las reglas con el objetivo de producir un fin específico.

nal de rendición de frenos y contrapesos. El control político puede ser de tres tipos: preventivo, funcional, y represivo. La vacancia presidencial se incluye dentro del control de tipo represivo, el cual se caracteriza por su carácter de investigación y sanción[15].

Según el artículo 113º de la Constitución Política del Perú, la presidencia puede ser vacada por: 1) muerte del presidente de la República, 2) permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso, 3) aceptación de su renuncia por el Congreso, 4) salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado y 5) destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117° de la Constitución[16].

De las diferentes causales mencionadas, solo la prevista en el inciso 2) genera un procedimiento que se encuentra regulado por el Reglamento del Congreso. El pedido de vacancia se formula por moción de orden del día que debe ser firmada por no menos del 20% del número legal de congresistas (130 en la actualidad). Acto seguido, la moción es sometida a voto. La admisión es aprobada cuando se logra por lo menos el 40% de los congresistas hábiles. De lograr la votación requerida, el Congreso debe fijar fecha y hora para el debate de pedido de vacancia. El presidente puede ejercer su derecho de defensa de manera personal o por medio de su abogado. Para la decisión de vacancia se requiere una votación calificada de los dos tercios del número legal de congresistas.

Como se puede apreciar, la norma detalla el proceso de vacancia por permanente incapacidad moral. Incluso, se modificó el número de votos requeridos[17]. No obstante, queda un vacío: la ambigüedad del concepto de "incapacidad moral". Mahoney y Thelen señalan que los cambios institucionales surgen cuando hay problemas de interpretación y

---

15 Landa, C. 2003. *Control Parlamentario Mecanismos de Coordinación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo*. Lima: Congreso de La República del Perú-Universidad del Estado de Nueva York-USAID-PERU.

16 Estas infracciones son traición a la Patria, impedimento de elecciones, disolución del congreso fuera del marco de la ley, e impedimento de funciones de los órganos electorales.

17 En el año 2003, el Tribunal Constitucional (Expediente N° 0006-2003-AI/TC.) se pronunció sobre la facilidad de poder vacar al presidente por incapacidad moral, ya que solo se requería una votación de mayoría simple. Por ello, el Congreso incorporó la votación de mayoría calificada en el Reglamento.

aplicación de las reglas[18]. Además, señalan que este escenario promueve que determinados actores usen las reglas existentes bajo nuevos modos. La causal de vacancia por incapacidad moral ha estado presente a lo largo de la historia constitucional peruana[19]; sin embargo, solo tres presidentes fueron vacados por dicha causal: José de la Riva Agüero (1823), Guillermo Billinghurst (1914) y Alberto Fujimori (2000). La política peruana demuestra que la institución de la vacancia por incapacidad moral viene experimentado un cambio gradual. A continuación, se indagan las causas de dicho cambio.

"Conversión" de la vacancia presidencial en Perú

El apartado anterior mostró las características de la institución de la vacancia presidencial en Perú. Se evidenció un elemento clave en los procesos de cambio institucional: la ambigüedad de las reglas. No obstante, el cambio institucional no solo depende de las características de las instituciones, sino también de las características del contexto político. La articulación de ambos elementos determina qué tipos de agentes impulsan los cambios y las estrategias a seguir[20]. Por ello, es necesario entender el contexto político peruano para explicar el cambio institucional de la vacancia presidencial por incapacidad moral.

El Perú atraviesa una crisis política caracterizada por una constante pugna Ejecutivo-Legislativo, a la cual se suman otros problemas como la corrupción, escándalos políticos, la inexistencia de un sistema de partidos, protestas sociales, etc. Este conflicto se acentuó desde las elecciones del 2016 donde el fujimorismo no logró la presidencia, pero adquirió mayoría parlamentaria[21]. En sistemas presidencialistas, los gobiernos que no gozan de mayoría legislativa suelen afrontar un clima político adverso.

18 Mahoney, J., & Thelen, K. 2010. Ob. cit.

19 Una primera referencia a la causal de vacancia por incapacidad moral aparece en la Constitución de 1839. Luego se mantuvieron en las constituciones de los años 1856, 1860, 1867, 1920, 1979, y en la de 1993. Para un análisis jurídico detallado sobre la vacancia por incapacidad moral en Perú, revisar la tesis de Chávarri (2013).

20 Mahoney, J., & Thelen, K. 2010. Ob. Cit., p. 15.

21 En esas elecciones obtuvo 73 de los 130 escaños.

Estos conflictos se agudizan cuando no existe un cierto grado de control del Poder Legislativo por parte del Poder Ejecutivo[22].

La inestabilidad política no solo puede ser explicada por la falta de una mayoría parlamentaria. Un elemento aunado a dicha problemática reside en la inexistencia de partidos políticos. Para Levitsky y Zavaleta[23], este problema se explica por la debilidad de la sociedad civil y por la falta de incentivos por parte de los partidos para formar cuadros políticos profesionales. Ello, genera que los partidos se tornen en "coaliciones de independientes"[24] que se constituyen como plataformas partidarias para el mejor postor. Esto se evidencia en las cifras que señalan que el 70% de la oferta partidaria en el Perú está compuesta por outsiders[25]. Así mismo, la presencia de outsiders exacerba el conflicto Ejecutivo-Legislativo[26].

El conflicto de poderes ha devenido en crisis presidenciales. La crisis se evidencia en los intentos del Congreso por remover del cargo al presidente[27]. De esa manera, se han presenciado constantes "caídas" o "rupturas" presidenciales en la escena política peruana: cuatro en los últimos seis años[28].

Parte de la literatura considera que existen elementos más importantes que la acción legislativa en las caídas presidenciales. Por un lado, Pérez-Liñán enfatiza la presencia de "coaliciones callejeras", haciendo referencia a la importancia de la protesta popular y los movimientos sociales. Por otro lado, Christopher Martínez[29] demuestra que niveles

---

22 Saiegh, S. M. 2015. Executive-Legislative Relations. En J. Gandhi & R. Ruiz-Rufino (Eds.), *Routledge Handbook of Comparative Political Institutions* (pp. 162-180). Routledge London.

23 Levitsky, S., & Zavaleta, M. 2019. *¿Por qué no hay partidos políticos en el Perú?* Lima: Planeta.

24 Zavaleta, M. 2014. *Coaliciones de independientes. Las reglas no escritas de la política electoral.* Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

25 Levitsky & Zavaleta, 2019. Ob. Cit. p. 16.

26 Carreras, M. 2014. Outsiders and Executive-Legislative Conflict in Latin America. *Latin American Politics and Society*, *56*(3), 70-92. https://doi.org/10.1111/j.1548-2456.2014.00241.x.

27 Pérez-Liñán, A. 2008. Instituciones, coaliciones callejeras e inestabilidad política: Perspectivas teóricas sobre las crisis presidenciales. *América Latina Hoy*, *49*, p. 109.

28 El conflicto también se aprecia a nivel ministerial. Durante el breve gobierno de Castillo (497 días), el Congreso presentó 28 procesos de interpelación ministerial, lo cual arroja un promedio de una interpelación cada 18 días.

29 Martínez, C. A. (2021). Presidential instability in Latin America: Why institutionalized parties matter. *Government and Opposition*, *56*(4), 683-704

bajos de institucionalización de los partidos políticos elevan los riesgos del fracaso presidencial[30].

En este contexto de conflicto Ejecutivo-Legislativo y de caídas presidenciales, la institución de la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral sufrió un proceso de cambio institucional gradual, pasando de ser una institución de control a un instrumento de obstrucción política que afecta la gobernabilidad. Según la tipología usada por Mahoney y Thelen, esto responde al cambio denominado "conversión". Este cambio se da cuando la institución presenta un alto nivel de discrecionalidad, y el contexto político ofrece a los actores posibilidades de veto débil. En el caso peruano, se observan ambas condiciones, tanto en el nivel institucional como en el político-contextual.

A nivel institucional, la vacancia por incapacidad moral se plantea como una ambigüedad jurídica, cuya causal es "indeterminada y difusa"[31]. Ni la Constitución, ni otras normas definen específicamente qué es incapacidad moral. En muchos casos, la solicitud de vacancia se aplica en contextos de investigación o supuestos que no determinan la culpabilidad del presidente. En ese contexto, la institución de vacancia presidencial por incapacidad moral posee un alto nivel de discrecionalidad. Esto permite que los agentes de cambio (Legislativo) aprovechen las ambigüedades inherentes a las instituciones[32].

Desde el contexto político, se aprecia que el presidente posee posibilidades de veto débil frente a los embates de la vacancia presidencial. El diseño institucional determina que la vacancia depende de la votación de los congresistas. En ese sentido, el veto solo es posible si el presidente logra reunir los votos congresales necesarios para evadir dicho proceso. La inexistencia de múltiples posibilidades de veto brinda las posibilidades para el cambio institucional[33]. Ello genera cambios impor-

---

30 La renuncia del expresidente Manuel Merino se dio tras una serie de protestas que ocasionó dos muertos. Con respecto a la institucionalización de partidos, Perú presenta valores por debajo del 0.4 (escala del 0 al 1) desde el 2016 hasta el 2022 según V-Dem.

31 García Chávarri, M. A. G. (2013). *La vacancia por incapacidad moral del presidente de la república.* [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú], p. 117.

32 Mahoney, J., & Thelen, K. 2010. Ob. Cit., p. 17.

33 Mahoney, J., & Thelen, K. 2010. Ob. Cit., p. 19.

tantes en el *statu quo* que comprometen la estabilidad política[34]. Las seis mociones de vacancia aceptadas a debate demuestran que el presidente no tuvo un apoyo parlamentario del 40 % para vetar la propuesta. Esto resalta la necesidad de un "escudo legislativo" que proteja al presidente frente al Congreso [35].

¿Qué tipos de actores son los que impulsan el cambio institucional? El cambio por conversión es impulsado por los "oportunistas"[36]. Ello se debe a que su conducta frente a la preservación y el cumplimiento de las instituciones es ambigua. Los oportunistas también se caracterizan por su predisposición a todo tipo de alianzas que les permitan modificar las instituciones según sus intereses. Estas alianzas pueden darse tanto con actores que defienden el *statu quo* como con aquellos que lo desafían.

La revisión de los tres procesos de moción contra Pedro Castillo muestra la tendencia de los oportunistas. Es el caso del partido Acción Popular, que no participó en las dos primeras mociones de vacancia. Así, el congresista Darwin Espinoza señaló que "…no podemos recurrir al facilismo de la vacancia como si fuera la panacea para resolver todos los problemas del país"[37]. Bajo un nuevo contexto, la bancada de Acción Popular decidió apoyar un nuevo proceso de vacancia presidencial, argumentando la permanente incapacidad moral del presidente. Esto demuestra que la institución de la vacancia no está exenta de las disputas de poder.

Conclusiones

La vacancia presidencial por incapacidad moral en Perú es una institución cuestionada desde el ámbito jurídico; sin embargo, su empleo se incrementó en los últimos años. Su existencia se justifica por su rol en el sistema de frenos y contrapesos. Por ende, cumple un papel im-

---

34 Tsebelis, G. 2006. *Jugadores con veto. Cómo funcionan las instituciones políticas*. México: Fondo de Cultura Económica, p. 213

35 Pérez-Liñán, A. 2008. Ob. Cit., p. 126.

36 La conversión también se asocia con los agentes de cambio denominados "mutualistas", dado que, suelen utilizar las reglas existentes de formas diferentes para satisfacer sus intereses (Mahoney & Thelen, 2010, p.24).

37 Ver su declaración en: https://twitter.com/DarwinEspinozAP/status/1461388856536748034.

portante en el fortalecimiento de la democracia. No obstante, los casos recientes demuestran que los fines perseguidos son contrarios a los que establece la norma, e incluso a los ideales democráticos. En ese sentido, se demostró que la institución de la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral atraviesa un cambio institucional gradual por "conversión". Este tipo de cambio surge como resultado de la ambigüedad en la norma, la debilidad del veto presidencial y del conflicto Ejecutivo-Legislativo presentes en Perú. De esa manera, los agentes de cambio "oportunistas" han convertido este mecanismo de control en una institución que responde a objetivos políticos coyunturales o de intereses partidistas que pugnan por el poder.

Golpe y contragolpe del 7 de diciembre de 2022

Ricardo Licla Meza

"Busco a Huamanga"[1] es una de esas piezas musicales que trastoca nuestras fibras de dolor histórico:

¿Por qué Huamanga desangras tanto?
¿Por qué permites tanto llanto?
¿Qué cruel designio estás pagando
con tantas muertes e injusticias?
Miran mis ojos despavoridos
muchos hogares enlutados,
de un día a otro ya no te encuentro
ya quedan pocos huamanguinos,
no encuentro más ayacuchanos.

Estas letras expresan muy bien el sentir de lo acontecido el jueves 15 de diciembre de 2022, al que los ayacuchanos denominamos "Día de la masacre". A la fecha, a nivel nacional, se reportaron cientos de heridos y 49 asesinados por balas y perdigones: Ilave (1), Juliaca (18), Macusani (2), Cusco (2), Cerro Colorado (2), Chala (1), Iscahuaca (1), Andahuaylas (5), Chincheros (1), Ayacucho (10), Lima (1), Pichanaqui (3) y Chao (2)[2].

El presente artículo intenta responder algunas preguntas: ¿qué sucedió en el Perú el 7 de diciembre de 2022? ¿Cuáles son las posibles causas de la decisión de Castillo? ¿Cuál fue el papel de la población y del actual régimen desde el 7 de diciembre de 2022? Finalmente, ¿cuáles son los rasgos

1 Pieza musical atribuida a Kalamarca y César Romero Martínez.

2 Human Rights Watch. 2023. *Deterioro Total: Abuso por las fuerzas de seguridad y crisis en el Perú*: https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2023/05/peru0423sp%20web.pdf.

del actual régimen de Dina Boluarte? Para ello, dividimos nuestro escrito en cuatro momentos y culminamos con algunas posibles conclusiones.

1. Golpe del Ejecutivo

Hace más de tres décadas que nos hallamos bajo el yugo del neoliberalismo; asimismo, en los últimos seis años (2016-2022) batimos el *récord* de seis presidentes: Pedro Pablo Kuczynski Godard, Martín Alberto Vizcarra Cornejo (ambos postularon con Peruanos por el Kambio), Manuel Arturo Merino de Lama (Acción Popular), Francisco Rafael Sagasti Hochhausler (Partido Morado), José Pedro Castillo Terrones y Dina Ercilia Boluarte Zegarra (Perú Libre).

Pedro Castillo, luego de 16 meses de gobierno (2021-2022), optó por un "golpe de Estado" fallido e inconstitucional el miércoles 7 de diciembre de 2022. Este golpe del Ejecutivo fue fallido porque no contó con ningún apoyo militar, menos con el apoyo de las otras esferas del Estado. El golpe castillista es inconstitucional, porque violentó los artículos 117 y 134 de la actual Constitución del 93; una Constitución espuria que debe ser cambiada, sin embargo, es la que nos rige actualmente.

¿Qué pasó con Castillo aquella mañana para que intente un golpe si los vacadores no contaban con los 87 votos necesarios? A estas alturas la respuesta está más clara, aunque incompleta. De hecho, se ha conjeturado mucho sobre las causas que habrían llevado a Castillo a tomar aquella fatídica decisión. Veamos, muy brevemente, algunas conjeturas y causas ensayadas hasta el momento:

a) *Castillo fue coaccionado y "drogado"*. La posible coacción de Castillo se explica desde nuestra condición de sociedad dominada por el imperialismo norteamericano; por tanto, la CIA habría estado detrás de todo. Los que sostienen esta conjetura (en su mayoría castillistas) aluden a las reuniones del exjefe de la DINI (José Fernández Latorre) con agentes de la CIA, así como a la participación de Lisa Kenna, exagente de la CIA y exjefa de la embajada norteamericana. Los "más allegados"[3] sostienen que

3 Vladimir Cerrón en un artículo titulado "Evaluación al primer gobierno de izquierda"

Castillo fue drogado. Por eso, habría leído el mensaje temblorosamente. Ambas conjeturas no resisten a un análisis básico, porque si hubiera sido coaccionado ya tuvo tiempo suficiente como para denunciar que fue obligado o amenazado; y si hubiera sido "drogado" habría aceptado en su momento hacerse las pruebas respectivas para corroborar dicha conjetura.

b) *Castillo fue mal asesorado.* Los defensores de esta conjetura sostienen que, por un lado, Castillo fue mal aconsejado por quienes tenían la intención de "hacerle pisar el palito" (trampa para acabar con su gobierno), porque el 2023 se vencerían algunos contratos ley a los que Castillo habría puesto la puntería. Mal asesorado "por sus allegados", Castillo habría creído, ingenuamente, que su golpe sería apoyado no solo por los militares, sino por la población que pedía a gritos el cierre del Congreso. La primera parte de esta conjetura no tiene sentido si consideramos que Castillo siguió en la misma línea de los gobiernos neoliberales que se proclaman defensores de una economía social de mercado[4]; por tanto, no constituía un peligro real para la posible renegociación de los contratos ley. Tampoco se condice con la realidad aquello de que este año (2023) venzan dichos contratos. Lo que sí resulta más plausible, es la segunda parte de la conjetura, esto es, el autoengaño cándido. Por su impericia en el juego de la política, Castillo, cándidamente, habría creído que los militares y la población saldrían para apoyarlo inmediata-

(27/12/2021), sostuvo: "Ahora, no podemos culpar de todas las desgracias a los caviares, debemos analizar los círculos de confianza e influencia que rodean al presidente en orden de prioridad; son seis. Primero, los familiares sobrinos; segundo, el sindicato; tercero, los chotanos; cuarto, los caviares; quinto, los partidos derechistas; y sexto, Perú Libre": https://web.facebook.com/photo/?fbid=468663551286013&set=a.434454144706954. Sin embargo, los más allegados en la esfera pública fueron Aníbal Torres Vásquez y Betssy Betzabet Chávez Chino. Y quien insinuó que Castillo habría sido drogado fue el congresista Guido Bellido Ugarte. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=Xd-vEzqtAH-o.

4 Basta recordar parte del mensaje de Castillo el 7/12/2023: "En este interregno, tal como lo hemos venido pregonando y haciendo desde el inicio, se respeta escrupulosamente el modelo económico basado en una economía social de mercado que se sustenta en el principio que señala tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario" (CIDH, 2023, p. 28).

mente. Quizá por ello, sus "más allegados", habrían maquinado asilarlo en México en caso de que no funcionase el plan.

c) *Castillo no tenía la certeza de los votos en contra de su vacancia.* Esta conjetura es improbable, porque las diversas bancadas (entre ellas la de Perú Libre) ya habían expresado abiertamente sus votos contra la tercera vacancia. Los votos a favor llegaban a 84 de los 87 que se requerían. Además, junto con su equipo de defensa, Castillo ya tenía planificado asistir al Congreso. La prueba está en el discurso (que es de conocimiento público) preparado por su entonces asesor Luis Mendieta. Este hecho fue confirmado por su exabogado Benji Espinoza. Cosa semejante sucedió con las *ayudas memoria* de muchos congresistas que estaban listos para disertar en contra del tercer intento de vacancia de los ultraconservadores[5].

d) *Pánico por las revelaciones de los colaboradores eficaces.* El término "pánico" proviene del griego *"panikós"* en honor al dios *Pan* que, por su apariencia (mitad humano y mitad animal con cuernos)[6], generaba un "temor enloquecedor". Si relacionamos esto con los hechos, tenemos que el martes 6 de diciembre de 2022, el exdirector de la DINI, José Fernández Latorre, hizo revelaciones comprometedoras contra Pedro Castillo. Al día siguiente, en horas de la mañana, en la Comisión de Fiscalización del Congreso, Salatiel Marrufo Alcántara (exjefe del Gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda y Construcción) manifestó, por primera vez, que había entregado directamente a Castillo una bolsa de papel que contenía 100 mil soles correspondientes a los meses de abril y mayo de 2022. Es decir, el exministro de vivienda, Geiner Alvarado (junto con Salatiel Marrufo), habrían pagado mensualmente 50 mil soles para que se mantengan en el cargo del Ministerio de Vivienda. De ser cierta

5 Recordemos que Castillo ya había superado dos mociones de vacancia, una a finales de 2021 y otra en marzo de 2022.

6 Maquiavelo, en el cap. XVIII de *El Príncipe*, alude a la metáfora del centauro de Quirón ("mitad bestia y mitad hombre") para explicar la importancia de que el príncipe debe saber conjugar el buen uso de las leyes y la fuerza.

esta versión, explicaría con mayor verosimilitud la actitud de nerviosismo y pánico de Castillo a la hora de plantear su golpe fallido e inconstitucional.

Hasta el momento, solo Castillo sabe las verdaderas razones que lo llevaron a tomar aquella decisión adjetivada desde "estúpida" hasta "irreverente". Aun cuando Castillo rompa su silencio sobre el tema en algún momento, sus afirmaciones estarán cubiertas siempre de un manto de duda, porque de por medio estará su libertad más que la verdad. Entonces, por ahora, quizá estamos condenados a conocer solo la apariencia y no lo real de lo ocurrido aquel mediodía del 7 de diciembre de 2022.

2. Contragolpe del Legislativo

¿Por qué se concretó la vacancia de Castillo? Hasta antes del 7 de diciembre de 2022, el Congreso argumentaba sus mociones basándose en la "permanente incapacidad moral". Sin embargo, la vacancia solo fue posible cuando en el Legislativo postularon una nueva causal: "por disolver el Congreso". Esta fue la excusa perfecta que Castillo les regaló a los 101 congresistas que votaron por su vacancia. A estas alturas de lo sucedido es muy discutible que el Congreso haya seguido el debido proceso para vacar a Castillo. Esta afirmación no nos convierte necesariamente en castillistas; pero sí consideramos que cualquier persona tiene todo el derecho al debido proceso.

Veamos en detalle las causales para vacar a un presidente de forma constitucional. Según el artículo 113 de la actual Constitución, la vacancia del presidente procede por cinco causales:

1. Muerte del presidente de la República.
2. Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso.
3. Aceptación de su renuncia por el Congreso.
4. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado.

5. Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución.

Y ¿qué dice en el artículo 117? Veamos:

> El presidente de la República solo puede ser acusado, durante su periodo, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales, o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral[7].

Con base en los artículos 113 y 117 de la Constitución, podemos notar que la vacancia de Castillo fue por "su permanente incapacidad moral" (causa I) y no "(…) por disolver el Congreso" (causa II). Así lo reafirma la resolución emitida por el Congreso (001-2022-2023-CR) el mismo 7 de diciembre de 2022. Claro, la justificación de este indebido proceso la encontramos en el artículo 46: "nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes".

A los "legalistas"[8], o a quienes pretenden confundir a la población al tomar las causas I y II como equivalentes, habría que reiterarles que la vacancia fue por la causa I y no por la causa II; por tanto, estamos frente a dos causales diferentes que no siguieron el debido proceso. El solo hecho de adelantar el horario del pleno del Congreso de 3: 00 p.m. a 12: 00 p.m. aquel miércoles, implica no seguir el debido proceso, pues, se está infringiendo el artículo 89 A, literal C, del Reglamento del Congreso (2022):

---

7 Congreso de la República del Perú. 2017. *Constitución política del Perú*. Lima: Congreso de la República: https://www.congreso.gob.pe/Docs/files/documentos/constitucionparte1993-12-09-2017.pdf.

8 Hubo congresistas consecuentes que siempre estuvieron en contra de la vacancia de Pedro Castillo; pero, el mismo 7 de diciembre, dieron un viraje en su voto. Llamó la atención el caso del congresista ayacuchano, Alex R. Flores Ramírez, quien a pesar de "admirar" el gobierno de Juan Velasco Alvarado dio la siguiente justificación sobre su voto: "(…) siendo coherente con mis convicciones democráticas no puedo avalar los golpes de Estado venga de quien venga. No soy de los que acomodan su postura de acuerdo con las circunstancias. He esgrimido la defensa de la voluntad popular dentro del respeto del orden constitucional" dijo en un pronunciamiento: https://web.facebook.com/AlexFloresR/videos/495449595910257/.

> El pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia, sesión que no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido ni después del décimo día, *salvo que cuatro quintas partes del número legal de congresistas acuerden un plazo menor o su debate y votación inmediata*. Si fuera necesario se cita, para este efecto, a una sesión especial. *El presidente de la República, cuya vacancia es materia del pedido puede ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por un letrado, hasta por sesenta minutos*[9].

En otros términos, para cambiar de horario, debatir y votar inmediatamente se requiere de 104 votos a favor (ese día solo hubo 101); además, nunca se debatió lo que se afirma en la resolución del Congreso antes aludida (001-2022-2023-CR): "Que el Pleno del Congreso en la sesión de la fecha, luego del debate y votación correspondiente, ha adoptado el siguiente acuerdo en salvaguarda del orden constitucional y el estado de derecho". Esta afirmación es una mentira histórica, porque nunca hubo debate y muchos congresistas, posiblemente, hayan sido sorprendidos por su impericia política y jurídica. Además, recordemos que ese día los congresistas recién volvían de la semana de representación; por tanto, la mayoría no tuvo tiempo para analizar el mensaje de Castillo.

¿Cómo debió proceder el Congreso para que no se lo cuestione por no seguir un debido proceso? La respuesta está en la Constitución y en el Reglamento del Congreso; pero, no está demás considerar la afirmación de un entendido en esta materia, Guido Leonardo Croxatto:

> A Castillo primero lo detienen, y, luego, lo vacan. Esto quiere decir que era presidente cuando lo detienen en forma inconstitucional, violentando el debido proceso. Castillo es detenido a las 13: 42 y recién a las 13: 52, es decir, diez minutos más tarde, y no antes, como hubiera correspondido, se firma la resolución de vacancia por permanente "incapacidad moral", con 101 votos a favor. No era la figura constitucional que correspondía. Y tampoco se aplicó respetando los pasos procesales establecidos. Este

9 Congreso de la República del Perú. 2022. *Reglamento del Congreso de la República*. Lima: Congreso de la República: https://www.congreso.gob.pe/Docs/biblioteca/files/reglamento/reglamento-02-2022.pdf. Las cursivas son nuestras.

> (doble) incumplimiento vuelve irregular la vacancia y la detención "preventiva".
> Existe otra figura específica para el caso (acusación constitucional por infracción), pero el Congreso prefirió una vacancia "exprés", instrumentada, a su vez, en forma inconstitucional. Prefirieron hacer todo "rápido", pensando que se podía destituir de cualquier forma a un presidente. Y no es así. Hay procedimientos que deben ser respetados (2023, p. 12)[10].

César Hildebrandt también hizo énfasis en que, este modo de proceder ha generado una pésima reputación del Perú a nivel internacional:

> No es una conspiración internacional. Es que el Perú tiene ahora una pésima reputación. La ONU, la OEA, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Unión Europea, el Departamento de Estado de los Estados Unidos piensan lo mismo: el Perú es un país donde la justicia está contaminada de política, la política está infectada de crímenes diversos y el respeto por las instituciones ha dejado de existir (2023, p. 16)[11].

A esto habría que añadir que los actuales presidentes de Bolivia, México, Colombia y Argentina no reconocen a Dina Boluarte como presidente legítima del Perú.

3. Terrorismo de Estado cívico-militar

Tras la destitución de Castillo, la vicepresidenta Dina Boluarte[12] asumió el gobierno a pesar de que muchas veces manifestó que, si al presidente lo vacaban, ella se iría con él. Antes de la navidad de 2022 ya se registraban

---

10 Croxatto, G. 2023. "Lo que sucede en Perú es grave". *Hildebrandt en sus trece* (21/04/2023). Actualmente, Croxatto, es uno de los abogados de Pedro Castillo.

11 Hildebrandt, C. 2023. "Mala reputación". Hildebrandt en sus trece (21/04/2023).

12 En un artículo de Henry Ayala Abril "Buscando a un vicepresidente: las listas presidenciales peruanas en perspectiva", publicado en *Elecciones 2021. Pandemia, crisis y representación* (2022), se afirma: "El Perú mantiene un sistema de dos vicepresidencias elegidas en el mismo ticket que el presidente de la República, fórmula que solo comparte con Costa Rica, Burundi y, hasta el 2004, con Panamá. El origen de esta disposición proviene de la Constitución Política de 1860, en la cual se agregó una segunda vicepresidencia por temor a nombrar al presidente del Congreso dentro de la sucesión constitucional, al no tener la legitimidad electoral para tal tarea (Congreso de la República, 1860). A partir de la vigencia de dicha Constitución, la segunda vicepresidencia se contemplaba para la inmediata convocatoria a elecciones, mas no para concluir el mandato presidencial" (2022, p. 170).

28 fallecidos (entre ellos, 5 menores de edad), 356 civiles y 290 policías heridos a nivel nacional. En este escenario, Juliaca y Ayacucho fueron los pueblos más golpeados por la brutal represión del actual régimen.

Según el informe de *Human Rights Watch*, en la región de Apurímac:

> Tres jóvenes, de 18 y 19 años, y dos varones, de 15 y 16 años, murieron a [por] causa de las heridas que sufrieron entre el 10 y el 12 de diciembre de 2022, en la provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac. Las autopsias indicaron que tres murieron por heridas de bala y un reporte médico indica que un cuarto murió "por probable arma de fuego". Al momento de la redacción de este informe, la autopsia del quinto se encontraba pendiente. Más de 55 personas resultaron heridas, algunas de ellas de bala (p. 63).

Mientras que "siete hombres y un niño de 15 años murieron el 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho, y otros dos hombres murieron a causa de las heridas en los días siguientes, todos ellos por heridas de bala causadas por armas de fuego, según las autopsias. Al menos 72 civiles resultaron heridos. Diez policías y militares resultaron con heridas leves" (p. 56). En cambio, en la región de Puno (Juliaca):

> Tras varios días de protestas, el 9 de enero de 2023 la Policía hizo uso indiscriminado de la fuerza contra los manifestantes, lo que provocó la muerte de 18 manifestantes y transeúntes, entre ellos tres menores de 18 años y siete jóvenes de entre 18 y 22 años, según testimonios recogidos por Human Rights Watch, registros médicos, autopsias, videos y fotografías. Las autopsias muestran que, al menos, 15 murieron por disparos y tres por perdigones. Más de 100 personas resultaron heridas (p. 52).

En pleno siglo XXI estamos siendo víctimas del terrorismo de un Estado cívico-militar[13]. Es terrorismo de Estado, porque genera zozobra

---

13 En el informe de la CIDH se concluye lo siguiente: "En términos generales, la Comisión observa que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos. En efecto, de la información recibida en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza" (CIDH 2023, p. 100). Además, sobre el caso específico de Ayacucho, menciona: "En el caso concreto de Ayacucho, se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir

y violencia contra la población que hace uso legítimo de su derecho a la protesta. Es un Estado cívico-militar, porque el gobierno de Boluarte no cuenta con el apoyo más que de los militares como el primer círculo de protección. Los otros círculos de protección lo constituyen las otras esferas del Estado (Congreso, Fiscalía, etc.), el poder mediático ("prensa mermelera") y los grupos de poder económico.

Dina Boluarte es una abogada quechuahablante de origen andino; sin embargo, en la práctica no solo ha traicionado su identidad y al partido con el que ha llegado al gobierno, sino que ha sido totalmente desleal con el gobierno de Castillo. Pero, lo más indignante es que se ha puesto del lado de ese sector social que siempre la despreció por su origen y por lo que alguna vez intentó representar. Entonces, se reafirma una vez más una tesis clásica, según la cual "no importa en qué cuna se nazca, sino con qué clase social nos identificamos"[14].

4. La reacción popular

Frente al golpe y contragolpe descrito hasta aquí, la población participó activamente en las diversas jornadas de lucha contra el actual régimen ilegítimo. Según la Defensoría del Pueblo, se registró 1327 protestas entre el 7 de diciembre de 2022 y el 20 de febrero de 2023, en las que miles de personas participaron pacíficamente. Sin embargo, también, informó de 153 incidentes de violencia en las protestas[15].

Estas jornadas de lucha tuvieron dos momentos hasta la fecha. Si bien es cierto que las protestas se activaron en diciembre, la primera oleada (o primera toma de Lima) fue en enero de 2023. Esta primera jornada se caracterizó por ser emotiva, espontánea, desarticulada y has-

---

ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre." (CIDH 2023, p. 101).

14 Solo para precisar, a la fecha, tanto Dina Boluarte como Pedro Castillo no pertenecen al Partido Político Nacional Perú Libre. Boluarte fue expulsada en enero de 2022 y Castillo fue "invitado" a renunciar a fines de junio de 2022.

15 Defensoría del Pueblo. 2023. *Crisis política y protesta social: Balance defensorial tras tres meses de iniciado el conflicto (Del 7 de diciembre de 2022 al 6 de marzo de 2023)*. Lima: Defensoría del Pueblo.

ta acéfala. La segunda oleada se inició el jueves 2 de marzo. Esta jornada de lucha siguió siendo afectiva (no podía ser de otra manera, pues los sentimientos de indignación siguen latentes), pero más racional, mejor articulada y hasta policéfala (en la medida en que más de una organización intentaba encabezar las marchas)[16]. La tercera toma de Lima está programada para el 19 de julio de 2023. ¿Será el fin o la consolidación de un régimen camino a una dictadura fascista?

Desde el 7 de diciembre de 2022 la mayoría de los eventos públicos y festividades están marcados por actos de protesta creativos y simbólicos. Un claro ejemplo es lo acontecido durante los carnavales y la semana santa en Ayacucho. Sobre el primero, los carnavales, veamos algunos pasajes musicales que muestran el sentido del carnaval ayacuchano de este año (2023).

1. "Policía, policía / asesino policía / paradito en la esquina / se lo lleva facilito. En la ciudad bacancito / en el VRAEM se orinan/ esa es nuestra policía/ enemigo de su pueblo" (en LA menor).
2. "15 de diciembre, sangre derramada / a manos de tombos de "Vine a Balearte" / de "Vine a Balearte" (bis). "Padres y madres lloran la ausencia del hijo (bis) / que entregó su vida por un cambio justo/por un cambio justo" (en DO mayor)[17].

En la Semana Santa (al que muchos colectivos denominaron "Semana no tan Santa") no se hicieron esperar las alfombras en homenaje a los caídos: "NO MATARÁS, 15 DIC. 2022". A esta manifestación artística se sumó la demanda de la libertad de sus dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA). Cabe precisar que el FREDEPA es una organización popular que articula a diversas organizaciones sociales políticas y no políticas, cuyos objetivos son comunes,

---

16 Hasta la fecha se constituyó el Comité Nacional de Lucha de las Regiones del Perú y el Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú (CONULP). El primero, intenta articular con las diversas organizaciones regionales mas no a los partidos políticos, por estar deslegitimados; mientras que el segundo articula con las diversas organizaciones regionales, además de los partidos políticos. Sin embargo, ambas organizaciones se hallan atravesadas por el bloque castillista que exige su reposición.

17 Cabe resaltar que la comparsa con mayor acogida (a pesar de la intensa lluvia de esos días) durante los carnavales en la ciudad de Huamanga–Ayacucho fue la de los "Guerreros Wari" que articuló a diversas organizaciones: "Ayacucho Toma las Calles", "Artistas Unidos", "Rimay", "Colectivo Feminista", "FREDEPA", "Perú Libre", etc. (las letras de las coplas fueron tomadas de nuestro archivo personal).

pero al mismo tiempo cada organización conserva su identidad y autonomía. Fue fundado el 13 de abril de 1966; por tanto, cualquier pretensión de vincularlo con grupos terroristas solo busca estigmatizar las protestas sociales, tal como se muestran en las conclusiones de la CIDH:

> La CIDH constató un deterioro generalizado del debate público con una fuerte estigmatización por factores étnico-raciales y regionales, mediante mensajes que aluden a las personas indígenas y campesinas como 'terroristas', 'terrucos', 'senderistas', 'cholos' o 'indios', entre otras formas despectivas. Estos mensajes no son inocuos, por el contrario, contribuyen a la creación de un ambiente de permisividad y tolerancia hacia la discriminación, estigmatización y violencia institucional en contra de esta población (p. 101).

Conclusiones

1. En Perú hubo un golpe fallido y un contragolpe ilegal el 7 de diciembre de 2022. Esta pugna por el poder entre un Ejecutivo, que aparentó encarnar los intereses de las mayorías, y un Legislativo que, en su mayoría, siempre tuvo claro los intereses que defiende, ha agudizado las malas condiciones de vida de la mayoría de los peruanos.
2. A la fecha se ha ensayado más de una conjetura sobre las motivaciones para el intento de golpe castillista; sin embargo, la más probable se vincula a su afán de sobrevivir políticamente al verse delatado en actos de corrupción: pánico y manotazo de ahogado.
3. La población peruana se halla en una lucha constante por derrocar al actual régimen; pero, al mismo tiempo, sufre las graves violaciones de sus derechos fundamentales por parte del actual régimen ilegítimo, al igual que la mayoría de nuestras instituciones.
4. Actualmente el Perú vive bajo un régimen cívico-militar. En pleno siglo XXI, se ha impuesto un gobierno cívico-militar totalmente ilegítimo que empieza a consolidarse como una dictadura fascista de nuevo tipo.

La protesta como derecho en el actual escenario de lucha popular

Víctor Alfonso Otoya Jiménez

La protesta como un fenómeno social

El fenómeno de la protesta ha adquirido en los últimos meses una importancia cardinal en el debate nacional; sobre todo, a partir de los hechos que se registraron en el país desde el 7 de diciembre de 2022, día en que el expresidente Pedro Castillo fue vacado. El pueblo organizado se volcó a las calles para protestar. En un primer momento, contra una vacancia que consideraron injusta y un régimen instalado que les resultaba ilegítimo para, posteriormente, agitar consignas como la renuncia de Dina Boluarte, nuevas elecciones y el inicio de un proceso constituyente que desemboque en la elaboración de una nueva constitución. Todo ello, en el marco de una feroz represión que no se veía desde hace décadas en el país, y que ha dejado cerca de un centenar de asesinados y más de mil heridos. Hasta la fecha, ninguna autoridad responde ante la justicia por los muertos, pese a las denuncias nacionales e internacionales de sistemáticas violaciones a los derechos humanos que incluyen presuntas ejecuciones extrajudiciales.

En este ensayo busco reflexionar sobre la protesta como un fenómeno social. Analizo las dos últimas décadas; sin embargo, pongo especial interés en las que se iniciaron el 7 de diciembre de 2022. Como tesis principal planteo que las protestas han ido adquiriendo características particulares a lo largo de este tiempo hasta devenir, en estos últimos meses, en un auténtico avance para el movimiento popular, en tanto se ha elevado el grado de conciencia de sus luchas, plasmado sobre todo en el paso de las consignas inmediatas hacia una lucha política de alcan-

ce general que, seguramente, tendrá importantes consecuencias en los próximos años.

La Constitución del 93 y la protesta. Un abismo jurídico, político y social

Cualquier proceso o fenómeno jurídico-social que no sea analizado en función del contexto económico y político en el que se desenvuelve, termina configurando un ejercicio estéril e improductivo; además, les hace el juego a posiciones reaccionarias que, descontextualizando los hechos, presentan un escenario simplista de los procesos y fenómenos. Con ello, no se hace otra cosa que propagar ideas que legitiman el retroceso de derechos como la protesta en el escenario actual.

Para contextualizar la protesta de los últimos meses, parto desde el marco constitucional dentro del cual se ha llevado a cabo; desde allí, me interesa analizar cómo, este marco legal, influye en las demandas por los cambios que la población exige, y cómo termina condicionando la respuesta estatal. Es decir, busco comprender las protestas como un fenómeno dentro de un sistema jurídico y de un contexto social.

La Constitución de 1993 es un documento normativo, hija de un contexto internacional y nacional, marcado por profundos cambios sociales. Nace en el contexto de la caída del "bloque socialista" en el mundo; la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas (URSS) y la "victoria final" del capitalismo que aprovechó para vender el cuento de que la implosión del modelo "socialista" era un triunfo suyo y, por tanto, estábamos ante un elemento histórico que legitimaba su profundización y recrudecimiento a escala global en clave de lo que hoy denominamos *neoliberalismo*.

Es en este escenario, supuestamente victorioso, Estados Unidos pudo expandir esta visión neoliberal de la economía, cristalizada en el denominado *Consenso de Washington* como políticas económicas para implementar el neoliberalismo que tuvo su apogeo en nuestro país durante los 90. En ese momento, además, el Perú vivía circunstancias específicas de carácter estrictamente nacional, pero determinantes. Por un

lado, una gran crisis económica y, por otro, un conflicto armado interno; se trataba de una situación donde nuestro país "parecía al borde del abismo. Terrorismo, inflación, narcotráfico y pobreza extrema eran como los cuatro jinetes de un apocalipsis bíblico" (Contreras y Cueto, p. 380)[1].

El contexto resultó propicio para la imposición de un modelo económico determinado por las élites políticas y económicas del país. Ellas, naturalmente, requerían de un aparato jurídico que consolide su dominación. Este andamiaje jurídico se plasmó en la Constitución de 1993. Por tanto, este documento retrata una correlación de fuerzas externas e internas en un momento concreto de nuestra historia que le permitió imponerse a pesar los cuestionamientos sobre su origen.

La Constitución fujimorista, además de implementar un capítulo económico de acuerdo con el modelo neoliberal, también representó, en materia de reconocimiento de derechos, un retroceso. Acabó, relativizó o recortó distintos derechos, sobre todo de carácter social, como en el ámbito laboral y de la educación, entre otros. En este escenario de recorte de derechos, supervivieron derechos civiles como el de la libertad de expresión, de reunión o de pensamiento, pero no se reconoció expresamente un derecho a la protesta. Tuvo que pasar casi tres décadas para que, recién en el 2020, el Tribunal Constitucional lo reconociera en su jurisprudencia, aunque de forma confusa y sin un consenso sobre su contenido.

Desde el punto de vista constitucional, la mayor parte de las veces, los casos relacionados con escenarios de protesta han sido enfocados como parte del ejercicio de otros derechos, como la libertad de reunión o expresión; pero, desde el punto de vista penal, se le ha enfocado claramente desde una visión criminalizadora que no atiende a las razones de fondo que llevan al pueblo a manifestarse. Tampoco se individualizan los casos de violencia de quienes protestan; por el contrario, se tiende a la estigmatización de quien protesta sin distinción y al desprecio por sus demandas.

1 Contreras Carranza y Marcos Cueto. 2013. *Historia del Perú Contemporáneo. Desde las luchas por la Independencia hasta el presente*. Lima: IEP-PUCP-Universidad del Pacífico, 2013.

La estigmatización no es un hecho casual, es la consecuencia directa de un aparato institucional forjado para la perpetuación del modelo económico y político reconocido en la Constitución de 1993. Sin embargo, y pese a estas circunstancias adversas, las protestas se desarrollaron con características particulares durante las tres décadas de vigencia de la Constitución actual.

La protesta en el Perú antes del 7 de diciembre de 2022

La protesta es parte de la vida política del país desde el inicio de nuestra independencia política en 1821. En esta trayectoria, su aparición o permanencia ha estado relacionada con las injusticias contra la población, como las desigualdades sociales y las violaciones contra los derechos humanos. No obstante, las características de la protesta están marcadas por las condiciones políticas, económicas y sociales específicas de cada periodo de nuestra historia. Es decir, son las condiciones sociales y los conflictos de cada época las que influyen para su performance, contenidos y consignas.

Según la Defensoría del Pueblo, un conflicto social representa "una confrontación pública entre actores que buscan influir en la organización de la vida social"[2]. Se trata, entonces, de un modo de relacionarse con base en posiciones opuestas en el marco de un contexto de poder entre el Estado y los ciudadanos, aunque también puede darse entre agentes privados y ciudadanos. Lejos de ser un problema *per se*, el conflicto dinamiza la sociedad, promueve los cambios sociales, etc.

El conflicto no es una apuesta o reacción moral frente a las injusticias; está imbuido dentro de un campo de batalla en donde se disputa el poder político. Es un mecanismo que usan las clases dominadas para remecer los intereses de sectores sociales dominantes y privilegiados, y reclaman los propios. Representa, entonces, una acción política y, en algunos casos, ideológica, a pesar de que los actores no sean conscientes de ello.

---

2 Defensoría del Pueblo. 2005. *Informe sobre conflictos sociales*. Lima: Defensoría del Pueblo.

Asimismo, existen situaciones en las que los actores en lucha, dentro de un conflicto social, adquieren una identidad colectiva que subyace a su accionar consciente para el logro de determinados objetivos de carácter colectivo. En ese momento, estamos frente a un movimiento social; un salto cualitativo que va más allá de una reivindicación concreta, pues articula demandas que conllevan a acciones colectivas estratégicas.

Una vez elevada su lucha, los actores buscan disputar el poder político y exhiben el sentido de sus acciones frente a la opinión pública, planteando puntos de vista sobre sus demandas y buscando una buena recepción en las masas. Sin embargo, no hay que perder de vista que los movimientos no son necesariamente progresistas o reivindicativos, pues, puede darse el caso de movimientos sociales reaccionarios, aunque no constituyen la regla en países como el nuestro.

En las últimas décadas, se ha registrado conflictos sociales con diferente connotación e intensidad que no se detuvieron ni siquiera cuando el COVID-19 arrasaba con cientos de miles de vidas humanas. Según la Defensoría del Pueblo, solo en junio de 2020 (pico de la primera ola) había en curso 190 conflictos sociales en Perú, 140 de los cuales estaban activos. De estos, 115 habían llegado a algún acto violento. Más de la mitad de los conflictos en etapa de diálogo había registrado hechos de violencia. La estadística se asemeja a lo que se vivía hace dos décadas; y, además, existe un factor que los une: más de la mitad de los conflictos se presentan en áreas rurales y lugares de pobreza (80 %).

Por mencionar solo algunos ejemplos emblemáticos tenemos: Ilave en 2004, durante el gobierno de Alejandro Toledo; el Baguazo en 2009, durante el gobierno de Alan García; Conga en 2011, durante el gobierno de Ollanta Humala; Tía María 2015 y 2019 (este conflicto se inició en 2009 y sigue latente); el paro agrario de 2020 durante el gobierno de Sagasti, entre muchos otros.

En todos los conflictos anteriores, existe una característica que se repite: tuvieron demandas acotadas a reivindicaciones específicas, referidas a políticas públicas concretas y propias del lugar en el que se produjeron. Es decir, estamos ante protestas sectoriales y, aunque en algu-

nos casos hubo determinados niveles de articulación a escala geográfica, como sucedió en el conflicto de Tía María en 2015, que recibió el apoyo de la población movilizada en Lima y Arequipa, no logró desembocar en un movimiento social nacional que pudiera elevar las consignas de lucha y demandas específicas en una apuesta por cambios integrales del modelo económico, político y social.

La imposibilidad de un cambio de escala en la protesta social de las últimas décadas responde a la correlación de fuerzas existentes en el país y a las condiciones estructurales de recorte sistemático de derechos sociales que ha debilitado al movimiento sindical, estudiantil, entre otros. Si a ello sumamos la labor de propaganda de los medios de comunicación masivos en contra de cualquier forma de organización social a la que reducen y estigmatizan como revoltosa, en algunos casos, y en abierto *terruqueo* en otros, el asunto se vuelve más complejo.

Pero el modelo neoliberal, a tres décadas de su implementación, ha demostrado claramente ser inviable e incapaz de traer desarrollo económico y bienestar a las mayorías del país. Esto quedó al desnudo durante el desgarrador escenario de los efectos de la pandemia que evidenciaron el paupérrimo sistema de salud, además de las graves deficiencias en el sistema educativo y un largo etcétera.

En medio de un escenario catastrófico llegaron las elecciones de 2021 en donde sale victorioso Perú Libre y su candidato Pedro Castillo, quien enarbolaba propuestas de cambio como una nueva Constitución Política, una vuelta de timón en el régimen económico, la renegociación de contratos lesivos contra el país, entre otras. Si bien Castillo generó grandes expectativas, tuvo todo el aparato institucional y económico neoliberal en su contra, lo que, sumado a sus errores de gestión y falta de orientación política para construir una correlación favorable a su proyecto, terminó por congelar cualquier medida real de cambio, más allá de algunos tímidos intentos en áreas específicas como el sector laboral.

A pesar de todo, y contra todo, Castillo se mantuvo con una aprobación de 30% hasta el final de su gobierno. Esto demostraba una fuerte identificación de la población, sobre todo andina-rural con el presiden-

te. Por ello, se discutía sobre las posibles respuestas de la población si Castillo fuera sacado del poder abruptamente. Se ensayaron respuestas para todos los gustos. Estaban las que afirmaban que el país lo celebraría por haberse "liberado del comunismo", pero también había quienes, cual heraldos negros, avizoraban una convulsión social. Y no faltaron quienes sostenían que ese escenario de movilización social sería el camino para una nueva constitución en el corto plazo.

No se equivocaron quienes presagiaban una convulsión social. Después de la destitución del presidente, devino un cambio de escala en la protesta. Por primera vez, en lo que va del siglo XXI, se produjo un levantamiento a nivel nacional. Como era de esperarse, Lima no sería el epicentro, sino el sur andino. En medio de un país en llamas, las consignas pasaron de reivindicaciones concretas a una lucha política. Primero, levantaron la propuesta de la restitución de Castillo y la renuncia de Boluarte; posteriormente, el reclamo se concentró en el adelanto de elecciones; finalmente, en el cambio de la Constitución Política, como punto de partida para un cambio real.

Un cambio cualitativo: la protesta desde el 7 de diciembre de 2022

Podemos decir que, en términos de relación política y protesta social, el triunfo de Castillo fue una protesta en las urnas mediante el voto; esto es, la protesta en clave electoral. De ahí que, con su caída, la institucionalidad de las urnas como vía para la representación y la canalización de las demandas populares se agotó para un gran sector de la población.

Frente a la catástrofe de la pandemia, la protesta parecía ahogada, a pesar de que el hartazgo había ingresado en cada poro de la sociedad. El voto por Castillo aparece como ese momento antisistema. Su corto gobierno, a pesar de sus enormes errores y desaciertos, aparece como un auténtico dique de contingencia, pues, con su asunción, se demostraba que, pese al asedio de la derecha radical, las mayorías se podían ilusionar con la posibilidad de poner a uno "como nosotros" como presidente para intentar hacer los cambios que el país necesitaba.

Todo cambió el 7 de diciembre de 2022 cuando Dina Boluarte asumió el poder. Más allá de la cobertura legal que pudiera tener o no su asunción de mando, lo concreto es que, para la mayoría de los peruanos, Boluarte era una oportunista que entraba a gobernar con los perdedores de las elecciones de 2021, y que apuntaba a borrar todo intento de cambio o giro hacia la izquierda. Era el peón de aquellos que siempre estuvieron al servicio de la oligarquía más rancia, y derrotada en las urnas. Era, por tanto, un gobierno que le daba la espalda a sus electores y carecía de legitimidad.

Con ello, la institucionalidad democrática también sufre un revés a los ojos de grandes capas de la población. Los protestantes entienden que los procedimientos institucionales son insuficientes para un cambio; por el contrario, sirven para implementar un escenario antidemocrático intolerable. En respuesta se activó el reclamo por la vía no institucional: la protesta; pero, esta vez, por primera vez en décadas, una protesta esencialmente política con demandas nacionales. De esta forma, se avanzaba cualitativamente con respecto a las protestas acotadas y sectoriales de años atrás, y se producía un movimiento potente e impredecible.

El salto cualitativo que da la protesta rompe con otra característica de las anteriores, arremete contra la espontaneidad y desemboca en una organización creciente y constante dentro de las provincias. La organicidad le da potencia, magnitud, duración y alcance al punto de cubrir buena parte del territorio nacional. La "Toma de Lima" del 19 de enero de 2023, es muy representativa y una expresión de organización, solidaridad y del cambio de escala en la protesta. Los protestantes parecían haber dejado el sectarismo y la protesta iba ganando acérrimos adeptos en el seno del pueblo. El paso del tiempo, así como las encuestas lo confirmaron.

El cambio de escala y el salto cualitativo es más valioso si consideramos las condiciones completamente adversas donde, a la criminalización, estigmatización y desprecio de los medios hegemónicos contra los manifestantes, hay que añadir la arremetida de las fuerzas del orden y de

un régimen que no escatimó en declarar estados de emergencia en gran parte del país buscando acallar la protesta, limitando el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de reunión o libertad personal, necesarios para el acto de protestar. En realidad, en los 30 años de neoliberalismo, esto ha sido una práctica constante, pero ahora la violación sistemática de los derechos de la ciudadanía eran más que evidentes.

El estado de emergencia, en realidad "comprende la suspensión o la violación de la ley, amparada desde el propio derecho, para ampliar la violencia estatal en la que, a su vez, se sustenta. Se podría decir que esta figura de la excepcionalidad "alarga" el brazo del Estado y el alcance de su violencia"[3]. Sin embargo, pese a estas condiciones, la protesta se manifestó en gran parte del territorio nacional durante más de dos meses, y en ataque directo contra la médula del sistema económico y político imperante. La elevación de la protesta encontró los más furibundos ataques en los medios hegemónicos y en la clase dominante del país, asombrados y asustados por ese movimiento social con la potencialidad de remover sus privilegios.

Se podrá hacer una lista sobre el ejercicio de la violencia que vino desde los manifestantes; sin embargo, hay que entenderlo en el contexto mismo de los hechos y no desde un mero enfoque criminalizador como acaba de hacer la Sala Penal de la Corte Suprema, que ha determinado, en el caso 1464-2021/Apurímac, para los protestantes que bloquearon la carretera de ingreso a Las Bambas en el 2021, que la protesta que llega a escenarios violentos resulta, en cualquier caso, un delito y no se encuentra amparada por la Constitución Política del Perú. Es decir, anula el pacíficamente aceptado escenario de posibles conflictos entre derechos fundamentales. La sentencia menciona explícitamente:

> Si los ciudadanos estiman que no son suficientes sus reclamos o que, en todo caso, no existe recepción de parte de las autoridades o que los espacios de diálogo son ineficaces o inexistentes, están autorizados a acrecentar la vehemencia de dichos reclamos, siempre que ello repercuta en la esfera personal de derechos del protestante (verbigracia: huelga laboral

3 Calveiro, P. 2008. "Estado, Estado de excepción y violencia". *Revista de Ciencias Sociales*, núm. 24, p. 96: https://www.redalyc.org/pdf/4536/453644786008.pdf.

o huelga de hambre) y no transgreda derechos fundamentales de terceros ajenos al conflicto social (…)[4].

Esta sentencia es una respuesta frente al cambio de escala en las protestas que no se había visto en las tres décadas de vigencia de la Constitución fujimorista de 1993. Es evidente que se trata de una respuesta ante la debilidad del gobierno ilegítimo que hace uso del derecho penal para castrar el derecho constitucional, proteger el *statu quo* y poner un cinturón de fuerza frente a la latente posibilidad de un nuevo desborde popular. Esto resulta claro cuando menciona la toma de carreteras: "específicamente, la toma de carreteras, vías o espacios de infraestructura de transportes públicos o privados no tiene cobertura constitucional".

El derecho a la protesta ahora quedará limitado a formas pacíficas y circunscritas a un espacio y reclamo específicos. Con ello, se busca negar la posibilidad de una protesta que pretenda una batalla en el campo político. Dicho de otro modo, con esta sentencia, se niega al pueblo la posibilidad de intentar cambiar el rumbo político de un régimen, así se trate de uno ilegítimo y acusado por asesinatos extrajudiciales a los que hace mención la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre la "Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales".

A modo de conclusión

Volviendo al contexto de las protestas del 7 de diciembre de 2022, considero que si la protesta se activó con violencia fue resultado del desarraigo institucional marcado por la ilegitimidad percibida por la mayoría de la población frente a la asunción que se presentaba a sí misma como legal y constitucional. Esto es, la imposibilidad real y concreta de canalizar por otro medio las demandas de la población que percibía a Dina Boluarte como ilegítima.

4 Poder Judicial. 2023. Sala Penal Permanente, Casación N° 1464-2021-Apurímac: "Entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, derechos a la libertad de expresión y reunión, derecho a la reunión, derecho a la protesta y principio de lesividad": https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/05/Casacion-1464-2021-Apurimac-LPDerecho.pdf.

Las protestas nunca buscaron subvertir el orden social para generar un desorden arbitrario o una oposición irreflexiva y caótica al estado de derecho. Por el contrario, se trataba de reaccionar frente a hechos que se consideraban antidemocráticos y que tiene su explicación en condiciones sociales que trascienden largamente lo inmediato. Esto se enmarca en exclusiones históricas, en el clasismo, racismo y marginación social contra las mayorías.

Como sabemos, el cambio de condición en la protesta, en términos cualitativos, no logró hasta el momento ninguna de las consignas políticas que se levantaron. Esto nos conlleva a hablar de un proceso inacabado, marcado por retos pendientes en el ámbito organizativo y también ideológico, no solo en esta lucha específica, sino en el avance del movimiento social que debe hacer frente a nuevos desafíos, como desarrollar las manifestaciones aun sabiendo que las represalias se recrudecen en la vía penal y que, por tanto, tendrán repercusiones directas contra los manifestantes que, en medio de la arremetida de las fuerzas del orden, volverán a las calles mientras tengan la firme convicción de que estamos ante la necesidad del cambio de modelo instaurado por la Constitución de 1993.

La correlación de fuerzas aún no es suficiente para derrumbar el modelo, pero queda claro que ha habido un avance objetivo y que los pilares sobre los cuales se impuso el neoliberalismo se encuentran cada vez más resquebrajados. Lo que venga en el futuro inmediato estará en permanente construcción, y, si nos fijamos en los procesos históricos de otras latitudes, puede tener un desenlace impredecible que irá marcándose por el grado de organización y claridad política de los actores en conflicto, tanto de las fuerzas propulsoras del cambio, como de las fuerzas reaccionarias que pugnan por mantener el *statu quo* instaurado por el fujimorismo hace ya más de tres décadas.

Tercera parte

¿Revolución democrática? Estallido e identidad

La revolución democrática[1]

Sinesio López

El estallido democratizador

El Perú está viviendo el más vasto y plural movimiento democratizador de la historia republicana. ¿Qué significa movimiento democratizador? Es la lucha de amplios y diversos sectores sociales por la conquista de la igualdad de condiciones sociales de todos, y la eliminación de los privilegios y de todo tipo de discriminación. La democracia como régimen político es el producto de la correlación de fuerzas entre la democratización social o política y las élites estatales. De esa correlación emerge el tipo de régimen político.

En el siglo XIX, las revoluciones democráticas más importantes fueron la de 1814, que involucró a criollos, mestizos e indios, y la revolución liberal de 1854, que fue una alianza entre liberales y Castilla, un conservador moderado, y que movilizó a sectores campesinos y urbanos. Basadre ha escrito que, si la revolución de 1814 hubiera triunfado, la independencia del Perú hubiera sido más nacional y —añado— hubiéramos tenido una sociedad moderna y democrática en el sentido de igualdad de condiciones sociales.

Si la revolución liberal de 1854 no hubiera sido traicionada por Castilla, el Perú hubiera tenido quizá un Estado más afiatado y una mayor integración nacional. Las élites militares y civiles bloquearon y reprimieron los procesos de democratización social y política. Por eso, en el siglo XIX no tuvimos ni nación ni democracia.

---

1 Este ensayo se escribe sobre la base de dos artículos publicados en el diario *La República* entre enero y febrero de 2023

En el siglo XX se produjeron importantes movimientos democratizadores. Comenzaron con los estallidos campesinos de la sierra y las luchas obreras por la conquista de las ocho horas en la República Aristocrática; se acentuaron con los movimientos obreros rurales, mineros y petroleros, y la formación del Apra y del Partido Socialista de Mariátegui en los 20; y se agudizaron con la recesión del 30 y con la insurrección aprista de 1932. La Constitución oligárquica de 1933 excluyó al Apra y al Partido Comunista de la participación política, y las FF. AA. se transformaron en guardianes de la oligarquía y bloquearon los movimientos democratizadores con férreas dictaduras hasta 1956.

En los años 50 surgió un amplio y plural movimiento democratizador. Los movimientos campesinos de siervos que comenzaron a recuperar las haciendas expropiadas por el gamonalismo, de los obreros rurales, mineros e industriales, de las clases medias y de los pobladores urbanos, desbordaron al Estado oligárquico pese a su desarticulación e incidieron en los cambios en las FF. AA., que, al asumir ellas los cambios antioligárquicos en 1968, terminaron bloqueando la culminación de una revolución democrática.

El actual movimiento democratizador surge, luego de la caída de Castillo, como protesta por el desprecio, el maltrato y el desconocimiento de un presidente con el que tenían una fuerte identidad social. Estalló una rabia contenida de siglos contra las élites limeñas excluyentes, racistas y discriminadoras.

Comenzó en el sur, se extendió al centro y luego al oriente y al norte, y no va a descansar hasta nivelar el piso social, político, nacional y regional. Esto significa un cambio del modelo neoliberal, que es una reedición del modelo oligárquico de comienzos del siglo XX.

Las coaliciones de las coyunturas críticas

Estamos frente a un acontecimiento-ruptura que permitió, por un lado, la emergencia en la superficie de la sociedad de estructuras ocultas de corta, mediana y larga duración de desprecio, de opresión y explotación de los nadie y, por otro, el ingreso de esas estructuras a

su conciencia como experiencia y como memoria lanzándolos masivamente a la calle y convirtiéndolos en los principales protagonistas de la coyuntura crítica que estamos viviendo.

El desprecio de la élite limeña y de la ultraderecha a Castillo, el intento de desconocer sus votos alegando un fraude electoral, la pandemia en la que no tuvieron Estado que los atendiera, los periodicazos contra los presidentes que ellos eligieron para convertirlos en traidores, el incremento de la informalidad, de la desigualdad económica y de la desigualdad regional, la pésima provisión de bienes públicos, el desconocimiento de la igualdad social de todos los peruanos sin privilegios ni discriminaciones, el rechazo a reconocerlos como parte de nosotros (la nación) y la experiencia de una república vacía, todas estas capas acumuladas de la historia estuvieron en su conciencia, en sus acciones de protestas y en sus demandas.

Es probable que esta coyuntura crítica sea relativamente larga, tenga alzas y bajas y pase por varias etapas. Por lo pronto, la coyuntura inmediata en la que el movimiento democratizador ha puesto la siguiente agenda política: renuncia de Dina Boluarte, disolución del Congreso, elecciones para 2023 y consulta sobre una asamblea constituyente.

La presidente (16% de aprobación) y todos los grupos políticos del Congreso (8% de aprobación) se hacen los sordos porque tienen legalidad, pero no pueden gobernar sin legitimidad. Son muertos vivientes que lamentablemente aún pueden decidir en el poder oficial.

Pero no se puede gobernar sin el pueblo y menos aún contra el pueblo, aunque se apoyen en las armas. Si el movimiento democratizador quiere tener éxito, además de fortalecerse y elegir sus propios líderes orgánicos, tiene que organizar una coalición social y política que no siempre es fácil.

Los movimientos democratizadores del siglo XIX (Huánuco 1812 y Cusco 1814) fueron coaliciones lideradas por los criollos e integradas por mestizos e indios, y los del siglo XX fueron coaliciones de campesinos (indígenas y no indígenas), obreros, pobladores y otros grupos sociales liderados principalmente por las clases medias. Las coaliciones

del siglo XIX fracasaron por la radicalidad explicable de los indios y las del siglo XX por el sometimiento de los liderazgos de clase media (Haya, Belaúnde, Bedoya) a la oligarquía.

Hoy la fuerza y el liderazgo del movimiento democratizador, es popular, social y culturalmente plural, pero tiene que abrirse a otros sectores sociales como las clases medias, las asociaciones de la sociedad civil y a sectores empresariales, principalmente medianos y pequeños, para hacer viables los programas de transformación política, económica, social y cultural que formulen.

Reflexiones sobre el estallido social

Natalia Sobrevilla Perea

Este texto reúne cuatro columnas de opinión publicadas en el portal colectivo *Jugo de Caigua* entre el 18 de diciembre del 2022 y el 9 de abril del 2023. Fueron escritas al calor de los eventos, buscando ponerlos en un contexto tanto histórico como dentro de lo que sucede en la región y en el mundo, para que permita una mejor comprensión de dónde vienen muchos de los problemas que todavía nos acechan. Al presentarlo en un solo texto, de forma secuencial, pero con su estructura y forma originales, busco compartir la evolución de mis impresiones como historiadora conforme se han ido sucediendo los acontecimientos.

Un ciclo de 45 años. Porque cuando nadie cede la violencia explota

El país está convulsionado y lo único que parecen ofrecer desde el poder, la presidente Dina Boluarte, sus ministros y el Congreso es más de lo mismo: el debate de si el adelanto de elecciones debe ser para el 2023 o el 2024; si las reformas deben realizarse antes o después; la ausencia de un cronograma que acalle las demandas larguísimamente postergadas y, además, más militarización; así como el allanamiento de locales partidarios y gremiales.

En Lima no parece ocurrir mucho: el epicentro del descontento está en el sur andino, aunque se han visto movilizaciones, algunas violentas y con fallecidos, en el Centro y en el Norte. Se han tomado aeropuertos, carreteras, instalaciones del Estado y hasta la sede del gas de Camisea en el Cusco. La presidente asegura que "estas marchas no se pueden haber organizado de la noche a la mañana" y en muchos medios de comuni-

cación el mensaje es: alguien organiza, azuza. Se dice que se trata del MOVADEF o los comunistas, los *terrucos*, la izquierda. No ha faltado quien compare el proceso con la revolución cubana y las estrategias de Fidel Castro. Una vez más, se desestima el descontento de tan larga data de muchos sectores de la población.

El cuco del pasado nos acecha. Para muchos, la respuesta parece seguir siendo más represión, más bala, más violencia. No se vislumbra realmente un afán por el diálogo, una búsqueda genuina por encontrar un espacio para los consensos, una posibilidad de entender cuáles son las demandas reales y cómo atenderlas. Tristemente, somos una sociedad con experiencia en violencia, tanto para plantear las demandas como para responder a quienes piden un cambio. La violencia que estamos viendo en estos días nos recuerda los tristes eventos de los 80 y 90. En respuesta, muchos meten en un mismo saco a todos los que salen a las calles a protestar. Hasta cierto punto esto es comprensible, sobre todo si consideramos que se trata del poderoso recuerdo de una época en la que murieron demasiados peruanos, en que vivimos demasiados abusos; parte de un proceso en el que seguimos buscando entender qué fue lo que pasó y cómo seguir adelante como sociedad.

Sin embargo, hoy quisiera recordar un evento anterior que, me parece, guarda mayor vinculación con las protestas de hoy. Sucedió mucho antes de que irrumpiera Sendero Luminoso en nuestro país[1]. Me refiero al Paro Nacional de julio de 1977. Fue gracias a esas luchas a que se llegó a la Asamblea Constituyente y a que saliera del gobierno el General Francisco Morales Bermúdez. No olvidemos que esa fue una conquista de la calle y no simplemente la "generosidad" de los militares. En ese momento, y como respuesta a una serie de medidas laborales, las organizaciones gremiales de campesinos y trabajadores convocaron a un paro nacional a pesar de que no había garantías y se dieron masivas movilizaciones en Cusco, Tacna, Ayacucho, Arequipa, Huancavelica,

---

1 El accionar violento del PCP-SL inicia en los ochenta; sin embargo, en 1977 ya existía en Ayacucho esa célula conocida como "Sendero Luminoso". Eran muy famosos, sobre todo en la Universidad de Huamanga, por la publicación de sus panfletos en donde firmaban "por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui".

Huancayo, Trujillo y Lima. El resultado fue, entre otras cosas, el llamado a elecciones, que se llevaron a cabo en junio de 1978. La Asamblea Constituyente se instaló el 28 de julio de ese año. La Constitución de 1979 se redactó en un año y fue la base para el retorno a la democracia en 1980.

Todo eso parece ahora muy lejano, pero tenemos una vez más a mucha gente en la calle demandando cambios profundos. Gente en las regiones que no se siente representada por el sistema político, pues lleva dos décadas votando por el cambio solo para ver que las promesas electorales se rompen ni bien llegan los presidentes al cargo. Todos estos años de estabilidad económica, que permitieron que muchos salieran de la pobreza, y que algunos otros consoliden su riqueza, también agudizaron las diferencias en la sociedad. A todo esto, se suma un desgaste en el sistema democrático y de representación porque las demandas siguen estando insatisfechas y todos los peruanos vemos que quienes llegan a los cargos políticos lo hacen para enriquecerse, ya sea robando directamente, o representando a grupos de interés.

¿Cómo creer en un sistema político así? El problema está en encontrar el camino de salida sin interlocutores realmente representativos y que estén dispuestos a entablar el diálogo. En este momento en que el Perú se desangra, se hace cada vez más necesario buscar soluciones, pero lo que vemos es cómo, desde cada esquina, quienes participan se atrincheran en su barricada y se acusan mutuamente. Así, es imposible encontrar una solución.

Tomando en cuenta la inestabilidad con la que vivimos desde 2017 con la renuncia de Kuczynski, con un presidente cada año y con congresos que no tienen aprobación, ni representatividad, llegó el momento de plantearnos si es posible seguir. Las instituciones importan, el sistema democrático y los procesos importan; pero si ya no son considerados legítimos por una gran parte de la población, no podemos seguir aferrados a un sistema que hace mucho dejó de representar a la mayoría.

Las palabras y la pared. La violencia verbal nos encamina al abismo

La tregua por las fiestas de fin de año terminó hace unos días y en varias localidades del sur las carreteras han vuelto a ser tomadas. Los aeropuertos se ven otra vez amenazados y un número importante de personas están dispuestas a tomar por asalto los espacios que representan a los poderes del Estado.

Las nuevas autoridades municipales, distritales y provinciales elegidas en octubre pasado acaban de juramentar en todo el país y tenemos nuevos gobernadores regionales que deben comenzar sus periodos en medio de esta convulsión. El descontento reina en muchas de las regiones del país, mientras que en Lima se vive una calma tirante. Esto se debe en gran medida a la presencia de la policía y los militares que han resguardado diferentes puntos de interés y que han desalojado violentamente a personas de una plaza principal de la capital por temor a posibles movilizaciones.

El Congreso, que debería tomar la iniciativa y buscar la solución más apropiada a las protestas con la mayor celeridad, parece haber decidido que es el mejor momento para tratar de desestabilizar a las instituciones dedicadas a organizar las elecciones y a supervisarlas con su propuesta de recortar el mandato de los jefes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), además de buscar menos votos para la elección del Defensor del Pueblo. Todo esto mientras algunos congresistas buscan hacer posible la reelección congresal inmediata (por un periodo), o incluso de introducir la bicameralidad. En vez de trabajar para asegurar que las elecciones por las que claman muchos, sobre todo en las regiones, se lleven a cabo lo más pronto posible, buscan tomar control sobre el proceso.

En medio de esta situación enrarecida vemos con preocupación que los llamados al diálogo parecen caer en saco roto. Si bien la presidente Boluarte ha solicitado que se reúna el Acuerdo Nacional lo más pronto posible, cabe preguntarse si este espacio tiene realmente la capacidad de

darle una voz y representación a quienes hoy protestan. En una situación tan al borde del abismo, cuando la pradera está completamente seca y los fósforos y las chispas acechan, hablar es particularmente necesario.

Las palabras importan y en este momento vemos que se usan indiscriminadamente para atacar y agredir. Con cuánta facilidad se dice que "hay que meterle bala a esta gente", hay que "acabar" o "exterminar" a los "revoltosos". Incluso he oído de alguien que, con toda naturalidad y desparpajo, ha comentado que es necesario "fumigar el país", además de quienes llaman a sus compatriotas "parásitos". ¡Con qué facilidad se habla de genocidio cuando tenemos casi treinta muertes que lamentar!

Es increíble que el año en que conmemoramos los veinte años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, una de las palabras que más se escuche como insulto, y para meter miedo, sea *terruco*; o como se usa cada vez más, simplemente "tuco". El terrorismo sigue presente en la mente de muchos. Son ya varias las personas a las que escucho decir que hace falta que se vuelen una torre de alta tensión para que se pueda comenzar a matar gente, que el error de Fujimori fue no matar a todos para que muerto el perro, esté muerta la rabia.

Este nivel de violencia verbal no es menor. Las palabras importan, y quienes son capaces de decir con tanta facilidad que la solución es la muerte, deberían ponerse a pensar que lo que promueven nos encamina a otro baño de sangre, como si no hubiésemos sufrido ya suficiente.

En estos días de tenso paréntesis se ha visto en cines una hermosa película en quechua, *Willaq Pirqa, El cine de mi pueblo*, que retrata a una comunidad andina que descubre la magia del cine a través de los ojos de un niño tierno y curioso. La acción discurre en un tiempo un poco indeterminado, pero que intuimos que pueden ser los 80, por un personaje femenino que sufre por la desaparición de su hijo universitario, la única referencia en la película a la violencia vivida en el país; aunque César Galindo, el director, ha dicho que se sitúa en los años 70.

La película logra presentarnos el dilema de la falta de comunicación entre quienes hablan quechua y los que hablamos español y de

cómo hasta hace muy poco era casi absurdo imaginar que pudieran existir películas en lenguas originarias que contaran historias desde su perspectiva y representaran a los más relegados. La traducción literal de *Willaq Pirqa* es "la pared que habla" y fue grabada en Maras y Moray en 2017. Sistu, el personaje principal, se roba nuestros corazones con su inocencia infantil. Pero como me dijo alguien ayer, el actor que lo interpreta y que ha venido a Lima para promocionarla ya está hoy en edad "terruqueable".

Esta película y los comentarios de quienes denigran a sus compatriotas son ejemplos complementarios de que las palabras importan mucho, muchísimo, en un país escindido. Un país donde en vez de buscar el diálogo, ejercemos una profunda violencia verbal.

Una semana sin paralelo ¿Cuál es la salida política si nadie se siente representado?

En la última semana, hemos pasado del recurso metafórico "el Perú está en llamas", para, tristemente, tornarse literal. El Perú se incendia, y lo vimos en una casona centenaria en el centro de Lima durante la marcha multitudinaria del jueves, y en la quema de una comisaría en Puno, una vez más con muertos y heridos que lamentar.

Mientras tanto, la presidente Dina Boluarte aseguró en su mensaje a la Nación que "la situación está controlada". ¿Pero a qué se refería? ¿Realmente se puede decir que en las seis semanas que lleva en el mando algo está realmente bajo control en el Perú? Ya son más de cincuenta muertos, centenares de heridos, carreteras y aeropuertos cerrados, millones en daños materiales y una interminable sensación de desazón.

El diagnóstico es claro. El país se desangra y la presidente no cuenta con legitimidad para seguir al mando, pero se rehúsa a aceptarlo y se aferra a su condición de "presidente constitucional". En efecto, Boluarte ha seguido todos los pasos que dicta la ley para la sucesión presidencial. Pedro Castillo atentó contra la Constitución y a ella le tocó reemplazarlo. Pero en circunstancias como las actuales ¿es eso suficiente? ¿Pode-

mos seguir teniendo este nivel de movilización y considerar realmente que cuenta con la legitimidad para gobernar? Difícilmente.

Hay una diferencia entre la legalidad y la legitimidad, dos conceptos conectados, parecidos, pero no iguales. Dina Boluarte es legalmente la presidente del Perú. De eso no hay duda: ahora su gabinete cuenta con el respaldo del Congreso y ella es legalmente la presidente del Perú. Pero el problema de legitimidad que tiene la señora Boluarte no es menor: bastante más de la mitad del país se cuestiona si debe seguir al mando.

Muchos piden el regreso del profesor Castillo, algo imposible, además de ilegal. Otros reclaman la necesidad de que la presidente renuncie y que se llame inmediatamente a elecciones, sin necesidad de pasar por el proceso de adelanto de elecciones para el 2024 que se debate en el Congreso. Y no faltan quienes quieren que todos se vayan de inmediato y que se llame a una Asamblea Constituyente.

La situación no tiene visos de solución y, de momento, lo más ausente son los liderazgos, tanto políticos como de la sociedad civil. Las movilizaciones no están coordinadas y responden al cansancio de la población más que a la organización y al planeamiento. Esta “Marcha de los Cuatro Suyos”, a diferencia de la del año 2000, no ha sido articulada y no tuvo un centro que la dirigiera a un solo objetivo. El hartazgo es generalizado, pero las posibles soluciones no saltan a la vista y no se escuchan voces que presenten propuestas que nos puedan sacar del entrampamiento.

El Congreso, que debería ser el lugar desde donde se planteen las soluciones debido a que —por lo menos en teoría— es donde están los representantes, parece haber dejado la iniciativa de lado. En estos días no se ha oído a los legisladores presentar propuestas o esgrimir posibles soluciones, o simplemente buscar convertirse en interlocutores de quienes están tan molestos. El Ejecutivo ha mostrado que su única arma es la fuerza y se ha dedicado a enviar a la policía a lanzar bombas lacrimógenas, perdigones y balas. Algunas de las escenas en Lima y en provincias son realmente dantescas, con personal armado hasta los dientes lanzando fuego desde tanques.

Si bien distintas iglesias han lanzado comunicados pidiendo el diálogo y la calma, poco es lo que han hecho en realidad. A diferencia de ellas, dos universidades nacionales han tomado una posición de liderazgo. Los estudiantes de la Universidad de San Marcos han tomado el campus para alojar a los manifestantes venidos de provincia y se han establecido cadenas de apoyo para llevar agua y víveres. Mientras tanto, la Universidad Nacional de Ingeniería ha hecho algo que no ha hecho ninguna otra institución y le ha abierto las puertas de su campus a los manifestantes. En este caso no han sido los estudiantes, sino el rector, y esperemos que desde aquí se pueda abrir un espacio para el diálogo.

Es descorazonador, además, que mientras esta semana seguía los eventos a la distancia y buscaba algún paralelo histórico para poner en contexto lo que está sucediendo en el Perú, no haya encontrado una situación parecida en el pasado. Lo que está ocurriendo ahora es histórico y estamos en medio de ello. Es de momento casi imposible vislumbrar una salida. Vemos a los diferentes actores atornillados en sus posiciones, tanto al Ejecutivo como al Legislativo apelando a la legalidad, olvidando que lo legal no tiene mucho asidero sin lo legítimo.

La legitimidad del poder viene del convencimiento que tienen los gobernados de que quienes los gobiernan los representan; que, si bien votaron o no por ellos, fueron elegidos por la mayoría para gobernar. En ese principio se basa la democracia. Quienes en 2021 fueron derrotados en las urnas y cuestionaron la legalidad de las elecciones desestimando el voto de miles de peruanos, y salieron a las calles a declarar ilegítimo al gobierno, no se daban cuenta de que le estaban dando un primer gran puntapié a la democracia. Hoy, quienes salen a pedir el adelanto de elecciones, la salida de Boluarte y la Asamblea Constituyente le están dando otro. Pero desde el momento en que la solución planteada desde el poder es la represión y matar a peruanas y peruanos, su legitimidad para gobernar desaparece.

Nos encontramos en una encrucijada y la solución no se vislumbra. Es momento de buscar la forma de conseguir esa legitimidad perdida y,

de momento, creo que eso solo pasa por volver a las urnas, más pronto que tarde.

Post Scriptum: Antes de enviar este texto me llegaron las noticias del violento desalojo y los cientos de detenidos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por parte de la policía. Mientras tanto, la Universidad Nacional de Ingeniería ha sido rodeada de tanquetas con soldados. La presidente sigue perdiendo legitimidad y se sigue cerrando a la posibilidad de tener interlocutores válidos. Me preocupa pensar qué pasará la próxima semana.

Abrir más en vez de cerrar. En domingo de resurrección, una reflexión sobre nuestra memoria

En este día final de la semana de celebración más importante del calendario cristiano cabe preguntarse cómo se condice la idea de la caridad y el amor al prójimo, tan central en las creencias de Jesús, con la manera en que algunos de los exponentes del catolicismo en el Perú se expresan sobre el dolor y la necesidad de los otros.

En un país atravesado por la violencia y la desigualdad, donde el cristianismo, mayoritariamente en su variante católica, domina muchos de los espacios públicos y privados, no deja de sorprender la virulencia con la que se atacan proyectos que buscan la reconciliación y el encuentro de las peruanas y peruanos.

Es imposible negar que nuestra historia está atravesada por recurrentes episodios de injusticia donde casi siempre los mismos terminan peor que antes. ¿Qué hacemos como sociedad para enfrentar esta situación y buscar revertirla? La verdad, no mucho. O no lo suficiente. Repetidamente buscamos olvidar, o por lo menos oscurecer, lo sucedido. Episodios como la esclavización de los descendientes de africanos e indígenas, o los abusos genocidas de la explotación del caucho, merecen y necesitan muchos más espacios de conmemoración y memoria.

Algo de este esfuerzo por silenciar existe en los intentos poco sutiles de la Municipalidad de Miraflores de cerrar, aunque sea temporalmente, el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM)

con una medida administrativa. Es sabido que la violencia institucional suele ejercerse revistiendo las acciones de los poderosos mediante un armazón jurídico.

Más allá de la campaña de desinformación que se viene librando en contra del LUM, que, como nos explicó Alberto de Belaúnde el martes pasado, busca negar la inclusión de las fuerzas armadas y policiales en la muestra permanente. Al mismo tiempo, inventan disparates como que no se responsabiliza a Sendero Luminoso y al MRTA de haber desatado la violencia. Hay quienes consideran que la muestra no debería existir.

La creación del LUM no fue fácil y se concretó debido a una serie de confluencias afortunadas y al esfuerzo sostenido de muchas personas. Los museos y lugares de memoria son parte de procesos por los que pasan las sociedades que han vivido experiencias de violencia extrema y suelen tardar años en hacerse realidad. Los primeros en surgir suelen ser los espacios de memoria organizados por los familiares de las víctimas que buscan justicia y reparación, y, en el caso peruano, un ejemplo es el museo de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) en Ayacucho. Los museos impulsados por el Estado tardan mucho más en hacerse realidad y el costo es bastante mayor.

El LUM existe gracias a que la entonces canciller alemana Ángela Merkel pidió visitar "el museo de la memoria peruano" cuando estuvo en Lima para una reunión de jefes de Estado de la Unión Europea. Después de visitar la muestra de fotos de Yuyanapaq en el Museo de la Nación —algo que aún se puede hacer— ofreció el dinero para la construcción de un lugar de la memoria, al enterarse de que no lo había.

El entonces presidente Alan García le agradeció mucho el ofrecimiento, pero respondió que mejor sería usar el dinero para otro objetivo, a lo que la canciller alemana contestó, elegantemente, que el dinero solo podía utilizarse para lo planteado. Producto de ello, se instaló una comisión de alto nivel, integrada por Mario Vargas Llosa, Fernando de Szyslo y otras eminencias para encargarse de hacerlo realidad. El entonces alcalde de Miraflores, Manuel Masías, donó el terreno de lo que ha-

bía sido una recicladora de basura y, tras un concurso arquitectónico y muchos años de esfuerzo, se levantó el edificio y se organizó la muestra tras consultas con todos los involucrados.

Los espacios de memoria en lugares donde se ejerció la violencia, como el Santuario de la Hoyada en Ayacucho, son muy necesarios. En este último, por ejemplo, los familiares de las víctimas buscan que no se olvide lo sucedido en el cuartel Los Cabitos, donde se instalaron dos hornos crematorios para desaparecer los restos de los detenidos. El proyecto se viene trabajando desde hace más de una década y, en el 2022, se comenzó su construcción. ¿Lo terminará el nuevo gobierno regional?

Este 2023, en que una vez más tenemos muertos que lamentar debido a la violencia estatal y policial, y cuando parece haber una guerra declarada contra la memoria y una apuesta por el olvido, lo que necesitamos son más espacios y lugares de memoria. Las deudas que tenemos como sociedad exigen más compasión, empatía y solidaridad con los peruanos y peruanas que sufren ante la injusticia y que tienen muertos a quienes llorar.

Este domingo en que muchos celebran la resurrección de Jesús, ellos no tendrán a sus seres queridos alrededor de la mesa. No les robemos, además, su memoria. Una sociedad que no recuerda lo más difícil, no tiene futuro.

Lo nuevo no termina de nacer

Jorge Frisancho

El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer.
Y en ese claroscuro surgen los monstruos
Antonio Gramsci

El Gobierno de Dina Boluarte quiere parecer una reacción restauradora, una "vuelta al orden". Su subtexto es el de una contrarrevolución, aunque su presencia pública se debata entre un supuesto carácter transicional y una evidente voluntad de permanencia. Su problema es que esa impresión es falsa, o peor aún, está vacía: no se trata de una contrarrevolución porque no hubo revolución alguna. Hubo, hay, un impasse sistémico, una crisis generalizada del régimen político; la actual alianza gobernante es un síntoma más de esa crisis y solo podrá ahondarla, no resolverla.

Castillo: lo que no fue

Bajo prácticamente cualquier unidad de medida (menos una, como explicaré después), el gobierno de Pedro Castillo fue un poco más de lo mismo que ha tenido el Perú en las últimas dos décadas y media; en varios rubros, de hecho, fue más de lo mismo, pero peor. Para entenderlo quizá baste recordar que en el mismísimo mensaje a la nación con el que quiso disolver el congreso y reestructurar el poder judicial, Castillo se cuidó repetir varias veces que, como había sido el caso a lo largo del año previo, "el modelo" quedaba incólume. Más allá de su ocasional retórica, más allá de algunos gestos aislados y un cierto modo de hacer política al que la esfera pública limeña no estaba del todo acostumbrada, Pedro Castillo en el gobierno fue más un aliado del gran y mediano capital que su enemigo, un aliado del orden neoliberal, y nada permite inferir que, de haber permanecido en el gobierno, habría cambiado de giro. Las

disputas se dieron en planos subsidiarios, en el terreno de las cuotas, las repartijas y los accesos a presupuestos sectoriales, pero no en el plano de las políticas de fondo. No hubo tampoco un proyecto de trasformar la conducción del estado, por ejemplo, para recuperar su potencia recaudadora o ponerlo al servicio de los ciudadanos más pobres. Nada de eso ocurrió. Si acaso, íbamos en retroceso.

Hay, sin embargo, un aspecto en el cual el ascenso de Pedro Castillo sí significó un cambio sustancial. Se dio —se da— en el terreno simbólico y en el campo general de la imaginación política. Un sector amplio de la ciudadanía, con particular, pero no exclusiva intensidad en el sur andino se identificó con la *idea* de Castillo en Palacio, se vio genuinamente *representado* en él, y percibió que su encumbramiento operaba una apertura de cotos previamente cerrados del poder en el Perú, dándoles acceso, aunque solo fuera en abstracto y de un modo puramente potencial, a millones de peruanos sometidos a una pluricentenaria historia de exclusión.

No se trató necesaria o principalmente de adhesiones programáticas o acercamientos ideológicos, aunque ambas cosas hayan existido en diversos grados; un elemento de tipo carismático fue mucho más determinante e hizo posible que el vínculo subsista a lo largo de un año de espectacular inoperancia política y que, en algunos casos, se mantenga latente, tras un fallido autogolpe en el molde fujimorista y un intento, igualmente fallido, de fuga al exilio.

Los enemigos de Pedro Castillo, en los espacios y redes del poder constituido, percibieron de inmediato el riesgo que esa identificación simbólica comporta para sus intereses. Percibieron, es decir, el peligro de que a partir de ella se consolidara un bloque político efectivo, situado fuera de sus mecanismos de control y capaz, aunque fuera de forma embrionaria, de disputarles la hegemonía. Ante eso, reaccionaron con visceral intransigencia.

Si en un inicio las acusaciones de fraude electoral y los llamados a un "golpe restaurador" —que empezaron desde antes de que Castillo asuma la presidencia— podían entenderse como manifestaciones páni-

cas de ansiedad por parte de la derecha más ciegamente prooligárquica, combinadas con el conocido revanchismo keikista, pronto resultó obvio que el espectro de la reacción era más amplio y sus anclajes, más raigales. Para que quede claro: desde el punto de vista de la racionalidad política, la oposición tan virulenta y teñida de paranoia que se desplegó contra Castillo nunca fue realmente necesaria, pues ni "el modelo" ni el control del Estado estuvieron jamás fuera de los procedimientos de negociación habituales en la política peruana.

Esa oposición se dio en los términos en los que se dio porque a las estrategias habituales del fujimorismo, las mismas previamente desplegadas para confrontar a Vizcarra y a Kuczynski en pos de un interés mafioso por el control exclusivo del aparato de gobierno, vino a sumarse un rechazo irracional, visceral, a la posibilidad de una agencia política efectiva asentada sobre aquella formación identitaria. Se trató, en otras palabras, también de una forma de *identity politics*: una reacción racista y colonial anclada a los más antiguos pilares ideológicos de la dominación en el Perú, cuya razón política fue y continúa siendo la negación de otros sujetos posibles en la disputa por la hegemonía.

Restauración, contestación y represión

Es en ese sentido que el Gobierno de Dina Boluarte tiene lo que líneas arriba describí como el subtexto de una reacción restauradora, y es en ese sentido también que ese subtexto se desmantela solo, al entrar en contacto con las realidades concretas de la coyuntura que se ha desatado.

En un muy breve primer momento, aquella identificación simbólica con Pedro Castillo contribuyó a animar las movilizaciones opositoras al nuevo Gobierno y al Congreso, como evidenciaron los llamados a su liberación y retorno a Palacio. Pronto, sin embargo, adquirieron prioridad otros elementos aglutinadores, capaces no solo de propiciar una renovada expresión política del bloque de votantes surandinos que definió el resultado de las elecciones de 2020, sino también de contribuir a la forja de un bloque de contestación más amplio, formado sobre

bases distintas. Este bloque se articuló en torno a tres demandas claras y fundamentales: la renuncia del Ejecutivo y la mesa directiva del Parlamento, la convocatoria a nuevas elecciones en el plazo más corto posible y —en menor medida, pero quizá con mayor significación— la realización de un referéndum constitucional. Estas tres demandas, que trascienden con amplitud la identificación simbólica con Pedro Castillo, han cobrado centralidad y protagonismo a lo largo de dos meses y medio de protestas, y han alcanzado niveles de consenso inusitados en la política peruana. En todas las regiones del país, incluyendo a la retrechera Lima, reciben un apoyo ciudadano incuestionablemente mayoritario, incluso abrumador, que no tiene visos de disminuir.

Ante el surgimiento de este bloque de contestación, el Gobierno respondió con dos tácticas básicas. En primer lugar, represión: un despliegue indiscriminado y arbitrario de fuerza letal, modulado por operaciones más convencionales (pero no menos violentas), a las que se suman una militarización del territorio en algunas regiones específicas, la captura de espacios públicos estratégicos en la capital y otras ciudades, y la persecución judicial de activistas individuales con argumentos espurios y pruebas hechizas. Al momento de escribirse estas líneas, la estela mortal de estas prácticas llega ya al medio centenar de ciudadanos, cada uno de los cuales desmiente por completo las pretensiones de legitimidad democrática del nuevo gobierno.

Junto con este despliegue de violencia, ejecutado en alianza con la organización policial y las Fuerzas Armadas, la segunda táctica de respuesta ha sido discursiva e ideológica, y se apoya en un abanico de medios de prensa y voceros "independientes" vergonzosamente partidarizados, además de los canales comunicativos oficiales del gobierno. Su núcleo es el persistente terruqueo de la protesta y la denuncia sostenida de sus supuestos vínculos con la economía ilegal.

Estas tácticas discursivas están condenadas al fracaso. No han conseguido y no conseguirán impedir la consolidación del bloque contestatario, en buena medida porque funcionan con una lógica distorsionada incapaz de generar consenso más allá de los bolsones preexistentes de

apoyo al gobierno y al Congreso, que son muy minoritarios. Esa lógica distorsionada está a la vista: digan lo que digan el premier Otárola en sus conferencias de prensa o *El Comercio* en sus primeras planas, las demandas de la protesta son minuciosamente democráticas en su esencia. Lo que piden los ciudadanos movilizados es que se les permita participar, a través del voto, en las decisiones más básicas y fundamentales de la vida colectiva, y eso es lo que el gobierno pretende impedir con sus balas.

Esto no quiere decir que el *terruqueo* y el "ilegaluqueo" no sirvan para apuntalar la persecución judicial de ciudadanos movilizados, como ha sucedido, entre otros ejemplos, en el caso de los supuestos "financistas" detenidos en el Callao, los jóvenes comuneros de Pisac o los dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, Fredepa. El *terruqueo* y el ilegaluqueo son reales y tienen consecuencias. Pero sí quiere decir que, a diferencia de lo ocurrido en coyunturas anteriores, no servirán para promover la formación de un nuevo régimen o, si se forma, para darle continuidad siquiera en el mediano plazo. Esto deja al gobierno con la represión violenta como única racionalidad política, y así, en poco más de dos meses, el Gobierno de Dina Boluarte ha devenido una paradoja insostenible: la de una pretendida restauración democrática que nace como estado de excepción, utilizando métodos dictatoriales para contener a una ciudadanía movilizada en reclamo de su derecho a votar.

La agonía del neoliberalismo peruano

Una de las razones por las que estas estrategias discursivas, ya sea en sus versiones más acotadas o en las más expansivas, no funciona como en el pasado —y en general tampoco lo hace un repertorio de justificaciones ideológicas todavía anclado a los años 90, que parecen ser la matriz mental de los estrategas del gobierno y el congreso— es porque la crisis a la que deben responder es muy distinta a las previas. De hecho, es su lado opuesto, en un sentido histórico: es el desembalse de salida, o

de quiebre, de la "solución" a la que se arribó en el Perú hace ya más de tres décadas.

Lo que está en crisis hoy es precisamente el régimen instaurado a partir de la ruptura democrática de 1992. A pesar de sus varias reestructuraciones internas, ese régimen no se transformó sustancialmente con la transición de la década posterior, pero sí se fue desarticulando en una secuencia de desencuentros y atolladeros que finalmente han terminado en un pasaje intransitable. Eso es lo que define la coyuntura: es un momento agónico de los mecanismos operativos, procedimientos políticos y constructos ideológicos instalados con la irrupción del fujimorismo, los mismos que han servido primero para consolidar y después para sostener el neoliberalismo peruano.

Este neoliberalismo de raigambre fujimorista tiene varias características específicas, y, hoy, todas ellas se encuentran bajo interdicción; su interdicción es precisamente lo que se sintetiza en el reclamo de un nuevo proceso constituyente que cierre la época inaugurada en 1993. Entre esas características específicas, anotadas aquí sin ánimo de sistematicidad, se encuentran la privatización a ultranza del interés público, una relación restrictivamente patrimonialista entre las clases gobernantes y el poder, el vaciamiento y la desinstitucionalización del Estado y sus organismos (incluyendo la normalización de expansivas prácticas corruptas y corruptoras), la captura de los espacios de comunicación por parte de intereses de élite, la informalización e ilegalización de buena parte del sistema productivo (y, en consecuencia, de la vida social), así como una profunda y persistente precarización del trabajo y los trabajadores. Todo ello, además, envuelto en las manifestaciones casi teatrales de una recuperación oligárquica que se piensa hegemónica, en especial en Lima, pero queda perpetuamente arrinconada por los datos de la realidad.

Que el incompleto y azaroso listado anterior sirva para señalar el punto: el Gobierno de Dina Boluarte y cualquier régimen "restaurador" que resulte de su paso por Palacio —es decir, cualquier nuevo pacto que se forje, como en los años 90, entre el poder congresal, facciones del em-

presariado y sectores de las Fuerzas Armadas y la policía— solo podrá ser una forma de la misma crisis, la crisis del régimen neoliberal, sin ninguna posibilidad de resolverla. En este momento agónico, ellos representan lo que está muriendo. Lo nuevo, más bien, nace *en su contra*. Lo nuevo se está produciendo en medio de estas convulsiones.

La necesidad política de lo nuevo

Los últimos meses han dejado en claro que el bloque de contestación al que el Gobierno peruano se enfrenta es mucho más que una simple confluencia momentánea de intereses y voluntades, como pudo ser la que surgió en Lima para oponerse a la tenue e ilegítima presidencia de Manuel Merino en noviembre de 2020. El actual bloque de contestación tiene una base más ancha y aglutina a una diversidad de actores sociales, económicos y políticos que son ellos mismos un efecto de los procesos estructurales de los últimos 30 años. Son actores enraizados en las realidades materiales de la época neoliberal en el Perú. La rápida trascendencia de la protesta a una demanda democrática de espectro mucho más amplio que la identificación con Pedro Castillo revela no solo la potencia política de este bloque, sino también su solidez estructural (cualquiera vaya a ser la forma que adopte en sus evoluciones posteriores), y contribuye en buena medida a explicar su persistencia. Nos dice, además, que aun si el gobierno logra "pacificar" el momento gracias a su creciente despliegue de violencia represora y mantenerse en control del aparato del Estado durante algunos años, no conseguirá darle estabilidad de largo plazo a un hipotético régimen "restaurado".

Esto es así porque la pura respuesta represiva, articulada a partir de ideologemas agotados en la propia evolución del neoliberalismo peruano, no basta —incluso si momentáneamente parece hacerlo— para suprimir la expresión de intereses y deseos políticos que han emergido o se han transformado significativamente en ese mismo proceso. El régimen neoliberal no puede ser "restaurado" *en contra* de sus propios resultantes estructurales, a los cuales ya no puede excluir o marginalizar sin desnaturalizarse; la única alternativa real a la crisis es asumir la

necesidad política de lo nuevo que ese desarrollo ha generado, lo cual significa, por necesidad, una apertura hacia el bloque de contestación, no el cierre represor que se intenta desde el Gobierno y el Congreso. Lo que la presente coyuntura expresa es precisamente ese antagonismo, esa contradicción fundamental. Esa es *la crisis*.

Los intereses y deseos que se aglutinan en el estallido social de estos meses, articulándose en torno a las tres demandas clave de la protesta, son política y sociológicamente heterogéneos. Confluyen ahí las antiguas clases medias que recuperaron parcialmente su estabilidad en los años de crecimiento económico y las nuevas clases medias surgidas en ese mismo contexto en varias regiones del país, al ritmo de la expandida oferta educativa y las economías informales e ilegales. Confluyen también las clases trabajadoras precarias vinculadas a esas economías, que según estimados ocupan el 70 % de la actividad productiva en el país, y poblaciones locales vinculadas a la gran industria extractiva y primario-exportadora, con una larga historia de negociación y lucha contra sus depredaciones. Están presentes también capitales comerciales insertos en circuitos de alcance regional junto con comunidades rurales y semirurales que, decisivamente "modernizadas" en las últimas décadas, en virtud del uso de nuevas tecnologías de información y comunicación, no han abandonado sus vínculos tradicionales con el territorio o sus identificaciones y afiliaciones étnicas. Y más. La lista podría seguir. De nuevo, no se trata de una taxonomía sistemática, sino solo un recuento rápido de algo que ha de estar a la vista de todos los observadores: la multiplicidad que bulle en las protestas y en el bloque de contestación más amplio (como, por ejemplo, el que se retrata en las encuestas).

Esa multiplicidad no es un síntoma de dispersión, aunque la dispersión sea uno de los riesgos que la acechan, y tampoco hace débil la protesta, aunque sí la haga descentralizada (lo que acarrea sus propios problemas). Es, sobre todo, un indicio de nuevas solidaridades posibles, apenas embrionarias quizá, pero en trámite de consolidación. Expresa una multitud de formaciones subjetivas que emergen del propio proceso del neoliberalismo en el Perú, incluyendo las nuevas relaciones e intereses materiales generados en la economía peruana tal cual existe en

la práctica, en los hechos concretos, independientemente de los adjetivos ("formal" o "informal"; "legal" o "ilegal") con los que describamos sus sectores. Algunas de estas formaciones subjetivas son incipientes, otras están enraizadas en tradiciones de mucha más larga data y mucho mayor densidad histórica, otras más se encontrarán en algún punto intermedio entre ambos polos, pero todas desbordan ya la matriz política existente y no podrán ser contenidas por ninguna versión "restaurada" de ella. Demandan su trascendencia.

Los riesgos del vacío ideológico

Dos aspectos interrelacionados de lo que está ocurriendo con las protestas (y, en menor medida, con el bloque de contestación más amplio) me parecen particularmente significativos. El primero es que las movilizaciones de estos meses han conseguido algo que parecía muy difícil, si no imposible: expandir eficazmente al espacio nacional luchas hasta ahora contenidas en escenarios regionales y locales, subsumiendo sus agendas, por ahora, en una formulación a la vez más puntual y abstracta (nuevo gobierno, nuevas elecciones, nueva opción constitucional). Más aún, les han dado a aquellas luchas eminentemente reivindicativas, de matriz económica, una forma *política* en el sentido más riguroso del término, anunciando un terreno de negociación que no podrá ser ocluido con las usuales ofertas clientelistas y de discrecionalidad patrimonial.

Además de lo anterior, y a pesar de su evidente heterogeneidad y de lo múltiple que convoca, el estallido social de estos meses tiene como uno de sus centros de gravedad no solo "el sur andino", en un sentido genérico, susceptible de idealización y mistificación, sino las identidades, subjetividades, instituciones y procesos de toma de decisión de comunidades específicas en esa región del país. Estas comunidades protagonizan y alimentan la protesta nacional tanto en sus escenarios regionales como en Lima, y son ellas las que movilizan a muchos otros sectores. Sus identidades, subjetividades, instituciones y procesos, surgidos de la realidad material de su situación concreta y anclados a ella, son un

contenido inescapable —aunque no excluyente— de la forma política que ha tomado la oposición al Gobierno de Dina Boluarte y al poder congresal en que se apoya. De hecho, constituyen quizá su elemento más transformador, en la medida en que se posicionan como pocas otras veces en la historia del país para participar con agencia propia en la disputa por la hegemonía.

Es importante notar, sin embargo, que del mismo modo como la derecha y la respuesta reaccionaria representada por el gobierno no tienen instrumentos ideológicos eficientes para contener lo que bulle en el bloque de contestación y en las movilizaciones, la producción ideológica de las distintas facciones y agrupamientos de la izquierda peruana no alcanza tampoco a potenciar la coyuntura. En algunos casos, es incluso contraproducente. Después de varias décadas de cancelación de la crítica radical, las izquierdas realmente existentes tampoco parecen capaces de responder a los contenidos y las formas de lo nuevo. Sus vocabularios son limitados, cuando no anquilosados, y no bastan para articular discursivamente el actual proceso. Tampoco alcanzan para ello la mirada académica que ha sido su refugio durante un largo periodo de repliegue, ni los hábitos de instrumentalización y clientelismo en los que su desempeño ha tenido que apoyarse durante el periodo neoliberal, cuando solo pudo concebir su praxis como una negociación con el orden establecido desde posiciones subalternas y no —retóricas aparte— como una praxis revolucionaria o una confrontación en el terreno de la hegemonía.

Esto, por cierto, no tiene que ser negativo: abre la posibilidad de que nuevas formulaciones emerjan de manera orgánica de la propia ebullición social y política; de la propia lucha y de las necesidades concretas del momento, incorporando desde su origen la intensa demanda democrática que lo caracteriza. Aun así, el riesgo de ese vacío ideológico es significativo. En primer lugar, porque, como sugerí antes, puede favorecer un rápido pasaje de la heterogeneidad a la dispersión: sin articulaciones ideológicas mínimas, será muy difícil formalizar y darle concreción a insurgencias tan centrales a la protesta de estos meses y a la vez tan disímiles como las de una comunidad aimara de Chucuito, en Puno, o las de los trabajadores agroindustriales precarizados de Barrio

Chino, en Ica, por citar dos ejemplos entre muchísimos posibles, y será muy difícil también sostener la solidaridad entre actores tan dispares.

Por lo demás, los vacíos ideológicos nunca duran demasiado. Se llenan siempre muy rápido con lo que esté al alcance de la mano, y no es inconcebible que, en el mediano plazo y en el contexto de una lucha prolongada, este vacío se llene con variaciones recrudecidas de las ideologías etnoregionalistas que nunca han dejado de circular en el Perú. Y no es inconcebible tampoco que esas formaciones ideológicas u otras más o menos afines cumplan la función de disfrazar las realidades materiales y los antagonismos de clase que han cobrado cuerpo durante los años del "modelo" en espacios determinados por las economías ilegales e informales o vinculados a ellas, incluyendo las prácticas de explotación, dominación y violencia que caracterizan a esas actividades productivas del capitalismo peruano. Con ello, servirían sobre todo para apuntalar la parcelación de la hegemonía sobre el territorio entre distintas facciones del capital, afirmando el dominio de élites regionales y locales sobre las comunidades y los trabajadores, y convirtiendo esta coyuntura, cuyo potencial transformador es genuino, en otra ocasión perdida.

Insurrección y nueva utopía andina

Homero Quiroz
Emil Beraun

La historia como proceso y como escritura es siempre un combate. En ese combate, el pasado puede servir para justificar el presente y viceversa; sin embargo, más que el combate en sí mismo, lo que resulta necesario en determinados contextos, es pensar la dinámica del presente y su relación con el pasado para comprender los procesos de convulsión social como el que ha vivido el Perú entre el 2022 y el 2023.

El itinerario de un contexto permite relucir las peculiaridades de un momento histórico de cambio. Los filósofos de la historia han hecho énfasis en esa relación pasado-presente que, en vez de romperse, aparece como un fuerte cordón umbilical que se sedimenta con las características y las sinergias propias de cada espacio-tiempo. Dicho de otro modo, si el pasado no es tomado en cuenta, el presente puede convertirse en un volcán que estalla como un hipo del tiempo al ritmo de la lucha de clases y los cambios de época.

En Perú, la cuestión colonial jugó un papel poderoso en esa relación umbilical que marcó la línea cultural, económica y política de la dominación. Como consecuencia, desde el inicio de la república, el racismo, la discriminación, la desigualdad y la blanquitud han fermentado una particular lucha de clases. La literatura, desde inicios del siglo pasado (Gonzáles Prada, Mariátegui, Zulen, Valcárcel, Tristán, Alegría, Vallejo, etc.), hasta la más reciente (Cotler, Matos Mar, Quijano, Avilés, Wiener, etc.), pasando por todos los teóricos de la dependencia, han hecho énfasis en ese mal cancerígeno que amenazaba con mantenernos fracturados como sociedad y llevarnos al colapso. Cínicamente, y después de montañas de libros, las oligarquías políticas y la burguesía financiera, siempre adicta a

un discurso econométrico y racista, nunca han considerado este desencuentro como punto de partida para construir un proyecto de nación.

El "Incas sí, indios no", no nace en el contexto de la Confederación peruano-boliviana: tiene raíces muy marcadas en el periodo colonial, y representantes sobresalientes, incluso mestizos, como el inca Garcilaso de la Vega, quien elogia la grandeza incaica y su linaje de sangre, pero despreciaba a la masa indígena. Así, en la desestructuración política, administrativa y cultural, se forjó una narrativa agresiva que revalora la cultura incaica, pero desprecia a todos sus herederos. Por eso, los peores mercenarios de la burguesía nacional posan con el fondo de Machu Picchu o Sacsayhuamán en Cusco, las ruinas de Vilcashuamán en Ayacucho, los Baños del Inca en Cajamarca, la Isla de Los Uros en Puno, etc., pero sienten un especial desprecio por su gente cuando esta propicia un estallido reclamando derechos, buscando un cambio constitucional o pretendiendo acabar con las enormes brechas de desigualdad económica.

La construcción de esa narrativa racista dominante hizo posible que todas las masacres del periodo colonial encuentren justificación. Después de todo, se trataba de dominar los cuerpos, pero también de construir nuevos esquemas mentales y culturales después de extirpar los preexistentes; se trataba de imponer una nueva memoria histórica, construir simbologías nuevas y de enterrar los hábitos, costumbres, mitos, símbolos, tradiciones y héroes. Pero, como era de esperarse, el hierro de la dominación no pudo evitar que una rebelión extraordinaria tenga lugar en el sur andino con Túpac Amaru II.

Después del descuartizamiento de Túpac Amaru II vino un periodo de pedagogía del miedo en los Andes: décadas de persecución, encarcelamiento, prohibiciones de todo tipo y ejecuciones. Por eso, mientras América Latina se batía en las guerras por la independencia, Perú seguía persiguiendo rebeldes, libros, lectores e ideas. De ahí que, el virreinato del Perú se convirtió en el bastión final del gobierno colonial que se fortaleció después de la rebelión más importante del periodo virreinal. Por ello, a pesar de que la historiografía ha menguado la tesis de la independencia concedida —poniendo como ejemplo al propio Pumacahua, el verdugo de Túpac Amaru II,

convertido en rebelde tres décadas después—, no hemos podido coincidir en que los criollos del Perú, y de Lima en especial, hayan propiciado las guerras por la independencia como gesta revolucionaria propia.

Sin las montoneras y las guerrillas indígenas la independencia no hubiera sido posible, lo han repetido diversos historiadores; sin embargo, el Perú republicano nació ancho y ajeno para los indígenas y para ese Perú extensamente mayoritario. Ese Perú fue apartado del juego republicano y reducido a "masa indígena": sometida a la dominación, a las bayonetas y al plomo, como en Ayacucho y Puno en el reciente estallido. En ese mapa geopolítico, el sur del Perú representa por antonomasia a esa mancha indígena sobre la cual, además, recae la etiqueta del indio insumiso. Así, el terreno quedaba llano, era el momento propicio para fortalecer la narrativa racista que justificaría todas las masacres y las desigualdades del periodo republicano.

Como ha demostrado Cecilia Méndez en diferentes escritos, el racismo arreció y se potenció a inicios de la República. En medio de ese escenario, todas las voces y propuestas radicales fueron aplastadas tanto en palacio como en el parlamento y en la prensa, mientras las necesidades urgentes eran postergadas a perpetuidad. Así, el peso de la trayectoria histórica de la vida republicana, conducida por una plutocracia blanca, fue diluyendo la utopía andina que añoraba el Tahuantinsuyo, al que imaginaban con bases administrativas y socioculturales más autóctonas, más justas, menos discriminadoras.

Pero la utopía relució nuevamente en el contexto de la rebelión de Juan Bustamante en Puno entre 1867 y 1868. Ahogada a sangre y fuego, entró nuevamente en un reflujo. De las profundidades de los Andes la rescataron los indigenistas en medio de los álgidos debates de los años veinte del siglo pasado. Tomó cuerpo en los escritos de José María Arguedas y encontró alma historiográfica en *Buscando un inca* de Alberto Flores Galindo.

Hoy podemos sostener sin aspavientos que esa utopía andina, que buscaba unir la cabeza del rey inca con su cuerpo derrotado, para devolvernos un Tahuantinsuyo renovado, está preparando su propio funeral en el cementerio del tiempo para dar paso a una nueva utopía. La guerra

interna de los ochenta la hizo tambalear; en cambio, el neoliberalismo de los 90 le auguró un epitafio y amenaza con colocarle la lápida.

La insurrección, de este nuevo momento de Perú hirviente, tiene dos elementos en esa trayectoria del tiempo: a) no reconoce liderazgos, sino un rostro multiforme: la multitud; b) no busca un Tahuantinsuyo renovado, sino que está atravesado por el caleidoscopio del discurso republicano radical. Para decirlo en forma de contraposición: no se trata de las gestas de Felipe Túpac Amaru ("Túpac Maru I"), de José Gabriel Condorcanqui ("Túpac Amaru II") o de Juan Bustamante (también conocido como "Túpac Amaru III"), sino de una multitud que ha forjado una identidad propia. Estamos frente a un Perú que, después de siglos de postergación, parece estar listo para hacerse cargo de su propio destino político. La trayectoria de ese destino no es predecible; sin embargo, algo es seguro: será tallado bajo las formas de sus propias ambiciones y del espíritu de época.

La nueva utopía se forja sobre la base de un nuevo grupo económico y social que busca mayor representación en la vida política nacional. Más de dos décadas de crecimiento económico permitieron el surgimiento de una burguesía provinciana, pero, al mismo tiempo, acrecentó la desigualdad. En un país racista, la nueva burguesía provinciana ha potenciado su identidad ligando el aspecto racial con ese embudo que representa el camino para tener representantes políticos favorables al campo popular y a sus intereses de clase.

Actualmente, esa identidad es una mecha encendida en un momento en el que una multitud amorfa, que no reconoce líderes relacionados con partidos políticos, toma la calle sin dirección, pero con decisión inquebrantable. El posicionamiento del discurso identitario, en un contexto de agotamiento del neoliberalismo y sus reglas de juego, han fermentado el desborde popular.

Pedro Castillo se une a esta identidad en un sentido político-popular, pero también racial. Representó eso: un rostro, un símbolo de identidad y un triunfo político efímero, tanto de los postergados, de los parias, como de esa burguesía provinciana que, con Castillo, se integró mejor en los vericuetos de los negociados empresariales orquestados desde palacio. De ahí que,

mientras la izquierda marxista acusaba a Castillo de traición, lo que no podemos perder de vista es que, para el núcleo duro de sus seguidores, sobre todo en el Sur, esa relación umbilical entre el Presidente "campesino" y la identidad indígena que nos relaciona con nuestro pasado y con eso que podríamos denominar peruanidad no estaba rota; aunque se venía debilitado significativamente frente al creciente llamado por una nueva Constitución, el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones.

El estallido permite el aglutinamiento de una masa amorfa bajo consignas viejas, pero que se han renovado al calor del contexto de la crisis política que vive el Perú desde el 2016, y frente al desenlace del final de un gobierno en el que los postergados habían puesto sus esperanzas como en ningún otro en lo que va de la vida republicana. Pero, en esa trayectoria, Pedro Castillo fue desnudado como una figura mediocre y corrompida, al que la lucha de clases ha permitido fungir un papel caricaturesco de héroe encadenado, cuando la historia ya le tenía separado un pie de página en donde iba a convivir con los expresidentes que traicionaron la causa por la que fueron elegidos en las últimas dos décadas. Además, las condiciones sociales, han permitido que su caída sirva como pretexto para que el desborde popular tenga lugar. En esa gesta, Dina Boluarte aparece como el rostro de la traición, la cara visible de una derecha convencida de que el poder nace del uso correcto del fusil. Pero es también la asesina de un símbolo, de ese Perú profundo que ganó unas elecciones históricas en el contexto del bicentenario y, aun así, fue derrotado.

La convulsión, que ha marcado la ruta de la nueva utopía, demuestra que ya no se trata de la renuncia de Dina Boluarte por la montaña de cadáveres en su corto periodo de gobierno, sino de todos los muertos tanto por las masacres como por la indiferencia en más de 200 años de república. Se trata de la gesta de este otro Perú, de un Perú más auténtico que apuesta por una democracia radical en los márgenes de la narrativa republicana. Terroríficamente, y en medio de esta gesta, los buitres de la política esperan el desenlace para capitalizarlo en votos en las próximas elecciones. Todo indica que, el mañana no será todavía de ese otro Perú, pero hoy empieza a forjarse el pasado de ese futuro. El pasado mañana le pertenece.

La irracionalidad política y la política de guerra

Carlos Reyna Izaguirre

En Perú, y muy posiblemente en muchos países, no son pocos los casos de líderes políticos tomando decisiones sorprendentes por irracionales y que, por eso mismo, son de difícil explicación.

Pasará algún tiempo antes de que se pueda entender por qué Alan García decidió estatizar la banca en julio de 1987, que marcó el inicio del fracaso de su primer gobierno. Igual con Alejandro Toledo, sigue siendo un enigma por qué decidió invertir buena parte de su robo al Perú en visibles inversiones inmobiliarias en la propia capital del país colocándose a la vista de cualquier investigación. Seguramente, será el segundo expresidente sentenciado a una larga prisión.

Por otro lado, en cuanto a Alberto Fujimori, qué lo empujo a dejar su muy seguro refugio en Japón y retornar a Perú en 2005, pensando que podía volver a ser candidato cuando estaba pedido internacionalmente por la justicia peruana y ahora ya tiene casi 18 años preso y seguirá así hasta más allá de 2030.

Así que, cuando Pedro Castillo protagonizó esa caricatura de golpe de Estado que pretendió el 7 de diciembre de 2022 y lo llevó a la cárcel, se estaba sumando a una fila ya existente de líderes autores de actuaciones absurdas y determinantes de feos desenlaces para ellos.

Sin embargo, la fila va a seguir creciendo y, tarde o temprano, Dina Boluarte se va a sumar a ella. Ella también ya suscitó esta pregunta sobre su cordura: ¿Por qué razón decidió asumir la irracional concepción que le trasmitió el general que dijo, en público y en Palacio de Gobierno, que las protestas del sur andino no eran "protestas", sino "terrorismo"? La consecuencia fue que en los días siguientes se instaló un clima de guerra

en esas regiones del país, con las consecuencias que conocemos y que no se acaban de disipar. Una de esas consecuencias es que ella terminará, en cualquier momento, en un juicio penal y posiblemente en la cárcel también.

Lo que ha pasado con el sur andino muestra que de tanto moverse la política bajo el mando de supuestos políticos, que solo buscan riqueza o poder, se termina provocando una reacción muy fuerte de una parte de la sociedad, normalmente los excluidos. Y esos pseudopolíticos, obcecados y viciosos de poder o de dinero, responden dejando ya del todo el terreno de la política y sumiendo al país en el terreno de la antipolítica, o, en otras palabras, el de la guerra.

Cuando amainó la protesta, estos políticos, que dominan el Ejecutivo y el Congreso, comenzaron una alucinada orgía de medidas y reformas arbitrarias orientadas a su mantención en el poder y al reparto de prebendas entre sí y entre sus aliados. La ciudadanía aún expresa su protesta solo en encuestas, que Pierre Bourdieu llamaba "opinión pública muerta". Quizás la irracionalidad de la violenta respuesta del gobierno y sus institutos armados, aún disuaden.

En algún momento, de alguna parte de esa ciudadanía, muy probablemente de los excluidos, recomenzará una protesta masiva y activa. Ojalá tome cauces compatibles con el de la razón política para evitar que el Perú se hunda en una fase muy oscura. Por ahora, seguimos viendo que ella es asaltada todos los días desde los tres poderes del Estado.

De este tipo de cosas he tratado en dos artículos publicados justo en el último mes que gobernó Castillo y en los dos primeros que comenzó a gobernar Dina Boluarte, dos paradigmas de la antipolítica. Ambos tratan sobre estos dos responsables del violento clima que se han instalado desde entonces, pero también de otros como ellos.

I
La Nave de los Locos

Pedro Castillo no es el único presidente o político peruano que ha tomado repentinamente una medida poco razonable, incluso autodestructiva como, en su caso, la de lanzarse a pretender disolver el Congreso sin tener las condiciones para eso.

Escapados de la razón

En julio de 1987, Alan García, sin contar con la anuencia de su gabinete de ministros y sin haberle informado a su numerosa bancada de congresistas, sorprendió al país decretando la nacionalización del sistema financiero, con muy escasas posibilidades de llegar a materializarla pues tuvo opositores incluso dentro de su propio partido. Eso marcó el comienzo de la parte más crítica que tuvo su desastroso primer gobierno.

Hacia 2005, Alberto Fujimori dejó su cómodo y seguro refugio en Japón y apareció en Chile, creyendo extrañamente que allí rechazarían un eventual pedido de extradición que haría el gobierno peruano. No fue así, terminó extraditado y con una sentencia a prisión que aún está cumpliendo.

Pedro Pablo Kuczynski no había llegado aún a la mitad de su gobierno cuando a fines de 2017, en la nochebuena de navidad, decidió indultar a Alberto Fujimori creyendo que así podría evitar los intentos de vacarlo que había en el Congreso. Por el contrario, eso fortaleció esos intentos y tuvo que renunciar.

Además de decisiones de muy poca racionalidad en el plano estrictamente político, los cuatro presidentes mencionados, más otros como Alejandro Toledo, Ollanta Humala, o la alcaldesa Susana Villarán y la candidata Keiko Fujimori, han tenido actuaciones muy escasamente razonables, pero ya en el plano ético y legal. Son las que terminaron involucrándolos en diferentes episodios de corrupción, la mayoría asociados al megacaso Lavajato, por los cuales han tenido que asumir las consecuencias de diferente manera.

De modo que las evasiones a la razón no son nuevas ni pocas entre los personajes políticos peruanos. Pero también ha ocurrido y ocurre entre sus seguidores. Es frecuente que estos les atribuyan virtudes excepcionales, a tal punto que les profesan una lealtad incondicional, a prueba de cualquier denuncia contra ellos por sólidas que fueran las denuncias, ya sea por cuestiones morales o delitos. Su reacción frecuente es la de considerar que todo se trata de persecución y acoso contra sus santísimos líderes.

Ahora bien, todo esto no es algo privativo de estos tiempos ni de los peruanos. Ha existido y existirá en todo tiempo y lugar en donde las personas y los pueblos se aproximen demasiado a las puertas del poder y la riqueza. Y esto existe no solo en la política, sino en los negocios y hasta en las religiones.

2021, un salto en la irracionalidad política

El problema para la política de un país es cuando llega a un momento en que la irracionalidad se hace extrema y se convierte en patrón de conducta reiterada durante un tiempo considerable y en casi todas las facciones políticas. En momentos como estos es que pueden ocurrir desbordes de violencia muy graves.

Eso es lo que ha venido sucediendo desde la segunda vuelta de las elecciones generales de 2021 hasta estas últimas vísperas de navidad en que las protestas sociales y su represión desproporcionada, comenzadas el 7 de diciembre de 2022, ya habían dejado 26 muertos, a razón de dos por día.

¿Cómo empezó este continuado asalto a la razón política? Cuando las facciones perdedoras de aquellas elecciones decidieron que hubo un fraude, que en él se habían confabulado el partido ganador y los organismos electorales y que no reconocerían jamás la presidencia de Pedro Castillo. Curiosamente, nunca presentaron ni una sola evidencia o testigo sobre el supuesto fraude o de la confabulación alegada. Tampoco objetaron nunca los resultados de las elecciones congresales que fueron arbitradas por los mismos organismos electorales.

El país en manos de enemigos alucinados, pero oportunistas

Aplicando su irreal convicción sobre el supuesto fraude, desde ese momento, su objetivo prioritario en el Congreso, en lo que duró su gobierno, fue el de obtener el retiro de la presidencia de Castillo, cualesquiera fueran los fundamentos. Al comienzo eran puramente ficticios. Luego su objetivo fue favorecido con el más que sospechoso comportamiento de Castillo en las corruptelas de allegados suyos.

Por su parte, Castillo y la principal facción de gobierno, la cerronista de Perú Libre, guiaron su actuación por sus propias alucinaciones. En lugar de gobernar, creyeron que podrían usar indefinidamente el patrimonio del Estado para beneficio material de sus subfacciones y para comprar aliados en el Congreso.

También creyeron que podrían disimularlo con anuncios radicales que sabían no podían cumplir, como la asamblea constituyente o la nacionalización del gas. Pero lo hicieron tan chambonamente que terminaron cada vez más expuestos a una vacancia o a una acusación constitucional contra Castillo.

Por lejos, la mayor parte de la agenda y de los pleitos del Ejecutivo y el Legislativo, durante todo lo que duró el gobierno de Castillo, fue dedicada casi exclusivamente a esa disputa por su derribamiento o por su continuidad. Igual ocurrió con la agenda de los grandes medios, muy claramente asociada a la de la extrema derecha.

De esas agendas desparecieron por completo los grandes y verdaderos temas nacionales como las vulnerabilidades frente al calentamiento global, la inseguridad alimentaria, el rebrote de las epidemias, la precariedad de los sistemas de salud y educativo, el atraso tecnológico, la inseguridad ciudadana frente a una serie de economías criminales, la tendencia al estancamiento económico, y la desigualdad y la fragmentación social y política. Nada de lo que interesaría a mentes políticas elementalmente racionales y objetivas interesó nunca a la gran mayoría de las facciones aposentadas en el Ejecutivo y el Legislativo, ni a los dueños de los grandes medios.

Y así anduvo el Perú, en deterioro progresivo, observando el pleito de dos grupos de facciones mediocres, sin representación real de los peruanos, pero que tenían el control del gobierno y del Congreso respectivamente. Tan mediocres que no tenían carácter para vencer al otro y producir un desenlace. Tan oportunistas que votaban juntos para aprobar medidas a favor de los negocios de sus financistas. Tan perniciosas que su mayor logro fue destruir el interés de la gran mayoría de peruanos por la política. Una gran mayoría comenzó a decir que se vayan todos, pero sin hacer mayor cosa.

Castillo se lanza al vacío desde Palacio

Así estuvimos, cuando Pedro Castillo, desesperado porque sintió que estaban a punto de cogerlo del cuello, sorprendió al país cometiendo el más irracional de sus actos como presidente. Dispuso la disolución del Congreso sin tener la fuerza de la razón jurídica, ni la razón de la fuerza política. Ni siquiera lo consultó con su gabinete, ni con sus pocos congresistas. Regaló a sus enemigos el más irrefutable de los argumentos para vacarlo y lo único que disolvió fue su propia presidencia.

Ese mismo día Castillo terminó encerrado en la cárcel y en los días siguientes su destino quedó encausado y preso por delitos de rebelión, conspiración y otros. Lo que no se sabía es hasta donde, en los días siguientes, iban a elevarse los niveles de insensatez y violencia que ya teníamos en el país.

De la irracionalidad a la guerra

En vez de actuar con mesura frente al ya cautivo y derrotado Castillo, los fiscales que lo venían investigando y denunciando, incluyendo la fiscal de la Nación, no pudieron resistir las ganas de humillarlo. Corrieron a tomarse fotos y videos frente a su presa. Lo mismo hicieron los oficiales policiales encargados de seguirlo a él y a su familia.

Las imágenes se parecieron mucho a cuando, 30 años atrás, los policías captores del líder de Sendero Luminoso hicieron lo mismo con Abimael Guzmán. No era la primera vez que Castillo era tratado como

terrorista. Sus opositores lo hicieron desde que se perfiló como posible candidato vencedor hasta ahora último. Los más desquiciados lo vociferaban desde el Congreso. Ya vencido, no había razón para que dejaran de hacerlo.

Desde el mismo día en que Castillo fue encarcelado, se desencadenó una de las más grandes protestas sociales que ha vivido el Perú. Las acciones más notorias ocurrieron en las zonas que habían sido sus bastiones electorales: las regiones del sur, especialmente, pero no únicamente.

Como fue analizado en su momento, ese apoyo electoral no fue tanto por un alineamiento programático o ideológico. Tuvo que ver con algo que genera un vínculo más fuerte: la identificación que hicieron esos electores entre su perfil social y el perfil personal del que después fue presidente. Los ataques o agravios a este lo sintieron como a ellos mismos. Una lealtad incluso inmune a las infracciones o delitos que Castillo pudiera cometer. Por eso, la extensión, la intensidad y los desbordes de violencia de las protestas. Pero por esto también el carácter político de sus demandas: renuncia de Boluarte, cierre del Congreso, elecciones inmediatas, asamblea constituyente.

Pero los que llegaron al Gobierno desde el 7 de diciembre de 2022 —la presidenta, sus ministros con mayor poder, los mandos militares y policiales, los voceros de los principales medios y las facciones enemigas de Castillo —, no tenían la razón abierta para comprender cosas como esas. La parte civil de este gobierno, incluida Dina Boluarte, estaba dominada por la ansiedad de afirmarse cuanto antes en sus cargos. Los militares y policías, empoderados por la declaración de Estado de Emergencia impusieron su diagnóstico: esta es una situación de terrorismo y se resuelve como en el VRAEM, con fusiles. El concepto que originalmente se usó contra Castillo, se usó ahora como solución, no política, sino de guerra contra las protestas.

Inusualmente, junto con esta lógica de guerra aplicada en las regiones, en Lima y otras ciudades, el Ejército y la Policía realizaron un espectáculo de fuerza desplegando miles de soldados completamente

equipados, lo mismo que una cantidad similar de jóvenes policías, desarmados, pero en correcta formación. El mensaje a Lima fue claro.

Al momento de escribir este artículo ya suman 28 los fallecidos civiles en diversos puntos del país por proyectiles de arma de fuego en apenas 15 días. Dos por día. La mayoría muy jóvenes, algunos adolescentes. Otros 300 civiles están heridos. De las fuerzas del orden se reportan también unos 200 heridos. En los últimos días las protestas se han aplacado, pero seguramente continuarán. La cantidad de bloqueos en las carreteras nacionales y de locales públicos asaltados y destruidos también es cuantiosa.

De un saldo como ese, difícilmente se vuelve a los anteriores estándares de normalidad rápida ni fácilmente. Además de que las protestas continuarán, quedará latente una disposición a la radicalidad que se activará con más facilidad que antes.

La presidenta Boluarte ha percibido eso con cierta claridad, por eso, apenas al tercer día de protestas, y cuando había ya dos jóvenes muertos en su tierra, salió a mostrarse favorable al adelanto de elecciones para 2024. En los días siguientes hubo más violencia y más muertes, y adelantó su propuesta para que sean en 2023. Expertos electorales manifestaron que era posible hacerlas en setiembre de 2023.

Como las protestas ya habían comenzado a aplacarse por la letalidad de las balas, la mayoría del Congreso terminó aprobando, en una primera votación, que esas elecciones se hagan en abril de 2024, con el pretexto de reformas constitucionales supuestamente impostergables. En realidad, se trataba de reformas constitucionales que favorecerán las posibilidades electorales de la derecha abastionada en Lima y deteriorarán aún más la representatividad del Congreso. Una de ellas, el restablecimiento del senado.

La nave de los locos

Como se ve, el nivel de irracionalidad política que ya existía en el Perú creció con el gobierno de Castillo y más aún después de su intento de disolver al Congreso. Y no solo por la actuación de este nefasto

expresidente, sino de los diversos actores tanto alineados como contrapuestos a él.

Más allá de los sectores populares que tienen razones para esa especial identificación con él, es necesario enfocar sobre los personajes políticos que tienen actuación política con capacidad de influir. Los que se ponen del lado de Castillo, niegan que esté incurso en un golpe de Estado, llegan a demandar que lo liberen y demandan sanción solo para los mandos militares y policiales responsables de los abaleamientos.

Los enemigos de Castillo, a su vez, aducen que la actuación de los ministros a cargo y de los mandos militares ha sido correcta y justa; asimismo, reclaman sanción severa solo para Castillo y para los autores de los bloqueos y los ataques a locales públicos.

La versión del fraude de 2021 permanece inalterable entre las facciones que la inventaron y la recuerdan con frecuencia. Estas últimas versiones sobre lo que ni siquiera acaba de ocurrir, también son autónomas de los hechos, las evidencias y hasta del inflamable contexto en que seguiremos viviendo.

Como van las cosas nada asegura que las elecciones adelantadas se harán en la fecha inicialmente acordada por el Congreso. Y si se realizan, el riesgo de que sean afectadas por la violencia es alto. Tampoco hay señas visibles de la aparición de las corrientes o liderazgos necesarios para remontar esta fase oscura de la política peruana.

Si a esto le sumamos la relación de otras grandes vulnerabilidades que tiene actualmente nuestro país en diversos aspectos, externos e internos, el destino nacional es muy incierto, tanto como el de aquellas míticas naves de la antigüedad, que, cargadas de dementes, eran soltadas al mar sin rumbo definido, y sin más propósito de que se pierdan.

II
Dina ya no va al paraíso

Escribo este artículo el 20 de febrero de 2023, al comenzar la semana 11 después de desatado el vendaval de la protesta popular peruana. Se

inició el 9 de diciembre de 2022 en Andahuaylas, Apurímac, dos días después del fallido golpe de Estado y destitución de Pedro Castillo. En las semanas siguientes la protesta ha sido incesante y su punto más alto fue el 19 de enero. Ese día hubo 145 puntos de bloqueo en las carreteras y acciones de protesta colectiva en 76 provincias, casi el 40 % del total en el país. Son cifras de la Defensoría del Pueblo. La principal de esas acciones fueron las marchas de la primera Toma de Lima. Miles de manifestantes llegados de las provincias a Lima se encontraron con otro tanto de sus compañeros limeños.

Las cosas no siempre son lo que parecen

Hoy, las cifras son bastante menores. Solo 35 puntos de bloqueo y nada más que 9 provincias con otras acciones de protesta, la principal de las cuales ha sido en Puno, el bastión aparentemente incansable de esas acciones. Con todo, parece que la movilización general declina o se repliega y que Dina Boluarte, su gobierno, y el Congreso, comienzan a salvarse de sus dos principales demandas: la renuncia de la presidenta y la pronta convocatoria a elecciones generales.

Sin embargo, no siempre las cosas son lo que parecen. Mi impresión es que Dina ya fue derrotada y que ella y su gabinete se encuentran más cerca de lo que creen del retiro de sus cargos. Es decir, la gran protesta, pese a haber amainado, ya tiene, al menos en este punto, una victoria en la punta de los dedos.

Dina ya fue

Hay dos tipos de gobiernos que terminan cayendo antes de tiempo. Los primeros son los que tienen un nivel muy alto e irreversible de rechazo activo de los ciudadanos. Los segundos, los que incurren en actos escandalosos inaceptables. En el Perú están expuestos a un uso muy discrecional de la vacancia por incapacidad moral. La dictadura de Morales Bermúdez cayó por el rechazo expresado en el paro nacional del 77. La de Alberto Fujimori, quedó herida por la marcha de los cuatro suyos de julio del 2000, pero cayó por el escándalo de los vladivideos.

Boluarte y compañía está ahora peor que cada uno de esos dos, porque tienen ambas cosas: un rechazo enorme graficado en la extensión e intensidad de las protestas recientes y en lo que muestran las encuestas; y una complicidad efectivamente escandalosa con las masacres realizadas contra población civil desarmada.

Los únicos que protegen a Dina también la derriban

Abundan las evidencias, en audio y video, sobre la responsabilidad de Dina en cuanto a las masacres. También sobre la dimensión de las protestas, a las que Pierre Bourdieu denomina opinión pública viva. En las encuestas, la más reciente de IPSOS muestra que el 74 % de los peruanos adultos la desaprueba, que el 76 % pide su renuncia, y un 70 % reclama elecciones para 2023. Además, un 10 % de encuestados refiere haber participado en las protestas. Proyectado al total, se trata de más de 2 millones de personas.

En otra encuesta, la más reciente del IEP, muestra resultados similares, pero más detallados. Sobre la renuncia de Boluarte, en particular, hay claras mayorías a favor en cada nivel socioeconómico, incluido A/B en cada región, y en todos los tramos de edad. Más llamativo resulta que, entre quienes se identifican como de derecha, hay una mayoría de 57 % a favor de su renuncia.

De modo que, tras 62 días de protesta —descontando la tregua de la última semana del año pasado—, el soporte político de este gobierno se reduce exclusivamente al que le dan las fuerzas del orden, el segmento corporativo de los medios de comunicación y la mayoría del Congreso. Pero la efectividad de esos medios y de este Congreso en la arena política es muy reducido porque están prácticamente ahogados de desprestigio. El único soporte y escudo efectivo con el que cuentan es el de las fuerzas del orden, pero la efectividad de estas, en este momento, no consiste en persuadir, sino en matar. Y el uso de esta capacidad no solo no ha frenado del todo a la protesta, sino que ha debilitado aún más a Boluarte y compañía. Incluso las fuerzas del orden que la protegen, cuando lo hacen, también la derriban un poco más. A tal punto que, al-

gunos se preguntan si esas masacres no buscaron, en realidad, serruchar el piso de Boluarte.

No la quieren ni aquí ni en el paraíso

Esta es una época en que la arena internacional también cuenta, y a veces mucho, para el destino de los actores políticos locales, incluidos presidentes y gobiernos. Recordemos las dos veces en que una instancia internacional dejó sin efecto a dos indultos de Alberto Fujimori. O la vez en que una misión de la OEA contribuyó a deslegitimar el triunfo fraudulento del mismo Fujimori en el 2000. En esa arena también le está yendo muy mal a Dina Boluarte, y no por el rol de los presidentes de México, Colombia o Chile.

Desde el comienzo de las masacres en Andahuaylas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó la atención al gobierno de Boluarte. También hicieron lo propio, después de la masacre en Puno —17 civiles asesinados en un solo día—, el propio secretario general de la ONU, António Guterres, y la portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado.

Quince días después de la masacre en Puno, Boluarte tuvo que escuchar una voz aún más crítica respecto a lo que su gobierno hacía con la protesta. Esa voz representaba a todos los embajadores acreditados en Perú, por lo tanto, a sus gobiernos; pero, en particular, representaba también al Vaticano, al Papa, porque era la voz del Nuncio Apostólico. Frente a frente a la presidenta, le dijo entre otras cosas: "Detrás del rechazo de ciertas formas visibles de violencia, a menudo se esconde una violencia más insidiosa, que es la de quienes desprecian lo diferente, sobre todo cuando sus exigencias perjudican de algún modo intereses". Mientras lo escuchaba, la muy creyente Dina debe haber pensado "ya no me iré al paraíso".

La puntilla de amnistía

Otro golpe venido desde fuera ha sido el informe preliminar emitido por Amnistía Internacional (AI) después de haber investigado las

masacres ocurridas en estos meses. Al presentar el informe, el equipo de AI encargado de la investigación señaló: "las autoridades peruanas han permitido que, durante más de dos meses, el uso excesivo y letal de la fuerza sea la única respuesta del gobierno ante el clamor social de miles de comunidades". Además, con el apoyo de las cifras, se dijo "las autoridades habrían actuado con un marcado sesgo racista, ensañándose contra aquellas poblaciones históricamente discriminadas".

Prácticamente, toda la prensa internacional ha rebotado ampliamente el informe de Amnistía Internacional. Eso tendrá consecuencias externas, alertando a los sistemas internacionales de justicia y derechos humanos, y también internas, erosionando lo poco de legitimidad marginal que aún le queda al gobierno y fortaleciendo a los movimientos que piden su renuncia.

La fuerza de los cantos

Esos movimientos pueden haberse replegado, pero no debe caber duda de que volverán a la carga. Hay una señal, adicional a otras ya mencionadas, de que estamos ante una protesta muy potente y por tanto con posibilidad de resistir, remontar e incidir en cambios importantes. Sus formas de expresión han desbordado los discursos convencionalmente políticos e ingresaron de lleno en el campo de lo cultural, como los cánticos de tono a veces satírico y a veces combativo, que han brotado en diferentes regiones.

La canción más cantada ha venido de Puno: "Esta democracia ya no es democracia, Dina asesina, el pueblo te repudia, sueldos millonarios para los corruptos, balas y fusiles para nuestro pueblo, cuántos muertos quieres para que renuncies".

Otra más se escuchó en las comparsas del carnaval ayacuchano reciente. Era de la comparsa Las Arpías, de varones vestidos como mujeres cantando "Dina Boluarte jijuna…, has matado inocentes; estos terrucos estás diciendo, este terruco está bailando; congresistas jijunas …, son corruptos toda la vida; Dina, Congreso, fuera, fuera, m...".

Tambien circula el rap Dina Balearte, de Jah Man y Pau The Kid, entre lírico y urbano callejero como es su género "Dina, tu cultura es asesina; tú no conoces ni la calle ni la vida ... Dina, tu presidencia es suicida; no conoces a la gente, no respetas ni a la vida. Te dicen la Balearte... Toda protesta trae piedras. ¡Qué querías mosca muerta!, si es la gente de los Andes la que siempre muere de hambre".

Donde más cánticos han salido ha sido en Puno, trayendo a las protestas algunos que ya existían y adaptando su letra a las circunstancias presentes. Uno de ellos, de los sikuris con sus típicas zampoñas, quenas y tambores parece como escrito para esta hora "Pueblo mío ya no llores, no llores ni tengas pena, tus hijos están ya luchando, los Andes están remeciendo, ay pueblo mío los Andes estás remeciendo".

La marcha de los cuatro suyos, una vez que cesó, dejó al gobierno de Fujimori tan desflecado que cualquier asunto adverso que lo sorprendiera podría terminar de derribarlo. Y así pasó a pocos meses de jurar su tercera presidencia, pese a que tenía cerca del 50 % de respaldo en las encuestas. Dina está ahora claramente peor de lo que estaba el dictador cuando le llegó la noche y aquí nada ha cesado. Su mala hora no demora en llegar y las manos que empuñan zampoñas pronto tocarán una victoria.

El estallido permanente

Silvio Rendón

La autovacancia

En tiempo real parecía que se trataba de un autogolpe. Poco tardó en evidenciarse que se trataba de un anuncio de un presidente que no tenía mando de tropa; un presidente que estaba tan atacado que ya no quería ir por la tarde al congreso a defenderse de una moción de vacancia que iba a ganar. Los golpes morales dirigidos por el estado mayor de una derecha de brazos mediáticos, congresal y de inteligencia, habían sido muy certeros en desmoralizar al presidente para que continúe con un gobierno caracterizado por la desorganización y falta de orientación política. La derecha tenía muy claro el juego: sacar a Castillo y tomar el poder. En tal sentido, Castillo dio la excusa que la derecha necesitaba en tiempo real. Ya las faltas procesales expuestas posteriormente tienen poca relevancia; Castillo ya no es presidente. Con ese anuncio dio la excusa, los votos y el camino legal para salir del gobierno. Evidentemente, era lo que Castillo quería. No jalaba.

El autoentrampe

¿Cómo se metió Castillo en este berenjenal? Pues rodeándose de su clan familiar-paisanal que siguió una lógica prebendaria sencillera. Su entorno más oportunista, en la creencia de su pronta vacancia, entró desde el comienzo a hacer irregularidades que una derecha vigilante nunca dejaría pasar. Finalmente, eran los negocios que se hicieron con gobiernos anteriores. La diferencia es que a este presidente maestro rural no se lo iban a tolerar. Un operador envanecido como Bruno Pacheco o el dueño de la casa de Sarratea no tenían, por supuesto, ningún proyecto

político social que defender. Castillo tuvo pésimo criterio para rodearse de estos personajes, pero también lo tuvo después de que estos fueron expuestos. Si bien eran diferentes, siempre eran desleales con su persona o con su investidura. Ni bien salían del gobierno, lo primero que hacían era denunciar a Castillo. Para coronar sus malas decisiones, dio acceso preferencial de poder a su familia nuclear, con lo cual la hizo blanco de las denuncias mediáticas. No se entiende su anuncio de autogolpe sin entender la vulnerabilidad que se autoimpuso. Tampoco se entiende si nos negamos a comprender a la ciudadanía que lo apoyaba, pese a todo.

El estallido en cascada

El estallido social fue acumulándose rápidamente en tres momentos. Primero, desde un núcleo duro que pidió y apoyó el supuesto autogolpe de Castillo; luego, la ciudadanía que rechazó tempranamente el viraje derechista de Boluarte; finalmente, la ciudadanía que rechazó el viraje represivo policial-militar de un régimen ya derechizado. En el primer momento se distingue a la gente movilizada en Lima alrededor del congreso para apoyar a Castillo en la votación de vacancia. Este contingente aplaudió primero el anuncio de golpe y luego se fue a la Prefectura de Lima para apoyar a Castillo arrestado. En un segundo momento, son las movilizaciones en Apurímac, que son reprimidas con balazos y muertos. Luego siguen Huamanga, Juliaca, Cusco, Puno, Chao, Pichanaki, con más saldos mortales. Estas movilizaciones intentan la destitución de Dina Boluarte en forma similar a la destitución de Manuel Merino. La diferencia es que los militares sí acatan las órdenes de reprimir que años antes desacataron a Merino. Las movilizaciones son masivas, particularmente en el sur del Perú e incluyen bloqueos de carreteras. Finalmente, vienen movilizaciones en Lima, muy impactadas por la represión mortal, la mentira del régimen y la impunidad total. Estas también pedían la renuncia de Dina Boluarte. El régimen ni se movió ni se conmovió.

El estallido venía de antes

La elección de Pedro Castillo ya fue un estallido social. La ciudadanía le dio la confianza a uno de los suyos, venido de abajo y con un discurso de cambio social. Castillo pudo ganar por una holgada diferencia si no hubiera cometido tantos errores en la campaña de la segunda vuelta, particularmente, por no presentar una propuesta de cambio bien articulada que estuviera a la altura de las esperanzas populares. Por más que su gobierno decepcionara en muchos aspectos, la estabilidad económica y la imagen de preocuparse por los de abajo le ganó un apoyo militante que se movilizó generosamente por él y contra el secuestro del voto popular. La ciudadanía no había votado por Dina Boluarte y su agenda de derecha. Las frustraciones que dejó Castillo fueron en perspectiva muy pequeñas en comparación con el estallido social embalsado.

La apuesta por el desgaste

El régimen apostó por la represión extrema, la estigmatización de la protesta, su desgaste y cooptación. Una táctica muy de manual, el ABC de la contrainsurgencia. Quien está dispuesto a *terruquear* a quienes protestan, está también dispuesto a matarlos. Lo que no ocurrió con Merino, ocurrió con Boluarte. Los mismos generales que le dijeron no a Merino, le dijeron sí a Boluarte. Eso ocurrió muy tempranamente y fue un punto de no retorno para Boluarte. Pasó el examen para ser admitida en las filas ultraderechistas. Fortaleció su núcleo duro de ultraderecha congresal-policial-militar con lo que quedó claro que no renunciaría. Se quedaba a cualquier precio. O la quedaban. Con esta represión mortal reforzada con la total impunidad, garantizada por el Congreso y la Fiscalía, se apostó al desgaste de la protesta social. "Lo peor ya pasó" anunciaría un ministro de economía para desviar la atención a una supuesta buena gestión pública.

El fracaso de la gestión pública

El régimen de Boluarte se presentó con un régimen de ministros técnicos, todos mucho mejores que los de Castillo. Es más fácil crear una imagen cuando se cuenta con el apoyo de la gran prensa. Fue muy

evidente que, mientras a Castillo lo demolían, a Boluarte la apuntalaban y le justificaban todo. Sin embargo, no se puede vivir todo el tiempo de la imagen sin contenido. La gestión pública de Boluarte está totalmente supeditada a las necesidades de legitimación del régimen. El gabinete ha tenido muy pobres resultados en más de un trimestre. La inversión privada ha caído 13 % en el primer trimestre de 2023 y el MEF ha tenido que reconocer que el crecimiento esperado para 2023 ha caído más de medio punto, pero puede ser más. La economía está en riesgo. A esto se suma el descontrol de la epidemia de dengue, invisibilizada por los grandes medios de comunicación. Las perspectivas no son buenas. La imagen creada no sirve de nada si no hay resultados concretos.

Idealización y falta de autocrítica

En esta situación hay una gran responsabilidad de Pedro Castillo. Fue una jugada individualista huir hacia adelante anunciando un autogolpe, entrampado por sus propias malas decisiones y juntas. Lo que tuvo que hacer, y no hizo, era formar una coalición de gobierno con acuerdos políticos explícitos y públicos, con un manejo técnico y político orientado a aliviar las necesidades insatisfechas de las mayorías sociales. El vacío político sigue siendo llenado por la presencia simbólica de Castillo. Pero de ahí no sale un programa concreto de gobierno. Ya se lo vio en acción. Desde un punto de vista social, procede una profunda autocrítica de los sectores de izquierda que tuvieron posibilidades de hacer algo para los de abajo y no lo hicieron. El tema es que la carencia de autocrítica da el mensaje de que, de haber otra oportunidad, seguirán igual. Las malas experiencias no están para repetirlas, sino para aprender de ellas y evitarlas en el futuro.

Los desafíos de un gobierno popular

Un gobierno de izquierda se enfrenta a lo que ocurre con todos los gobiernos anteriores: la corrupción, las prebendas, la precariedad. Los generosos financistas de campaña se vuelven voraces cobradores de favores. Los que pusieron las camionetas para movilizarse de pueblo en pueblo,

los aportantes de pasajes de avión, los donantes de polos y banderolas siempre tienen algo que pedir, principalmente contratos con el Estado y puestos de trabajo público para sus operadores políticos. Son gestores de negocios privados, pequeños emprendimientos personales o familiares donde el recurso estratégico es el contacto con el poder. Una por otra. Desde luego, esas rentas se distribuyen entre el entorno personal y familiar de quien detenta el poder. Y en ese entorno, no faltan allegados que buscan trabajo en el Estado, pero generan precariedad. En todo gobierno ha habido una cuota de precariedad. Ni el gobierno anterior más "técnico" pudo darse el lujo de negarle trabajo a algún allegado sin pergaminos. El gobierno de Castillo no fue la excepción. No hubo una democratización del acceso a la función pública de sectores históricamente discriminados. Hubo más de lo mismo, pero con otro núcleo de poder. Un futuro gobierno de orientación popular tiene que plantearse los antídotos a las presiones de la corrupción y la precariedad. Se requiere organización política con principios y mecanismos institucionales.

Lo de siempre y lo nuevo

A estas alturas el problema no es solo de la izquierda, sino de todas las fuerzas políticas. La corrupción, la prebenda y la precariedad política brotan de la sociedad peruana desde hace mucho. No es un tema que se vaya a solucionar tan fácilmente. El régimen de Boluarte padece de lo mismo que los gobiernos anteriores: corrupción, prebenda y precariedad. Lo nuevo es que todo esto fue desvelado públicamente, que hay presidentes presos por corrupción, que la ciudadanía está harta y quiere un cambio. Esa voluntad de cambio también brota, y crecientemente, de la sociedad peruana. ¿Da para una reestructuración como se vivió antes en la historia del Perú?

La historia es duración

Los partidos políticos históricos se formaban alrededor de un ideario que expresaba los intereses de amplios sectores sociales. Los arrejuntamientos actuales se forman alrededor de tener inscripción ante

la ONPE. Las leyes electorales exclusionistas, pensadas para reducir la entrada de partidos al sistema, reforzaron la dinámica de vientres de alquiler y la desideologización. Las energías que antes se dedicaban al intercambio de ideas y propuestas, hoy se dedican a correr firmas, llenar formularios y subsanar errores en la presentación de documentos ante la autoridad electoral.

La movilización masiva para la elección de Pedro Castillo en 2021 y la movilización masiva de 2022 y 2023 contra Boluarte expresan dos cosas que eran sistemáticamente negadas por las ciencias sociales en el Perú. Por un lado, hay un alto nivel de conciencia política y voluntad de cambio social entre la ciudadanía. La movilización no se limita a ser economicista y reivindicativa, sino que es política y social. Precisamente, la queja de Boluarte ante las movilizaciones era que no protestaban por el agua u obras para sus pueblos, sino por la renuncia de la presidenta. Los pueblos del Perú hacen política. Por otro lado, la movilización no es fragmentada, sino nacional y unificada. Hay una agenda común a los pueblos diversos en toda la geografía nacional, pero con problemáticas diferentes. No es algo que haya ocurrido muy frecuentemente en la historia del Perú. El árbol de la coyuntura no deja apreciar el bosque de la historia.

Transitorio desenlace ultraderechista y poder fáctico represivo

Un desborde popular expresado en una movilización política y nacional genera la reacción en sentido contrario. Las fuerzas reaccionarias también se enardecen y movilizan, cerrando los espacios del poder que detentan. Sus operadores en el Congreso, Fiscalía, medios de comunicación y aparato represivo *terruquean* al movimiento social, comenzando por su vanguardia de líderes sociales. Desde la captura del Inca, la táctica conquistadora siempre ha sido descabezar para gobernar y cooptar colaboradores.

Dina Boluarte en el gobierno representa un desenlace ultraderechista y represivo. Gobierna con los sectores que perdieron las eleccio-

nes, prioriza el gasto en las regiones donde tienen influencia los sectores que perdieron las elecciones; se llevan a cabo políticas abogadas por los sectores que perdieron las elecciones. No es exagerado decir que hay un escenario similar al que existía en el Perú prevelasquista, donde la oligarquía gobernaba cerradamente. La diferencia hoy es que la ciudadanía ha despertado y es mucho más levantisca que antes.

Aun con este desenlace, el poder fáctico detrás del régimen es principalmente el poder policial y militar. Es este poder el que decide qué órdenes le obedece a la presidencia y con eso decide cuánto va a durar esa presidencia. A estas alturas, este poder fáctico está en clave de decir "nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, pero el poder civil no está haciendo lo suyo". El tema es que este poder civil no puede hacer nada efectivo porque no sabe cómo; es precario, prebendario y tiene un masivo rechazo. No puede complementar la represión con resultados que le ayuden a lograr apoyo político. Por el contrario, a pesar de sus precarios nombramientos de funcionarios, no los cambia por no dar señales de debilidad. No es una situación sostenible.

El estallido permanente contra el poder amurallado en Lima

Dina Boluarte no puede salir de Lima. Gobierna desde palacio de gobierno llegando incluso a inaugurar y celebrar en Lima fiestas regionales de Puno, Cusco, Ayacucho y Apurímac. Todo eso, lejos de generarle alguna simpatía, le genera más alejamiento de la ciudadanía. Algo similar ocurre con sus ministros, que ya han sentido el rechazo público y activo de la población en el interior del Perú. Son ministros pararrayos que encajan los reclamos ciudadanos que la presidenta en funciones no se expone a recibir. Además de darle más aislamiento social, esta autoreclusión le da más aislamiento regional y ensancha el clivaje entre Lima y el Perú no limeño.

El régimen interpretó como un triunfo el supuesto desgaste de la protesta social de rechazo. Le echó la culpa a la protesta y a las lluvias por su mala gestión pública. Sin resultados positivos que mostrar, su

desaprobación sigue al alza y las excusas se van acabando. Hay una retroalimentación del rechazo ciudadano. El rechazo le impide buenos resultados; los malos resultados le generan más rechazo. No es que hubo una protesta que ya acabó; hay una protesta latente que se vuelve manifiesta en cualquier momento. Con un régimen autoritario el estallido es permanente.

A modo de conclusión

El Perú vive un momento inusitado en su historia. Hay una movilización ciudadana como nunca se ha visto: desfragmentada, política, unitaria. Es un verdadero huaico. Es un desborde sin cauce. No hay organización nacional. Hay coincidencia y resonancia y ramalazos de coordinación, pero persiste la dispersión. Después de 30 años de reformas económicas y políticas, hay agotamiento del modelo impuesto. La propia constitución de 1993 es incumplida por sus defensores textualistas. Desde el régimen no hay mucho que ofrecer a la ciudadanía, salvo una restauración de un modelo que ya no funciona y que no funcionó para las mayorías sociales. Desde la ciudadanía no se puede ir muy lejos sin pasar al siguiente nivel, que es el organizativo y de una agenda de gobierno en positivo.

Una solución racional al conflicto sería llegar a un megaacuerdo político, un pacto social en serio; pero, en las condiciones actuales, es mucho pedir. Demasiado sentido común. En tales circunstancias, es muy poco probable que el régimen de Boluarte llegue al 2026 como se lo ha propuesto. El gran riesgo es que, una vez más, puede haber un desenlace aún más autoritario y ultraderechista que el actual.

El estallido social en Cusco o el nuevo *pachakuti*

Luis Nieto Degregori

A raíz del fallido autogolpe del presidente Pedro Castillo y tras la designación de Dina Boluarte, el país ha presenciado un estallido social con un altísimo costo en vidas humanas, pérdidas económicas y deslegitimación de sus instituciones; además de una polarización social que ha desnudado fracturas que nuestra república arrastra desde su fundación hace doscientos años, como la exclusión social, el racismo y el clasismo.

En el caso particular de la región de Cusco, esto significó numerosos días de paro seco (llamado así por la ausencia casi total de transporte y comercio en las ciudades) y bloqueos de carreteras que generaron desabastecimiento de comestibles y combustibles, como el gas de uso doméstico, la gasolina y diésel, sin mencionar el encarecimiento del costo de vida.

Un hecho inédito que ha sido advertido por los analistas políticos y la prensa tanto a nivel regional como nacional es que el protagonismo de las movilizaciones sociales lo tuvieron los sectores campesinos, comuneros e indígenas. En Cusco, este protagonismo se tradujo en un sinnúmero de marchas de pobladores de diversas provincias y distritos de la región hasta la ciudad de Cusco, donde hacían largos recorridos por sus calles y plazas coreando sus principales demandas: renuncia de la presidenta Boluarte, cierre del Congreso, elecciones anticipadas y convocatoria a una asamblea constituyente. Una exigencia que también se escuchaba al comienzo de las movilizaciones era la de reposición del presidente Castillo, pero esta fue siendo dejada de lado a medida que transcurrían las semanas.

No menos importante fue el envío de numerosas delegaciones hasta la ciudad de Lima para participar en la así llamada "segunda marcha

de los cuatro suyos" o también "la toma de Lima", el jueves 19 de enero de 2023. El mecanismo de financiación de todas estas movilizaciones y traslados fue el de las colectas solidarias y las ollas comunes. En plazas de provincias y en la plaza Túpac Amaru de la ciudad de Cusco se instalaron carpas para la recepción de donativos, tanto en víveres para las ollas comunes, como en dinero para los traslados y la atención de heridos, a medida que casos de esta naturaleza se fueron dando.

Las demandas de los sectores sociales movilizados fueron de carácter netamente político, pero no por ello menos legítimas. Esta parece haber sido la razón principal del escalamiento de las protestas hasta alcanzar la magnitud de un verdadero estallido social. Se debe entender que, el gobierno de la presidenta Boluarte se negó en todo momento a establecer espacios de diálogo para discutir una agenda política e insistió en que los sectores sociales movilizados presentaran demandas sociales que el gobierno estaba dispuesto a discutir. Por eso, cuando desde la Presidencia del Consejo de Ministros y otros ministerios se intentaron constituir espacios de diálogo de dicha naturaleza en las regiones, estos fueron rechazados por quienes protagonizaron las manifestaciones.

El factor étnico

Se ha hecho referencia en párrafos anteriores al protagonismo en las movilizaciones de los sectores campesinos, comuneros e indígenas. Para poner esta afirmación en contexto, repasemos someramente los datos del Censo de Población del 2017 en lo referido a autoidentificación étnica, explicada como "la forma cómo una persona se percibe a sí misma, tomando en cuenta sus costumbres y antepasados". En la región Cusco, el 74,8 % de la población mayor de 12 años se autoidentifica como quechua; y el 18,7 % como mestizo. La población que se considera blanca es, apenas, el 13 %, mientras que los indígenas amazónicos llegan al 0,7 %.

En lo referido a algunas provincias donde las movilizaciones fueron especialmente contundentes como Canchis y Calca, estas reportan porcentajes de población quechua, con 88,97 % y 86,41 %, respectivamente. Entre tanto, Cusco y La Convención arrojan los porcentajes más bajos,

con 63,02 % y 56,91 %, respectivamente. Cabe señalar que, salvo estas dos últimas provincias, las once restantes del departamento tienen porcentajes de población que se autoidentifica quechua que fluctúa entre el 82,02 % de Urubamba y el 94,22 % de Canas.

Los datos sobre lengua materna de la región, referidos a la población de 5 y más años, corroboran el panorama arriba esbozado, pues, el quechua es la lengua materna del 55,25 % de la población, mientras el castellano lo es del 41,83 %. En Calca y Canchis los porcentajes de población con el quechua como lengua materna se elevan a 72,63 % y 65,93 %, respectivamente. El aspecto que queremos hacer notar con esta información es que la población indígena de la región de Cusco no es solo la rural campesina, sino también la urbana de sectores populares. En datos censales esto se expresa así: el 67,2 % de la población urbana regional se autoidentifica como quechua, en tanto el 25,5 % se considera mestiza. La población urbana que se autoidentifica como blanca sube del 1,3 % ya consignado al 1,7 %.

Radiografía del estallido social

En marzo 2023, tuve la oportunidad de visitar varias ciudades de la región de Cusco (Sicuani y Calca, particularmente) para, mediante entrevistas con dirigentes populares, intentar auscultar el estallido social que se vivió con fuerza entre el 7 de diciembre de 2022 y la primera quincena de febrero de 2023. La elección de estos lugares no respondió a la casualidad, pues fue en dichas provincias donde los paros, las movilizaciones y los bloqueos de carreteras fueron más fuertes y persistentes.

La constatación más importante que pude hacer fue que, el protagonismo de las movilizaciones fue compartido por las comunidades indígenas y organizaciones campesinas como juntas de regantes, por un lado, y organizaciones urbanas como comerciantes de mercados y mototaxistas, por el otro. Lo que aglutinó a estas organizaciones fue el rechazo a Dina Boluarte y al Congreso; mientras que, el detonante del escalamiento de las protestas fueron las sucesivas matanzas en Andahuaylas, Ayacucho y Juliaca.

Otro asunto que pude percibir fue que, la persistente demanda de asamblea constituyente se mantenía principalmente en el plano simbólico y encarnaba el deseo de reconocimiento y de participación política, así como el anhelo de un país más justo en el que la vida de todos los peruanos y peruanas tenga el mismo valor. Este anhelo fue el catalizador que llevó a miles de manifestantes a "tomar" la ciudad de Cusco en incontables ocasiones y a organizarse para la toma de Lima en la segunda quincena de enero de 2023.

Parece haber sido Lima, sin embargo, la que asestó un duro golpe contra las delegaciones que viajaron desde Cusco y otras partes del país. Y no me refiero a la brutal represión de la que fueron objeto canchinos, calqueños, espinarenses, chumbivilcanos y, en general, cusqueños; ni a las injustas imputaciones de un Ministerio Público, claramente coludido con los poderes que sostienen al gobierno de Dina Boluarte. Tampoco me refiero a la represión, acoso fiscal y de la prensa, pues, los vejámenes racistas y clasistas solo alimentaron la épica de delegaciones que estaban en Lima en representación de todas sus ciudades, pueblos y comunidades de origen, y que vivían esto con un profundo sentido de orgullo y responsabilidad. Me refiero al encontronazo con el que, a juzgar por lo escuchado en las entrevistas, se dieron quienes tomaron Lima; esto es, el choque con las organizaciones de carácter nacional que resultaron ser pura fachada y que, como si le hicieran el juego al Congreso, nunca supieron deponer sus particulares intereses para intentar articular un movimiento social que recogiera esas demandas que eran comunes a todos: renuncia de Boluarte con adelanto de elecciones, cierre del Congreso y asamblea constituyente.

En general, la falta de articulación en todos los niveles de las organizaciones que protagonizaron las protestas, desde el provincial, el regional y sobre todo el nacional, fue lo que golpeó la moral de los manifestantes y contribuyó a enfriar las protestas.

Ha empezado un nuevo ciclo histórico

Los últimos ciento veinte años de nuestra historia republicana están marcados por las luchas de los pueblos indígenas para conquistar los derechos que les fueron conculcados en la colonia, primero, y en la naciente república, después. Al hablar de pueblos indígenas, nos estamos refiriendo, sobre todo durante buena parte del siglo XX, a una mayoría de nuestra población, por lo que esas luchas son, a la larga, las que definen qué tipo de Estado nación estamos construyendo. Si se trata de uno que responde a los intereses solo de una minoría criolla, como ocurre, en parte, hasta el día de hoy; o uno que represente a las mayorías indígenas y mestizas; es decir, un estado plurinacional y verdaderamente democrático.

Un primer hito son las rebeliones campesinas del primer tercio del siglo XX, sobre todo en los territorios de Puno y Cusco. José Tamayo Herrera señala que, para el caso de Cusco, en la década de los veinte se producen sublevaciones en Lauramarca, Chinchaypuquio, Quiquijana, Llusco-Quiñota, Haquira, Layo, Lamay y Tocroyoc. El cabecilla de esta última rebelión, la más estudiada por los historiadores, fue Domingo Huarca Cruz, quien fue asesinado por los mistis de la zona. Este líder indígena es recordado hasta hoy en numerosas danzas que escenifican su sacrificio. Es importante señalar que, una consecuencia de este ciclo de sublevaciones fue la implementación de las primeras políticas en favor de los indígenas durante el segundo gobierno de Augusto B. Leguía.

Un segundo hito son las invasiones de tierras de las haciendas que se producen entre 1956 y 1964 a lo largo de toda la sierra, principalmente en Cusco, Ayacucho, Junín, Pasco, Ancash y Cajamarca. Esto implicó, según Hugo Neira, la movilización de un millón y medio de campesinos indígenas. La consecuencia de estas movilizaciones fue la Reforma Agraria de 1969, que significó, a la larga, el fin del sistema de hacienda y, lo que es más importante, de la servidumbre para millones de indígenas. Este es un suceso trascendental en nuestra historia reciente, al punto que puede ser considerado el más significativo del siglo XX para la sociedad peruana, un verdadero *pachakuti*.

Una consecuencia adicional de esta profunda trasformación fue la aprobación, en la Asamblea Constituyente de 1979, del voto universal, que incluyó a la población analfabeta, principalmente de origen indígena, que había sido privada de este derecho fundamental a raíz de una reforma electoral aprobada en 1896. Se puede decir que, recién a partir de 1980, todos los peruanos y peruanas, por lo menos en el papel, tienen derecho a una ciudadanía plena. En la práctica, sin embargo, eso lo sabemos todos, las poblaciones indígenas y las mestizas de origen indígena siguen siendo consideradas, por los grupos de poder económico, como ciudadanos de segunda o tercera categoría.

Es este orden de cosas el que ha sido puesto en cuestión por el estallido social que hemos vivido entre el 7 de diciembre de 2022 y fines del mes de febrero de 2023. Las intensas movilizaciones que estuvieron acompañadas de paros secos y bloqueos de carreteras en regiones como Puno, Arequipa, Cusco, Apurímac, Moquegua y Tacna, entre otras, levantaron demandas de carácter netamente político, que a fin de cuentas apuntan a la refundación del Estado peruano; de modo que este garantice un ejercicio pleno de los derechos de las poblaciones indígenas rurales y de las periferias urbanas, incluido el derecho a la representación en el Congreso, así como el respeto de su voto.

Confundiendo los procesos sociales de largo aliento con el juego político cotidiano, la mayoría de los análisis ponen el acento en el reflujo de las movilizaciones y en la posibilidad de que el gobierno de Dina Boluarte llegue hasta el 28 de julio de 2026. Se deja de lado así lo verdaderamente sustantivo: que hemos entrado en un nuevo ciclo de nuestra historia republicana, en el que las grandes mayorías indígenas y mestizas de origen indígena han decidido asumir el protagonismo en la construcción de un nuevo Estado nación que, finalmente, recoja sus derechos y su visión del mundo.

Es muy temprano para predecir qué lapso abarcará este nuevo ciclo histórico (¿una década?, ¿quizás dos?), pero ya podemos sostener que las movilizaciones de dicho estallido social formarán parte para siempre de nuestra memoria colectiva. Por siempre también, la actual presidenta

Dina Boluarte será recordada como una asesina que puso sus ambiciones personales por encima de la vida de decenas de peruanos y peruanas. Señales clarísimas de esto último son, por ejemplo, las canciones que se corearon en los carnavales desde Cajamarca hasta Puno, o las alfombras de flores de la Semana Santa ayacuchana.

La verdadera agenda

Hace ya un buen número de años que la agenda nacional la plantean los medios de comunicación en función de los intereses de los grandes grupos económicos e ignorando las verdaderas prioridades del país y las demandas de la población. Tras el estallido social se viene levantando, como se dice en jerga periodística, un sinnúmero de temas con el único fin de distraer a la opinión pública de lo realmente sustantivo, que es el grave riesgo en que se encuentra nuestra frágil democracia.

Es en este estado comatoso, en el que ha caído nuestro sistema democrático, el que trata de ser ocultado por los grandes medios de comunicación con el beneplácito del gobierno de Boluarte y del Congreso, los principales responsables de la situación que atravesamos son los representantes del gobierno porque, tras masacrar a decenas de peruanos, el único norte al que apuntan es a sostenerse a como dé lugar hasta el 2026; pero también el Congreso porque, a pesar de ser rechazado por el 90% de peruanos, es el que está desmontando lo poco que quedaba de nuestro régimen democrático, empezando por el equilibrio de poderes.

No transcurre una semana, sin embargo, sin que suenen señales de alarma que nos recuerdan que estamos viviendo los momentos más críticos de nuestra historia reciente y que debemos hacerles frente. La mayoría de las veces estas señales provienen del exterior, sea de organismos internacionales, gobiernos o parlamentos y, sobre todo, organizaciones que defienden los derechos humanos. No faltan, sin embargo, reacciones al interior de nuestro país, como pronunciamientos de personalidades y organizaciones sociales, que también nos recuerdan la urgencia de actuar y movilizarnos.

Los dos temas que siguen en agenda y sobre los que debemos insistir día a día son la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones. La actual presidenta debe renunciar, en primer lugar, porque ha perdido toda legitimidad a raíz de las decenas de muertos que se produjeron en las manifestaciones en su contra y, en segundo lugar, porque es la única manera de que se concrete un adelanto de elecciones. El Congreso, de eso ya estamos todos convencidos hasta la saciedad, solo hizo la finta de que se tomaba en serio el tema de adelanto electoral, pero en realidad siempre estuvo interesado en ganar tiempo para luego volver a lo suyo: seguir desmantelando la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), elegir a un Defensor del Pueblo a su servicio como ha hecho con el Tribunal Constitucional, aprobar leyes que favorecen a grupos de interés a los que los congresistas representan, etc.

Hay, sin embargo, un tema de agenda más importante que los anteriores y que rara vez se menciona: la urgencia de investigar las masacres de Andahuaylas, Ayacucho y Juliaca y en general todas las muertes ocurridas durante las manifestaciones, a fin de que los culpables directos y los responsables políticos enfrenten a la justicia. En las condiciones actuales, con una alianza entre gobierno, Congreso y poderes económicos, que ha decidido ignorar las demandas de la población y se ha constituido, por lo mismo, en una dictadura, no se puede esperar que nuestro sistema judicial avance en tales investigaciones. Por el contrario, como vemos por la actuación de la Fiscal de la Nación, que ha trasladado todos los casos de esta naturaleza a Lima, lo que se busca es controlar, entorpecer y dilatar tales investigaciones.

Por ello, por respeto a los fallecidos y a sus deudos, debemos poner como principal punto de nuestra agenda nacional la instalación de una comisión independiente que se encargue de investigar las muertes con las que carga el gobierno de Dina Boluarte. Solo la creación de esa comisión, una especie de nueva Comisión de la Verdad y Reconciliación dará una señal al país de que en verdad se quiere buscar salidas a la crisis en la que nos encontramos atrapados. En todo caso, la sociedad civil, la ciudadanía, todas las voces, debemos colocar como punto permanente de reclamo la necesidad de tal comisión pues solo así avanzaremos en

la construcción de un Perú diferente en el que todas las vidas humanas cuentan.

A modo de conclusión

En uno de sus mensajes a la nación, apenas cinco días después de asumir la presidencia, Dina Boluarte tuvo el descaro de parafrasear el último discurso de Salvador Allende, manifestando lo siguiente:

> Jorge Basadre, avizorando el futuro del Perú, en función de su difícil pasado, nos dijo que la patria era un problema y una posibilidad. Durante décadas nos hemos concentrado en el problema. Pienso que ahora se abren las alamedas para construir los bosques frondosos de la posibilidad, y ello solamente será posible si, como decía el propio Basadre, realizamos la promesa de la vida peruana.[1]

A contrapelo de lo que imagina esta presidenta ilegítima, sin embargo, es el estallido social que acompañó el inicio de su gobierno, el que marcará un antes y un después en la historia de nuestro país, el que en verdad "abrirá las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor", como dijo Salvador Allende. Ese hombre nuevo, en el caso peruano, son los sectores indígenas, tanto del mundo rural como de las periferias urbanas, que se movilizaron en defensa de su derecho para ejercer una ciudadanía plena.

Ese poderoso huaico que empezó a rodar el 7 de diciembre de 2022, no se detendrá hasta que las poblaciones indígenas, que a lo largo del siglo XX fueron conquistando derechos sociales y económicos con sus luchas, no sienten las bases de un Perú en el que puedan ejercer sus derechos políticos, incluida su representación propia en el Congreso. Este nuevo *pachakuti*, esta refundación de nuestro sistema político, y, en general, del Estado, pasará seguramente por una asamblea constituyente en la que las mayorías indígenas deberían estar ampliamente representadas.

---

1 Presidencia de la República del Perú. 2022. "Mensaje a la nación de la presidenta de la República, señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra". Lima, 12 de diciembre de 2022.

El lenguaje de los rituales en las protestas contra Dina Boluarte

Juan Fonseca

"No nos moverán", decía el himno evangélico que se cantó en la ceremonia religiosa celebrada en una iglesia luterana en Breña en memoria de Rosalino Flores Valverde, víctima de la represión[1]. En la ceremonia, dirigida por pastores metodistas, luteranos, presbiterianos y de otras iglesias, estuvieron presentes la madre y el hermano de Rosalino. Hacia el final, un grupo de ciudadanos movilizados llegó al templo. En medio de vítores ¡Rosalino! ¡¡¡Presente!!! Llegaban cuando la ceremonia religiosa aún no terminaba. Por segundos se impuso la confusión. Algunos manifestantes exigían discursear. Los organizadores de la ceremonia pedían respetar el momento litúrgico. Los familiares de Rosalino observaban desconcertados. Una voz cuestionaba el rol de la Iglesia en las protestas. Su silencio cómplice ante la represión. Entonces uno de los pastores evangélicos desde el púlpito explicó que el cristianismo que ellos representaban sí estaba del lado de los peruanos que desde las calles clamaban por justicia. Varios de ellos también habían sufrido, junto con cientos de ciudadanos, los horrores de la represión.

El memorial religioso por Rosalino era también una expresión de protesta contra el poder arbitrario y de solidaridad con las víctimas del pueblo. El ambiente empezó a calmarse. El ritual religioso concluyó. El ritual cívico prosiguió. En la calle, los cantos y arengas continuaron. Los pututos coloreaban la noche con sus profundos sonidos. Una gran banderola del Perú se desplegó. Aparecieron policías en la esquina. Actores indispensables en la coreografía de las protestas. Con los antagonistas en escena, el ambiente se puso tenso. Esta vez, felizmente, la tensión no

1 El evento fue cubierto por algunos periodistas. Se puede ver en: https://elpais.com/internacional/2023-03-26/la-agonia-de-rosalino-la-ultima-victima-de-las-protestas-en-peru.html.

derivó en violencia. El pelotón de marchantes desfiló ante los represores. Sin temor. Y siguió por la ciudad.

No fue la primera vez en que lo religioso y lo cívico se encuentran en los rituales de las protestas. El 15 de enero, un grupo de manifestantes en Huancané realizó una oración colectiva antes de salir en caravana hacia Lima para protestar contra el régimen. El estilo era el de una oración evangélica. No sorprende. Puno es uno de los espacios más simbólicos de la historia evangélica, en particular de los adventistas. El sistema educativo adventista contribuyó enormemente en la escolarización de los indígenas. A los hacendados y a los jerarcas regionales de la Iglesia católica no les gustó. Hubo ataques y represión. Pero las escuelas indígenas adventistas sobrevivieron a la adversidad. Hubo un tiempo en que la fe evangélica, las comunidades indígenas y la protesta social se articularon en Puno. Algo que el evangelicalismo hegemónico actual parece haber olvidado. Como decía el pastor metodista Rafael Goto en una entrevista, "Dios camina con el pueblo, y camina con nosotros también. Dios es un Dios que está metido entre la gente. No es un Dios de altar, no es un dios de templo; es un Dios de la vida, es un Dios de la calle".

Pero no solo hubo rituales evangélicos en las protestas. El 9 de febrero, a un mes de la masacre de Juliaca, un grupo de creyentes católicos se organizó para celebrar una misa en memoria de las víctimas de la represión. Miles se congregaron en el aeropuerto de Juliaca para unirse alrededor de la eucaristía. Pero ningún sacerdote apareció. La periodista Gabriela Wiener recogió las palabras de una dirigente[2]. Denunciaba que la jerarquía de la diócesis había impedido la presencia de sacerdotes en el ritual. Católicos que se aferran a su fe en la construcción de rituales de memoria de sus luchas, y una jerarquía que no los acompaña. Una eclesialidad oficial divorciada de una fe vibrante que se revitaliza en la experiencia encarnada del pueblo creyente. Luego, llegó un sacerdote para oficiar la misa, Alejandro Gómez Monroy, autodenominado "obispo del pueblo", cuya legitimidad pastoral ha sido cuestionada por la jerarquía católica, pero que goza de simpatía entre los juliaqueños que protestan.

---

2 https://www.facebook.com/juan.fonseca.921/videos/1024298438417864.

Pero no toda la Iglesia católica le ha dado las espaldas a la ciudadanía movilizada. Pareciera que cuanto más cerca está un sacerdote a la gente, su sensibilidad aumenta. Como la de padre Luis Zambrano, párroco en Juliaca, una de las pocas voces del clero en levantar su voz contra la represión[3].

En los terribles tiempos vividos por los peruanos bajo el régimen cívico-militar de Dina Boluarte, las protestas han engendrado rituales cívicos y religiosos ricos en gestos y símbolos que expresan la fuerza espiritual de los movilizados. En un país tan religioso como el Perú, y en una región tan creyente como el sur andino, no sorprende que la fe sea uno de los ingredientes movilizadores de la gesta de los pueblos. No solo como generador de símbolos o levadura de convicciones; también como articulador de identidades y forjador de solidaridades[4]. Los rituales crean los lenguajes simbólicos que acompañan la construcción de movimientos. Cuando los rituales se generan desde la experiencia insurgente de los pueblos, pueden convertirse en una potencia transformadora de la realidad. Los rituales traducen las emociones colectivas en metáforas, discursos o representaciones, cuya repetición impide el olvido. Es lo que el poder represor teme en las batallas por la memoria.

En los meses más intensos de las protestas, una de las escenas más potentes y significativas que observé fue el ritual de la despedida. En decenas de fotos y videos que circulaban en los medios independientes y regionales veíamos a nuestros compatriotas del sur despedir a sus delegaciones, sus caravanas de protesta hacia la Lima que los mira con miedo, desdén o indiferencia, que los acusa de *terrucos* o cautivos de azuzadores. Discursos, abrazos, vivas, compartires, comida, plegarias. Rituales cívicos y religiosos que surgen desde las tradiciones culturales y experiencias políticas de pueblos que viven una jornada épica de lucha por su dignidad, por ser respetados. Ritos de despedida, como cuando se partía a la guerra, pensando en que sería el último adiós. Triste que la

3 https://www.youtube.com/watch?v=AtY1nPXdFWk.

4 "La función de estos rituales colectivos es afectar a actores externos (e.g., el poder político), pero al mismo tiempo, facilitar la construcción o reconstrucción de una identidad colectiva, un nosotros, entre quienes participan de la actividad, reforzando sus vínculos internos" (Asún, Navarro y Tintaya, 2020, 13).

experiencia cívica de nuestros pueblos se cultive desde el enfrentamiento. Ojalá algo podamos aprender de esos tiempos de crisis. Al menos empezar a comprendernos.

Cuarta parte

Terruqueo, masacre y memoria

Historia, terror, guerra y anarquía en el sur andino

Yizza Delgado Devita
Gustavo Montoya Rivas

"En esta guerra de todos contra todos, se da una consecuencia: que nada puede ser injusto"

T. Hobbes

Los recientes acontecimientos de violencia social en el sur andino que han sacudido el letargo limeño no son por cierto una novedad a la mirada o reflexión histórica. Todo lo contrario. Hacen parte de una larga y dramática trayectoria. La actual turbulencia política de nunca acabar, si bien no permite vislumbrar el desenlace, sin embargo, sirve para intuir cierto horizonte de expectativas de parte de los grupos sociales protagonistas.

Tenemos una república a medio hacer; un archipiélago de naciones inconclusas, para citar a Zein Zorrilla, enfrentadas y agrietadas; un Estado precario, corrupto hasta el tuétano y centralista. Lo hemos contemplado con asombro e indignación durante la pandemia y lo estamos viendo ahora mismo. Dos de esas naciones, la aimara y quechua que habitan el altiplano, poseen una historia larga, milenaria, densa y compleja. Son las que se han levantado, una vez más …

Para empezar, poseen memoria histórica, símbolos, emblemas, íconos y héroes culturales; idioma, territorio, tradiciones, usos y costumbres que los identifican. No les son ajenos ni extraños los sucesos políticos y militares que estremecieron todos sus territorios a lo largo del siglo XVIII, y cuya cúspide fue el estallido de la Gran rebelión bajo la égida de Túpac Amaru II y los hermanos Katari. La bibliografía es extensa. ¿Lo saben las autoridades que intentan iniciar el diálogo?

Durante el siglo XIX, fue escenario de otra rebelión sangrienta que enfrentó a gamonales propietarios frente a comuneros y pequeños comerciantes entre 1866 y 1868. El líder de la rebelión no fue un don nadie. Juan Bustamante era un ilustrado como pocos en su época. Había recorrido el mundo. Era un mestizo cosmopolita. Hablaba varios idiomas y estaba al corriente de la cultura y el proceso político en Lima. Autor de obras y estudios importantes. Había sido además diputado. El desenlace fue dantesco e incluyó la muerte, descuartizamiento e incineración del propio Bustamante. Fue la venganza y escarmiento de los propietarios.

En el siglo XX, nuevamente las hogueras: indígenas y campesinos fueron objeto de enfrentamientos, de terror, anarquía y exterminio. Un sargento del ejército Teodomiro Gutiérrez Cuevas, con el sobrenombre de Rumi Maqui, volvió a enardecer las utopías entre las mayorías sociales y pesadillas en las élites en esos territorios a lo largo de 1915. Los rebeldes fueron acusados de querer restaurar el imperio de los incas.

Avanzando el siglo XX, un aspecto a rescatar fue el consistente crecimiento de la alfabetización. Además, la presencia de misiones protestantes logró instalar cierta ética del trabajo que seguramente contribuyó a esas habilidades para el comercio y la acumulación entre los medianos propietarios y comerciantes. No en vano, puneños y juliaqueños son eximios comerciantes. Por lo demás, una zona de frontera y de contrabando.

En los años 50 y 60, cuando la toma de tierras se volvió un problema endémico, los campesinos eran conscientes del proceso de guerra que se había desatado contra las haciendas. Ese golpe contundente contra los hacendados se selló con la reforma agraria de Velasco. Sin embargo, para esos años, el Perú ya había iniciado otro proceso: la agresiva urbanización. Las ciudades se poblaron con nuevos rostros. Emergía el proletariado urbano.

Para ese largo y conflictivo siglo XX, urge volver a revisar un libro capital de José Luis Rénique: *La batalla por Puno. Violencia y democracia en la sierra sur*, que da cuenta de las señas específicas del conflicto social, las mentalidades, los procesos económicos, sociales y de politización

campesina, sin omitir la guerra, la barbarie y el terrorismo que desató Sendero Luminoso.

Este apretado recuento, debería hacer pensar en esta realidad a los que toman decisiones en el actual gobierno, ya que se trata de una región consistente y estructurada por la historia. Una identidad e imaginario que es asumido con cierto orgullo, muy visible en el folklore y la estética regional. Son estos grupos sociales diversos y heterogéneos en el sur andino, los que ahora se han puesto de pie. Las razones de coyuntura en realidad cuentan poco. Hay demasiadas razones y cuentas pendientes objetivas o imaginarias, que una vez más se han puesto en movimiento. Si antes el conflicto enfrentaba a grupos sociales antagónicos, ahora se trata del deslizamiento de la violencia en contra del Estado. Cuenta, además, ese corredor fronterizo boliviano con una memoria de rehacerse siempre al acecho.

El agravio, el resentimiento y cierta ira social. Nada de esto es nuevo en el país. Sobre todo, en esas regiones y localidades pobres que claman por Estado justamente. No están aislados. Nunca lo estuvieron. Las redes sociales, el Facebook y el WhatsApp hacen parte de sus vidas cotidianas en la actualidad. Están al corriente de los desmanes, las pitanzas y el escarnio de la farándula congresal.

Causa pavor y desasosiego contemplar esas imágenes en que se ve a las Fuerzas Armadas y policiales, disparando y asesinando a peruanos desarmados, incluso a jóvenes menores de edad. Inocentes víctimas de las balas de los fusiles de guerra. Ese sur andino enfurecido puede convertirse en una suerte de ensayo, y ser replicado en otras regiones con particularismos concretos. Es lo que no piensan esos gobernantes autoritarios que azuzan cómodamente desde la capital por la tierra arrasada y el exterminio, enviando al brazo armado del Estado a asesinar peruanos pobres. ¿Será realmente un ensayo de represión, crimen y escarmiento desde el poder a toda forma de protesta legitima desde el extremo represivo del Estado? Nada de esto es nuevo en la historia peruana. Esta bicentenaria república maltrecha y anómala que existe podría estremecerse desde sus raíces ...

No hay vuelta atrás: Desborde del Estado y movimiento popular

En el estudio de procesos históricos estructurales, uno encuentra coyunturas en las que emergen de manera inequívoca esas grandes tendencias que fluyen desde abajo; desde consistencias sociales, políticas, culturales, económicas y de las mentalidades. Son corrientes casi indetenibles; como esos huaicos andinos que anunciaban los amarus míticos, presentes en la heráldica andina, como también en la memoria oral plebeya. Como esas crecidas que salen a flote, los estallidos sociales suelen diluir y hasta pulverizar la espuma de la historia, para citar a Braudel, el gran historiador francés de la larga duración. De pronto, los actores colectivos antagónicos de una época, y con ellos, sus fantasías y pesadillas atávicas, quiéranlo o no, deben verse frente a frente.

La actual crisis, que poco a poco parece ganar a nuevos actores en diferentes territorios del Perú, no tiene una fecha exacta de origen si se la piensa desde el corto plazo. Puede ser la caída de Castillo, o la larga crisis política en la que, desde el Congreso, fueron arrojando del poder hasta seis presidentes en poco menos de un lustro. Todo un récord histórico. También se puede atribuir a la ingobernabilidad y al enfrentamiento de más una década sobre los hombros de los electores y la ciudadanía, entre Ejecutivo y Legislativo, como caldo de cultivo para las protestas y la rabia. Todo un ramal de razones suficientes entre los movilizados para patear el tablero. Más elementos para el desenlace lo podemos encontrar en el centralismo, en la corrupción, en el accionar de la prensa farisea. En fin, tantas anomalías del día a día que la población venía contemplando mientras rechinaba los dientes. Todo cuenta.

Hay que reconocer que ha estallado un desborde popular de dimensión nacional, en medio de una crisis de Estado de proporciones estructurales. La legitimidad del actual régimen cada día que pasa se va haciendo trizas desde la periferia. La respuesta a las protestas, a esa soberanía que hoy frenan con balas y represión, irá creciendo progresivamente, pues todo indica que está emergiendo un nuevo sentido común. Un tejido ideológico que cuestiona en el discurso y en estos actos desa-

fiantes que contemplamos, que el Estado, la nación y la república, hasta ahora solo han beneficiado a pequeñas minorías citadinas. No es que estos estallidos sociales sean el fuego purificador de décadas y décadas de anomia social y de hartazgo político, sin embargo, ya se ha marcado un punto de no retorno. Para bien o para mal de los movilizados y del país entero.

Un aspecto importante es la reforma electoral de 1980, que otorgó el derecho al sufragio a la población analfabeta que había sido excluida del voto desde 1895. Casi un siglo de silencio político de parte de estos grupos sociales marginados, habitantes de las áreas rurales más empobrecidas del país. Se trata de un imaginario político inédito visto desde la larga duración. El desembalse de demandas entre estos sectores, vía la gran revolución de las comunicaciones, ha instalado una intersubjetividad casi disidente y sumamente desconfiada hacia el sistema público estatal y a sus instituciones. En consecuencia, estamos ante una rebelión política, en el más fuerte sentido del término, que está trazando un horizonte con expectativas democratizadoras.

De otro lado, por las decisiones del gobierno, es muy visible la militarización del régimen, y con ello, criminalizar las protestas y concebirlas como parte de una gran conspiración. Estas teorías no hacen sino reactualizar la época del terrorismo que vivió el país entre los 80 y 90 del siglo pasado. Con toda la carga simbólica que supone esta operación ideológica; esto es, poner en movimiento miedos sociales, intolerancia hacia el "otro", y estimular el racismo encubierto que existe. Pero tampoco se puede afirmar que no existan algunos agitadores confundidos entre los que protestan legítimamente, o esa policía de mala reputación llamada los ternas, que se infiltran entre los que protestan pacíficamente para producir desmanes y atrocidades que después son adjudicadas al pueblo movilizado.

No se puede obviar que los territorios convulsionados presentan una contradicción dramática. Centros de producción para la exportación de minerales y la agroindustria, que son las fuentes de acumulación más importantes en las últimas tres décadas; y, de otro lado, pueblos y

localidades de extrema pobreza, donde la presencia del Estado es mínima en servicios básicos de salud, educación y vivienda. Su contraparte es la emergencia de cierta racionalidad crítica que recorre a todos estos grupos sociales menos favorecidos por el modelo económico impuesto. De ahí que la demanda por una nueva Constitución sea uno de los reclamos no negociables. Los pobres ya no emiten cheques en blanco.

Lo cierto es que todas las formas de impugnar y cuestionar la legitimidad del Estado peruano, y el actual ordenamiento político vigente, están a la orden del día; desde el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas, la prostitución, el contrabando, la deforestación o la minería ilegal, que cuenta con ingentes recursos económicos capaces de financiar a cualquier aventurero o aspirante a la representación política. Todas las formas de violencia se han desatado con furia y han desbordado incluso a las manifestaciones pacíficas y ordenadas. Es inevitable la presencia de grupos violentistas, quizás algún rezago de la época de la guerra interna y del terrorismo, o el aprovechamiento político de este recuerdo para utilizarlo de mala manera por las fuerzas del orden para culpar a los indignados. Pero tal vez lo más peligroso sea que, al calor de las movilizaciones, emerjan acciones violentas que se conviertan en "alternativa" para resolver las aspiraciones postergadas de los sectores plebeyos, urbanos y rurales.

Es una paradoja que en el contexto de la conmemoración del Bicentenario del establecimiento del Estado republicano (1823 -2023), estemos siendo testigos de sus fracturas y fisuras estructurales; de sus carencias y límites, en un país donde coexisten naciones y grupos étnicos diversos y dispersos, y que ahora enfrentan a la hegemonía del grupo dominante. Somos ahora un país donde cualquier visitante extranjero puede contemplar absorto la diversidad y riqueza cultural de un lado, y las abismales diferencias sociales por el otro.

El tiempo de plagas que vive el Perú actualmente, dará lugar a una sociedad y una cultura política muy diferente. No hay vuelta atrás. Y si se sigue la trayectoria y la historia de este tipo de enfrentamientos entre Estado y sociedad, el desenlace será una derrota más de los movimien-

tos sociales democratizadores. Sin embargo, no hay que olvidar que la historia, como disciplina y como experiencia vital, remite a la memoria, pero entre memoria e historia existe un extenso trecho salpicado con lodo y fango. He ahí las imágenes que se van destilando sobre un país hoy agotado y estragado. Imágenes construidas desde el poder para aplacar las furias étnicas y la ira social, como también pueden ser las fuerzas vivas de la sociedad que, en un arrebato de dignidad, resuelvan de una vez por todas y para siempre tanta frustración acumulada, para saldar las cuentas con el pasado y vivir con dignidad y decoro.

¿Una utopía social republicana para un país al borde del abismo? Nunca como hoy, esa demanda radical de democracia social que imaginó Sánchez Carrión recupera todo su esplendor. Demandaba el Solitario de Sayán, en abierta disputa teórica con los conservadores y reaccionarios de su época: "Yo quisiera que el gobierno del Perú fuese una misma cosa que la sociedad peruana".

El conocimiento del pasado no garantiza nada a nadie. Menos a un país cuya conciencia histórica es heterónoma. Integrar conocimiento y memoria histórica requiere una profilaxis conceptual que puede desencadenar arrebatos de toda índole. Sin embargo, aquellos que se sienten los libertadores del bicentenario, harían bien en ponerse al día con los nuevos hallazgos historiográficos. No olvidar que los actores de hace doscientos años ya no son, ni pueden ser, los mismos. Esa impaciencia plebeya republicana tiene curvas y abismos insondables. La advertencia ya fue formulada de mil formas y en mil idiomas.

El desafío es mirarnos en ese espejo difuso que es nuestra reciente historia contemporánea: llena de agujeros y de procesos a medio hacer. Las víctimas del fuego cruzado aparecen como los vencidos. Es una forma de manipular el miedo social, tan certero para aplacar cualquier modalidad de pensamiento crítico. O lo que es casi lo mismo, bloquear la autonomía. De ahí, solo queda un paso a la simulación; a ese rechinar los dientes en silencio, aguardando cualquier oportunidad, casi al acecho, y dar rienda suelta, una vez más, al resentimiento, a la ira social

y tensión ideológica, tan recurrente en esta república agrietada que tenemos.

Lo que acontece ante nuestras narices, y los niveles de insensatez a los que llegan los actores de la escena oficial, no deben hacernos perder de vista a esas fuerzas sociales vivas, aunque aletargadas, que, como corrientes subterráneas, pugnan por hacer acto de presencia. Las mentalidades colectivas a veces suelen ser cárceles de larga duración, sobre todo en países tan desintegrados cultural y políticamente fragmentados; con una dispersión y volatilidad ideológica que estremece. Así las cosas, nada ni nadie garantizan que el actual zafarrancho, derive por enésima vez, en otra coyuntura violenta.

No deja de ser sintomático que, en los umbrales del bicentenario, la república esté siendo asediada, casi impugnada, por los llamados a preservarla; una clase política que desde el Ejecutivo y Legislativo, apenas si son capaces de apelar al conocimiento histórico para entender que la ética y la política son condiciones irrenunciables que hacen parte de una ecuación, de un mandato imperativo que recibieron de los electores y la ciudadanía, que es finalmente, en donde reposa la soberanía popular, y, en consecuencia, con capacidad y para revocar cualquier poder ...

"Callarán por un momento las leyes para que renazcan las leyes"

La frase que pertenece a Manuel Lorenzo de Vidaurre dice mucho sobre la tradición autoritaria que, desde las primeras décadas de la república, distingue el proceso y la cultura política peruana. Una seña recurrente a lo largo de la tumultuosa y azarosa vida política de esta república a medio hacer. Una nación adolescente. La frase corresponde a un periodo de turbulencias sociales y de apertura del largo ciclo de motines, revueltas, golpes de estado, revoluciones y guerras civiles; todas las formas y modalidades de violencia política sistemática. Si se mira desde la historia de las mentalidades, y en consecuencia desde el largo plazo, esa es la historia subterránea y estructural, que de vez en vez emerge como una pesadilla de nunca acabar.

La mayoría de los analistas políticos, tiran de un lado a otro para intentar explicar o hallar una vía para exorcizar la actual coyuntura. El problema es que, cuando se piensa desde las coyunturas y el corto plazo, uno puede ensayar las más antojadizas teorías. Desde los que ubican el origen del actual desmadre a consideraciones étnicas, hasta los del otro extremo, que repiten esa letanía convertida en autoflagelo: en el Perú se concentra la suma de desgracias continentales. Algo así como decir que nosotros seriamos los austriacos de América Latina. Así como se nos ha quitado territorios, se nos niega toda forma de virtudes republicanas. Sobre todo, ahora que lo republicano está de moda.

Volviendo a Vidaurre, no era precisamente un jurista e intelectual golpista, como esos republicanos golpistas de vitrina que abundan y deambulan hoy. Personaje de tránsito entre los estertores del sistema de dominio colonial y las primeras décadas de la república, su seña más distintiva fue el apego a las leyes y al orden constitucional. Pero entonces, ¿de dónde salió tremenda sentencia que parece desmentir su biografía intelectual? En realidad, Vidaurre apela a las fuentes primigenias que le dan sentido y sustento a esa abstracción moderna que tanto obsesionó a Maquiavelo, Hobbes o Montesquieu. El pueblo soberano, última y única fuente del poder y legitimidad.

A finales de 1833, el enfrentamiento entre la Convención Nacional y el gobierno de Agustín Gamarra había llegado a un punto muerto debido a esa tendencia ya echada a andar de intentar perpetuarse en el poder vía golpes de estado o imponiendo a testaferros. Nadie como Gamarra para tales aventuras. Vidaurre, con un olfato histórico envidiable, en realidad anuncia con esa sentencia, el desenlace previsible al abierto enfrentamiento entre el Ejecutivo y Legislativo. Interesa detenerse en las consideraciones de orden político, histórico y social del que fuera el primer presidente de la corte suprema, pero que, en tal coyuntura, estuvo a favor y legitimaba la insurrección del pueblo que es, a fin de cuentas, el depositario de la soberanía nacional. En realidad, los niveles de desorden y anarquía institucional habían llegado a tales extremos que la frágil estructura del Estado republicano amenazaba con disolverse, o ingresar

a un enfrentamiento terminal entre facciones del naciente militarismo peruano.

En enero de 1834, había que resolver la delicada cuestión de la sucesión presidencial y le correspondía a la Convención Nacional designar al presidente del Ejecutivo. La Asamblea, dominada por liberales, designó a José Luis Orbegoso como presidente provisorio. La respuesta de Gamarra fue la guerra. Se despacharon comisiones para detener a Orbegoso en el teatro y desterrar al presidente de la Convención, Luna Pizarro, los diputados Francisco Javier Mariátegui, Francisco de Paula Gonzáles Vigil, Rodríguez Piedra y una veintena más de prominentes diputados del partido liberal. A esta guerra declarada entre el Ejecutivo y la representación nacional, sobrevino, "por primera vez, en lucha callejera, el pueblo armado derrotó al ejército", sentenció Basadre.

No sería la primera y única vez en que el pueblo soberano, ese gigante con cabeza de niño, despertó de su letargo a lo largo de ese aún desconocido y dramático siglo XIX que da la impresión de que se niega a desaparecer. Los testimonios de la época dan cuenta como así, la profecía de Vidaurre se fue gestando con método. Primero, el hartazgo entre la opinión pública debido a la falta de resolución de ambos poderes. Luego, la división del Ejército (árbitro supremo del proceso político de la época). Con ello, el ingreso de partidas armadas, de civiles dispuestas a hacer valer, a punta de pólvora y aguardiente, al caudillo de turno. Lo que siguió fue una escena recurrente a lo largo de más de un siglo. Turbas armadas rodeando la ciudad, hasta llegar a la Plaza de Armas para defenestrar al presidente de ocasión.

Las mentalidades colectivas van instituyendo determinados arquetipos que definen los contornos de la cultura política en un país. En estos doscientos años de vida republicana, estos arquetipos se han mantenido en el inconsciente e imaginario colectivo cual astilla que de vez en vez destila pus o sangre, según el caso. Entre 1854 y 1857, una insurrección generalizada, que se inició en contra de la corrupción del régimen de Echenique, estremeció de punta a punta el país. En 1865, volvió la misma marea revolucionaria, esta vez en nombre de un nacionalismo

germinal y en contra del gobierno de Pezet, acusado de pusilánime ante las demandas neocolonialistas de la monarquía española. El corolario sería el triunfo del 2 de mayo y la expulsión de la armada española. Entre 1895 y 1896, nuevamente montoneras en el norte, centro y sur del país convergieron en Lima para derrotar el militarismo y la corrupción encarnada en Cáceres.

El siglo XX no fue un remanso. Basta recordar la barbarie de 1932, tras la caída de Leguía y la sucesión en el poder de militares, vía golpes de Estado. Sánchez Cerro, Benavides, Odría, Velasco y Morales Bermúdez. Y todo ello para que, en 1980, con el retorno a la formalidad democrática, empiece otra guerra, esta vez desatada por Sendero Luminoso. Decía Flores Galindo que la república se asemejaba a un péndulo de autoritarismos con brevísimos interregnos democráticos. También se preguntaba, qué podría quedar en pie de esta república si se produjese una revolución social.

Para terminar, conviene citar, sobre todo para los suspicaces, el texto completo y profético de Vidaurre, antes que caiga el régimen corrupto y autoritario de Gamarra: "Callarán por un momento las leyes para que renazcan las leyes. Lo que se llama muchas veces insurrección, es una ley sagrada de la naturaleza, que obliga a la conservación propia. Esta proposición se funda en axiomas incontrovertibles. Son estos: las autoridades se han constituido en bien común. El ciudadano en puesto que abusa de la confianza de sus compatriotas, es un reo de Estado. Los que turban el orden, e insultan a las autoridades, también lo son"[1].

1 Vidaurre. M.L. *Artículos constitucionales que son de agregarse a la Carta para afianzar nuestra libertad política*. Lima, 1833, Imprenta de José M. Masías.

Crisis sociopolítica, masacre y deshumanización[1]

Valérie Acevedo y Tania Romero

"En los Andes, las masacres se suceden con el ritmo de las estaciones. En el mundo hay cuatro; en los Andes cinco: primavera, verano, otoño y masacre"

Cantar de Agapito Robles, Manuel Scorza



Foto: Armonía ©Felipe López

El intento suicida de "autogolpe de Estado" de Pedro Castillo, su destitución y reemplazo por Dina Boluarte, abrió una nueva etapa en la endémica crisis política peruana. Seis presidentes en seis años, y un Congreso que ha hecho de la obstrucción sistemática a los últimos gobiernos su principal agenda política han convertido al Estado en un botín en dis-

1 Publicado originalmente en francés bajo el título "Crise sociopolitique, répression meurtrière et déshumanisation au Pérou", en la revista *Mouvements* el 22 de enero del 2023.

puta, saqueado por intereses privados. Entre escándalos de corrupción, acusaciones de violencia sexual y de género, y vergonzosos blindajes, el Congreso ha alcanzado la cifra histórica de 6% de aprobación. Cabe recordar, asimismo, que casi todos los presidentes peruanos desde 1985, han sido acusados por corrupción, crímenes contra la humanidad, purgan condenas, están prófugos, o se suicidaron para evitar rendir cuentas a la justicia.

Las manifestaciones masivas que dieron paso a un estallido social fueron evolucionando con el pasar del tiempo, hasta configurar como principal demanda la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones, seguida por el cierre del Congreso, una asamblea constituyente y la liberación del expresidente Castillo. Estas demandas, además de ser una respuesta a la indignación originada por la represión estatal, también se vieron impulsadas por un elemento identitario de los sectores populares, en particular de las provincias, vinculado al símbolo que representa Castillo. Muchos de sus electores insisten, antes que nada, en que, por primera vez en la historia republicana, tuvieron a un presidente "igual a ellos", incluso a pesar de las acusaciones por corrupción y la incapacidad para dirigir que demostró tener en el curso de su breve mandato.

Tal como lo explica José Carlos Agüero[2], la candidatura y posterior victoria de Castillo reactivó la fe en que, a pesar del desprecio y el racismo campantes, a la hora de votar, los peruanos podían estar en un pie de igualdad y los excluidos podían al fin acceder a los frutos de la democracia. En este sentido, la inmediata caída de Castillo y las maniobras de un Congreso de corte mafioso y golpista son algunos de los factores que explican la desilusión con la que sus votantes vivieron su salida del gobierno. Tras el envío de los militares a las regiones declaradas en estado de emergencia, el gobierno sobrepasó una cifra histórica, esta vez a nivel regional: más de 50 muertos en menos de dos meses —incluyendo a varios menores de edad— y más de un millar de heridos. La violencia desatada a raíz de la represión no hizo sino amplificar la movilización.

---

2 Agüero, José Carlos. 2022. «Desprecio.» *Revista SER*. 13 de diciembre. Último acceso: 25 de marzo de 2023. https://www.noticiasser.pe/desprecio.

La ausencia de un trabajo de investigación serio, frente a un ejercicio sistemático de desinformación por parte de los principales medios de comunicación, en particular aquellos pertenecientes al grupo *El Comercio*, han jugado un rol clave para avalar la narrativa del gobierno sobre los acontecimientos recientes. A tal punto que tuvo que ser la agencia internacional de noticias Reuters la que mostró a la opinión pública que, algunas de las muertes, no fueron en lo absoluto "daños colaterales", sino asesinatos deliberados de personas desarmadas o, incluso, simples transeúntes. Esta agencia de noticias difundió por primera vez, tanto a nivel internacional como nacional, las imágenes de Edgar Prado Arango, aquel hombre de 51 años ejecutado el 15 de diciembre del 2022 por un soldado cuando se encontraba en la puerta de su casa socorriendo a un herido en Ayacucho. Pocos días después, Marco Antonio Samillán Sanga, joven interno en medicina, sería asesinado por la policía cuando brindaba auxilio a los manifestantes heridos, el 9 de enero del 2023 en Juliaca. Miembros del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF)[3] han indicado que las autopsias a las que tuvieron acceso dan indicios sobre la violación de derechos humanos resultante del uso desproporcionado e injustificado de la fuerza y de las armas[4]. Algunos de los difuntos fueron asesinados por proyectiles de los militares o los policías, dirigidos específicamente a las partes vitales del cuerpo: cabeza, tórax o abdomen.

Frente a esta tragedia que sigue golpeando al Perú, proponemos brindar algunos elementos de análisis para comprender el estallido de violencia.

---

3 Orihuela Quequezana, Robert. 2023. «Violación de Derechos Humanos: 20 murieron por armas de fuego durante las protestas en diciembre.» *Convoca*. 4 de enero. Último acceso: 25 de marzo de 2023. https://convoca.pe/agenda-propia/violacion-de-derechos-humanos-20-murieron-por-armas-de-fuego-durante-las-protestas-de

4 Ver Luz Alarcón y Edmundo Cruz "Las armas de guerra detrás de las muertes en la convulsión social en Perú", *Ojo Público*, 29/01/2023, https://ojo-publico.com/4248/las-armas-guerra-detras-las-muertes-las-protestas-peru y César Prado y Rosa Laura "Radiografía de homicidios", *IDL Reporteros*, 12/02/2023. Último acceso: 25 de marzo de 2023. https://www.idl-reporteros.pe/radiografia-de-homicidios/.

¿Quién es Dina Boluarte?

Empecemos rastreando a la sucesora de Pedro Castillo. Nacida en el departamento de Apurímac, donde fueron asesinadas seis personas en la represión de diciembre del 2022, la abogada Dina Boluarte se autodenomina la presidenta de "los nadies" y del "Perú profundo". A pesar de su manejo limitado del quechua, no ha dejado de interpelar a los manifestantes en esta lengua, pero más para increparlos e instarlos a "voltear la página" que para proponerles un verdadero "diálogo". Cabe recalcar que, hablar quechua no implica necesariamente una identificación con los manifestantes y sus reivindicaciones.

El uso político del quechua ha sido clave en las dinámicas de poder desde el periodo colonial. Desde los evangelizadores españoles en el siglo XVI, hasta los gamonales en los siglos XIX y XX, el uso del quechua ha sido un instrumento de dominación de la población indígena. Los atributos étnico-raciales ocupan efectivamente un rol en la represión de las fuerzas del orden, como lo abordaremos más adelante; sin embargo, es la identidad de clase de Boluarte lo que la distingue de sus conciudadanos movilizados y de la mayoría de las víctimas pertenecientes a las clases más bajas y a los sectores de origen campesino quechua y aymara. Por otro lado, al ser la primera mujer jefa del Estado, Dina Boluarte no ha dudado en utilizar el hecho de ser mujer para calificar a la oposición de "machista". En un país devastado por la violencia de género[5] y los feminicidios[6], la hipocresía de esta recuperación política del discurso feminista para desnaturalizar los argumentos y reivindicaciones de la oposición sería cómica si la situación no fuera tan grave.

Boluarte también ha velado por construir y transmitir una imagen de sí misma como encarnación de "madre" de los peruanos. Pero detrás de este discurso supuestamente maternal, se esconde un paternalismo con rostro de mujer que infantiliza a los ciudadanos y les niega toda agencia política con el pretexto de que estos serían manipulados, chantajeados y

---

5 En el 2022 se registraron 111 524 denuncias de mujeres desaparecidas de las cuales solo el 48% fue encontrado, según los informes de la Defensoría del Pueblo.

6 Se registraron 674 feminicidios entre el 2017 y el 2022, según el Ministerio Público – Fiscalía de la Nación.

hasta comprados. Por otro lado, la presencia militar que acompaña a la presidenta en sus tomas de palabra públicas, algo inédito desde el final del régimen militar de los 80, refuerza los símbolos de una masculinidad bélica que justifica el uso despiadado de la violencia para lograr la "pacificación", una expresión castrense en uso durante el conflicto armado interno. No olvidemos que Dina Boluarte es la jefa de las Fuerzas armadas, por lo que las muertes por la represión recaen sobre su responsabilidad y la de su gabinete.



Un helicóptero militar sobrevuela los alrededores del aeropuerto de Ayacucho, foco de la represión militar y policial. ©Miguel Gutiérrez Chero[7]

El vándalo, el terrorista, el deshecho: los procesos de deshumanización

Para comprender la represión militarizada contra los manifestantes proponemos abordarla bajo el prisma del "*continuum* de violencias" desarrollado por Nancy Scheper-Hughes y Philippe Bourgois[8] para calificar a las violencias

7 Gracias a Miguel Gutiérrez Chero y a Felipe López por permitirnos incluir sus fotografías y creaciones artísticas.

8 Scheper-Hugues, Nancy, y Philippe Bourgois (eds.). 2003. *Violence in war and in peace: An anthology.* Wiley-Blackwell.

visibles e invisibles, físicas y simbólicas, estructurales y normalizadas, que incluyen ataques a la dignidad y al valor de las personas.

La violencia remite a un fenómeno destructor y reproductivo, cuyo poder y significación se apoyan en las dimensiones socioculturales de esta violencia. Las expresiones de la violencia se encuentran, por lo tanto, moldeadas por las estructuras sociales, los modelos culturales y las ideologías que las forjan; por ello, no basta con abordar la muerte de estos más de sesenta civiles únicamente desde la violencia física. Es necesario analizar también lo que Rocío Silva Santisteban[9] califica como "basurización simbólica", y que convierte a algunas personas en seres despreciables y desechables, justificando así su humillación y reducción al estatus de ciudadano de segunda clase, o trayendo consigo su exclusión de la comunidad nacional, su desperuanización. Este discurso también autoriza tácitamente el uso de la violencia física, y posteriormente legitima su impunidad. Por lo general, la violencia se genera y reproduce primero en el lenguaje, antes de desplegarse sobre los cuerpos.

La acusación de "delincuentes", "vándalos" e incluso "terroristas" ha venido desde las más altas esferas del Estado, sea por miembros del gobierno y del Congreso, por los militares y policías a cargo del control de las regiones, así como por parte de numerosos medios de comunicación. Esta injusta asimilación justifica el uso de una violencia desproporcionada e indiscriminada de las fuerzas del orden contra la población civil. Tal como lo indicamos en la introducción de nuestro libro colectivo, *La violencia que no cesa. Huellas y persistencias del conflicto armado en el Perú contemporáneo* (2021), uno de los epítetos más injuriosos en Perú, asociado al conflicto armado de fines del siglo XX y a su posteridad actual, es el neologismo *terruco*.

Dotado de una carga estigmatizante potente, el término *terruco* fue utilizado en los años 80 y 90 para designar a los miembros reales o supuestos de grupos subversivos. Aunque no existen dudas sobre las acciones terroristas de estos grupos subversivos, y en particular de Sendero Luminoso, cabe recalcar que las fuerzas del orden también fueron

9 Silva Santisteban, Rocío. 2008. *El factor asco: basurización simbólica y discursos autoritarios en el Perú contemporáneo*. Lima: Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico.

responsables de terribles violencias contra la población civil. La potencia de la acusación de "terrorista" tiende, en este sentido, a disminuir e incluso disimular, la violencia del Estado que implicó torturas, desapariciones forzadas y masacres, aunque el término "terrorismo de Estado" sea muy poco empleado en Perú. La etiqueta de *terruco* designa a ese *otro* políticamente despreciable, cuya reputación tendría que ser arruinada, de quien habría que deshacerse. Por lo general, esta calificación ha sido el preámbulo y el detonador de una violencia física perpetrada por las fuerzas del Estado, en particular en las provincias y en las regiones rurales de los Andes y la Amazonía. Durante la guerra, la represión militar terminó reforzando el desprecio por la indianidad del que el término "*terruco*" viene a ser la síntesis. Tal como lo analiza Carlos Aguirre[10], el "indio sucio" pasó así a ser el "terruco indio de mierda", revelando el carácter racista de las interacciones sociales y las estructuras de dominación que prevalecían durante el conflicto armado y prevalecen hasta el día de hoy.

El fantasma del terrorismo ha seguido utilizándose incluso después de la desmilitarización del país en los años 2000 y, en particular, a partir del 2010, a través del *terruqueo*. En las manifestaciones contra las empresas extractivistas que se multiplican en las zonas rurales del país desde hace dos décadas, y afectan en particular a la población campesina e indígena más pobre, este sector es a menudo calificado de *terruco*. Bruno Hervé Huamaní[11] ha mostrado que los mecanismos jurídicos de criminalización de los manifestantes opuestos a estos proyectos se han apoyado en gran medida en la aplicación de una legislación "antiterrorista" nacida en el marco de la "lucha antisubversiva". El *terruqueo* y su reciclaje semántico del terrorismo atraviesa la vida política peruana desde hace varios años, apoyándose en un imaginario regreso del te-

---

10 Aguirre, Carlos. 2011. «Terruco de m… Insulto y estigma en la guerra sucia peruana.» *Histórica*, 103-139.

11 Hervé Huamaní, Bruno. 2021. «Las metamorfosis de la criminalización. Disuadir y castigar la disidencia contra la minería en el Perú.» En *La violencia que no cesa. Huellas y persistencias del conflicto armado en el Perú contemporáneo*, de Ricardo Bedoya Forno, Dorothée Delacroix, Valérie Robin Azevedo y Tania Romero Barrios (coords.), 257-281. Lima: Punto Cardinal Editores.

rrorismo de la época del conflicto armado y alimentándose del miedo generalizado que suscita.



Toque de queda ©Felipe López

Pero el *terruqueo* no se limita al plano discursivo y conlleva un potencial trágico. Carla Granados Moya[12] señala que el envío de las fuerzas

12 Granados Moya, Carla. 2021. «De la "guerra contraterrorista" al Congreso: El activismo político de los militares excombatientes en el Perú posconflicto.» En *La violencia que no cesa. Huellas y persistencias del conflicto armado en el Perú contemporáneo*, de Ricardo Bedoya Forno, Dorothée

armadas, como método de resolución de conflictos sociopolíticos, a las regiones donde los ciudadanos que protestan son acusados de ser *terrucos*, facilita el empleo de armas letales y el proceso de banalización o, incluso, justificación de su muerte. El país habría pasado de un periodo de "brutalización" característico de la lucha antiterrorista —como ideología y cultura de guerra que busca eliminar al "enemigo interno"— a otro de brutalización de la política en un contexto de posconflicto anclado en la percepción de una sociedad que se concibe en estado de guerra permanente. Y esto es lo que autoriza y legitima la eliminación física del supuesto enemigo interior. En este contexto, Granados precisa que la ausencia de empatía respecto de la vida de estos "otros" no solo incita a matar, sino que también anula todo sentimiento de culpa. Además, tal como lo explica Stefano Corzo[13], desde el final del conflicto armado, no se ha realizado ninguna reforma estructural de la policía y las fuerzas del orden para sobrepasar la lógica y la herencia de la lucha antisubversiva. Esta sigue moldeando sus formas de acción y explica la presencia de un lenguaje militarizado que pregona el uso de las balas antes que el diálogo. Corzo considera que, a lo largo de estos últimos años, se ha arraigado en las fuerzas del orden un imaginario colectivo de la represión y del *terruqueo*, alimentado por un sector importante de la clase política. Una clase política que, como lo afirma Granados Moya, también se ha beneficiado de la militarización de la política, como lo muestra el creciente número de militares en retiro que se convirtieron en congresistas en los últimos 10 años.

Continuum de violencias e indiferencia ante los muertos invisibles

Veinte años después de la entrega del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003), la condición étnica, social y geográfica de las víctimas actuales muestra semejanzas alarmantes con las del conflicto armado. El conjunto de los muertos y la mayoría de los heridos

---

Delacroix, Valérie Robin Azevedo y Tania Romero Barrios (coords.), 231-256. Lima: Punto Cardinal Editores.

13 Corzo, Stefano. 2022. «Lecciones desde el "Olimpo".» *Revista Ideele*, diciembre.

pertenece a las zonas más pobres del país. Los perfiles son casi siempre los mismos: jóvenes, estudiantes, agricultores o trabajadores informales, de clase baja. En los testimonios compilados por los medios independientes *Wayka, Ojo Público* y *Salud con Lupa*, o internacionales como *The New York Times* y *El País*, los relatos de vida de las víctimas dan cuenta del *continuum* de violencias característico de sus trayectorias familiares. Estos testimonios de supervivencia y precariedad social se inscriben en una larga y arraigada historia de exclusión que, por lo general, fue recibida con indiferencia por varios sectores de la capital.



Las familias de las víctimas lloran a sus muertos durante el entierro en el Cementerio general de Ayacucho. ©Miguel Gutiérrez Chero

Judith Butler[14] ha señalado la importancia de comprender la precariedad social como una construcción política. En el caso de Perú, esta expone a algunos sectores de la población, a la marginalización, a la violencia, a la muerte y al duelo, de manera diferencial, puesto que son considerados como subciudadanos, e incluso no ciudadanos. Las muertes

14 Butler, Judith. 2005. *Vie précaire. Le pouvoir du deuil et de la violence après le 11 septembre 2001.* Paris: Éditions Amsterdam.

asociadas a las "vidas precarias" son juzgadas como menos dignas de ser lloradas que otras. O peor aún, la sospecha de culpa termina recayendo sobre estas personas como una condena. Los supuestos lazos con el terrorismo los convierte en una amenaza que necesita ser sofocada por el bien común, y que permitiría justificar su muerte. Por otro lado, Butler subraya que el simple hecho de que estas personas se concentren y salgan a manifestar, molesta. La pretensión de estos "invisibles" para ejercer su derecho a la protesta en el espacio público, los confronta así brutalmente al destino de volverse "desechables".-

Guillermo Salas[15] relaciona la indiferencia, el desprecio y el racismo mostrados por la capital, con la idea de "racialización de la geografía", fundada en una división ficticia, pero bien interiorizada, del territorio nacional en tres "regiones naturales" asociadas a diferentes grados de modernización. Un Perú moderno en la costa, que se cree libre de indígenas, y opuesto a los Andes —imaginados como un espacio de montañas impenetrables y hostiles al progreso—, habitados por indígenas atrasados, —y la selva amazónica— que se considera inhabitada o habitada solo por salvajes. La jerarquización étnico-racial que resulta de esta división caricaturesca hace que se naturalicen las desigualdades estructurales y se inscriban en el territorio. Salas subraya que las situaciones de violencia, que se reproducen con una regularidad inquietante, están influenciadas por la imposibilidad de empatía frente a las víctimas que se ven reducidas a su origen geográfico y a la racialización que esta implica. Añadimos que esto favorece, una vez más, a la impunidad sobre los crímenes perpetrados.

15 Salas, Guillermo. 2020. "Violencia policial, legitimidad de la protesta y racialización de la-geografía": https://cisepa.pucp.edu.pe/novedades-y-eventos/novedades/violencia-policial-legitimidad-de-la-protesta-y-racializacion-de-la-geografia/



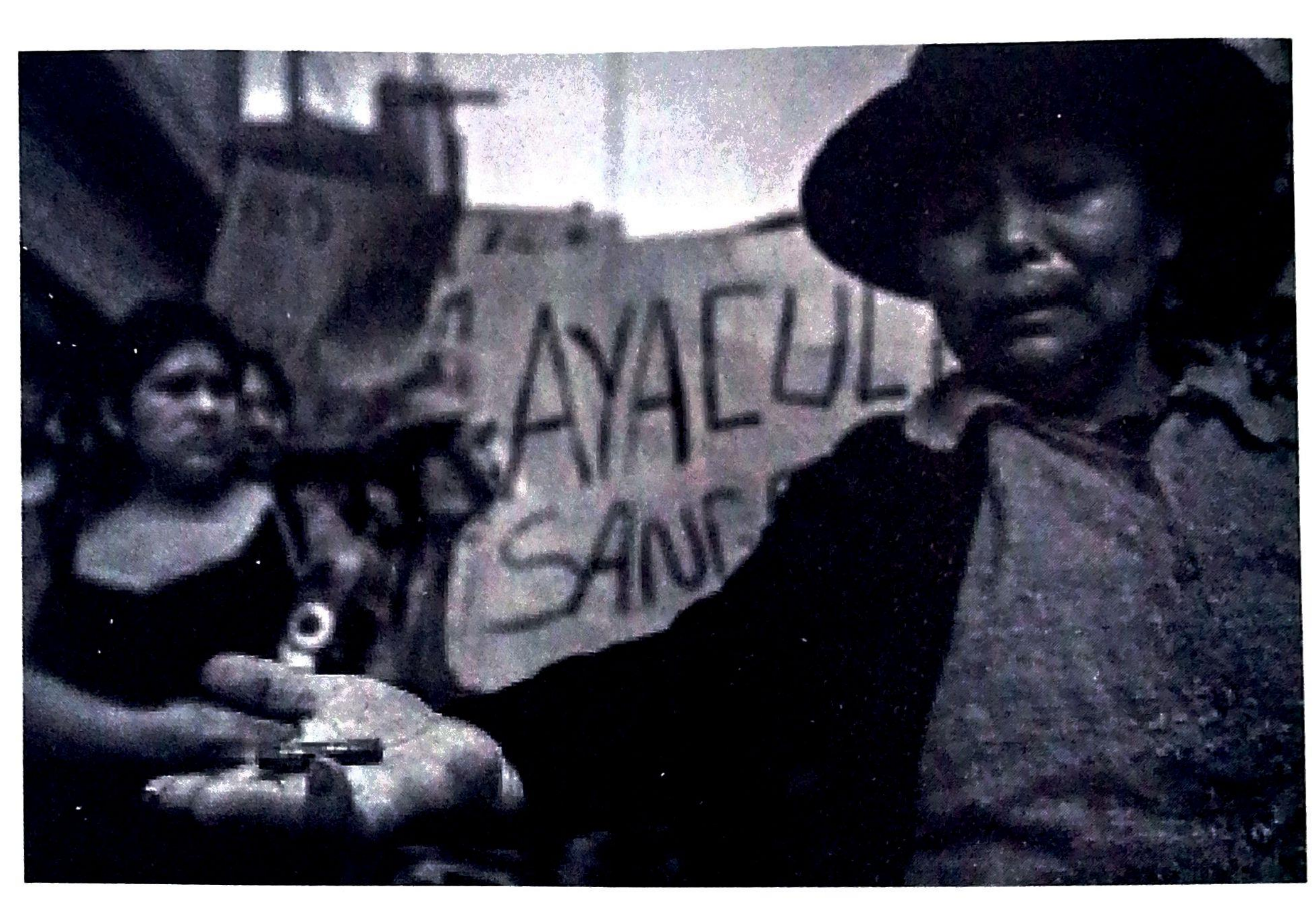
Entierro de las víctimas de la represión en Ayacucho. ©Miguel Gutiérrez Chero

Al igual que en los años 80 y 90, los habitantes de Ayacucho, epicentro del conflicto armado interno, interpelan a los medios de comunicación en quechua, recorren las plazas con sus féretros a cuestas y entierran a sus muertos sin el menor duelo nacional. Volver a ver a Ayacucho sitiado por las fuerzas militares y a los helicópteros lanzando bombas lacrimógenas desde el cielo, o escuchar las balas y los gritos a lo largo de la noche, hizo resurgir los recuerdos más sombríos y dolorosos de esta región devastada por la guerra y en cuyo territorio se concentró el 40% de los muertos y desaparecidos.

En diciembre del 2022, al día siguiente del asesinato de diez personas en Ayacucho, y mientras que el ministro del Interior aseguraba que la "violencia había disminuido", la plaza central de Huamanga se llenaba de manifestantes bajo el lema "no somos terroristas". Pero la situación es aún más trágica. En algunos casos, las personas que perdieron a sus familiares por la violencia política en la década del ochenta del siglo pasado, son las mismas que tuvieron que afrontar en el 2022 la muerte de sus seres queridos. Es el caso de Paula Aguilar Yucra, miembro de la Asociación Nacional de Familiares de Detenidos, Secuestrados y Desaparecidos del

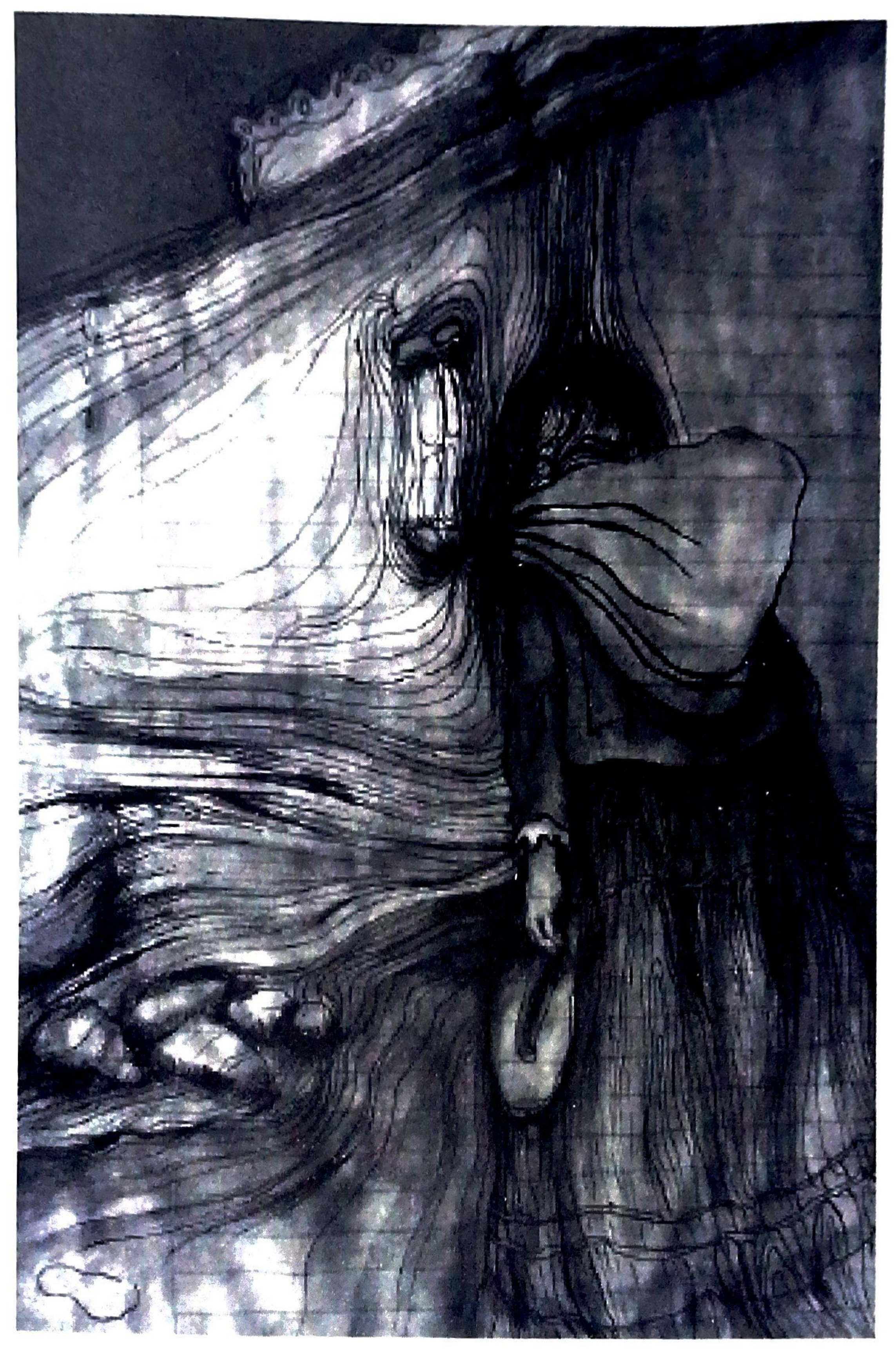
Perú (ANFASEP). Paula huyó de su pueblo en los años 80 con sus dos hijos pequeños y tuvo que desplazarse varias veces hasta instalarse definitivamente en Huamanga, tras el asesinato de su madre por Sendero Luminoso y la desaparición forzada de su hermano por los militares. Solo uno de sus hijos logró sobrevivir a las terribles condiciones del desplazamiento forzado. El 15 de diciembre del 2022, su sobrino-nieto, José Luis Aguilar Yucra, joven padre de familia de 20 años, fue asesinado por una bala en la cabeza cuando volvía del trabajo.

Días después, una nueva masacre arremetió contra el sur del Perú, está vez en Juliaca, zona aymara.



Paula Aguilar Yucra muestra una de las balas que fueron disparadas a los manifestantes el 15 de diciembre del 2022 en Ayacucho. ©Miguel Gutiérrez Chero

Conclusión



"Por esta presidenta, nos estamos matando entre peruanos". Palabras del padre de José Luis Soncco Quispe, policía asesinado en Puno por otro policía. Ayacucho ©Felipe López

La sordera del gobierno frente a las reivindicaciones populares, su rechazo a entablar un diálogo real y el despliegue desproporcionado de la violencia de Estado, solo consiguieron radicalizar las protestas a la par de la represión policial. En medio de las manifestaciones, se dio cuenta también del primer muerto de las fuerzas del orden: Luis Soncco Quispe, de 29 años, quien fue encontrado calcinado en su patrulla de policía, probablemente asesinado por otro policía. Cabe recalcar que la mayoría de los muertos de las fuerzas del orden, en el marco de este tipo de conflictos sociopolíticos, pertenece a las escalas más bajas de la jerarquía militar y policial, así como a los sectores socioeconómicos más pobres, al igual que los manifestantes. Más que una coincidencia, esta similitud recuerda que la carne de cañón se diferencia, por lo general, de los superiores jerárquicos y de quienes dan las órdenes sin asumir ninguna responsabilidad política ni penal.

Con el pasar de los días, la ascendente búsqueda de reconocimiento ciudadano, tan golpeada por el desprecio, la calumnia y la represión armada, fue alimentándose y alimentando, a su vez, la espiral de violencia. Mientras que Dina Boluarte, cuyo gobierno registró en sus primeros dos meses más muertos en protestas sociales que días en el poder, aseguraba no entender por qué la gente salía a manifestar, y el Congreso se esmeraba en proteger al Ejecutivo, una procesión de más de cien mil personas recorrió las calles de Juliaca para rendir homenaje a sus muertos. "Paren la matanza", exigía una de las portadas de *La República*. Por su parte, los principales organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, hicieron eco de este reclamo, solicitando soluciones alternativas a la violencia armada para resolver la crisis.

Paralelamente, decenas de miles de peruanos partieron desde distintos puntos del país, y en particular de los Andes sureños, arropados con banderas peruanas, rumbo a Lima para la marcha histórica del 19 de enero del 2023. Estos hombres y mujeres que reclamaban respeto de las libertades democráticas y una participación efectiva de los sectores más necesitados del país también nos recordaron que, a pesar de la marginalización histórica a la que se ha relegado a las regiones periféricas y a sus habitantes, ellas y ellos también forman parte de esta "comuni-

dad imaginada"[16] llamada Perú, en la que pretenden ejercer sus derechos como ciudadanos.

Apenas llegados "al inmenso pueblo de los señores", la respuesta de Boluarte no hizo sino recordar las típicas interacciones entre *mistis* y campesinos indígenas, en las que, producto del gamonalismo característico del surandino, previo a la Reforma agraria de 1969, se trataba a estos últimos casi como a siervos. "*¿Por qué no están trabajando?... ¿Quién los financia?... ¡En sus protestas no hay ninguna agenda social que el país necesita! ... Ustedes quieren generar caos y desorden y tomar el poder de la nación. ¡Están equivocados!*"[17], resondró y acusó Boluarte a los manifestantes venidos de provincias, negando su capacidad de raciocinio, agencia política y organización. La amonestación déspota y ametralladora de Boluarte, en un triste guiño a la novela de José María Arguedas *Todas las sangres*[18], no hace sino revelarla como una verdadera *misti* abusiva entre quienes dice representar. Una *misti* que, por su alianza con sus otrora más feroces rivales, es percibida como una traidora por los votantes que pusieron a Castillo en el poder, sea por adhesión o para evitar la victoria del fujimorismo, así como por esa comunidad andina a la que dice pertenecer, y que actualmente no solo no la reconoce, sino que la repudia.

¡Pero, ojo, el mundo de Don Bruno y Don Fermín es cosa del pasado!

---

16 Anderson, Bennedict. 1983. *Imagined communities*. Londres: VERSO.

17 Pronunciamiento de Dina Boluarte del 19 de enero del 2023, brindado en el Gran Hall de Palacio de Gobierno.

18 Arguedas, José María. 1964. *Todas las sangres*. Buenos Aires: Losada.

El miedo que habitamos[1]

Carla Sagástegui Heredia

¿De qué serviría el análisis más penetrante de las neurosis sociales si nadie posee la autoridad necesaria para imponer a las masas la terapia correspondiente?

Sigmund Freud

En el Perú, en lo que va de este siglo, la defensa de los derechos humanos y del poder del pueblo pasó de ser un bastión en el que confluían las posturas políticas liberales, a ser considerada, por parte del Gobierno y de la prensa mayor, como una acción comunista llevada a cabo por terroristas del Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso (PCP-SL). La autoría de esta narrativa se encuentra en el aprofujimorismo, el movimiento político vinculado con los principales grupos de poder económico en el país (incluido el narcotráfico) que ha propuesto una ideología considerada por distintos analistas como cercana al fascismo. Con apoyo en el viejo anticomunismo, este relato surgió unas décadas atrás como respuesta al Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) que criticó duramente los crímenes de las fuerzas del Estado y la estigmatización y abandono de la población del sur del Perú durante el Conflicto Armado.

Se trata de una réplica negacionista de los derechos humanos, que heroiza la labor de las fuerzas armadas y policiales; pero, al mismo tiempo, estigmatiza como terrorista a cualquier peruana o peruano del sur del país, más aún si es quechua, aimara o de otros pueblos originarios. Apela al patriotismo como sentimiento aglutinador y resguarda el modelo de familia conservador por encima de cualquier otro vínculo social. Esta re-

1 Publicado originalmente en la revista *Ideele*, 308. Enero–febrero 2023 (https://www.revistaideele.com/2023/02/21/el-miedo-que-habitamos/). Para esta edición se actualizó el texto, pero se mantuvo la estructura original.

acción defensiva de los aprofujimoristas, debido a los crímenes cometidos durante sus gobiernos, rápidamente fue incorporada como firme creencia en buena parte de la clase alta y media urbanas del país que no han cejado en dar su apoyo electoral a los candidatos fujimoristas, consiguiendo mantener buena parte del control del Congreso de la República.

Como el Partido Aprista y Fuerza Popular se debilitaron pocos años atrás con las denuncias por lavado de activos en colusión con los grupos económicos que representan, la presión ciudadana que lucha contra la corrupción y los crímenes de Estado pensó haber conseguido acabar con la reelección de sus congresistas y depurar el poder legislativo mediante el referéndum del año 2018; sin embargo, no fue suficiente. Pronto una nueva generación de candidatos se esparció entre distintos partidos políticos de alquiler y su protagonismo ideológico en el parlamento quedó a salvo.

El triunfo electoral de Pedro Castillo (gracias al voto de la población que se percibía marginada o comprometida con los derechos humanos), su ruptura con la prensa mayor y los grupos económicos de poder, las torpezas de su clientelismo y la fallida estrategia para enfrentar al Congreso de la República, solo exacerbaron la ansiedad del aprofujimorismo por recuperar el control del Poder Ejecutivo, la cual se tradujo en una campaña mediática de racismo, alimentado con el subterfugio del combate contra el comunismo latinoamericano, luego la corrupción familiar; y, ahora, aprovechando las protestas en el sur del Perú, los inmarcesibles remanentes de Sendero Luminoso y su presencia terrorista.

Hoy observamos con desazón cómo el aprofujimorismo nunca perdió su posición en el poder judicial, cómo se mantuvo vinculado con los dueños de los medios de comunicación y, al haber retomado el Poder Ejecutivo a través de Dina Boluarte, cómo ha conseguido el nefasto control de todos los poderes del Estado. La justificación anticomunista ha escalado violentamente, pasando de la violencia mediática a la violencia judicial y, finalmente, al uso de las fuerzas armadas y policiales para cometer la peor de las violencias: asesinar a personas que salieron a exigir, mediante marchas, paros y el cierre de las vías de transporte, que renunciara no solo Dina Boluarte, sino también el Congreso, y se convocara

a prontas elecciones generales y a una asamblea constituyente para reemplazar la Constitución fujimorista del año 1993 y recuperar los derechos perdidos. Hasta el momento, sin una autoridad capaz de detener la agresividad de este desborde, esta poderosa mafia ha conseguido dar un estatus hegemónico al discurso del miedo al terrorismo despertando el miedo de la clase más señorial.

El miedo al falso terrorismo, en el que cree la clase social más alta del país, también rechaza designaciones como *clase social* porque las encuentra asociadas al marxismo, padre del comunismo y, por ende, del terrorismo. Desde este malestar con el término, también se puede pensar que *clase social* no es un nombre suficiente, porque en el Perú, donde todo es complejo (como si viviéramos en una suerte de neurosis de la que no podemos escapar), nuestras clases sociales son más que clases: tienen de castas por sus prácticas y razones de menosprecio étnico y mantienen un poco de estamentos premodernos por el linaje familiar que añade otro tanto de orden patriarcal.

El resultado de este peruano *combo social* ha sido una severa incapacidad para relacionarnos con el otro, con la realidad misma y hasta con nosotros mismos. Ha provocado tal rigidez, tanta incapacidad de movilización social, que cualquier alusión al conflicto entre nuestros *combos sociales*, sería capaz de resquebrajar y hacer caer a quienes están en la cima. No se puede negar que la razón es sencilla: las clases que ostentan el poder económico siempre habrán de preferir discursos hegemónicos que condenan la potencialidad del conflicto en la vida y en la historia humana. Todo debe continuar tal como está.

Por eso, Karl Marx incomoda cuando interpreta la historia como resultado de los cambios que la permanente lucha de clases ha traído consigo. Y es sencillo corroborarlo, pues si ya la esclavitud nos parece indignante y el voto hoy en día es universal en un país como el nuestro, es porque la lucha de clases lo ha conseguido, con protestas, legislaciones o con guerras. Pero los discursos hegemónicos hasta hoy prefieren negarla e imaginar la historia como una evolución natural, botánica, donde las ideas de los grandes hombres y los triunfos de los héroes na-

cionales son ejemplo de un florecimiento, no solo cíclico, sino unitario, en tanto proviene de una misma semilla, de una sola raíz, la patria. Una patria dispuesta a vencer cualquier afrenta enemiga, con una población capaz de unificarse en un solo bando, jamás dividida en clases enfrentadas, tal como Mussolini lo planteaba: con un Estado disciplinante, capaz de garantizar la conciliación de intereses, apagando los conflictos en nombre de la unidad. En suma, con un Estado como la única entidad capaz de ejercer la fuerza y la violencia contra cualquier población que contravenga la estructura unitaria de poder.

El aumento de la agresividad en el Estado y en la clase alta que ha provocado el aprofujimorismo ha sido tan grande, que podría describirse como una suerte de desenfreno instintivo, un desborde que Sigmund Freud hubiera considerado extremadamente animal, pero propio, al fin y al cabo, de nuestra condición. Como sociedades hemos aprendido que la agresividad es un profundo problema que no se puede resolver racionalmente y que, por lo tanto, para poder lidiar con este lado humano, para poder regularnos, hemos elaborado un conjunto de instituciones, de producciones que llamamos cultura. La cultura, decía Freud, era un despliegue de dispositivos no solo para ponernos prohibiciones (sexuales, por ejemplo), sino también para entregarnos preceptos contrarios a la agresividad, como el conocido *amarás a tu prójimo como a ti mismo*. Por eso, desde nuestra infancia, cuando cometemos faltas y damos rienda suelta a nuestra crueldad, tememos que, si nos encuentran realizándola y nos castigan, perderemos el amor de nuestra madre, del padre, de la abuela; de nuestras primeras autoridades.

A esa primera angustia social la llamamos remordimiento y es el sentimiento de culpa más elemental. Después, propone el psicoanálisis, esa autoridad se internaliza, se convierte en el *superyó* y desarrollamos una conciencia moral. Si no la internalizamos, mientras se mantiene externa la autoridad, sentimos que corremos peligro solo si la autoridad nos descubre agrediendo, con las manos en la masa. No importa si es algo bueno o malo, lo único que queremos evitar es perder su amor.

Cuando Freud, en el *Malestar de la cultura*, analiza el sentimiento de culpa, esa angustia social que nos reprime, encuentra en la iglesia decimonónica una institución dedicada, como autoridad, a reprimir instintos. Décadas después, tras los estudios de Michel Foucault, hemos aprendido a reconocer cómo la familia, la cárcel, la iglesia, la escuela son instituciones creadas para disciplinar nuestros cuerpos e inscribir en ellos sentimientos como la culpa y el remordimiento para podernos controlar. En el caso de la cultura peruana, y retornando al desborde de agresividad racista, cabe preguntar si es que hemos producido alguna institución que haya ocupado un papel hegemónico, de autoridad, en la prohibición del violento racismo o en la incorporación del poder *amar al prójimo como a uno mismo* en nuestra sociedad. Cuesta creerlo, pero la agresividad racista no parece generar culpa en el Perú. Ninguna institución nos ha disciplinado para repudiar el agredir así, ninguna institución nos ha dicho que el menosprecio al prójimo corta el alma, que la indiferencia cuesta su vida y que la colma de dolor.

Ante esa carencia, el racismo solo produce en el agresor un miedo muy grande ante la esperada reacción violenta y vengativa del agredido (no en vano *es* un comunista de terror) pues así lo convierte, sin que haya tenido que ocurrir la reacción temida, en un objeto de odio y temor, en una amenaza que debe eliminarse. *Grosso modo*, la población peruana no teme perder el amor de alguna autoridad ni ha producido un *superyó* que la castigue por despreciar a otros peruanos. El racismo y el sentimiento de culpa se desconocen en nuestra sociedad, y la conciencia moral cuando existe, se presenta fija, dispuesta solo para amar al prójimo de la misma casta, del mismo partido y protegerse de quienes no comparten el mismo linaje.

No queda más que tiempo para bregar por la disipación del miedo y la recuperación de los derechos humanos en la cultura peruana, porque, siendo de todos, tienen valor real frente al mero patriotismo, porque conforman la última autoridad que nos queda para que amemos al prójimo como a nosotros mismos, porque son la toma de conciencia que requerimos para sanar y restablecer a una sociedad que, de tanta violencia, ya casi no puede ni respirar.

Terruqueo y estallido social

María Sosa Mendoza

El estallido social en el Perú marcó el término definitivo del reino de la pospolítica ("consenso en el centro")[1] en el país. Durante casi tres décadas, el conservadurismo político, el neoliberalismo económico y la apatía social derivaron en una población desarticulada y con demandas fragmentadas. La emergencia de un bloque contestatario se encontró con sólidos mecanismos de represión, prevención y contención construidos desde décadas atrás[2]. Un dispositivo enormemente eficiente que ha potenciado los mecanismos de represión fue el *terruqueo* que, en cierto modo, paralizaba a la población y al movimiento social.

Este ensayo tiene como objetivo exponer de qué manera la práctica del *terruqueo* —esto es, el ejercicio de tildar como terrorista a un sujeto o a un colectivo que pueda representar una amenaza al *statu quo* para expulsarlo de la esfera pública y restringir sus derechos básicos, con la finalidad de abortar el proyecto político de transformación social que representa— ha impactado en la política nacional desde inicios de siglo hasta la actualidad y cómo se ha convertido en uno de los elementos

---

1 Chantal Mouffe define como "pospolítica" a la forma de hacer política que, desde la década de 1990, se ha vuelto dominante en las democracias liberales o deliberativas. Según este enfoque, las sociedades occidentales han entrado en una modernización reflexiva, en el que el modelo adversarial de la política se ha vuelto obsoleto. "Al no admitir que la política es intrínsecamente partidista y que la política democrática requiere de un debate "agonístico" entre proyectos en conflicto, así como de la capacidad de elegir entre verdaderas alternativas, la política consensual de la tercera vía ha contribuido a la desafección política, núcleo de nuestra condición posdemocrática" (Mouffe, C. 2017. ¿Cuál es el futuro de la democracia en un período pospolítico? En Cuenca, R., Gadea, W. y Allen-Perkins, D. (Eds). *Hacia una (re)conceptualización de la democracia contemporánea*. Ecuador: Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. pp. 13-24.)

2 Maldonado, H. 2020. El "terruqueo" y los guardianes del orden neoliberal. *Quehacer. Revista de Desco*. 2 (5): http://revistaquehacer.pe/n5#el-terruqueo-y-los-guardianes-del-orden-neoliberal.

centrales para comprender las recientes movilizaciones que, desde diciembre de 2022, se producen en el país.

Sobre el terrorismo y el *terruqueo*

La historiadora Cecilia Méndez[3] localiza el uso del término "terrorista" en el Perú a mediados del siglo XIX; sin embargo, su uso estaba reducido a un grupo de políticos liberales que, con este término, calificaban algunos actos de sus homólogos conservadores. El término sufrió varias modificaciones a lo largo del tiempo. Pero, fue con el repliegue en el interior del país del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL), en los primeros años de la década de 1990, que inició un proceso de resemantización hasta llegar a lo que se entiende por terrorista o "terruco" el día de hoy: un sujeto (colectivo) sanguinario y fanatizado que tiene como único fin la muerte y el sufrimiento de los peruanos; sin seres queridos, sin aspiraciones políticas, sin otra dimensión que el de ser monstruoso y sin una historia antes del inicio de sus actos de terror.

La esencialización y deshumanización del sujeto terrorista fue posible por varios elementos particulares de la violencia política en el Perú, entre los que se encuentran: a) los cambios en la constelación del poder en el campo, pues, el arribo de las fuerzas del orden a zonas históricamente excluidas hizo que las comunidades ensayaran discursos de "exteriorización" sobre los militantes del PCP-SL, para ocultar la ruptura de los códigos morales que se permitieron con la aceptación de su discurso revolucionario, construyendo así un consenso acerca de que estuvieron siempre en contra de los senderistas[4]; b) la asimilación de las figuras del inocente injustamente apresado, en gran medida reforzado por organismos de derechos humanos y, sobre todo, por la Comisión de Indultos creada en 1996 que, para diferenciar a los "inocentes" de entre todos los "terroristas" encarcelados, fue creando características identificatorias

3 Méndez, C. 2021. The Paths of Terrorism in Peru: Nineteenth to Twenty-First Centuries*. In R. English (Ed.), *The Cambridge History of Terrorism* (pp. 420-452). Cambridge: Cambridge University Press: doi:10.1017/9781108556248.017.

4 Theidon, K. 2004. *Entre prójimos: el conflicto armado interno y la política de la reconciliación en el Perú*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

como la fe religiosa, la actitud respetuosa ante las autoridades del penal, el ser trabajador, el ser una buena madre o buen padre y el ser querido por todos sus amigos[5]; esto generó, por contradicción, la figura del sujeto terrorista después del final de la subversión; c) la ley de reparaciones para las víctimas de la violencia política, que niega la identidad de víctima y, por consiguiente, los beneficios de los programas de reparación del Estado, a los miembros de organizaciones subversivas, haciendo que las víctimas de las fuerzas del orden o sus familiares se vean forzados a la escenificación de víctimas "atrapada entre dos fuegos", adhiriéndose a la narrativa oficial[6]; y d) las denuncias como "terrorismo" a los actos del PCP-SL por parte de la izquierda peruana, partícipe de la política legal que se adscribía al paradigma revolucionario en el que la violencia política y la lucha armada eran claves, pero buscaba diferenciar la actuación de Sendero de la violencia revolucionaria y la lucha armada[7].

En la actualidad, el ejercicio del *terruqueo* implica, por lo menos, a dos sujetos y a un par de ideas base.[8] Por un lado, sobre los sujetos se encuentra quien hace uso de los afectos que genera el sujeto terrorista a su conveniencia, con la finalidad de movilizar a terceros; por otro lado, los receptores de esta estrategia, que interiorizan las ideas clave, las validan y modifican su comportamiento de acuerdo con ellas.

Las premisas centrales que permiten que el *terruqueo* siga vigente, a pesar de que por más de dos décadas no se haya registrado ningún atentado por parte de los grupos subversivos de antaño[9] son: a) el conflicto

---

5 Manrique, M. 2014. Generando la inocencia: creación, uso e implicaciones de la identidad de 'inocente' en los períodos de conflicto y posconflicto en el Perú". *Boletín del IFEA*, 43(1), 53-73.

6 Robin, V. 2021. *Los silencios de la guerra: Memorias y conflicto armado en Ayacucho- Perú*. La Siniestra Ensayos.

7 Pásara, L. 2022. *La "Nueva Izquierda" peruana en su década perdida. De la ilusión a la agonía*. Lima: Fondo Editorial PUCP.

8 Se puede encontrar otro tipo de *terruqueo* que se aleja de la estrategia ofensiva (consciente y planificada), la práctica espontánea e inconsciente que se encuentra interiorizado en los sujetos. Para mayor profundización de este aspecto se puede ver Sosa M. & Sevilla, S. 2022. *La vida después de la muerte de los miembros del PCP-Sendero Luminoso: un modelo de comunicación para la convivencia posconflicto*. [Tesis de licenciatura], Universidad de Lima: https://bit.ly/3BJnMZg.

9 El denominado "Militarizado Partido Comunista del Perú", que controla la zona del VRAEM, que registra los mayores niveles de productividad de hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína en el país, si bien ha desplegado una gran capacidad operativa, se encuentra alejado del fenómeno del PCP-Sendero Luminoso tradicional. Su principal medio de subsistencia es "la relación con las

armado interno sigue siendo un problema latente; b) el terrorismo, más que un delito, es una característica permanente y, por tanto, la sola existencia de ciertas personas significa un peligro real para la sociedad[10].

El *terruqueo* en la política

Durante la presidencia de Alberto Fujimori, el rótulo de terrorista buscaba desprestigiar a cualquier candidato que amenazara su reelección y, con ello, las reformas de mercado implantadas desde inicios de su gobierno —la liberalización de la economía, la desregulación, el aumento de la presión fiscal y, especialmente, un proceso de privatización que redujo el rol del Estado—.

Con la transición a la democracia (2000), el *terruqueo* dejó de usarse como el instrumento del oficialismo contra candidatos enemigos, y pasó a ser un recurso más del propio sistema. A través de los medios de comunicación, gremios de empresarios y determinadas agrupaciones políticas ligadas a la derecha, lo usan contra políticos, mayormente de izquierda, que ellos consideran potenciales amenazas contra el sistema establecido. Desde entonces, hasta 2016, el *terruqueo* tuvo resultados exitosos en las elecciones presidenciales. De allí que, mientras en diferentes países de la región hubo un giro a la izquierda, Perú se mantuvo renuente al cambio.

Los resultados en las elecciones y los giros y moderaciones de los que postulaban como candidaturas de izquierda demuestran que el *terruqueo* se apoya en los miedos y rechazos que "el terruco" genera entre la población (o el electorado); pero, lo pernicioso son sus efectos, ya que logra erosionar la base de apoyo de los candidatos *antiestablishment*

---

firmas de narcotraficantes ya sean nacionales o extranjeras, y ese factor los liga más a características propias de una organización criminal" y si bien, promueven una ideología en su zona de influencia, esta tiene fines de coherencia y cohesión interna y externa. En ese sentido, la alianza entre estos con campesinos cocaleros y narcotraficantes se realiza "a través de la cohesión y no de la coerción como en el pasado". Para un mayor alcance sobre este tema se puede ver: Díaz, F. D. (2015). El Perú y sus múltiples Sendero Luminoso. *Relaciones Internacionales*, 24(49). Recuperado a partir de https://revistas.unlp.edu.ar/RRII-IRI/article/view/2390.

10 Sosa, M. & Saravia, G. 2021. El terruqueo de hoy. *Revista Ideele N°301*. https://www.revistaideele.com/2021/12/27/el-terruqueo-de-hoy/

para que no puedan acceder al poder o para obligarlos a reconducir sus proyectos políticos hacia otros más moderados y conciliadores con el sistema, si desean obtener el apoyo suficiente para ganar las elecciones. De allí que se suele decir que en Perú existe la dinámica política de "entrar por la izquierda y salir por la derecha", en referencia a la distancia entre las promesas electorales y las políticas gubernamentales puestas en marcha por quienes han llegado al poder[11].

Con lo mencionado, no se pretende sostener que, desde hace años, existe una mayoría aplastante en busca de un candidato que apueste por paradigmas políticos alternativos. Nada más alejado de la realidad: con el fujimorato, el proyecto neoliberal impactó profundamente en la matriz cultural de la población peruana, orientando el comportamiento de las personas, la construcción de imaginarios sociales y las características de la sociedad[12]. Es decir, un porcentaje importante de la población asumió una identidad procapitalista con una arraigada narrativa individualista, en donde, el culto al sacrificio se ha convertido en una especie de religión. Esto ha sido inyectado y ha calado como un valor para amplios sectores populares, en especial dentro del aproximadamente 76.8 % de los trabajadores "informales" [13].

En ese contexto, la llegada de la pandemia del COVID-19 supuso un golpe que desnudó el mito de la clase media en el país. En solo pocas semanas de cuarentena, un importante sector de la población que se autopercibía como parte de la clase media —usualmente por sus patrones de consumo, posibilitados por el acceso al crédito— se percató de su extrema vulnerabilidad, al caer fácilmente en la pobreza.

La decepción por la falaz prosperidad económica convergió con la decepción política que había iniciado en 2016 con el escándalo por corrupción en el caso Lava Jato, que comprometió a la mayoría de los políticos, sin diferenciar tendencia alguna. De esta manera, se desplomaba el

11 Murakami, Y. 2014. *La actualidad política de los países andinos centrales en el gobierno de izquierda*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

12 Cánepa, G. & Lamas, L. 2020. *Épicas del neoliberalismo: subjetividades emprendedoras y ciudadanías precarias en el Perú*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

13 Ver: "Desempeño en el mercado laboral peruano: resultados en 201 de Comex Perú": https://www.comexperu.org.pe/upload/articles/reportes/reporte-laboral-001.pdf

relato nacional de la "democracia modernizadora" que se había instalado en el país con la salida de Alberto Fujimori del poder. Con ello, también tambaleó el mito del progreso individual sobre la base del sacrificio.

La campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2021 graficó esta desilusión. Una semana antes de las elecciones de primera vuelta, los estudios de opinión mostraban un quíntuple empate técnico en el primer lugar en la intención de voto presidencial.[14] Como bien graficó Meléndez[15], el escenario nos presentaba a "minicandidatos": políticos que se disputaban la Presidencia de la República alrededor del 10 por ciento del respaldo del electorado. La desafección política —por políticos que por años habían apostado por un programa económico de consenso que había tenido duras consecuencias— se expresaba en forma de fragmentación.

En un escenario de dispersión de voto se hicieron visibles los sectores de la población que durante varios años apoyaban opciones antisistema y que no se dejaban influenciar por el uso que los sectores de poder hacían del *terruqueo*. Estos conformaron la base que hizo que Pedro Castillo llegara a segunda vuelta y se enfrentara a Keiko Fujimori, una candidata que condensaba las dos desilusiones, por los procesos de corrupción en su haber y por la defensa del modelo económico ortodoxo que había establecido su padre.

Diversidad y convergencia en el estallido

En el reciente estallido social se encuentran movilizados actores sociales heterogéneos. Como bien ha señalado Coronel[16], las primeras

---

14 La encuesta de Ipsos, publicada en el diario *El Comercio*, una semana antes de las elecciones generales de 2021, mostró un quíntuple empate técnico en el primer lugar en la intención de voto presidencial. Se trataba de los candidatos Yohny Lescano (12,1 %), Hernando de Soto (11.5 %), Verónika Mendoza (10.2 %), George Forsyth (9.8 %) y Keiko Fujimori (9.3 %). Ver: https://elcomercio.pe/elecciones-2021/elecciones-2021-de-soto-escala-al-segundo-lugar-en-la-recta-final-ipsos-peru-simulacro-noticia/?ref=ecr.

15 Meléndez, C. 2021. *Minicandidatos: última temporada electoral de la serie política peruana.* Lima: Debate.

16 Coronel, O. 2023. Ni revolución ni barbarie. La complejidad del estallido peruano. *Revista Ideele N°308.* https://www.revistaideele.com/2023/02/22/ni-revolucion-ni-barbarie-la-complejidad-del-estallido-peruano/.

movilizaciones de diciembre de 2022 estuvieron compuestas por las organizaciones y la base social que habían apoyado a Pedro Castillo durante sus dieciséis meses en el poder. La represión del gobierno a estas primeras jornadas de protesta fue la que motivó que otros sectores se sumen. Así, bloques vinculados con el movimiento de derechos humanos, el movimiento Indígena Amazónico, las ONG y colectivos contraculturales salieron a las calles para reforzar una de las varias demandas primigenias: el adelanto de elecciones, la traducción del enorme desprecio que las multitudes sienten contra la presidenta Dina Boluarte y los miembros del Parlamento.

Hasta aquí se trataba de diferentes sectores que suelen movilizarse ante demandas específicas, geográficamente segmentadas o "territorializadas", que, esta vez, habían logrado establecer fines políticos comunes. Sin embargo, la incorporación de los sectores populares enraizados en las realidades materiales de la época neoliberal en el Perú, o, mejor dicho, la adhesión de los sujetos hijos de los procesos estructurales de las tres últimas décadas es lo que ha dado otra dimensión a las protestas. Jorge Frisancho, ha esbozado la composición de estos como un bloque en el que confluyen "las antiguas clases medias que recuperaron parcialmente su estabilidad en los años de crecimiento económico y las nuevas clases medias surgidas en ese mismo contexto en varias regiones del país, al ritmo de la expandida oferta educativa y las economías informales e ilegales"; pero también "las clases trabajadoras precarias vinculadas a esas economías que, según estimados, ocupan el 70 % de la actividad económica en el país, y poblaciones locales vinculadas a la gran industria extractiva y primario-exportadora (y con una larga historia de negociación y lucha contra sus depredaciones). Y, junto con ellos, "capitales comerciales insertos en circuitos de alcance regional junto con comunidades rurales y semirurales decisivamente "modernizadas" en las últimas décadas en virtud del uso de nuevas tecnologías de información y comunicación, que sin embargo no han abandonado sus vínculos tradicionales con el territorio o —crucialmente— sus identificaciones y afiliaciones étnicas".[17]

17 Frisancho, J. 2023. Lo nuevo no termina de nacer. *Revista Ideele N°308*. https://www.revistai-

La confluencia de ese complejo grupo abigarrado de la sociedad, pone en cuestionamiento el orden neoliberal de las últimas décadas, esto es, por los mismos actores que antes lo legitimaban. Así, la crisis de hegemonía toma cuerpo en Perú. Sin embargo, este no es un fenómeno aislado, sino parte de la crisis del orden liberal que atraviesa, con sus particularidades, cada nación en diferentes partes del globo. Se trata de un declive que hace que el neoliberalismo domine sin convencer[18], haciendo que sus representantes en el poder acrecienten sus niveles de represión y violencia contra la sociedad —de la mano de otras estrategias— para mantener el *statu quo.*

En Perú, la violencia y la represión se sirven del *terruqueo.* Si bien la criminalización de la protesta no es una estrategia nueva, la práctica de tildar como "terroristas" a los líderes y participantes de la protesta se ha ido intensificando en los últimos años y ha llegado a su cúspide durante el estallido social. Sin embargo, el abuso de la estrategia del *terruqueo* ha logrado que pierda su efecto paralizante en una parte importante de la ciudadanía; esa parte que salió a las calles para protestar por cambios profundos.[19]

Al ser ahora la misma población la que representa una amenaza de cambio, el *establishment* y el régimen de Boluarte han reforzado la criminalización contra este colectivo, acusándolo de terrorista e invocando para que se aplique contra ellos las leyes antiterroristas tipificadas desde los noventa, cuando el país se encontraba en medio de un conflicto armado interno.

Actualmente, hay decenas de personas a quienes se les ha abierto proceso por terrorismo en medio del estallido social. En este contexto, el papel de los medios de comunicación tradicionales sigue siendo importante. Ya no para despertar afectos en la población invocando a los "terrucos", sino para justificar la criminalización.

---

deele.com/2023/02/22/lo-nuevo-no-termina-de-nacer/.

18 Ramírez, R. (2023). *Ocho tesis para el Nuevo Orden Económico Internacional.* Internacional Progresista. https://bit.ly/3Zo4HW1

19 Según un estudio de opinión realizado por el Instituto de Estudios Peruanos en enero de 2023, la convocatoria a una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución Política del Perú es apoyado por el 69 por ciento de la población. Además, el 60 por ciento de quienes se autoubican a la derecha del espectro político apoya la demanda. Ver: IEP: "Informe de Opinión – Enero I 2023": https://bit.ly/3zCpNFX.

Contra la memoria. Violencia, negacionismo y fracaso de las *políticas de verdad* en el Perú

Mario Meza

La memoria vive un escenario de asedio en el Perú. Existe una apuesta negacionista que busca perseguir memorias que son incómodas al régimen actual. El objetivo de este texto es relacionar la amenaza permanente de clausura del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) con el contexto de la violencia de Estado recurrente desplegada sobre determinados sectores de la sociedad, manifiesta con particular crueldad entre los años 2022 y 2023.

Aun cuando se supone que el LUM es parte de la estructura del Estado que se posicionó con una política de reconocimiento, resarcimiento y dignificación a las víctimas del Conflicto Armado Interno (CAI), acompañada, incluso, de políticas de reparación, es más que evidente que esta articulación de discursos de justicia y reconciliación con actividades de pacificación estatal postconflicto, han resultado fallidas en los últimos veinte años. La sociedad vive hoy una violencia política del postconflicto, con el añadido de que tiene sobre sus hombros la pesada herencia de la violencia política y social desatada entre 1980 y el 2000.

Proponemos como hipótesis que la violencia que vive la sociedad peruana actual es la manifiesta coexistencia de posturas complementarias que se expresan en el ejercicio de dos dispositivos gubernamentales: la biopolítica y la necropolítica. Ambos dispositivos oscilan entre sí con la activación de las movilizaciones sociales producidas en el país entre el 2001 y el 2023. El resultado de cada una de estas aplicaciones ha llevado a un incremento contextual de la violencia directa del Estado y ha repercutido sobre otras violencias dentro de la sociedad.

Empecemos por definir qué es la postura biopolítica y necropolítica aplicada al caso peruano.[1] La biopolítica es el proyecto progresista y liberal de quienes se identifican con las intenciones declaradamente explícitas de un Estado que dice reivindicar dimensiones prioritarias del desarrollo capitalista en un marco democrático que incorpora justicia y reconciliación tras los hechos del CAI. En cambio, la necropolítica se identifica con proyectos autoritarios que reivindican el ejercicio y las prácticas de violencia represiva del Estado para defenderse de enemigos externos e internos. Un aspecto complementario del proyecto necropolítico suele ser el matiz conservador de su postura, basado en una visión colonialista de la sociedad como espacio de dominio, lo cual profundiza su carácter autoritario, vinculado con la promoción de la muerte como un medio decisivo de dominación. El proyecto biopolítico se centra, en cambio, más en el carácter productivo y reproductivo de los sujetos biológicos que en la liquidación de estos.

La configuración de estas dos posturas, la biopolítica y la necropolítica, no es necesariamente opuesta al diseño y al ejercicio del poder gubernamental. Son más bien articulaciones discursivas y políticas complementarias que oscilan de un lado a otro dentro de una competencia por controlar un poder estatal institucionalmente débil. Esta situación agrava la posibilidad de generar políticas sólidas de la verdad para una era de postviolencia.[2] Ante este escenario de imposibilidades discursivas y de prácticas generadoras de cohesión social, el LUM y las movilizaciones sociales reprimidas por los gobiernos de turno aparecen como víctimas propiciatorias del conflicto por quienes promueven ambos dispositivos gubernamentales. Así, se incrementa la reproducción de violencias descontroladas del Estado contra la sociedad generando más violencias en la propia sociedad.

---

1 Sobre el concepto de gubernamentalidad nos remitimos a la obra de Michel Foucault. 2007. *El nacimiento de la biopolítica*. Buenos Aires: FCE; reinterpretada en la línea de Giorgio Agambem. 2006. *Homo Saccer. El poder soberano y la nuda vida.* Vol. I. Valencia: Pre-textos. Ambos abren una discusión filosófica que aquí no abordamos. El concepto de necropolítica se toma de Achille Mbembe. 2011. *Necropolítica seguido sobre el gobierno privado indirecto*. España: Melusina.

2 Políticas de la verdad surgidas de consensos colectivos y elaborados desde el logos por la investigación, Ruiz, A. 2021. "Políticas de la Verdad y de la Justicia en el Perú colonial". *SURANDINO.* 2 (2) pp. 72-95.

Memorias asediadas y el riesgo de la clausura: el LUM bajo una biopolítica de la verdad

El LUM es un espacio donde las víctimas de la violencia pueden acceder pública y libremente para recordar los hechos sucedidos durante el CAI y ejercer el derecho a la conmemoración sin objeciones ni estigmatizaciones. Desde su formación el LUM ha atravesado una serie de dificultades. Ellas se iniciaron desde su nacimiento durante el gobierno aprista (2006-2011) cuando este objetó su conveniencia (si es que no su utilidad) para que funcionara en el país. De hecho, su financiamiento inicial fue impulsado por la Unión Europea, Suecia y, especialmente, por el gobierno alemán de Angela Merkel, la principal fuerza propulsora del proyecto LUM. A este núcleo inicial se sumaron, por efecto de la presión internacional y de los familiares de las víctimas identificadas con el proyecto, sectores liberales y progresistas que apoyaron su construcción.

Uno de los temas que poco se menciona en el inicio del LUM fue dónde debía construirse: en Ayacucho, epicentro de la violencia de esos años, o en Lima, capital de la república. Otra cuestión que generó controversia fue qué debía representar y especialmente para quiénes. Las dificultades de este conflicto derivaron en la definición de un combate ideológico y político entre quienes apoyaban su existencia y los que se oponían a él; terminó involucrando a quienes apoyaban su existencia, pero disentían sobre la pertinencia de sus representaciones y de los mensajes que allí debían exponerse.

Una vez instalado el LUM y elaborada la exposición permanente durante el gobierno de Ollanta Humala en el 2015, las dificultades derivaron en situaciones que luego lo acompañarían en los años siguientes. Una de ellas se produjo con la permanencia de sus directores durante los gobiernos de Humala y de Pedro Pablo Kuscynski cuando, por ejemplo, se despidió a la directora del LUM en 2015 por declarar el desinterés del gobierno por la orientación que este debía tomar. Del mismo modo, otro director debió renunciar en 2017 por la falta de respaldo del gobierno ante una exposición temporal que cuestionaba el autogolpe del gobierno

de Alberto Fujimori. Previa a esta renuncia, se produjo el escándalo de Edwin Donayre, militar retirado y congresista de la República en ejercicio (condenado años después por un tribunal de justicia por el robo de combustible de su institución), quien denunció la exposición permanente por considerarla apologética del terrorismo.

En este contexto, las posibilidades y límites en los que se ha movido el LUM para exponer públicamente la construcción de memorias abiertas y entrelazadas, capaces de crear ciertos consensos entre los peruanos dentro de lo que llamaríamos un régimen biopolítico de verdad, han estado tan asediadas como otros espacios de gestión de memorias del periodo de violencia. De esta manera, se ha limitado y obstruido la elaboración de otras memorias del periodo de violencia desde la propia administración estatal. La primera de ellas es la explícita exclusión de los grupos alzados en armas en todos los niveles, incluyendo los legales, y la penalización, además, de la difusión de sus puntos de vista sobre lo que fue el CAI. Existen, también, las memorias de personas que, habiendo sufrido las violencias de los grupos armados y del Estado, buscan el reconocimiento y la reparación previa por parte de este último, subordinando sus testimonios a una gestión burocrática de la verdad, de marcos jurídicos y administrativos impuestos por el Registro Único de Victimas (RUV), lo que distorsiona la transmisión de esas experiencias para la construcción de una política de la verdad más respetuosa con los derechos de las personas.

El retorno de lo reprimido y la necropolítica de la República empresarial: las masacres de 2022 y 2023

Las dificultades políticas y administrativas para la gestión pública de las memorias del periodo de violencia por el LUM y otros espacios de la sociedad, junto a la deficiente administración de justicia y la ausencia de mecanismos eficaces para la preservación de los archivos públicos y privados, forman parte del conjunto de problemas del Estado para construir políticas de la verdad. Estas características coinciden con el periodo histórico denominado "República empresarial", cuyo rasgo central es

el retraimiento del Estado frente a los intereses públicos y su sustitución por el predominio de agentes privados que imponen sus intereses frente a las necesidades y demandas públicas de una sociedad por justicia e igualdad. La peor de sus consecuencias políticas se ha expresado más claramente en los manejos turbios del poder y la reducción del ejercicio de derechos básicos, si es que no fundamentales, ante el predominio de la privatización de la actividad política.

Esto ha impedido el reconocimiento pleno de las experiencias traumáticas del periodo de violencia y ha prolongado los sufrimientos de quienes vivieron ese periodo durante la postviolencia (2001-2023). En este aspecto, las poblaciones que buscan justicia efectiva ante las masacres y violaciones de derechos humanos efectuadas por agentes del Estado en el pasado, han visto dormir sus expedientes en los anaqueles del sistema de justicia, pues yacen retenidos y congelados por quienes propician la sepultura de esos procesos sin resolver. Así, los afectados son presionados, además, con el cansancio y el olvido institucional para obligarlos a pasar la página de la historia.

Hoy la violencia política sigue ejerciéndose como herramienta gubernamental del poder. Se reitera la situación de injusticia estructural y simbólica frente a quienes sufrieron la violencia en los periodos pasados, que retorna con fuerza cada cierto tiempo en el marco de lo que llamamos necropolítica. El abuso del poder estatal y de sus agentes de gobierno, o de quienes lo representan, ha prolongado y reactualizado impunemente y con meridiana precisión el uso de estos dispositivos, especialmente frente a quienes mueren en nombre del orden establecido.

En este contexto, la dinámica de la inestabilidad política que acompaña al Perú desde el 2016 ha impulsado los engranajes de una biopolítica que salta con relativa facilidad a la necropolítica. Situación que se produce no solo porque parecen ser mecanismos exitosos de dominación gubernamental, sino porque al ser dispositivos de reproducción del poder, buscan garantizar la realización de ese dominio para los pocos privilegiados que se benefician de ellos, dañando a las mayorías que son las que habitualmente han sufrido sus efectos mortales en otras épocas.

La alternabilidad u oscilación de las tecnologías biopolíticas y necropolíticas en el poder crean una ilusión basada en el dilema del prisionero. Se presentan como únicas fórmulas de supervivencia que pulsean los beneficios de los privilegiados con el destino de toda la comunidad. Para realizarla utilizan los mecanismos de la democracia electiva y la representación política mediada por los partidos y sus medios de comunicación que asumen el rol de gran opinión pública. El problema es que no todos dentro del país pueden ser considerados privilegiados ni en el entorno de la biopolítica, menos de la necropolítica.

Por ejemplo, las promesas y bondades de la transición democrática durante el gobierno de Alejandro Toledo se vieron confrontadas con el proyecto de privatización de las plantas de energía eléctrica en Arequipa. El resultado fue una dura represión de la protesta de la ciudad y la desilusión de una parte del país ante la promesa de una democracia efectiva con soluciones equitativas para todos. En cambio, la postura del cambio responsable del segundo gobierno aprista sufrió un trastorno con la doctrina del "perro del hortelano". Con esta metáfora insultante, Alan García presentó como argumento la necesidad de subalternizar a los indígenas para modernizar al país, enajenando el apoyo de sectores rurales, nativos y comunitarios a quienes se les había prometido un cambio democrático responsable. El resultado fue la masacre en Bagua (2009). En cambio, la moderación estratégica del plan de "la gran transformación" de Ollanta Humala y la promesa de la honestidad para hacer la diferencia en cuanto a las reivindicaciones de los excluidos devino en una adhesión al modelo neoliberal, convirtiendo sus excusas por la moderación en un ejercicio de traición para perseguir y reprimir a los opositores por naturaleza.

El dilema de la tensión fujimorismo-antifujimorismo, como expresión canónica de la antítesis democracia-dictadura, presente en todos los procesos electorales de las dos últimas décadas, mostró cómo las débiles percepciones de sectores políticos, académicos e intelectuales urbanos y arraigados entre las clases medias, identificadas como progresistas y liberales (popularizada con la denominación "caviares"), se

adherían a la larga a un orden autoritario neoliberal, galvanizado con fustes democráticos y un imperfecto sistema de partidos políticos.

En el contexto actual, en el que se vive una dictadura legalizada, se asume que este orden autoritario es un "vaciamiento democrático" de los verdaderos fines de una institucionalidad, supuestamente reconocedora de los derechos fundamentales. Sin embargo, bajo este enfoque se encubre lo que en realidad es: una dictadura atravesada por asesinados y lesionados.

Las pretensiones por diseñar desde quienes han promovido un campo de concentración ideológico de términos y palabras, que reduzcan y restrinjan las opciones de los ciudadanos por hallar órdenes alternativos al régimen neoliberal, han construido en el fondo un mecanismo para mantener este proyecto biopolítico de poder. Se facilita, en última instancia, que la represión a la movilización ciudadana en tiempos de protestas legitime la ejecución a mansalva de quienes disienten públicamente con el orden vigente, abriendo espacio al proyecto necropolítico de liquidación del disidente.

El uso de estas tecnologías gubernamentales del poder ha operado también en otros espacios de la sociedad, aunque con resultados más sutiles para preservar privilegios. El más perceptible es el intento por desplegarlas en la lucha contra la corrupción. En los pocos y deliberados esfuerzos por combatirla desde la biopolítica se ha apelado a la exclusión discursiva por la vía de la judicialización de los políticos acusados, procesados y sentenciados por corrupción. Desde la necropolítica, mientras tanto, se busca atender el reclamo de sectores de la población, demandando públicamente la ejecución directa de los acusados, procesados y sentenciados como delincuentes, sean grandes o chicos. Ambas manifestaciones se han observado mejor en los medios de comunicación y en los procesos judiciales, tanto para linchar mediáticamente a los opositores políticos como en la actuación violenta de la policía contra malhechores de poca monta. En ninguno de los casos la administración de justicia ha impedido realmente que los acusados con más poder sigan subsistiendo en la política (y en la sociedad) con relativo éxito.

En este sentido, la biopolítica es la cara inversa de la necropolítica. Si en una se privilegia quiénes deben vivir frente a quiénes deben morir (biopolítica), en la otra se designa quiénes deben morir para que los privilegiados vivan (necropolítica). El consecuente asesinato de policías en la Estación IX de Petroperú y de manifestantes indígenas en la Curva del Diablo en el 2009; la impasible ejecución de dirigentes sociales nativos y campesinos o líderes indígenas medioambientales con la liquidación del medio ambiente; la constante reiteración de la violencia contra la mujer expresadas en violaciones sexuales y feminicidios; los crímenes de odio contra los grupos LGTBI, impregnan, en su conjunto, la marca distintiva de la biopolítica y la necropolítica. Ambas funcionan como regímenes gubernamentales que oscilan alternativamente desde sus predios de poder para consagrar, a su manera, las desigualdades. Consolidan la fachada democrática donde se disputa el dominio del Estado en las condiciones actuales de opresión y lo presentan como la única forma de hacer viable la supuesta voluntad política del país. Animan a hacer creer que solo ambas tecnologías pueden operar bajo la voluntad de un supuesto consenso básico, capaz de representar auténticamente al país; omiten, de este modo, que la política de la verdad neoliberal no puede existir más, si es que alguna vez existió, de acuerdo con la voluntad general de la sociedad.

Negar la realidad, afirmar la negación: una política fallida de verdad (y de justicia)

En el periodo de violencia de 1980 a 1990 se hizo común acallar y ocultar las violaciones de derechos humanos ante la posibilidad de ser descubiertas y denunciadas por el periodismo independiente, por la oposición política o por el propio sistema de justicia. Desde 1990 en adelante, se instauró una política de la verdad diferente que consistió en negar la verdad misma de los hechos para imponer versiones inverosímiles como criterio de gubernamentalidad. Al final de esa década, la mentira se había convertido en la principal forma de expresión comunicativa del gobierno de Fujimori, cercando al país con una memoria sal-

vadora impulsada exclusivamente por el régimen y su coalición cívico militar.

Entre el 2001 y el 2003 se intentó romper ese cerco con el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), creándose posteriormente el Consejo Nacional de Reparaciones, las leyes de búsquedas de personas desaparecidas y un banco de datos genéticos para descubrir las identidades de los miles de víctimas desaparecidas o sepultadas en los llamados sitios de entierro o lugares clandestinos. El ingreso del LUM se enmarca como parte de esta gubernamentalidad biopolítica; en una dimensión cuasi marginal de algo que nunca llegó a establecerse como una política oficial de la verdad.

Es significativo decir que, a pesar de los impulsos de quienes querían recuperar alguna verdad del pasado con políticas de la memoria, esta intención pasó casi desapercibida en los predios del Estado y la República empresarial. Nuevos movimientos sociales y medioambientales intentaban romper el silencio, el ocultamiento y la mentira que se resistía en el interior del Estado y que se difundía, igualmente, en diferentes espacios de la sociedad al calor del neoliberalismo heredado de la década de Fujimori. El proyecto necropolítico auspiciado por varios herederos del régimen fujimorista, con nuevos miembros llegados del proyecto biopolítico, contiene, en buena parte, una síntesis de posturas conservadoras y autoritarias que, además de apoyar la legitimidad de la violencia estatal, niega, al mismo tiempo, las masacres de líderes campesinos y de periodistas ocurridas en varias zonas alejadas de la capital, sea durante el periodo del CAI o en los actuales conflictos medioambientales; niega también la detención, torturas y asesinatos de ciudadanos que se oponen a las inversiones extractivas, públicas y privadas, en las carreteras y al interior del país como Arequipa, Piura, Cusco, Puno, Moquegua, Amazonas, Loreto o Cajamarca, a quienes se les antepone, además, calificativos de terroristas. Finalmente, niega las desigualdades y las inequidades producidas por una sociedad construida al tamaño de las necesidades de la República empresarial. Todos estos hechos han sucedido dentro de un marco formalmente democrático y relativamente funcional al crecimiento de la economía.

La máxima expresión de estas negaciones llegó también con la crisis política de la República empresarial en los años previos al inicio de la pandemia (renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y destape de los *audios de la vergüenza*) y ha continuado con la crisis política que nos acompaña hasta el presente. Durante este periodo, agudizado por la coyuntura de la pandemia de la COVID-19 y la muerte masiva de peruanos en las dos primeras olas, la presión obligó al gobierno a abrir sus datos para sincerar las cifras de excesos de muertes producidas entre los años 2020 y 2021. Resulta sintomático, y quizás único en el mundo, ver cómo el último esfuerzo de la biopolítica liberal progresista por construir un régimen gubernamental de justicia y reconciliación terminó por sepultarse a sí mismo tras la sombra de la corrupción y el engaño del *vacunagate*. Se constató, de este modo, el terrible error de haber priorizado por tantos años el crecimiento económico frente a una deleznable inversión en el sector público de salud y sanidad, aspectos poco relevantes para un régimen que priorizó los intereses privados empresariales antes que el bienestar de la población, y que, finalmente, quedó huérfano en las elecciones generales del 2021.

Esta constatación del desastre y la imposibilidad de mantener a la coalición liberal progresista fueron los factores que abrieron y profundizaron el escenario de la violencia extrema y del negacionismo, que se ha desencadenado como cascada contra una sociedad movilizada para defender el respeto a su derecho a la representación en las elecciones generales del 2021. Y es que esta coyuntura empezó con una disrupción electoral en primera vuelta: la victoria de Pedro Castillo Terrones y del partido Perú Libre, de filiación provinciana, que respaldó su candidatura. En el contexto de la segunda vuelta, la necropolítica apareció, como un discurso sobre el ejercicio soberano del derecho a matar por parte de los sectores privilegiados contra los subalternos, y se legitimó públicamente en la campaña electoral cuando uno de los candidatos perdedores de la primera vuelta, y que apoyó la candidatura de Keiko Fujimori en la segunda vuelta, llamó a la muerte de Castillo y de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. Posteriormente, la convergencia entre necropolítica y negacionismo se selló cuando la candidata Fujimori y todo el espectro

conservador de la derecha negaron la victoria de Castillo y se negaron a reconocer, incluso, el voto universal de la ciudadanía del interior del país que había respaldado masivamente a Castillo.

Pedro Castillo, un *outsider* de origen rural, sin vínculos con la República empresarial y líder de una de las huelgas magisteriales más impactantes de los últimos veinte años, gobernó sin una clara orientación política y programática en los siguientes 16 meses. La constatación de su inexperiencia y sus gruesos errores (convertidos en acusaciones fiscales) reforzaron la convicción entre las facciones perdedoras y opositoras al gobierno, —instaladas en el congreso y en diversas instituciones públicas que controlaban, junto con el apoyo de sectores empresariales, medios de comunicación, y sectores altos y medios concentrados en Lima—, de que solo el negacionismo de las violencias pasadas contra la mayoría del electorado que respaldó a Castillo, les daría la suficiente legitimidad para ejercerlas nuevamente contra los que se identificaban con un gobierno que no bajaba en su aceptación en un tercio del país. Frente a ello, la oposición derechista y conservadora entendía que la violencia para defender sus privilegios arrebatados en las urnas debía ser empleada como durante el Conflicto Armado Interno.

El acecho y la amenaza contra el gobierno de Castillo, devino en *lawfare* (persecución judicial) contra la primera experiencia de gobierno de izquierdista democrática en el país. La puja de la derecha tuvo frutos el 7 de diciembre del 2022 (con el suicidio de un poder Ejecutivo asediado y vacilante) en medio de una falsa réplica del autogolpe de Estado de 1992. Para la oposición congresal y mediática, vacadora, agresiva y racista, este hecho se convirtió en el elemento central para la cohesión del proyecto necropolítico más sangriento que se ha encaramado en el poder durante este siglo, usando para ello los mecanismos de una legalidad que hace agua en la opinión pública nacional e internacional.

El papel de los medios de comunicación, élites empresariales e intelectuales, partidos políticos y sectores de la sociedad que, usando el miedo contra el enemigo "comunista", el "inmigrante extranjero", el "votante rural", el "manifestante medioambiental", han naturalizado la liquidación

física como autodefensa ante la ausencia de un poder público carente de legitimidad; usan el miedo inoculado durante años en los intersticios de una sociedad que se resiste a reconocer lo fallido del régimen neoliberal. En esa tesitura, las fuerzas del orden y los medios de comunicación articulados en la República empresarial han entendido que para mantenerse en el poder deben tener una opinión pública atravesada por el temor a la reacción de la víctima subalternizada, apelando a discursos xenofóbicos, misóginos, antiétnicos y antipobres. Han dibujado las fronteras de un nuevo campo de concentración similar a lo que Achille Mbembe llama un régimen de plantación esclavista colonial o, a lo que nos es más familiar, un régimen andino de hacienda feudal.

Conclusiones

La imposición de estas tecnologías de gobierno (gubernamentalidad), que asesinan y permiten asesinar a ciudadanos sin consecuencias para sus responsables, impide instalar un régimen de verdad basado en las demandas mayoritarias del país y en derechos fundamentales, elementos básicos para cualquier democracia. En ese contexto, la construcción de un régimen de verdad puede ser afirmada en el discurso, pero limitada en la práctica (biopolítica), o limitada y silenciada en los discursos, pero contradicha o desmentida en la práctica con falsedades y mentiras (necropolítica).

La desarticulación entre el sistema político y las demandas de la sociedad ha permitido que los proyectos biopolítico y necropolítico actúen como tecnologías o dispositivos que pueden funcionar de modo oscilante entre una y otra postura, alternada relativamente bien en nombre de la supervivencia de quienes están dentro de las fronteras privilegiadas del orden que se quiere proteger. Así, a pesar de ser dispositivos de poder, que por definición son altamente inestables y fallidos, en el Perú han mostrado cierta persistencia entre uno y otro, bloqueando cualquier otro horizonte de construcción democrática del poder.

Las movilizaciones ciudadanas que se han opuesto ante este modo de operar de ambos dispositivos y que han sufrido sus consecuencias

letales, expresadas en masacres reiteradas e impunidad a la luz de la justicia administrada en el entorno de la República empresarial, son una muestra de su grado de complemento frente a las expresiones de la ciudadanía. Del mismo modo, el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, entidad no generada exclusivamente al interior del régimen de esta República empresarial, sería, por sus dificultades, problemas y conflictos con las autoridades y gobiernos de turno, otra expresión de una tecnología que no encaja plenamente en las maniobras de ambos dispositivos. De allí su continua precariedad que se ha visto reflejada en su clausura por un mes por el municipio distrital ante la indiferencia del gobierno central.

La precariedad de estos dispositivos y las posturas que representan pueden ser, sin embargo, cuestionadas y fisuradas con relativa eficacia, tanto en su trasfondo como en sus resultados desde la propia sociedad. Uno de esos momentos más notorios y emblemáticos fueron los resultados electorales del 2021, cuando las desconocidas candidaturas de Pedro Castillo y del partido Perú Libre, jugando con las reglas políticas y electorales de la democracia de la República empresarial, lograron alterar sus exclusividades para dirigir al país. Su sola presencia en la segunda vuelta cuestionó la posibilidad de reproducir el orden gubernamental establecido y, aunque en el fondo terminaron absorbidos, cooptados o seducidos por la dinámica del poder establecido, y sin efectuar trasformaciones, evidenciaron la precariedad de este. Confiarse, sin embargo, en las bondades de la debilidad de la República empresarial para proclamar que el cambio será automático con una nueva representación popular en ese entorno será repetir el ciclo de las opciones "alternativas" que por solo llegar a ser gobierno podrán hacer el cambio, dejando de lado la necesidad de construir horizontes alternativos de poder.

Sopesar la imposición de los dispositivos del biopoder y la necropolítica como posturas oscilantes de gubernamentalidad fallidas, que perpetúan regímenes de desigualdad y de violencia acompañados en última instancia de negaciones y mentiras, nos ayuda a entender mejor la crisis de la democracia actual y a enfrentar la construcción de regímenes de verdad, más acordes con las demandas más amplias y sentidas del país.

Deconstrucción del discurso de violencia durante las protestas en Perú: 2022-2023

Eli Malvaceda-Espinoza

La violencia y el discurso oficial

Las recientes movilizaciones políticas de gran magnitud en Perú tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, producto de una crisis política que se ha agudizado en los últimos años. Como resultado, más de medio centenar de personas murieron, muchas de ellas participantes de las manifestaciones[1]. Al respecto, el discurso oficial sostiene que el despliegue de la violencia es consecuencia de las manifestaciones y que la función del Estado fue defenderse de ataques indiscriminados, irracionales, promovidos por grupos violentistas, ilegales y aliados con el narcotráfico o con países vecinos con tendencia política de izquierda[2]. Ante este panorama, se plantea la pregunta acerca de cómo deconstruir, en términos psicosociales, el discurso de violencia contra las movilizaciones. En este ensayo, analizo la violencia en el contexto de las movilizaciones desde aspectos como la intencionalidad y la valoración de la violencia, así como los presupuestos de la violencia y los componentes del acto violento.

La violencia es un término polisémico que ha sido ampliamente discutido en ciencias sociales y psicología. Por lo pronto, parece no exis-

---

1 Defensoría del Pueblo. 2023. "Defensoría del Pueblo registró 219 conflictos sociales y más de mil acciones colectivas de protesta durante el mes de enero 2023": https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-registro-219-conflictos-sociales-y-mas-de-mil-acciones-colectivas-de-protesta-durante-el-mes-de-enero-2023/#:~:text=de enero 2023.

2 Diario Oficial El Peruano. 2023a. "Alberto Otárola ante marchas en Lima: se va a garantizar el orden en la capital": http://www.elperuano.pe/noticia/202243-alberto-otarola-ante-marchas-en-lima-se-va-a-garantizar-el-orden-en-la-capital; Diario Oficial *El Peruano*. 2023b. "Alberto Otárola sobre Evo Morales: 'No volverá a entrar más al país.'": https://elperuano.pe/noticia/201802-alberto-otarola-sobre-evo-morales-no-volvera-a-entrar-mas-al-pais.

tir los esfuerzos por lograr un consenso en las diferentes disciplinas. Por ello, en este ensayo, abordaré la violencia desde un marco que permita integrar lo psicológico y social para un mejor entendimiento. Al 2019, un 2 % de las muertes en el mundo fueron resultado de la violencia colectiva y las intervenciones legales[3]. Es justamente en este último acápite donde se encuentra la violencia producto de la represión en las movilizaciones políticas.

A continuación, pasaré a disgregar tres puntos de interés: a) intencionalidad y valoración de la violencia; b) presupuestos de la violencia; c) componentes del acto violento. Todo ello, enmarcado en el contexto de las movilizaciones políticas en el Perú.

Intencionalidad y valoración de la violencia

La violencia puede ser entendida como la cualidad de violento, y esto último es aquello que está fuera de su natural estado, situación o modo, que obra con ímpetu o fuerza; por su parte, la agresión se puede entender como el acto de acometer contra otro ser vivo, para hacerle daño[4]. Es decir, la agresión comprende el componente intencional, el cual no necesariamente se encuentra en la violencia. Es importante realizar dicha diferenciación entre ambos términos debido a que, habitualmente, se estigmatiza la violencia y no la agresión. Si bien puede resultar ambiguo conocer la intencionalidad, ello puede ser esclarecido tras el análisis de las consecuencias del acto, si este favorece o no, directa o indirectamente, a la persona que lo ejecutó, lo cual hace que sea o no una agresión.

Si bien las manifestaciones políticas en el Perú fueron violentas, la intencionalidad de dichos actos no buscó hacerle daño a una persona en concreto; al contrario, se realizó una respuesta violenta dirigida contra las estructuras sociales que han mantenido empobrecidas a muchas comunidades y que buscan gobernar sin la legitimidad de una democracia

---

3 World Health Organization. 2022. *Preventing Injuries and Violence: An Overview*. World Health Organization.

4 Martín-Baró, Ignacio. 2003. *Poder Ideología y Violencia. España*. Madrid: Trotta.

representativa. En tal sentido, se podría hablar de manifestaciones violentas, mas no agresivas. Una característica esencial de dicha violencia es que busca cambiar o transformar una situación de violencia estructural normalizada en el Perú. Los actos puntuales de violencia, como la toma de carreteras, aeropuertos, vandalizar monumentos y otros, son solo la expresión más externa y exteriorizada de dicha violencia, que como se indicó, no buscó causar daño a personas en específico, sino que buscó ser un llamado de atención dirigido hacia la sociedad peruana.

Toda violencia recibe una valoración social, así hay quienes están en contra de un gobierno impuesto por la fuerza en el Perú, y están de acuerdo con las protestas pacíficas, mientras desdeñan a las otras acciones violentas que se dan en este terreno. De ahí que, resulta importante conocer la valoración social que se le otorga a cada acto de violencia, pues, mientras se justifican ciertas acciones, hay otras que no. En este punto, se puede hacer referencia a los imaginarios o representaciones sociales que se forman frente a las movilizaciones políticas. Estas son estructuras de pensamiento que se forman a partir de nuestra interacción simbólica con el medio. Así, el sentido común indica que se ha de estar en contra de todo acto violento, aún si ello implica justificar una situación de violencia estructural. Tal situación de valoración y justificación de la violencia conlleva a una postura romántica: se está en contra de la imposición de un gobierno, a favor de las movilizaciones políticas, pero en contra de las expresiones violentas de esta, olvidando que la movilización política es en esencia, violenta.

Presupuestos de la violencia

La violencia se presenta en *diferentes formas y naturalezas*. Así, las movilizaciones políticas en el Perú se han presentado en diferentes formas como los interpersonales y colectivo-estructurales o en sus naturalezas física, psicológica, sexual o por negligencia, abandono u omisión[5]. Esto nos conduce a entender que no se puede hacer referencia a un solo

5 Organización Mundial de la Salud. 2003. *Informe Mundial Sobre La Violencia y La Salud*. Organización Mundial de la Salud.

acto de violencia. Por ejemplo, cuando las tanquetas de los policías rompieron una de las paredes de una de las universidades emblemáticas de Perú, se pudo apreciar un acto de violencia colectivo-estructural y en el subtipo de la violencia política, la cual fue ejercida por el gobierno peruano, a través de su brazo represivo, la Policía Nacional del Perú. Esta violencia se expresó de manera física (ruptura de una pared de la universidad y el derribamiento de una puerta principal), psicológica (a través de mensajes emitidos por los policías contra los manifestantes), sexual (a través de las vejaciones sexuales cometidas contra los/as manifestantes) y por abandono u omisión (como el suprimir los alimentos como parte del proceso de tortura a los detenidos, entre otros).

Ahora bien, la naturaleza histórica del ser humano se encuentra abierta hacia potencialidades de todo tipo; cualquiera puede ejercer un acto de violencia o de agresión[6]. El que lo haga o no, quedará determinado por las condiciones histórico-sociales en las que se desarrolle. En tal sentido, resulta pertinente realizar esfuerzos para entender el *carácter histórico de la violencia*, sin ello es imposible entender la violencia fuera del contexto y el tiempo en los cuales se produce. De ahí que buscar entender la violencia de los manifestantes solo examinando uno u otro acto de violencia, resulta engañoso. Entonces, resultan importantes sus antecedentes, predisponentes y desencadenantes.

La violencia de las movilizaciones políticas que se analizan en el presente tuvo sus antecedentes muchos años antes en los cuales, diversos gobiernos de turno fueron vulnerando los derechos de una gran mayoría de peruanos y peruanas. Posteriormente, tras la victoria del expresidente Castillo, se sucedieron diversos mecanismos que buscaron desconocerlo y afectar su mandato. Todo ello, desencadenó en un golpe de estado fallido el 7 de diciembre de 2022.

El carácter histórico, remite a otra característica de la violencia: *la incertidumbre de sus límites*. Esto significa que, las movilizaciones políticas y la violencia generada ante esta, conllevan a efectos en las personas que la reciben o en los espectadores, ya sea para efectuar una violencia

---

6 Fromm, Erich. 2022. *Anatomía de La Destructividad Humana*. Siglo XXI.

directa o indirecta, inmediata o mediata, de manera explícita o tácita. Ello es imposible de predecir.

Componentes del acto violento

Luego de haber analizado brevemente la intencionalidad y los presupuestos de la violencia, resulta importante referirse a los componentes del acto violento, tales como: la estructura formal del acto, la forma personal del mismo, el contexto posibilitador y el fondo ideológico.[7]

La *estructura formal del acto* hace referencia a la modalidad en la cual el acto es realizado, vale decir, su operacionalización. Los actos de violencia pueden ser ejecutados desde distintas modalidades y con una misma finalidad. Solo tras el análisis de dicha finalidad (y no del mero acto), se podrá conocer si fue un acto de violencia o de agresión. Este proceso también permitirá entender si se trata de una *violencia final* (el acto de violencia buscado como un fin) o *instrumental* (el acto realizado como un medio, para lograr un fin alterno).

Llegado a este punto, resulta importante diferenciar entre la violencia de las movilizaciones políticas y la ejercida con el fin de reprimirla. Las movilizaciones políticas forman parte de una violencia instrumental en sí misma, ya que buscan producir un cambio político. En cambio, la violencia represiva ejecutada por policías y militares es una violencia final, puesto que busca ejecutar la violencia como un fin: aplacar a los manifestantes. Este tipo de violencia no le es útil, en términos directos, a quienes la ejecutan, sino como instrumento; como violencia instrumental por parte de un sector de la sociedad.

La *forma personal del acto* es la marca o el sello personal de quienes lo ejecutan. En ese sentido, no todas las violencias se pueden analizar del mismo modo, ni todas pueden tener la misma valoración, pues, la forma concreta de ejecución es distinta. Así, mientras existieron policías y militares que dispararon al cuerpo de los manifestantes, hubo quienes se abstuvieron. Del otro lado, así como existieron manifestantes que

7 Martín-Baró. 2003. Ob.Cit.

solo marcharon como acto de protesta, hubo quienes realizaron actos vandálicos en la misma.

Otro de los componentes del acto violento se encuentra constituido por el *contexto posibilitador*, tanto mediato como inmediato. En relación con el primero, la violencia presenta un carácter multidimensional e integrado, desde el *nivel individual* (atendiendo a sus factores del neurodesarrollo y de historia personal), *relacional* (escuela, familia y/o trabajo, en donde resulta importante estudiar la formación, estimulación y la presión grupal frente al ejercicio de actos violentos), *comunitario* (a partir de las redes de relaciones que se constituyen entre los grupos señalados previamente), *social* (donde se estudian los factores estructurales que permiten ejercer o no la violencia), e *histórico* (motivaciones históricas para ejercer actos de violencia)[8].

En cada uno de estos niveles, se pueden dar condiciones que pueden aumentar o reducir el riesgo de ser víctima o perpetrador de actos de violencia. Un aspecto de importancia, a relevar en el contexto social, es la *institucionalización de la violencia*. Esta implica su normalización en una sociedad, esto es, hacer de la violencia algo cotidiano, normal, lo que puede llevar a su justificación, pero condenando a su vez, a quienes se opongan a esta. Cabe mencionar que no existen predisposiciones o tendencias inmutables en ninguno de los niveles señalados, sino que poseen características potencialmente modificables.

Por último, tenemos el *fondo ideológico*. Como componente del acto violento, remite al contexto ideológico en el cual se ejecuta el acto. Es este contexto que permitirá que ciertos actos puedan ser justificables y otros no. En este punto resulta imprescindible apelar a los principios de reflexividad y posicionamiento del investigador cuando analiza la violencia.

Continuando con lo anterior, abordaré cuatro elementos que permiten entender el fondo ideológico del análisis. En primer lugar, al *imaginario en torno al agente de la acción*. Aquí se valora de modo distinto la violencia ejercida por quien se concibe como parte del aparato represivo

8 Bronfenbrenner, Urie. 1987. *La Ecología Del Desarrollo Humano*. Barcelona: Paidós.

del Estado, frente a aquella violencia ejercida por quienes se conciben como los sectores marginados y excluidos históricamente en el país.

En conexión con lo anterior, también se evalúa el *imaginario social en torno a la víctima*. Como en el caso anterior, no todas las víctimas son evaluadas del mismo modo. Esto genera una disparidad de abordajes frente a los sectores violentados, tratándolos como necesitados, vulnerables, víctimas u otros. Esta evaluación asimétrica del poder muchas veces queda implícita en el sentido común que se presenta para evaluar los actos de violencia. En tal sentido, la relación asimétrica de poder permite justificar, bajo determinadas condiciones, los actos de unos y no de otros.

Un tercer elemento de interés comprende a la valoración de la *violencia entendida como un acto de defensa o* agresión. Si la violencia es percibida como un acto de violencia irracional, recibirá una valoración social negativa, lo cual resultará injustificable para quien la percibe; sin embargo, si la violencia es percibida como defensa frente a un ataque, esta recibirá una valoración social positiva, que puede terminar justificándola. Ahora bien, resulta importante señalar que dichas valoraciones no dependen del acto en sí, sino del discurso que proviene del marco valorativo en el cual se dé el acto de violencia. Así, en el contexto de las movilizaciones políticas en el Perú, el gobierno peruano, y buena parte de la prensa concentrada, justificaron los asesinatos de manifestantes aduciendo que los policías y militares actuaron en defensa propia frente a la violencia de los manifestantes.

Finalmente, tenemos la valoración del grado de daño producido. Mientras mayor sea el grado de daño producido a la víctima, el acto ha de presentarse con mayor justificación. Por ende, se requiere de un discurso que maximice la responsabilidad de la/s víctima/s en la propia violencia y que minimice, a su vez, el accionar del violentador. Este aspecto pudo observarse en los casos de violencia extrema que se vivieron en las movilizaciones políticas en el Perú, donde se remaximizó la culpa de las personas violentadas y minimizó el accionar de la Policía y el

Ejército, aduciendo que se trataron de conductas individuales y casos aislados.

Conclusiones preliminares

Como se ha podido apreciar, el análisis psicosocial de la violencia implica diversas aristas y mucha rigurosidad en su trato. No se puede hablar de objetividad o neutralidad en el análisis de la violencia; más bien, resultan pertinentes los conceptos de rigurosidad y transparencia en el análisis.

Con respecto a la *intencionalidad y la valoración de la violencia*, cabe mencionar que no todo acto violento es agresivo; sin embargo, todo acto de agresión es violento. Bajo este parámetro, se puede valorar la violencia de las movilizaciones políticas acaecidas en Perú, donde, si bien se ejerció una naturaleza violenta en las movilizaciones, estas no tuvieron la intencionalidad de dañar a nadie en particular. Al contrario, buscaron hacer frente a una violencia mayor, impuesta por el gobierno de turno.

Existen diversos *presupuestos para entender la violencia*. Por un lado, la violencia se presenta de diferentes formas y naturalezas; por otro lado, es pertinente entender el carácter histórico de la violencia, así como la incertidumbre de sus límites. Asimismo, resulta importante conocer los *componentes del acto violento*, tanto desde la estructura formal del acto, la forma personal en la que este es realizado, el contexto posibilitador y el fondo ideológico.

Colofón

El deterioro profundo del Perú[1]

Victor Vich

La crisis que vive el Perú no es solo una crisis política. Es algo mucho más hondo que eso. Es mucho más grave de cómo suelen interpretarla algunos analistas entrampados en la inmediatez. Se trata de una crisis cultural que refiere al deterioro de los vínculos entre los peruanos y a la pérdida de todo sentido de la vida colectiva. Es absurdo terminar personalizando la profunda degradación social que vivimos. El vergonzoso gobierno del presidente Castillo fue solo una nueva expresión de un gravísimo deterioro que hubiera terminado expresándose de otra manera bajo el gobierno de Keiko, si ella hubiera ganado la presidencia. Esta es una aguda crisis cultural.

La teoría crítica nos ha enseñado que es estudiando la particularidad del presente que podemos entender mejor las consecuencias de los hechos del pasado. Las celebradas reformas de los años noventa han tenido un lado muy oscuro. Hoy vivimos en una guerra de todos contra todos que se encuentra encarnada en un modelo económico abyectamente desregularizado, que ha perdido toda noción del bien común. No es solo la esfera política la que se encuentra degradada sino también una sociedad civil donde se ha impuesto el engaño y la pura defensa del interés individual.

La corrupción se ha agudizado metastásicamente y se ha instalado en los niveles mínimos de la vida colectiva. No solo la vemos en la clase política, en algunos de los más respetados estudios de abogados, en grandes grupos empresariales, sino también en la bodega del barrio, "en

1 Este artículo fue escrito en enero de 2022. Si bien es una opinión particular y anterior al estallido, hace un resumen del estado de descomposición en la política peruana. Por eso se coloca como epílogo de este libro.

el vaso, en la carnicería, en la aritmética", al decir de César Vallejo. Hoy vivimos en una sociedad, en una cultura, que ha hecho del engaño la forma de vincularse.

Durante dos décadas nos dijeron que la economía peruana era un modelo de eficiencia en la región. La condición de esa supuesta virtud fue la exacerbación de un discurso individualista que, sin duda, ha sido funcional a la corrupción. Sin embargo, a pesar de ese crecimiento económico sostenido, al comenzar la pandemia habían menos de 300 camas UCI en un país de más de 30 millones de personas.

De hecho, radicalizada desde los noventa, la privatización de la salud ha generado, entre otras cosas, que buena parte de los médicos del sector público hoy se encuentren muy ansiosos por cumplir su mínima jornada laboral a fin de dirigirse a sus consultorios privados. Desde ahí derivan los exámenes clínicos a laboratorios de los que son dueños o con los que tienen contratos. Durante los peores momentos de la pandemia, las clínicas privadas se negaron a solidaridades mínimas y el negocio del oxígeno fue el signo más contundente del bajísimo sentido de lo humano al que hemos llegado.

Fue también desde los noventa que el sector educativo agudizó su crisis (y actual degradación) con la proliferación de colegios y universidades de bajísimo nivel, pero con grupos económicos que funcionan como su "mano invisible". También privatizado en esa misma década, el transporte en el Perú se ha convertido en una red de mafias organizadas y es, probablemente, el peor (y el más inseguro) de la región. Nadie puede con él. Por si fuera poco, en un país donde más del 75 % de la población trabaja informalmente, los economistas oficiales no proponen nuevas recetas que contribuyan a ampliar derechos y trabajos dignos sino –dogma aprendido–insisten en precarizar más las condiciones de trabajo de los formales. La argumentación es demencial: quienes proponen sueldos y trabajos justos son llamados "destructores" y quienes, de manera aséptica, justifican la explotación laboral (pero ganan enormes sueldos) se llaman a sí mismos "sensatos" y "técnicos".

La ciudadanía votó por un cambio y por eso ganó Pedro Castillo, un maestro rural que, al menos por su sombrero, emergió como una figura que canalizaba, para bien, la posibilidad de comenzar a restaurar una vieja deuda histórica. Con muchas dudas, y sin ningún interés de lavarme las manos, yo voté por él en segunda vuelta. Hoy, sin duda, todos comprobamos que Castillo concentra, en sí mismo, toda la crisis del país: la crisis de la política, la crisis educativa, la crisis del sindicalismo, la crisis de la cultura que tenemos.

El hecho de que Castillo tenga un grado de magister no asombra dado el bajísimo nivel de la mayoría de las universidades privadas. De manera pasmosa, Castillo es un sindicalista que no tiene la menor idea de la gramática del Estado y, además, es un profesor de primaria incapaz de poder contar bien un cuento. En siete meses de gobierno, los escándalos de corrupción han sido la pauta de su gestión. Es cierto que la derecha le ha hecho una guerra imposible, pero ello no puede ser excusa para una mediocridad tan atroz y para que se haya rodeado de mafias tan galopantes.

Lo cierto es que en las últimas elecciones volvimos a confrontarnos con un país que no ha conseguido superar sus herencias coloniales y su racismo estructural. Un estudio del IEP, titulado *¿De qué colegio eres?*, demuestra los privilegios del 1 % de la población del país y demuestra, además, un modelo sin respuestas a ello. Pero esta crisis del vínculo social no se estanca en el paradigma de clase, sino que se expande hacia muchas otras variables. El Perú, como se sabe, es uno de los países con más alto nivel de violencia doméstica. Las denuncias de agresión y maltrato (y demás) siguen a la orden del día. En ese contexto, el club de fútbol Universitario de Deportes se enorgullece hoy de contratar a un jugador (al parecer impresentable) cuya abogada acaba de renunciar a defenderlo. Este hecho no es aislado y juega a la par con un gobierno que solo ha nombrado gabinetes descaradamente misóginos y homofóbicos.

Por si fuera poco, el Perú es, además, uno de los lugares del planeta donde más se depreda el territorio y donde se sigue contaminando el mar; un país extractivista donde constantemente se asesina a líderes medioam-

bientales, como a Mario López Huanca, cuya noticia —vergonzosamente— no generó el escándalo que merecía en unos medios de comunicación siempre racializados y en una clase política únicamente concentrada en su deglución caníbal.

De hecho, en este país, la mayoría de los que se llaman "liberales" no tienen problemas en trabajar para monopolios ni para aliarse con los sectores más reaccionarios (y corruptos) del escenario político. Como dijo alguien, aquí hasta el neoliberalismo se practica "a la peruana" y, a pesar de tener cuello y corbata, resultan siendo tan informales ante sus principios como los comerciantes de Mesa Redonda.

Hoy los ministros de Economía de los gobiernos pasados —nunca funcionarios públicos de carrera, sino profesionales que luego pasan a defender intereses privados sin ningún problema— desfilan como grandes autoridades académicas por unos medios de comunicación que han perdido todo decoro (pero que están segurísimos de no haberlo perdido). Luego de más de 250,000 muertos por la pandemia, en el Perú nadie se siente responsable y los discursos de estos economistas insisten en querer volver al pasado.

La "Republica empresarial" —como hoy muchos historiadores ya llaman a esta época— destaca por su permanente falta de autocrítica. Con solemnidad, uno de estos exministros afirma que hoy está ocurriendo un "saqueo del Estado" y, sin duda, está en lo cierto, pero lo mismo podría haber dicho sobre lo que ocurrió en los noventa y, más aún, sobre lo que buena parte de los grandes grupos económicos del país han hecho en las últimas décadas.

Son muy pocos los que entienden la crisis como un problema de fondo y son inexistentes las iniciativas que plantean verdaderas políticas públicas para afrontarla. ¿Solo un Dios podrá salvarnos? Todo induce a pensar que se necesitarán varias décadas de diálisis profunda para reposicionar el valor de lo público y de lo común, en el Perú, como un centro de la vida colectiva. Mientras tanto, resulta claro que seguimos viviendo en una sociedad llena de mistificaciones y fantasmagorías que se rego-

dea con algunos índices económicos (que siempre son debatibles) pero que desprecia la historia, el pensamiento, el arte, la duda.

Como los describió el gran Goethe, estos son tiempos "palabreros y mudos" a la vez. Hoy, con gran cinismo, la barbarie acecha en el Perú desde todas las ideologías, desde todos los partidos, desde todas las clases sociales y en todos los barrios. Como sociedad, hemos perdido toda idea del bien. Como cultura, hemos perdido toda idea sobre qué es lo justo. La diálisis que necesitamos tendría que incluir un paquete de verdaderas políticas culturales entendidas como un dispositivo destinado a construir un nuevo imaginario colectivo y nuevas prácticas ciudadanas. En el Perú, nadie, sin embargo, las entiende como indispensables

Sobre los autores

Héctor Béjar Rivera

Sociólogo, artista y abogado. Profesor extraordinario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Participó en el movimiento guerrillero como parte del Ejército de Liberación Nacional junto con Javier Heraud en 1965. Fue apresado y encarcelado en la isla El Frontón y amnistiado cinco años después, en diciembre de 1970 durante el gobierno de Velasco Alvarado. De sus años de guerrillero da cuenta su libro *Perú 1965: Notas de una experiencia guerrillera* con el que se hizo acreedor del Premio Casa de Las Américas en 1969. Tras salir de prisión, colaboró con el gobierno de Velasco. De esa experiencia dan cuenta dos libros: *La Revolución en la Trampa* (1976) y *Velasco* (2020). Su aporte más ambicioso, sin embargo, es *Vieja crónica y mal gobierno: Historia del Perú para descontentos* (2019). Fue uno de los fundadores de la revista de ciencias sociales *Socialismo y Participación* de la cual fue director después de Carlos Franco. Durante el reciente gobierno de Pedro Castillo fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores.

Tatiana Béjar

Socióloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Justicia Criminal en John Jay College de la Ciudad de Nueva York. Actualmente se desempeña como directora de Programas Locales de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar en Estados Unidos. Contribuye con sectores sin fines de lucro y de desarrollo en Perú y los Estados Unidos que incluyen UNICEF y la Red Internacional de Network on Economic, Derechos Sociales y Culturales. Reside en EE. UU. desde el 2001 en donde, por más de quince años, viene trabajando como organizadora por los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales de mujeres racializadas y trabajadores inmigrantes, liderando y ganando campañas laborales para trabajadores de restaurantes y la industria del cuidado. Coordina grupos de peruanos y peruanas que viven en el exterior por varios años con el objetivo de apoyar demandas populares en el Perú desde el exterior.

Emil Beraun

Historiador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con la tesis *Los costos de fe. Un análisis del discurso represivo religioso en el Perú (1532-1585)* y magíster en filosofía con mención en epistemología. Su tesis de maestría *La relación epistemológica entre la historia y la filosofía* recibió una la calificación de excelencia. Es candidato a doctor en filosofía por la misma universidad. Es especialista en historia contemporánea, filosofía de la historia y filosofía política. Conferencista a nivel nacional e internacional, en países como China, Estados Unidos, España, México, Argentina, Colombia, etc. Es catedrático en universidades públicas y privadas del Perú y también en Estados Unidos. También se desempeña como consultor y estratega político. Estudió diferentes cursos de especialización sobre marketing político, lenguaje no verbal y sobre estrategias políticas en universidades de España y EE. UU. como la Universidad de Harvard y George Washington.

Arturo Delgado Galimberti

Escritor y periodista, egresado de Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado las novelas *La Ruptura* (Artesanos Editores, 1994), *Los Espejos del Infierno* (Editorial San Marcos, 2000) y *Karma instantáneo para John Lennon* (Mesa Redonda, 2012), así como los textos de política-ficción "El Foro", en el libro *Discursos contra la Bestia Tricéfala* (Hipocampo Editores, 2009) y "Política y ficción de un encierro entre dos mundos" en el libro *Propaganda antisistema* (Mesa Redonda, 2022), junto con Rodolfo Ybarra. En los años noventa condujo el programa radial de rock y cultura "Viaje al fondo de la noche" en *Radiored*. Ha publicado entrevistas y reseñas de crítica literaria y rock en la página cultural de diversos medios de prensa, como los diarios *El Sol*, *Cambio*, *Liberación* y *Expreso*, las revistas *Vea* y *Alter Ego*, entre otros medios.

Yizza Delgado Devita

Doctora en Educación por la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt e investigadora en humanidades y ciencias sociales. Docente universitaria de pre y posgrado. Ha participado en diversas actividades culturales y académicas. Es especialista en metodología de investigación cualitativa. Fue galardonada con el Premio de Ensayo Académico por el Instituto de Defensa Legal-Perú, Unión Europea y la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) de Alemania. Estudió un posdoctorado en Filosofía e Investigación y un diplomado en Gestión de la Diversidad y Derechos Humanos. Es columnista de la revista *Ideele* en donde ha escrito principalmente sobre migración, género y DDHH. Trabaja

en la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en el doctorado en educación de la Universidad San Ignacio de Loyola.

Juan Fonseca

Magister en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). También ha realizado estudios en la Maestría de Estudios Culturales en la misma universidad. Profesor de Humanidades en la Universidad del Pacífico (UP) y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Fue Editor ejecutivo de Ciencias Sociales en el Grupo Santillana y estuvo a cargo de la coordinación general del Congreso Nacional de Historia Bicentenario organizado por el Ministerio de Cultura del Perú. Ha investigado extensamente sobre la historia de las religiones en el Perú, así como sobre otros temas de historia social y cultural. Entre sus publicaciones sobresale *Misioneros y Civilizadores. Protestantismo y Modernización en el Perú. 1915-1930* (2002). Asimismo, ha publicado más de veinte artículos en diversas compilaciones y revistas académicas. Además, cuenta con una extensa experiencia en el campo editorial, como columnista y comentarista en medios periodísticos, así como consultor en diversas instituciones religiosas y culturales.

Jorge Frisancho

Jorge Frisancho, escritor independiente, nació en Barcelona, España, en 1967. Estudió letras en la Pontificia Universidad Católica del Perú, literatura hispanoamericana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y filosofía en The City University of New York, sin graduarse jamás. Entre otras ocupaciones periodísticas, fue redactor del suplemento "Domingo" del diario *La República*, jefe de edición del diario *Página Libre*, editor de la revista *Poder* y editor general del portal noticioso *LaMula.pe*. Trabaja como traductor y editor freelance, y sus columnas y artículos de opinión aparecen regularmente en el portal *NoticiasSER* la revista *Ideele* y el boletín de poesía y crítica *Pesapalabra*, entre otros medios peruanos. Desde 1987 ha publicado cinco libros de poesía; el más reciente es *La pérdida (y otros poemas)*, de 2014. Vive en Lima.

Ricardo Licla Meza

Licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Magister en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Autor de libros como la *Lógica proposicional* (2014); *El salazarianismo y sus demonios* (2017); *Intertextos filosóficos: una invitación filosófica* (2020) y de diversos artículos en re-

vistas y libros de especialidad. Miembro de la Sociedad Peruana de Filosofía (SPF) y del "Grupo de Investigación sobre la Actualidad del Pensamiento de Hegel" de la Pontifica Universidad Católica del Perú (Grupo Hegel PUCP). Secretario Académico de la Revista de Política y Humanidades: *Caos y Polis* (periodo, 2020). Actualmente, se desempeña como docente universitario, investigador en el Grupo Hegel y asesor político.

Sinesio López Jiménez

Profesor Principal en la Universidad Católica del Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en donde estudió sociología. Es investigador y analista político. Sus artículos de opinión se publican en el diario *La República*. Sociólogo con estudios completos de doctorado en la Universidad de París, bajo la dirección de Alain Touraine. Consultor de Organismos Nacionales e Internacionales como el PNUD, BID, UNICEF, etc. Autor y coautor de varios libros sobre Estado, sociedad y política en el Perú y en América Latina como *El dios mortal: Estado, sociedad y política en el Perú del siglo XX* (1991); *Ciudadanos reales e imaginarios. concepciones, desarrollo y mapas de la ciudadanía en el Perú* (1999); *Los tiempos de la política, 1982-1984* (2007). *Alan García. Los años del perro del hortelano, 2006-2011* (2011); *Historia de las elecciones en el Perú. Estudios sobre el gobierno representativo* (2019), este último en coautoría con Cristóbal Aljovín.

Eli Malvaceda Espinoza

Psicólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), doctor en Psicología por la Universidad de Oviedo y doctorando en Ciencias Sociales (UNMSM). Hizo una estancia doctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y se graduó como magíster en psicología comunitaria por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). También cuenta con estudios de maestría en Políticas Sociales y Gestión de Proyectos Sociales. Es presidente de la Asociación Peruana de Investigación cualitativa y ha sido fundador y coordinador de Diplomados de Investigación Cualitativa en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM). Actualmente, es docente universitario, especialista en investigación cualitativa; asesor de investigaciones cualitativas a nivel de grado, maestría y doctorado, tanto en el Perú como en el extranjero. Tiene el reconocimiento de investigador RENACYT y Professional Trainer Senior de ATLAS.ti. Expositor y tallerista a nivel nacional e internacional, en temas relacionados con investigación cualitativa, aspectos básicos y procedimentales, así como en análisis cualitativo de información.

José Manuel Mejía Villena

Estudió ciencia política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en donde cofundó la *Revista Andina de Estudios Políticos* y el Instituto de Estudios Políticos Andinos. Es magíster en sociología política por FLACSO-Ecuador gracias a una beca para estudiantes internacionales. Su primera tesis de maestría presentó una teoría sobre el desarrollo del proceso de escalamiento del conflicto antiminero en Cajamarca a partir del rastreo de los mecanismos sociales presentes en la campaña por la defensa del agua del cerro Quilish. En el 2019, recibió una segunda beca internacional para estudiar en el programa de maestría de estudios latinoamericanos de la UASB-Ecuador. Su segunda tesis de maestría, próxima a publicarse, introduce las categorías imperialismo minero y campesinado en su análisis de las luchas antimineras en Cajamarca, abriendo paso a la integración del marxismo y la sociología política histórica. Se prepara para iniciar el doctorado en el departamento de sociología en la Universidad de California-Santa Bárbara, EE. UU.

Mario Miguel Meza Bazan

Historiador y magister en Antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), doctor en Historia por el Colegio de México con una tesis sobre *El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y las fuentes de la revolución en América Latina* (México, 2012) reconocida con mención honorífica, categoría tesis doctoral por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC – UNAM, 2014). Docente en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y en la UNMSM. Entre sus publicaciones están *Justicia y poder en tiempos de violencia: Orden, seguridad y autoridad en el Perú, 1970-2000* (PUCP, 2013). Coautor con Víctor Condori de *Historia mínima de Arequipa. Desde los primeros pobladores hasta el presente* (IEP, 2018). Participó en el proyecto de publicación *Narradores de Memorias* del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM). Actualmente es coordinador de la Maestría de Historia de la UNMSM.

Gustavo Montoya

Historiador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido director del Archivo Histórico y docente en la Facultad de Ciencias Sociales en la misma universidad. Trabajó como investigador en el Seminario de Historia Rural Andina, bajo la dirección de Pablo Macera y con Alberto Flores Galindo. Ha publicado artículos y ensayos en diferentes revistas del Perú y el extranjero. Es autor de

Narrativas históricas en conflicto. La independencia del Perú 1808-1823 (2000), *La independencia del Perú y el fantasma de la revolución* (2002), *La tradición republicana en Huánuco. Diálogos de historia y política* (2018), *La independencia en Tarma 1820. Primer gobierno patriota* (2020), *La independencia controlada. Guerra, gobierno y revolución en los Andes* (2019), *Petronila Abeleyra Sotelo. Patriota tarmeña, fundadora de la república* (2021), escrito en coautoría con Yizza Delgado Devita. Su más reciente libro, *Patrias andinas, patrias citadinas. Episodios de una república naciente* (2022), escrito en coautoría con Carmen Mac Evoy, fue publicado por la editorial Planeta.

Juan Diego Motta Villegas

Abogado y político, dirigente de la organización Izquierda Socialista. Colaborador de diversas publicaciones nacionales e internacionales. Se ha dedicado a la defensa de los trabajadores y la difusión del socialismo. Obtuvo el título de abogado mediante sustentación de la tesis "Norma, ideología y realidad: el origen de la libertad sindical en el Perú", aprobada con el más alto grado: mención sobresaliente. Ha sido dirigente de diversas organizaciones sociales en su distrito Carabayllo, Lima. Se ha desempeñado en el sector público, donde impulsó las normas laborales más importantes de los últimos años: el DS 001-2022-TR, que coloca límites a la tercerización laboral en defensa de los trabajadores y el DS 014-2022-TR que garantiza el ejercicio efectivo a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga. Se ha desempeñado como profesor universitario, asesor de organizaciones sindicales a nivel nacional e internacional, y consultor de la OIT.

Luis Nieto Degregori

Licenciado en Literatura y Lingüística por la Universidad de la Amistad de los Pueblos de Moscú. Es escritor, autor de libros de cuentos y novelas, así como de ensayos. Ha publicado los libros de cuentos *Harta cerveza y harta bala* (1987), *La joven que subió al cielo* (1988), *Como cuando estábamos vivos* (1989) y *Señores destos reynos* (1994), así como las novelas *Cuzco después del amor* (2003), *Asesinato en la gran ciudad del Cuzco* (2007) y *Muchas veces dudé* (2022). Su novela corta *El guachimán* (2008) ha sido llevada al cine. Es autor además de cuentos para niños. En coautoría con Inés Fernández Baca, ha escrito *Nosotros los cusqueños. Visión de progreso del poblador urbano del Cusco* (1997). En revistas académicas de Perú y otros países ha publicado ensayos sobre la literatura peruana y sobre la relación de esta con los procesos de cambio social que vive el país.

Víctor Alfonso Otoya Jiménez

Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la misma universidad. Especialista en Técnicas para la interpretación y motivación de las decisiones judiciales por la Universidad de Génova (Italia) y la Universidad de Girona (España). Ha llevado estudios en materia de Metodología de la Comparación Jurídica por la Universidad de Bolonia (Italia) y ha sido Becario por la Universidad de Leipzig (Alemania). Se ha desempeñado como asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional del Perú, en el Congreso de la República del Perú. Es autor de diversos artículos especializados en materia constitucional. Ha sido dirigente estudiantil en el Centro Federado (2010 y 2011) y en el Tercio Estudiantil (2013) de la Facultad de Derecho y Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Steven Palacios Amorín

Licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Magister en Política Comparada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso, Ecuador) donde se graduó en el 2021 con la tesis titulada *¿Qué factores políticos determinan el uso del perdón presidencial? Análisis del indulto en Perú (1994-2018)*. Sus intereses académicos giran en torno a las instituciones políticas, metodología de la investigación y el análisis de los poderes presidenciales, con énfasis en el indulto presidencial. Actualmente cursa el doctorado en condición de becario CONACYT en el programa doctoral de Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso, México).

Homero Quiroz Cabañas

Magíster en sociología política y licenciado en historia. Nació y creció en la comunidad campesina de Séngache. Es migrante de primera generación. Se licenció en historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) con la tesis "La razón ensombrecida: ilustración y reformismo en el *Mercurio Peruano* 1790-1795" y como magister en sociología política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) con la tesis "Combates por la memoria en el Perú de posguerra. 'El mausoleo terrorista' y la vida política de los cadáveres". Sus estudios de postgrado en FLACSO fueron costeados por una beca de excelencia académica. Actualmente, se desempeña como profesor asistente en la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC) y como gestor social en el sector público. También fue

profesor contratado en la Escuela Nacional Superior de Folklore "José María Arguedas" y en la UNMSM. Es cofundador de la *Editorial Estallido*.

Silvio Rendón

Licenciado en economía por la Universidad Católica del Perú (PUCP) y PhD por la Universidad de Nueva York. Especialidad en economía laboral y econometría aplicada. Tiene contribuciones a la economía publicadas en revistas académicas arbitradas. Respecto del Perú tiene contribuciones demostrando que la mayoría de esterilizaciones femeninas hechas en el Perú en la segunda mitad de los 90 fueron involuntarias. También ha aportado al debate cuestionando las cifras de muertes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Es fundador del blog "Gran Combo Club" en el que ha abordado temas de historia social (el poder oligárquico, el Perú prevelasquista, la intervención de los Estados Unidos en el Perú y otros) como diversos temas de coyuntura política y económica. Fue director ejecutivo por el Perú ante el Banco Interamericano de Desarrollo durante el gobierno de Pedro Castillo. Ha publicado el libro *La intervención de Estados Unidos en el Perú*, Editorial Sur, 2013, Lima, Perú.

Carlos Reyna Izaguirre

Sociólogo por la Universidad Católica del Perú (PUCP) y magíster en Sociología Política por San Marcos (UNMSM). Investigador y autor de libros y artículos sobre política, violencia política, procesos electorales, y registros civiles y de identificación. Ha sido investigador en DESCO, director del Centro de Investigacion Electoral y gerente de Supervisión del Financiamiento Partidario en la ONPE; asesor en el Instituto Nacional de Estadística y en el Congreso de la República del Perú. También fue profesor en la Universidad Católica y en San Marcos, además de gerente de Restitución de la Identidad y Apoyo Social en el Reniec. Actualmente, escribe con frecuencia en la Revista *Ideele* y en *Noticias.SER* y es coordinador de la Diplomatura en Gestion de Procesos Electorales en San Marcos.

Valérie Robin Azevedo

Doctora en antropología Social por la Universidad de Nanterre, Valérie Robin Azevedo es profesora principal de antropología en la Universidad de París Cité; además, enseña en el Diplomado de Lengua y Cultura Quechua del INALCO. Especialista en Perú, su investigación actual se sitúa en la intersección de una antropología de la violencia, de la muerte y de la memoria. Es responsable cien-

tífica del proyecto de investigación "Transfunerario sobre rituales colectivos de reinhumación en contextos de posconflicto, una mirada comparada entre Europa y América Latina (2020-2023)". Recientemente ha publicado en castellano *La violencia que no cesa. Huellas y persistencias del conflicto armado en el Perú contemporáneo*, con R. Bedoya F., D. Delacroix y Tania Romero B. (IHEAL, 2023); *Los silencios de la guerra. Memorias y conflicto armado en Ayacucho-Perú* (La Siniestra Ensayos, 2021) y *Retorno de cuerpos, recorrido de almas. Exhumaciones y duelos colectivos en América Latina y España*, con A. M. Losonczy (Universidad de los Andes/IFEA, 2021).

Juan Pablo Rojas Misari

Licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con una tesis sobre Karl Marx. Actualmente realiza estudios de maestría en la misma universidad en la especialidad de Filosofía con mención en Epistemología. Ha publicado artículos en revistas nacionales y medios virtuales y es autor del libro *La lucha de clases en el Perú 2016 – 2021: pugnas interburguesas ad-portas del Bicentenario* publicado en el 2022. Sus intereses en investigación giran en torno al idealismo alemán, el marxismo y la teoría crítica.

Tania Romero Barrios

Magíster en Estudios Hispánicos por la Escuela Normal Superior de Lyon y en Estudios de Género por la Universidad Paris 8. Actualmente, cursa un doctorado en Estudios Hispánicos (Paris 8) y cursó un DLC - Quechua (Inalco). Es miembro del LER y miembro asociada del CERLOM y del IFEA. Se desempeña como docente en la Universidad Gustave Eiffel. Es corresponsable del seminario "Género y feminismos en las Américas Latinas" (EUR GSST) y dirige el proyecto "Warmikuna – Voces, rostros y memorias". Su tesis en curso se titula "Warmikunapa willakuynin. Género, violencias y memorias en los relatos del 'post-conflicto' armado peruano". En el 2019 obtuvo la Beca de la ciudad de París para los estudios de género. Sus investigaciones giran en torno al género, violencia política, literatura peruana (español y quechua) y feminismos latinoamericanos. Su más reciente publicación es *La violencia que no cesa. Huellas y persistencias del conflicto armado en el Perú contemporáneo* (Punto Cardinal Editores, 2021; Éditions de l'IHEAL, 2023).

Carla Sagástegui Heredia

Doctora en Arte, Literatura y Pensamiento por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y psicoterapeuta psicoanalítica vincular. Columnista de la revista *Sudaca Perú* y colaboradora de la Revista *Ideele*. Es autora de artículos especializados en cómic, literatura oral y literatura latinoamericana. Sus trabajos se encuentran en *Los primeros ochenta años de la historieta peruana* (2003), en revistas especializadas y en los capítulos de *Redrawing the Nation* (2009); *Bumm! Historieta y humor gráfico en el Perú: 1978-1992* (2016); *Comics Beyond the Page in Latin America* (2020), y *Burning Down the House. Latin American Comics in the 21st Century* (2022). Es autora del libro de cuentos *La vida íntima de Madeleine Monroe* (1994), del cómic *La Mujer Nueva, historia política de Magda Portal* (2021) y junto con Jesús Cossio, es autora del cómic *Ya nadie te sacará de tu tierra* (2019), un cómic sobre la reforma agraria en Perú.

Jorge Sánchez Gonzáles

Economista por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), posee un Diplomado en Dirección de empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Desde el 2012 se desempeña como Ejecutivo de Negocios en Mibanco – Banco de la Microempresa S.A., en el área de Evaluación de Riesgo para el otorgamiento de créditos a emprendedores a la micro y pequeña empresa. Se desempeñó como asesor de negocios en la Caja de Ahorro y Créditos Huancayo S.A. y en proyectos de Inversión Pública de manera independiente. Forjado por la educación pública, y como muestra de amor al pueblo, fue parte de la lucha estudiantil por la defensa de la educación pública, particularmente de la educación universitaria y su autonomía. Fue elegido coordinador universitario de la Macroregión Sur entre los años 2006-2007.

Natalia Sobrevilla Perea

Licenciada en historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es PhD Universidad de Londres. Actualmente es directora de Estudios de Pregrado en Estudios Hispánicos de la Universidad de Kent (Inglaterra). Entre el 2004 y el 2007 fue miembro del Programa de Orden, Violencia y Conflicto en la Universidad de Yale. En el 2009 fue becaria de la John Carter Brown Library. Entre el 2015 y el 2018 lideró una red internacional de investigadores que trabajaron sobre la idea de la nación y las guerras de independencia financiada por el Leverhulme Trust. Es autora de libros como *Los inicios de la República Peruana. Viendo más allá de "cueva de los bandoleros"* (2019), *Independencia: A 200 años de lucha por la liber-*

tad (2021) y *Andrés de Santa Cruz, caudillo de los Andes* (2015). Es articulista en el diario *El Comercio* y en el medio digital *Jugo de Caigua*.

María Sosa Mendoza

Investigadora del Instituto de Defensa Legal (IDL) y editora de la Revista *Ideele*. Es Licenciada en Comunicación por la Universidad de Lima y, actualmente, cursa la maestría de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Forma parte del Grupo de Investigación sobre Estado y Sociedad de la PUCP. Además, publica artículos de análisis político en las revistas *Nueva Sociedad y Jacobin*. Es autora del libro *De allá para acá: tres perfiles de la diáspora venezolana en el Perú* (2021). Ha escrito cuatro manuales sobre periodismo y derechos humanos. Ha llevado a cabo diversas investigaciones y análisis comparados sobre políticas públicas en países de la región, entre ellos "La puerta entreabierta: inserción laboral de los migrantes venezolanos en tres países de la región" y "Libertad de prensa en tres países de la región: Perú, Chile y México". Dirige el programa de especialización para periodistas "El rol activo de la prensa" del Instituto de Defensa Legal y Hanns Seidel Stiftung.

Víctor Vich

Profesor principal en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Es autor de diferentes libros sobre las relaciones entre el arte y la violencia, sobre políticas culturales y sobre poesía peruana contemporánea. Destacan entre ellos: *Trilce, poema por poema. Edición comentada de Víctor Vich y Alexandra Hibbett* (2022), *César Vallejo, un poeta del acontecimiento* (2021), *Poetas peruanos del siglo XX. Lecturas críticas* (2018) y *Voces más allá de lo simbólico* (2013). En el 2009, ganó la beca Guggenhein. Ha dictado cursos en diversas universidades latinoamericanas como en la Simón Bolívar en Quito y en la Nacional de Rosario en la Argentina. También ha sido profesor invitado en universidades de los Estados Unidos como Harvard, Berkeley y Madison.





Héctor Béjar | Sinesio López | Jorge Frisancho | Valérie Robin | Homero Quiroz | Tania Romero | Gustavo Montoya | José Manuel Mejía | Juan Diego Motta | Víctor Otoya | Silvio Rendon | Juan Pablo Rojas | Carla Sagástegui | Jorge Sánchez |Natalia Sobrevilla | María Sosa | Mario Meza | Ricardo Licla | Emil Beraun | Luis Nieto | Tatiana Béjar | Steven Palacios | Carlos Reyna | Juan Fonseca | Eli Malvaceda | Yizza Delgado | Víctor Vich | Arturo Delgado

Este libro reúne un conjunto de ensayos escritos por reconocidos científicos sociales que buscan explicar, desde diferentes aproximaciones, el reciente estallido social que sacudió el país; identificar a los actores colectivos, protagonistas de la ira y rebeldía social; dar cuenta de la brutal represión estatal, del racismo desplegado y las escandalosas desigualdades de toda índole que aún nos separan. Al conmemorarse el bicentenario del establecimiento de la República (1823-2023), este libro invita a un balance crítico y comprometido con el bien común y la apuesta por una democracia radical.





@estallidodelibros
estallidodelibros@gmail.com